

Argentina

Una breve síntesis de los hechos, los personajes y los episodios que han definido la Argentina desde la prehistoria hasta hoy.

HISTORIA MÍNIMA DE ARGENTINA

HISTORIA MÍNIMA DE ARGENTINA

Raúl Mandrini
Jorge Gelman
Pilar González Bernaldo de Quirós
Marcelo Cavarozzi
Loris Zanatta
Marcos Novaro
Carlos Altamirano

Pablo Yankelevich
(coordinador)



EL COLEGIO DE MÉXICO



TURNER

982
H67332

Historia mínima de Argentina / Pablo Yankelevich (coordinador) ; Raúl Mandrini … [et al.] -- 1a. ed. -- México, D.F. : El Colegio de México, 2014.
397 p. : il., mapas ; 21 cm

ISBN 978-607-462-531-8

1. Argentina -- Historia. I. Yankelevich, Pablo, coord. II. Mandrini, Raúl, coaut. III. t.

Primera edición, 2014

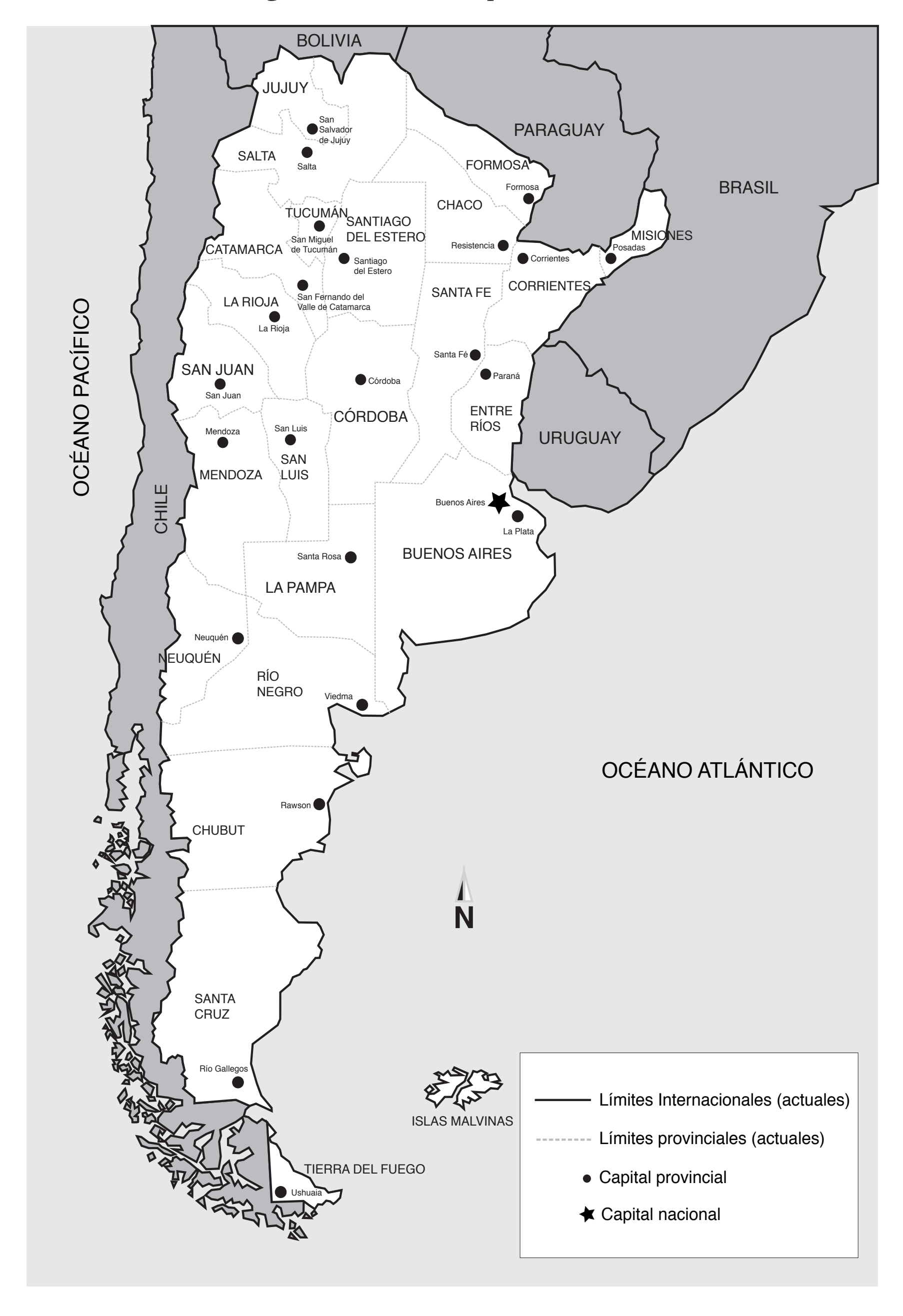
Camino al Ajusco 20
Pedregal de Santa Teresa
10740 México, D.F.
www.colmex.mx

ISBN 978-607-462-531-8

Impreso en México

ÍNDICE

Argentina, división política actual



INTRODUCCIÓN

Hace menos de dos siglos que la nación argentina responde a ese nombre, aunque la historia de la ocupación de su actual territorio se ubica en los remotos tiempos cuando comenzó el poblamiento del extremo austral de América.

Hoy, en sus segmentos continental, insular y antártico el territorio argentino tiene una superficie de poco más de 3 700 000 kilómetros cuadrados. La porción continental ocupa casi 2 800 000 kilómetros cuadrados, y sobre estas comarcas pobladas muy discontinuamente, transcurrió la historia que narra este libro.

Los orígenes de la actual organización territorial argentina remite a un proceso de varios siglos iniciado con la conquista y colonización españolas. En un primer momento, estuvo bajo la jurisdicción del virreinato del Perú, después fue parte del virreinato del Río de la Plata. Roto el vínculo colonial en 1810 y durante los siguientes años, Paraguay, Bolivia y Uruguay declararon sus independencias desgajándose de las demarcaciones heredadas del dominio español. Por otra parte, y desde la primera mitad del siglo XIX los chilenos iniciaron una persistente política ocupación de sus territorios meridionales, dibujando los primeros límites de la frontera con la Patagonia argentina

El trazo de las fronteras internacionales con Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay fue acompañado de una organización del espacio interior argentino. A partir de 1820 comenzó la delimitación provincial, que se prolongó hasta finales del siglo XIX con la incorporación de extensas áreas que habían permane-

Regiones geográficas



cido fuera del control del Estado nacional. El número de provincias y territorios nacionales fue en aumento hasta llegar en la actualidad a las 23 provincias que conforman el entramado básico de la división política del país.

En sus más de 3 500 kilómetros de longitud, el país despliega una variedad de regiones, relieves y climas. La cordillera de los Andes, columna vertebral del sistema montañoso de América de Sur, con picos que superan los 6 000 metros, sirve de frontera natural con Chile. Al este, las formaciones precordilleranas dan forma a la región de Cuyo, formada básicamente por las provincias de Mendoza y San Juan, y la región del Noroeste que integra partes de las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta y la totalidad de Jujuy. En su extremo norte esta última región alberga a la Puna, vasta altiplanicie árida y seca a más de 3 000 metros de altitud que Argentina comparte con el norte chileno y el sur boliviano. En la zona media del país se localizan las sierras pampeanas que atraviesan porciones considerables de las provincias de Córdoba, San Luis, La Rioja y Catamarca.

Además del sistema montañoso articulado en torno a los Andes, el territorio de Argentina está constituido por una gran llanura que abarca el noreste y el centro del país y que con suaves ondulaciones gradualmente desciende desde los 600 metros hasta el nivel del mar. Hacia el norte y noreste, esas llanuras son parte del Chaco, la región subtropical de la que también participan Paraguay, Bolivia y un segmento de Brasil. En el extremo nororiental, los llanos se extienden en las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos conformando la Mesopotamia, región contenida por el curso de los ríos Paraná y Uruguay que sirven de límites precisos a las fronteras con Paraguay, Brasil y Uruguay al norte y al este, con la planicie chaqueña al oeste, y con zona pampeana al suroeste.

La región pampeana se despliega a lo largo de más de 1 500 kilómetros al sur del Chaco, ocupando grandes porciones de las provincias de Córdoba, Santa Fe, San Luis y la casi totalidad de la

de Buenos Aires y La Pampa. El clima templado, la regularidad del régimen de lluvias y la fertilidad del suelo convierten esta planicie en la región agrícola-ganadera más importante de Argentina.

Por último, desde sur de la Pampa hasta la Tierra del Fuego, se extiende la Patagonia, un inmenso territorio de algo más de 800 000 kilómetros cuadrados, que a partir del sistema cordillerano desciende a través de mesetas escalonadas, sierras bajas y valles fluviales para articular paisajes que van desde los hielos glaciares en el extremo sur de los Andes hasta las áridas estepas en el litoral atlántico.

Esta diversidad de relieves tiene su correlato en los regímenes climáticos. Si bien, en la mayor parte del territorio predominan temperaturas templadas, los extremos del país oscilan entre climas subtropicales en extensas zonas del norte y el noreste, y fríos polares en los confines de la Patagonia.

En material fluvial, el sistema del Río de la Plata constituye la cuenca más importante de Argentina. Las aguas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay nutren el Río de la Plata que al desembocar en el océano Atlántico alcanza un ancho superior a los 200 kilómetros. Esta dimensión hizo que los primeros exploradores españoles lo llamaran Mar Dulce, tiempo después fue nombrado Río de la Plata en referencia a la quimérica idea de que remontándolo se alcanzarían lugares con fabulosos tesoros. De la latinización de ese nombre (*argentum*) derivó la palabra argentino, usada primero como adjetivo literario equivalente a platense o rioplatense, y siglos más tarde como sustantivo gentilicio hasta convertirse en el nombre del país. Por ello, al menos por su nombre, tal como afirmó el filólogo Ángel Rosenblat, puede decirse que Argentina es hija de un gran río.

* * *

Desde el último cuarto de siglo, la historiografía argentina vive una intensa renovación. Los distintos periodos, los procesos

fundamentales y los temas más significativos han sido y continúan sometidos a un escrutinio que, sin dejar de suscitar debates, ha conjuntado el esfuerzo de un amplio círculo de académicos dedicados al estudio del pasado nacional. En atención a esta circunstancia, para la elaboración de este libro se estimó oportuno convocar a un equipo de especialistas, activos participantes del proceso de renovación antes mencionado. Se trata de académicos valorados como referentes ineludibles en sus respectivos campos de especialidad.

Este libro propone un recorrido que comienza con los primeros asentamientos humanos miles de años atrás, y cierra con los debates presentes en Argentina al concluir la primera década del siglo XXI. Esta amplia cronología se despliega en un capitulado que responde a cuatro grandes momentos: las poblaciones originarias; el periodo colonial; el proceso de independencia y de organización nacional, y por último, la etapa contemporánea y el pasado inmediato.

Todo esfuerzo de síntesis privilegia acercamientos generales sobre aspectos específicos y locales, por ello esta obra traza grandes avenidas del pasado argentino a partir de umbrales básicos que entretejen la política, la economía, la sociedad y la cultura. La puerta de ingreso en muy ancha, y Raúl Mandrini abre esta historia con las remotas consecuencias de la presencia humana en el extremo más austral de América.

Se trata de un esfuerzo por mostrar la gran diversidad cultural y los cambios profundos en una historia humana que fija sus orígenes más de 10 000 años atrás, sobre un territorio diferente al actual y con un entorno ecológico que ya no existe. El relato se inicia con las primeras ocupaciones humanas de grupos cazadores-recolectores y su lucha por sobrevivir tratando de adaptarse al ritmo de las estaciones y al desplazamiento de animales, fuente básica de la alimentación. Mandrini hace un recorrido por las distintas regiones geo-culturales del actual territorio argentino, para mostrar la heterogeneidad de un poblamiento que co-

menzó por el estrecho de Bering y que al alcanzar el sur del continente ya portaba una enorme experiencia transmitida por generaciones de hombres y mujeres nómades.

Un segundo momento de esta historia se ubica hace 4 000 mil años cuando en algunas regiones del occidente y del noroeste del actual territorio argentino, bandas de cazadores-recolectores comenzaron a domesticar plantas y animales. Con lentitud y a lo largo de más de dos milenios hicieron su aparición formas de vida aldeanas, técnicas de trabajo más elaboradas y un universo de símbolos y creencias más sofisticado. Sobre esta base, se asiste al surgimiento de las primeras sociedades complejas en el noroeste argentino, donde la diferenciación social, las jerarquías, la diversidad de actividades productivas y la homogeneidad de estilos arquitectónicos permiten definir auténticas unidades políticas, sociales y religiosas que a la postre se convertirán en parte de los amplios dominios incaicos.

En contraste con el desarrollo alcanzado en la región noroccidental, en un tercer y último segmento, Mandrini revisa la historia de una variedad de comunidades de cazadores-recolectores, agricultores y pastores en llanuras, valles, planicies y montañas del resto del actual territorio argentino. En un proceso que remite a tres milenos atrás, analiza productos y producciones, presenta circuitos y rutas de intercambios comerciales y culturales, y muestra ritos y prácticas religiosas para terminar dibujando la pluralidad de experiencias civilizatorias que encontraron los españoles a comienzos del siglo XVI.

Los siglos coloniales están a cargo de Jorge Gelman. El punto de arranque son los itinerarios de la conquista, sus protagonistas y la suerte que corrieron estos esfuerzos hasta sentar las bases de una primera etapa colonial que se prolongará hasta entrado el siglo XVII. Aquello que sería Argentina en realidad era una porción, nunca ocupada por completo, de un dominio imperial de proporciones gigantescas. Gelman propone un acercamiento al pasado colonial rioplatense ubicándolo como parte de

una historia mayor, fundada en la lógica de un imperio que tuvo su eje sudamericano en el virreinato del Perú. Un poder político que emanaba de Lima, y una minería asentada en la extraordinaria riqueza del cerro del Potosí, cimentaron el primer trecho del orden colonial en el Río de la Plata.

Gelman se detiene en las formas de resistencia indígena y en las estrategias para enfrentarlas de las primeras avanzadas españolas. Pasa revista al impacto de la conquista en la demografía de aquellos confines sudamericanos, en los dispositivos de sujeción y de tributo a que fueron sometidas comunidades indígenas en tanto proveedoras de una indispensable mano de obra para las actividades extractivas de metales preciosos. Sobre esta base, el capítulo expande la mirada hacia la articulación de la explotación minera con una variedad de economías regionales orientadas a la producción agrícola, ganadera y artesanal, así como en el emprendimiento agrícola capitaneado por los jesuitas en una amplia región nordestina colindante con los dominios portugueses. A partir de aquí, analiza las características de un mundo rural diverso, dando cuenta de formas de tenencia y de trabajo de la tierra.

Por otra parte, dedica atención al surgimiento de una red de ciudades y a la dinámica de un ordenamiento político que entretejió intereses expresados en regidores, corregidores, oidores de las audiencias y oficiales de hacienda. En los márgenes del imperio español, entre esa red urbana, Gelman apunta hacia el puerto de Buenos Aires, auténtica aldea que comenzará a expandirse a la sombra de lucrativos negocios de comercio ilegal.

La llegada de los borbones al trono español, a principios del siglo XVIII, abrió un nuevo ciclo de la historia del imperio, que en esas regiones sudamericanas se expresó en la fundación del virreinato del Río de la Plata. Esta decisión tuvo un profundo impacto: Buenos Aires, capital del virreinato, se convirtió en el centro de un poder que redefinirá los más diversos órdenes de la política, la economía y la sociedad. Gelman cierra su capítulo con

una esmerada explicación del significado de esos cambios que transformaron dinámicas económicas regionales, expandieron redes comerciales, habilitaron mecanismos de ejercicio del poder, inauguraron una opinión pública y exacerbaron conflictos en una sociedad diversa y compleja, que a la postre y bajo el liderazgo de las élites porteñas, transitó hacia una temprana y exitosa impugnación del vínculo colonial.

El siglo XIX está a cargo de Pilar González Bernaldo de Quirós. Este capítulo revisa el periodo comprendido entre el proceso que condujo a la emancipación de España y que concluye la consolidación de un nuevo orden que con exultante optimismo fue festejado cuando el centenario de la independencia. Se trata de una problemática centuria dedicada la organización de un poder capaz de unificar y gobernar aquello que en un principio solo eran proyectos de nación.

Ideas y acción política modulan este capítulo dedicado a explicar la enorme facilidad con que las diferencias políticas terminaban dirimiéndose en los campos de batalla. La guerra contra los realistas, y luego las intensas guerras civiles potenciaron una militarización de la política que durante siete décadas resistió los más variados intentos centralizadores. En un esfuerzo por presentar de manera sucinta este proceso, la autora organizó este capítulo en tres partes. La primera abre con la crisis de la monarquía española en 1808 y concluye con la promulgación de la Constitución de 1853; casi medio siglo marcado por la desaparición de toda autoridad central hasta la muy lenta organización de los restos del antiguo virreinato en una confederación de provincias bajo la dirección de Buenos Aires. El segundo periodo se extiende desde aquel gran acuerdo constitucional hasta la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880; se trata de una historia tensionada por conflictos entre una autoridad que pretende ser nacional y las aspiraciones autonomistas de las entidades federadas. Por último, un tercer momento alcanza el ambiente del centenario y alude a la definitiva consolidación de un

poder centralizado y a una extraordinaria expansión de la economía agroexportadora.

La conflictividad que en distintos momentos y con diferentes sentidos fracturó la acción política entre unitarios y federales, entre librecambistas y proteccionistas o entre los extremos de la emblemática antinomia sarmientina de civilizados y bárbaros, sirve de plataforma para trazar las coordenadas de la historia argentina decimonónica. De esta forma, los emprendimientos por integrar un poder central, así como la búsqueda de legalidad y legitimidad de los distintos proyectos, son articulados con las transformaciones en el terreno de la producción y el comercio, la expansión de las fronteras interiores, la colonización agrícola, la organización de las finanzas públicas, el crédito internacional, las inversiones y la manera en que todo ello condujo a la definitiva consolidación de un capitalismo anclado en la producción agrícola-ganadera.

En Hispanoamérica, como sostiene Tulio Halperín-Donghi, la Argentina moderna destacó por la excepcionalidad de creer materializado el persistente sueño liberal de ordenar la política para desbrozar una senda de infinito progreso económico y social. Las oleadas de inmigrantes europeos que definieron perfiles demográficos, el sistema de educación pública y su impacto en los niveles de alfabetización, junto a la expansión cultural que cristaliza a la sombra de una vida urbana moderna, parecían acortar la distancia entre utopía y realidad. Pilar González concluye su capítulo con un recuento de esas distancias, explicando los límites de un orden conservador fraudulento y represivo incapaz de gestionar estrategias institucionales que garantizasen su continuidad.

Argentina había cambiado y esos cambios están en la base de una reforma electoral que en 1912 inaugura un nuevo momento. Es a partir de aquí que se revisan los últimos 100 años de la historia argentina. Marcelo Cavarozzi se ocupa del primer tramo del siglo XX, y expone una serie de cuestiones básicas que

determinaron los rumbos de la Argentina contemporánea. La primera radica en el sentido de una nueva legislación electoral impulsada por el ala reformista de la élite política, que al establecer el voto secreto y obligatorio condujo a resultados que sus promotores nunca imaginaron: su derrota en las elecciones presidenciales de 1916 y el ascenso del Partido Radical encabezado por Hipólito Yrigoyen. En este capítulo se explica la novedad que significó la emergencia e inclusión de nuevos sectores sociales y su impacto en un régimen político que gobernará durante casi tres lustros. Pero también se subrayan las continuidades de prácticas políticas que los radicales compartieron con los conservadores y que desataron luchas en el interior de un partido que, hacia mediados de los veinte, se dividió en facciones irreconciliables. La segunda cuestión que aborda este capítulo es el tránsito de una economía abierta a los dictados del libre mercado, hacia formas de regulación y dirigismo estatal como respuesta a una crisis que alteró los fundamentos del sistema económico mundial. En este sentido, se pasa revista a los diseños de políticas económicas, a los elencos de políticos responsables de estos cambios y a los primeros resultados en materia de industria, comercio exterior y finanzas. Por último, la tercera cuestión apunta a la irrupción de los militares en la política argentina a partir del golpe de Estado que en 1930 liquidó la experiencia democratizadora liderada por el radicalismo. La conversión de las fuerzas armadas en un actor político ha tenido hondas y trágicas consecuencias en la historia argentina. Por ello Cavarozzi puntualiza el sentido de la amalgama entre el ascendente poder militar y una tradición política fundada en el profundo desprecio a la soberanía popular. En la década de los treinta, el encuentro entre cuarteles, curas y políticos tradicionales hizo posible un régimen fundado en el fraude sistemático que se prolongó hasta mediados de los cuarenta, cuando una nueva coyuntura permitió la emergencia de un movimiento de masas bajo el liderazgo del entonces coronel Juan Domingo Perón.

Loris Zanatta es el responsable del capítulo dedicado al peronismo. Diez años en que sucedieron cambios tan significativos que terminaron por dividir el siglo XX argentino en un antes y un después de la llegada de Perón a la presidencia. Zanatta desentraña la arquitectura de la coalición de fuerzas políticas y sociales que hizo posible el ascenso de Perón, y explica la naturaleza de un liderazgo que transformó por completo las formas de gestionar y conducir la política. Pasa revista a la política social y a los fundamentos de una política económica que en el marco de la segunda posguerra generó excedentes capaces de impulsar procesos de industrialización, crecimiento urbano, expansión del crédito, y de los sistemas de educación y salud pública. Sobre esta base, expone los puntos débiles de un régimen que si bien consolidó poderosas bases de legitimación en el mundo del trabajo urbano y rural, muy pronto mostró aristas de intolerancia y autoritarismo que se fueron acrecentando, mientras la crisis del modelo económico generaba tensiones en una sociedad cada vez más movilizada a favor y en contra del régimen. Este capítulo se cierra con la dinámica que condujo al golpe de Estado de 1955, analizando la responsabilidad de la iglesia católica y de los militares en el ensanchamiento del arco opositor y, por último, subrayando el dilema irresoluble que el derrocamiento de Perón instaló en Argentina: apelar a un orden democrático excluyendo al peronismo convertido ya en la principal fuerza política del país.

El último medio siglo está a cargo de Marcos Novaro. El texto despeja las fibras básicas de un tejido social marcado por la inestabilidad política y las recurrentes crisis económicas. Por un lado, se detallan las características del peronismo proscrito durante casi dos décadas, con un líder exiliado en Madrid conduciendo una heterogénea pero muy eficaz oposición que nulificó cualquier proyecto que no lo contemplara. La fuerza del peronismo produjo fracturas en las filas de las otras formaciones políticas y controló un poderoso aparato sindical, con dirigentes

no siempre leales al líder pero convertidos en actores centrales del acontecer político durante los gobiernos de militares y de civiles emanados del golpe de 1955. Por otro lado, explica el derrotero de políticas desarrollistas que nunca pudieron modificar la lógica de una economía primario-exportadora incapaz de financiar un sostenido proceso de industrialización; y en este contexto advierte el surgimiento de nuevas formas de protesta social e impugnación política que terminaron por convencer a los militares de que la seguridad nacional debería soportar cualquier intento de reestructurar el orden político y de activar el crecimiento económico. Una primera dictadura militar vio frustrados todos sus empeños refundadores, al punto que debió entregar al poder a un peronismo fracturado por contradicciones irresolubles, cuya única coincidencia era volver a colocar al líder en la presidencia de la nación. La muerte de Perón, en medio de una crisis política y económica, agravó la espiral de violencia que desembocaría en el golpe de Estado de 1976. Novaro se detiene en esta última dictadura y en la naturaleza de un proyecto asentado sobre prácticas de terrorismo de Estado, cuyo contundente fracaso y sus dramáticas secuelas clausuraron el ciclo abierto en 1930. En una segunda parte, este capítulo examina los derroteros de una refundación democrática iniciada hace tres décadas. Los ejes que articulan este acercamiento al pasado reciente argentino son la pesada herencia del poder militar y la búsqueda de una justicia reparadora de la política criminal de la última dictadura; la paulatina desaparición de las fuerzas armadas del escenario político; la recomposición de los partidos políticos tradicionales y el surgimiento de nuevas realineamientos políticos, y la secuencia de programas económicos que acompañaron los procesos de globalización económica acrecentados en el último tramo del siglo XX.

En atención a las intensas fracturas que modelaron la política, la economía y la sociedad en la Argentina del último siglo, se creyó oportuno cerrar este libro con un capítulo dedicado a exa-

minar la relación entre el campo intelectual y la acción política. Carlos Altamirano es el responsable de un apartado que presenta los temas y perspectivas con que la intelectualidad argentina ha pensado los grandes problemas nacionales. Los autores y sus obras más significativas, junto a las principales publicaciones que animaron debates políticos y culturales, se despliegan en un relato que comienza con las inquietudes y temores de los ambientes ilustrados en los festejos del centenario de la independencia, y concluye con las incertidumbres sobre el desempeño de la democracia en tiempos del bicentenario.

Esta no es una obra para públicos especializados, se trata de una aproximación a los asuntos más sobresalientes del pasado argentino. En un esfuerzo de síntesis, los autores han seleccionado personajes, asuntos y procesos que permiten delinear los contornos de un relato mucho más complejo y diverso que lo expuesto en estas páginas. Confiamos que entre todas las alternativas posibles, el camino escogido permita al lector acercarse al pasado de esa nación llamada Argentina. El formato de la colección que integra este libro no contempla el uso de un aparato erudito que reporte puntualmente las fuentes documentales y bibliográficas usadas en la preparación del libro. Las razones de ello se fundan en el deseo de que citas y notas no interrumpan una lectura que se espera ágil y desenvuelta. Es por ello que al final del volumen, los lectores encontrarán una selección de títulos y autores valorados como indispensables para ensanchar los conocimientos sobre los asuntos expuestos en estas páginas.

Por último, quisiera expresar mi agradecimiento a todos y cada uno de los autores. Este libro no hubiera sido posible sin el profesionalismo y la disposición para colaborar en este esfuerzo conjunto. Por otra parte, agradezco a Horacio Crespo su valioso apoyo cuando se puso en marcha este proyecto editorial. La colaboración de Jorge Gelman y la ayuda de Raúl Mandrini resultaron fundamentales para sortear obstáculos que demoraron la terminación del libro. En los asuntos editoriales y administrati-

vos fue esencial el auxilio y el buen humor de Francisco Gómez y Paola Morán. Las imágenes cartográficas están en deuda con Pablo Reyna y Emelina Nava. Trámites diversos fueron amablemente atendidos por Rosy Quiroz, mientras que Efraín Navarro Granados ayudó en la preparación de las versiones finales.

Pablo Yankelevich

TIEMPOS PREHISPÁNICOS

Raúl Mandrini

Es común pensar que el pasado de los pueblos originarios es corto y que su presencia en el continente es reciente; que esas poblaciones son relativamente homogéneas —cuando se ha visto a un indio se los ha visto a todos, proclamaban los hermanos Ulloa en el siglo XVIII—; que se trata de sociedades estáticas, sin cambios apreciables a lo largo del tiempo y, por lo tanto, "sin historia"; que, excepto casos especiales, como mayas, incas o aztecas, eran pueblos con una organización económica, social y política muy simple y con una tecnología primitiva. En síntesis, poca antigüedad, homogeneidad cultural y racial, falta de cambios, primitivismo, son habitualmente asociados a los pueblos originarios. El acercamiento a su historia nos va a mostrar lo contrario: una antigüedad que se remonta a los momentos finales de la última Edad del Hielo, gran diversidad y heterogeneidad, profundos cambios a lo largo del tiempo, complejidad social y cultural.

LOS PRIMEROS POBLADORES

La antigüedad de la presencia humana en el continente americano ha sido motivo de arduas controversias. En las últimas décadas, empero, los avances de la arqueología, tanto por el aumento de los hallazgos como por el perfeccionamiento de los

métodos y técnicas de la investigación, nos permiten seguir, en líneas generales, el proceso de poblamiento temprano. Los hallazgos realizados en Monte Verde, en al sur del territorio chileno, y Los Toldos y Piedra Museo, en la Patagonia argentina, muestran que poblaciones humanas vivían allí en la última etapa del Pleistoceno, quizá unos 13 o 14 000 años atrás. Habitaban un mundo muy distinto al actual y convivían con especies animales hoy extintas.

Por entonces, las duras condiciones climáticas del Pleistoceno habían comenzado a cambiar: el intenso frío fue cediendo, cambió la dirección de los vientos y se modificó el régimen pluvial. En algunas zonas el clima se hizo más seco; en otras, ocurrió lo contrario. Los grandes glaciares de las altas cumbres andinas y el extremo meridional de Patagonia comenzaron a derretirse y las aguas de deshielo corrieron hacia los mares. El nivel de los océanos subió anegando las tierras más bajas. En el extremo sur, el ascenso de las aguas formó con el tiempo el actual estrecho de Magallanes, separando Tierra del Fuego del continente al que había estado unida.

Estos cambios se prolongaron hasta hace unos 10 000 años —fecha convencional aceptada como fin del Pleistoceno— y aún más tarde, afectando las comunidades vegetales y animales, incluido el hombre. El proceso no fue lineal: hubo importantes variaciones locales y regionales y marcadas fluctuaciones en el ritmo de cambio, y se volvió por momentos a condiciones muy frías. Pero la tendencia general se mantuvo.

Exploración y ocupación del territorio

La etapa de exploración y asentamiento inicial en varias regiones del territorio se prolongó unos cinco milenios, hasta hace unos 8 000 años, aproximadamente. Aunque escasos, los testimonios hablan de grupos humanos pequeños y móviles que

Primeras ocupaciones humanas



raras veces permanecían en un lugar, aunque solían volver a aquellos sitios con condiciones ventajosas; sugieren también que conocían bien el territorio y sus recursos —formas de protección, agua, caza, materias primas—, lo que permitía elegir los sitios más aptos para instalarse, fueran cuevas o sitios al aire libre. La disponibilidad de agua —ríos, lagos o lagunas— fue determinante en la elección de los asentamientos, así como la protección frente a la dureza del clima y el fácil acceso a recursos fundamentales (animales para cazar, vegetales para recolectar, leña para calentar abrigos y aleros en invierno y piedras para confeccionar instrumentos).

Los sitios anteriores a 11 000 años atrás son muy pocos, y algunos fechados dudosos. Después de esa fecha, las dataciones se hacen más numerosas y seguras, y provienen de sitios que se encuentran en otras partes de la región patagónica así como en diferentes regiones del territorio: la pampa oriental, la región circumpuneña, la zona cuyana y las sierras centrales, y el litoral fluvial.

El espacio patagónico fueguino

Fuera de la meseta central de Santa Cruz, donde están los primeros testimonios, restos tempranos de ocupaciones humanas se encuentran en las tierras que bordean la costa norte del estrecho de Magallanes (Las Buitreras, Fell y Palli Aike), cerca de la bahía de Última Esperanza (Cueva del Milodón) y en la actual Tierra del Fuego, todavía unida al continente (Tres Arroyos y Marazzi). Al oeste del meridiano 70°, las ocupaciones (Cuevas de las Manos y Grande del Arroyo Feo, cerro Casa de Piedra) son algo más tardías debido a condiciones frías más rigurosas, al igual que en la cuenca del río Limay, más al norte (Cuyín Manzano, Traful, El Trébol).

Eran ocupaciones muy pequeñas y en los hallazgos predominan los instrumentos de piedra, algunos fogones y restos óseos de

animales que nos informan sobre la tecnología, los recursos, las actividades económicas, la organización y uso del espacio. Esos hombres convivían con especies animales hoy extinguidas (un camélido, aves corredoras, milodón y caballo americano); a veces los cazaron, aunque la mayoría de los restos pertenece a una fauna aún viviente, como el guanaco, cuya importancia fue cada vez mayor. Se trataba de una caza generalizada y oportunista, esto es, volcada a la captura de un amplio número de especies.

Algunos sitios fueron reocupados a lo largo del tiempo y muchos de ellos tenían funciones diferenciadas: lugares de acecho y caza; sitios de procesamiento de las piezas cazadas para obtener carne, cueros y pieles; canteras donde obtenían piedra; talleres para elaborar instrumentos. La movilidad, esencial para sobrevivir, se ajustaba a la distribución de los recursos, al ritmo de las estaciones y al desplazamiento de los animales.

De estos tiempos tempranos datan las magníficas pinturas realizadas sobre las paredes de cuevas y abrigos de la región, que arrojan alguna luz sobre el universo simbólico de esos cazadores. Halladas en distintas partes del territorio patagónico, destacan por su antigüedad y su mayor complejidad y belleza los conjuntos del río Pinturas, en Patagonia central, particularmente la llamada Cueva de las Manos Pintadas.

La llanura pampeana

En el oriente de la llanura pampeana grupos de cazadores-recolectores convivían, para la misma época del Holoceno, con especies animales hoy desaparecidas. Sus restos se distribuyen a lo largo de las sierras de Tandilia, en particular en cuevas, y en la llanura que se extiende entre esas sierras y las de Ventana (sitios a cielo abierto). Adaptados a las condiciones del medio, habían desarrollado estrategias adecuadas para aprovecharlo: se movían en amplios circuitos para explotar los recursos de cada

nicho ecológico —caza, recolección, materias primas para fabricar instrumentos—, y reunirse periódicamente con otros grupos para realizar rituales conjuntos e intercambios de bienes, mujeres e información.

El uso del espacio estaba planificado con distintos tipos de asentamientos: campamentos base donde permanecían más tiempo y realizaban la mayoría de las actividades domésticas, y campamentos temporales para tareas específicas, ocupados durante los desplazamientos. Ciervos, guanacos y ñandúes eran las piezas más grandes cazadas, pero no desdeñaban animales pequeños y, eventualmente, grandes herbívoros hoy extinguidos Los artefactos de piedra, con formas y funciones diferenciadas, servían para la caza misma, para procesar los animales cazados y para elaborar alimentos, ropas y abrigos. La obtención de piedras adecuadas —no las había en todas partes— requería amplios desplazamientos, a veces más de 300 kilómetros y, en algunos casos, más allá de los límites regionales.

En el sitio de Arroyo Seco, junto a los restos superpuestos de varios campamentos, se encontraron los esqueletos de unos 18 individuos, algunos con ajuar funerario, que testimonian sus creencias en una vida después de la muerte y refuerzan la idea de que esos cazadores volvían de modo recurrente al sitio donde habían quedado sus muertos.

El área circumpuneña

Algunos abrigos rocosos o cuevas en las quebradas laterales del borde oriental de la Puna, registran la presencia de cazadores-recolectores entre unos 11 000 y 9 000 años atrás. Eran pequeños grupos que se movían en circuitos regionales para aprovechar los recursos de tres ecosistemas: la puna, las quebradas y los valles. Las quebradas, más protegidas, permitían un acceso fácil a la puna, donde cazaban camélidos salvajes en los meses menos fríos,

así como a los valles cercanos, más bajos y templados, donde cazaban pequeños animales y, fundamentalmente, recolectaban.

A comienzos del otoño se concentraban en las quebradas para realizar distintas actividades vinculadas a la manufactura de materias primas derivadas de la caza y la recolección. Disponían de un amplio repertorio de herramientas e instrumentos de piedra, y también fabricaban cestas, cordeles y adornos con fibras vegetales y animales, e incluso plumas. A esos sitios, acondicionados para hacer más confortable la estadía, debían volver cada año, pues allí habían inhumado a sus muertos, para realizar sus rituales. Restos de algunos productos de lugares lejanos, como las zonas más bajas, hacen suponer contactos con esas regiones.

Las tierras cuyanas y las Sierras Centrales

En la actual provincia de Mendoza vivían por entonces grupos de cazadores-recolectores asentados cerca de ríos y arroyos que, por su alto caudal debido al deshielo de los glaciares andinos, posibilitaban la existencia de una rica vida vegetal y animal, con especies hoy extintas. Algunos, como los ocupantes de la Gruta del Indio, aprovecharon la megafauna pleistocena; otros, en cambio, como los que vivían en Agua de la Cueva, cazaban sobre todo guanacos, además de vicuñas, chinchillones y ñandúes, incluidos sus huevos. Obligados a explotar distintos recursos se desplazaban según las estaciones.

El número de comunidades aumentó con el tiempo y su presencia se extendió al territorio sanjuanino. El modo de vida básico se conservó, aunque con cambios: la desaparición de la megafauna transformó al guanaco en el recurso esencial al que se añadió la creciente recolección de semillas de algarrobo y otros vegetales. El hallazgo de valvas de moluscos del Pacífico muestra que participaban en amplios circuitos de movilidad, pues es probable que en verano, cuando se desplazaban a zonas

altas tras los rebaños que pastaban en los pastizales de altura, tomaran contacto con grupos del oeste de los Andes.

En las Sierras Centrales, conjunto de sierra en las actuales provincias de San Luis y oeste de Córdoba, las primeras ocupaciones documentadas datan de hace unos 9 000 años, aunque es posible que algunos restos sean más antiguos. Se trataba de grupos de cazadores-recolectores que empleaban como proyectil puntas de piedra en forma de hoja de sauce, denominadas Ayampitín, que adherían a un astil de madera, a modo de jabalinas; podían ser arrojadas con la mano o mediante un propulsor o lanzadera. En la cueva de Intihuasi, esas puntas datan de hace unos 8 000 años. Además de la caza, en especial de ciervos y ñandúes, la recolección de semillas de algarrobo y chañar ganó importancia en su economía, como lo reflejan los morteros y manos de piedra encontrados, con los que procesaban semillas convirtiéndolas en harina. También trabajaban fibras vegetales y tejían redes y bolsas.

El litoral fluvial

En el sur brasileño y paraguayo y el nordeste argentino, entonces más árido y frío, algunos hallazgos atestiguan, a fines del Pleistoceno, la presencia de cazadores-recolectores que se desplazaron luego hacia el este y el sur siguiendo los grandes ríos, el Paraná y el Uruguay, y adaptando su vida a las nuevas condiciones mediante estrategias adecuadas a los ambientes ribereños. Los grupos que ocuparon las costas del curso medio del río Uruguay y de sus principales afluentes en territorio brasileño, como el Ibicuy, convivieron con los últimos grandes mamíferos pleistocenos y cazaban y recolectaban todo lo que les proporcionaba el medio. Su larga permanencia junto a los ríos sugiere la explotación de diversos recursos del medio ribereño a lo largo del cual se movían, realizando periódicas incursiones hacia el interior para cazar y recolectar.

La vida de los tempranos cazadores-recolectores

Los hallazgos reseñados muestran, en síntesis, que el poblamiento inicial debió iniciarse hace al menos unos 13 000 años; que esos primeros pobladores penetraron por distintas vías desplazándose en varias direcciones; que no fue un movimiento rápido y unidireccional de norte a sur; que debió haber avances y retrocesos, asentamientos más o menos exitosos y otros frustrados por las dificultades del medio. Tampoco es factible que todos los lugares fueran ocupados al mismo tiempo: los espacios eran muy grandes, las condiciones ambientales diversas, el número de pobladores muy reducido y no debió ser fácil localizar los sitios más adecuados. Pese a ello, hace unos 8 000 años grupos de cazadores-recolectores estaban bien afirmados en varias regiones del territorio y es razonable pensar que los había en otras partes aunque su presencia no haya sido aún documentada.

Resultado del complejo proceso de poblamiento, esas sociedades se caracterizaban ya entonces por su diversidad y heterogeneidad. Cuando cruzaron Bering disponían ya de formas apropiadas de vivienda y vestimenta para soportar el frío, pero atravesar América de un extremo al otro fue un prolongado y difícil viaje: debieron adaptarse a las condiciones de vida de las llanuras de América del norte y, luego, aprender a subsistir en las selvas centroamericanas, los altiplanos andinos, las praderas templadas o las frías estepas meridionales. La experiencia acumulada, transmitida por generaciones, era su mayor capital cuando alcanzaron el extremo sur del continente.

Allí adquirieron un conocimiento acabado de las condiciones y recursos de cada ecosistema; desarrollaron tecnologías adecuadas para utilizarlos y explotarlos; complejas estrategias de subsistencia que incluían amplios circuitos de movilidad estacional en territorios extensos, y medios de expresión simbólica. No eran, de ningún modo, primitivos: anatómicamente modernos —*Homo sapiens sapiens*— habían acumulado experiencia

y conocimientos, se habían adaptado a diversos paisajes, climas y situaciones, y adquirido una notable habilidad tecnológica que les permitió afrontar las cambiantes condiciones de su entorno.

Intensificación, diversificación y regionalización de las culturas cazadoras

Desde comienzos del Holoceno, el aumento de la temperatura y largos periodos de sequía y aridez afectaron extensas regiones del país. En algunas, la reducción de las pasturas obligó a los cazadores a ampliar el espectro de recursos utilizados e intensificar su explotación mediante estrategias y artefactos adecuados a fin de no agotarlos. En otras regiones, con condiciones de mayor humedad, las culturas cazadoras consolidaron su modo de vida y ocuparon otros espacios.

Las sociedades cazadoras-recolectoras de la franja árida

En la meseta patagónica, la presencia humana se había extendido a otros ambientes y el mayor número de sitios y de restos hallados refleja cierto crecimiento de la población. Sin embargo, las nuevas condiciones —altas temperaturas sequedad y aridez— afectaron a los pobladores que dispusieron de menos agua y vieron reducirse las áreas de pastoreo de los guanacos, su principal alimento, reduciéndose la cantidad de tierras habitables. Además, la aparición de áreas áridas —como en la Patagonia continental— o de zonas inundadas por el ascenso de las aguas formaron verdaderas barreras biogeográficas que limitaron la movilidad, obstaculizaron el acceso a algunos recursos y contribuyeron a un mayor aislamiento de muchas poblaciones. En el extremo sur, el ascenso de las aguas convirtió Tierra del Fuego en una isla y algunas penínsulas quedaron separadas del

continente cuando el mar cubrió los istmos que las unían a tierra firme. Estos fenómenos obligaron a diversificar más el uso de los espacios, intensificar la explotación de los recursos y adaptar las tecnologías.

Así, por ejemplo, en algunas partes (Cañadón del río Pinturas, Parque Nacional Perito Moreno) se intensificó la explotación de recursos mediante estrategias diversificadas en ámbitos ecológicos cercanos, consolidándose los circuitos de movilidad estacional, con diversos asentamientos escalonados en altura. En otros casos, la dificultad para acceder a algunas materias primas, como piedras para tallar, obligó a buscar nuevas técnicas para trabajar la piedra, como la de *hojas* o *láminas* que permite aprovechar mejor la materia prima. El arte rupestre continuó vigente aunque con algunos cambios en formas y diseños así como rasgos particulares de cada sitio o zona.

En el sur de Tierra de Fuego e islas y canales vecinos surgió, hace unos 6 000 años, un modo de vida especializado, volcado al aprovechamiento de los recursos marítimos, que un milenio después estaba ya bien integrado. Se lo ha documentado en sitios de la costa del Canal de Beagle, la isla Navarino, el Estrecho y la bahía de Otway. La región, con zonas de aguas protegidas del oleaje oceánico y bosques de árboles altos, disponía de una biomasa litoral y marina abundante y estable —mamíferos marinos, aves, mejillones y otros mariscos, peces y cetáceos que a veces quedaban varados en las playas— cuya explotación era más fácil y rendidora que la de los recursos terrestres. Los asentamientos, establecidos sobre la costa, permitían un uso intenso y continuo de los recursos y el desarrollo de instrumentos adecuados —arpones, anzuelos y canoas— usando materias primas locales. Favorecido por las condiciones de la zona, este sistema perduró hasta el siglo XIX.

En las Sierras Centrales, el modo de vida cazador-recolector, consolidado hace unos 7 000 años, se extendió por las zonas serranas de Córdoba y San Luis y, tal vez, de Santiago del Estero,

introduciendo nuevas tecnologías, mayor variedad de instrumentos, explotación de una mayor número de recursos, uso diferente del espacio con más cantidad y variedad de sitios, interacciones más amplias con regiones vecinas, y cambios en los comportamientos sociales y simbólicos. Este modo de vida perduró hasta hace al menos unos 3 000 años.

Las actividades de caza se centraban en lugares con condiciones óptimas para interceptar y capturar a los animales, lo que suponía conocer bien el entorno, los movimientos de las presas, sus lugares de tránsito, abrevaderos y sitios de pastura. Cuando se dirigían a los sitios de caza podían capturar animales pequeños, recolectar semillas y frutos o recoger materias primas. Acorde con esta organización, asentamientos de distinta jerarquía se encontraban distribuidos en lugares clave para acceder a los recursos.

Los instrumentos de piedra, más variados que en la época anterior, parecen en parte destinados al trabajo de otros materiales, como cuero, pieles, hueso o madera. La cantidad de elementos de molienda —morteros, muelas o manos— refleja la importancia de la recolección de semillas ante la disminución de la fauna por la reducción de pasturas. Algunos elementos de molienda servían para procesar pigmentos para pinturas corporales, adornos personales o representaciones estéticas sobre elementos durables (paredes de grutas y aleros) que representaban guanacos y ñandúes —a veces solo sus huellas— y motivos geométricos. Los adornos personales identificaban a su poseedor e indicaban, quizá, algún tipo de diferencia social. Las pinturas rupestres reforzaban la pertenencia a la comunidad y contribuían a una mayor cohesión social.

También las comunidades de cazadores-recolectores de Cuyo introdujeron innovaciones importantes en su modo de vida similares en muchos aspectos a las de las Sierras Centrales. La cultura de Los Morrillos que, entre 7 000 y 4 000 años atrás, se extendió por el suroeste de San Juan y noroeste de Mendoza,

es un buen ejemplo. Se alimentaban con carne —guanaco, ñandú y otros animales pequeños—, vegetales recolectados —frutos de algarrobo y chañar, raíces de cactáceas— y huevos de ñandú y otras aves. El instrumental usado era, por eso, más amplio y variado fabricado con distintos elementos: piedra, hueso y fibras vegetales. Estos cazadores alternaban estadías estacionales en campamentos semipermanentes con el uso de paraderos transitorios para cazar y recolectar durante el verano, especialmente en las zonas más altas de los valles interandinos. Estaban conectados además a amplios circuitos de interacciones que alcanzaban, al menos, el actual territorio neuquino al sur y el litoral del Pacífico al oeste.

En la Puna, las condiciones de mayor aridez y sequedad redujeron también las tierras de pastura de los camélidos salvajes, esenciales para su supervivencia. La población cambió su distribución: algunas zonas parecen haberse despoblado; otras, con agua y recursos básicos permanentes, reflejan una mayor ocupación. En estas últimas, sobre el borde oriental y meridional de la Puna, grupos más densos desarrollaron técnicas y estrategias para intensificar la explotación de recursos y optimizar su uso. La caza, volcada a guanacos y vicuñas, sus presas principales, se concentró en lugares con agua, y la lanza reemplazó los proyectiles arrojadizos. Al mismo tiempo, el incremento de restos de vegetales de otras regiones —valles serranos, bosques húmedos de oriente, monte chaqueño— supone intercambios cuyas características ignoramos.

Es posible que en algún momento se iniciara en esta zona el pastoreo de camélidos, comenzando un lento proceso de domesticación que, hace unos 4500 años, llevó a la aparición de la llama, utilizada luego en los Andes para transporte, provisión de fibras textiles y alimento. El hallazgo (Inca Cueva 4) de cuerpos humanos momificados naturalmente, vestidos con capas de piel de guanaco, "camisetas" de malla hechas con hilos de fibras vegetales y gorros hechos con el mismo material y técnicas de ces-

tería, muestran un buen dominio de distintas técnicas y materiales. Restos de la costa del Pacífico y las selvas orientales sugieren el funcionamiento de amplios sistemas de intercambio entre grupos ubicados en distintos ambientes productivos. La probable presencia de llamas debió favorecer esos desplazamientos.

Los cazadores-recolectores de los ambientes húmedos

Los cazadores-recolectores del sur bonaerense experimentaron, entre 7 000 y 5 000 años atrás, cambios significativos. La temperatura y la humedad ascendieron de modo sostenido en tanto las aguas anegaron las zonas costeras como, por ejemplo, la depresión del río Salado, las tierras vecinas a la desembocadura de ríos y arroyos y las costas del Río de la Plata e islas del Delta. Los grandes herbívoros del Pleistoceno se habían extinguido definitivamente y comenzaron a usarse de modo regular los recursos costeros: lobos marinos para alimento y pieles, cantos rodados y caracoles para confeccionar instrumentos y adornos. Se afianzó un modo de vida típico de las llanuras —en su economía, formas de asentamiento y tecnología— que perduró milenios y se extendió luego hacia el oeste, a la llamada pampa seca.

Los cazadores pampeanos se asentaron principalmente a orillas de lagunas, arroyos y ríos de la zona interserrana, con ocupaciones recurrentes que se prolongan miles de años. El guanaco era su principal presa, aunque no desdeñaban otros animales. Todo se aprovechaba: carne y entrañas eran los alimentos por excelencia; cueros, pieles, tendones y huesos fueron importantes materias primas. El hallazgo de instrumentos de molienda testimonia la recolección de semillas y raíces, sin olvidar el uso de recursos marinos obtenidos en sus desplazamientos a la costa.

A esta época se remontan las ocupaciones humanas más tempranas en el árido oeste pampeano, donde se recuperaron variados instrumentos de piedra, fogones circulares y vestigios

de viviendas. Cazaban guanacos y ñandúes y en sus desplazamientos incluían otros territorios también áridos como el norte de la Patagonia. En esas condiciones es muy probable que la recolección ocupara un lugar importante.

Cambios semejantes afectaron las tierras del actual litoral fluvial argentino, sobre todo la desembocadura de los ríos Paraná y Uruguay —el actual Delta— cubierta por el avance de las aguas. Altas temperaturas y mayores precipitaciones favorecieron la expansión de selvas y montes a expensas de las praderas y sabanas, con el desplazamiento hacia el sur de especies animales y vegetales. Conocemos poco sobre los hombres que allí vivían, solo algunos artefactos de piedra y muy pocos fechados seguros. Aun así, testimonian que la presencia humana se había extendido por la cuenca del río Uruguay y sus afluentes, partes del interior mesopotámico, el territorio misionero y las costas del alto Paraná.

Sus campamentos se ubicaban en lugares altos —lomadas o afloramientos rocosos—, cerca de los principales cursos de agua y en las islas. Visitaban periódicamente los ámbitos del interior, donde cazaban y recolectaban, pero su vida estaba ligada a los ambientes ribereños, ricos en recursos animales y vegetales para cazar, pescar y recolectar. Así ocurría en los grupos que vivían en el territorio misionero, identificados con la tradición altoparanaense que, además de la piedra, utilizaron la madera, abundante en selvas y montes de la zona.

El preludio de un gran cambio

El modo de vida cazador-recolector fue eficaz y, en muchas regiones —Patagonia y Tierra del Fuego, llanuras pampeana y chaqueña, partes del litoral fluvial—, perduró hasta la invasión europea en el siglo XVI. En el litoral, antiguos cazadores convivieron, más adelante, con cultivadores itinerantes y algunos,

incluso, incorporaron el cultivo a sus actividades tradicionales de caza, pesca y recolección, aunque sin modificar sustancialmente su modo de vida.

En una época de profundas transformaciones medioambientales, esa continuidad del modo de vida cazador-recolector no excluyó cambios; su éxito, por el contrario, resultó de esos cambios que le permitieron enfrentar los desafíos del medioambiente. Diversificación e intensificación en la explotación de los recursos mostraron ser estrategias clave para ajustarse a las condiciones del entorno y minimizar los riesgos derivados de los imprevisibles cambios ambientales.

Sin embargo, en algunas partes del noroeste argentino y de Cuyo se produjeron, hace unos 4 000 años, cambios novedosos: hacia esa fecha, tal vez antes, comunidades de cazadores-recolectores que allí vivían empezaron a domesticar plantas y animales. El hecho no cambió mucho, al comienzo, la vida de esas bandas y sus estrategias de subsistencia, ni produjo innovaciones tecnológicas y culturales destacables, pero se había dado un paso fundamental: el inicio de la producción de alimentos. Lentamente, en los dos milenios siguientes, se instalaron en pequeñas pero prósperas comunidades que vivían en aldeas cada vez más estables, obtenían su sustento del cultivo y la cría de camélidos e incorporaron, con el tiempo, tecnologías complejas como la alfarería y, finalmente, la metalurgia.

LAS SOCIEDADES AGRÍCOLAS COMPLEJAS

La producción de alimentos fue la base del desarrollo histórico posterior de los territorios andinos del noroeste de la Argentina actual y de algunas regiones adyacentes como Cuyo, las Sierras Centrales y el suroeste de Santiago del Estero. Sobre la producción de alimentos se asentó el surgimiento y desarrollo de comunidades aldeanas y, posteriormente, el desarrollo de organizacio-

nes sociales más complejas caracterizadas por la diferenciación social, la desigualdad y la concentración del poder.

Los inicios de la producción de alimentos y la vida aldeana

La domesticación de plantas y animales, uno de los grandes avances en la historia humana, transformó radicalmente las antiguas estrategias de subsistencia. Hasta entonces, los hombres habían tomado de su entorno natural los elementos necesarios para alimentarse, protegerse y fabricar sus armas y herramientas, organizando su vida cotidiana en función de obtener esos recursos; pese a los cambios producidos, seguían dependiendo de la naturaleza, con las limitaciones que eso imponía.

El gran cambio se produjo cuando algunas comunidades aprendieron a producir sus recursos o, al menos, parte de ellos. En contacto desde hacía mucho con animales y vegetales silvestres, los hombres pudieron seleccionar las variedades más productivas o convenientes y favorecer su reproducción. De ese modo, intervinieron en el proceso de selección natural generando cambios genéticos que, con el tiempo, dieron lugar a las variedades y especies que hoy denominamos domésticas. Este cambio empezó hace unos 10 000 años, a comienzos del Holoceno, y se produjo de modo independiente en varias regiones. En el continente americano, donde sus inicios se ubican entre unos 9 000 y 7 000 años atrás, se desarrolló en algunas zonas del actual territorio mexicano, en los Andes centrales y en las selvas cálidas del oriente andino.

La agricultura y la domesticación de animales

En el actual territorio argentino, cultivo y domesticación de animales alcanzaron su mayor desarrollo en las tierras andinas

del noroeste y de Cuyo. En las primeras, los testimonios más tempranos provienen del borde oriental de la Puna; de Cuyo, al oeste de las actuales provincias de San Juan y Mendoza.

En la Puna oriental esos restos se encontraron en cuevas situadas en la parte alta de las quebradas de acceso a la Puna, visitadas por grupos humanos desde fines de Pleistoceno. Los más seguros —Inca Cueva, en Jujuy, fechados entre 4 000 y 3 500 años atrás— nos muestran que cazaban y recolectaban, fabricaban puntas, cestos y bolsas, encendían fuego con palillos, ejecutaban música con flautas de caña hueca o hueso, inhumaban a sus muertos con complicadas ceremonias, hacían adornos con conchas del Pacífico y en sus rituales usaban semillas molidas de *cebil*, que inhalaban o fumaban en pipas de piedra o hueso. Esos productos nos hablan de contactos con zonas lejanas, como el Pacífico y el Chaco. De esta manera, el hallazgo de restos de calabazas, único vegetal cultivado, usadas en especial como recipientes, documenta el paso hacia el cultivo incipiente.

En Huachichocana, cerca de la quebrada de Humahuaca, y Puente del Diablo, en el valle Calchaquí, se hallaron también restos de vegetales domesticados. Aunque algunos son dudosos, tomados en conjunto indican, en fecha temprana y en un contexto de cazadores-recolectores, la existencia del cultivo incipiente y la domesticación de algunas especies locales —variedades de frijoles y de zapallos— cuyas formas silvestres se encontraban en las tierras más cálidas y húmedas del este.

Más difícil es reconocer la presencia de camélidos en proceso de domesticación, pues sus restos óseos casi no difieren de los de ejemplares silvestres. Sin embargo, la combinación de distintos testimonios —huesos, fibras de lana, excrementos, cambios en instrumentos— sugiere que algunos restos de más de 4 000 años de antigüedad, pertenecían a camélidos domésticos, quizá vicuñas, y eran contemporáneos de los primeros vegetales cultivados.

En Cuyo, los primeros indicios de cultivo, que provienen de abrigos y cuevas del oeste de San Juan, datan de unos 3 800 años

atrás. Sus portadores, tal vez llegados desde el norte chileno a través de pasos andinos de San Juan, cazaban guanacos, ñandúes y vizcachas, recolectaban semillas de algarrobo y raíces de cactáceas y, en pequeños espacios protegidos, cultivaban quínoa, zapallos, calabazas, porotos y, más tarde, algo de maíz. Más al sur, en el valle mendocino de Uspallata, algunos cazadores-recolectores cultivaban quínoa y calabazas hace unos 4 000 años y, poco después, grupos que ocupaban la Gruta de Indio cultivaron zapallos. Como en los casos anteriores, esas prácticas hortícolas no cambiaron su modo de vida; caza y recolección intensiva seguían brindando los recursos fundamentales para subsistir.

Expansión y afianzamiento de las sociedades aldeanas

El proceso se profundizó y se extendió a otros lugares de la región. El cultivo y el pastoreo ganaron paulatinamente espacio en la economía de esas comunidades: las nuevas prácticas, sumadas a las antiguas, permitieron disponer de más alimentos, impulsaron el aumento de la población, la ocupación de nuevos espacios y más estabilidad en los asentamientos, que acabaron haciéndose permanentes. Al mismo tiempo, se generalizaron tecnologías complejas, como la alfarería, hace unos 4 000 años, y la metalurgia, dos milenios después.

De ese modo, entre hace 2 500 y 2 000 años vivían en la región comunidades que basaban su subsistencia en la agricultura y el pastoreo y llevaban una vida sedentaria en caseríos o aldeas permanentes. Se distribuían en las zonas aptas de la Puna, en quebradas y valles altoandinos y en las sierras cálidas y húmedas del oriente, llamadas *yungas*. Más numerosas que las antiguas bandas, esas comunidades agrícolas no pasaban de unos pocos miles de personas; no había diferencias sociales significativas —salvo el prestigio personal— y carecían de una organización

política centralizada. El parentesco, fundamental en la organización social, fijaba el lugar del individuo respecto a los demás miembros del grupo, regulaba sus obligaciones y derechos y establecía el carácter de las relaciones entre linajes y comunidades, legitimando vínculos y alianzas que facilitaban la circulación de personas, indispensable para el funcionamiento de las redes de intercambio interregionales.

Esas comunidades compartían un modo general de vida, pero había entre ellas importantes diferencias. Los agricultores tendieron a radicarse en ambientes específicos donde instalaban sus viviendas y tenían sus tierras de cultivo. Debieron así adaptarse a un medio en particular, creando diferencias que dependían de las características ambientales, los recursos y materias primas disponibles, la facilidad de las comunicaciones y el acceso a redes de intercambio que permitían obtener bienes que faltaban en su territorio. De todo ello dependió la importancia relativa de cada actividad económica y el carácter de las prácticas agrícolas, el uso del suelo y el modo de asentamiento. Por último, en las distintas zonas se manifestaron estilos bien diferenciados —esto es, modos estandarizados en que en una sociedad se elaboraban y decoraban los objetos—, en especial en la cerámica.

En mayor o menor medida, las prácticas agrícolas eran similares. Los cultivos más importantes fueron un maíz de granos pequeños y duros, el frijol, el cacahuate, el zapallo, la quínoa, de alto valor alimenticio, y algunos tubérculos, como la papa, la oca y el ulluco o "papa lisa". En las cuencas y oasis de la puna de Atacama, el pastoreo de llamas fue un recurso valiosos por sus múltiples usos: su carne era una excelente fuente de proteínas; la lana resultaba esencial para los tejidos, fundamentales en el frío clima puneño; el estiércol servía como abono o combustible; su resistencia las convertía en excelentes animales de carga y en piezas clave del tráfico caravanero.

En los valles y quebradas, el pastoreo se combinaba con una intensa actividad agrícola en las tierras llanas del fondo, aprove-

chando los ríos y arroyos alimentados por las aguas de deshielo y limpiando de piedras y alisando los suelos. En algunos faldeos montañosos se construyeron andenes o terrazas para facilitar el cultivo y evitar la erosión de los suelos, y es probable el uso de pequeñas acequias para llevar el agua de los ríos y arroyos hasta los campos de cultivo.

La recolección siguió teniendo un importante papel, sea para alimentación, semillas o frutos de algarrobo, chañar y mistol; tunas, provisión de madera dura (algarrobo) para la construcción y la fabricación de utensilios, combustible, o por sus propiedades medicinales, tintóreas o alucinógenas, como el cebil.

La tecnología fue cambiando la vida de esos aldeanos que pudieron fabricar bienes para uso doméstico cotidiano o para actividades rituales y ceremoniales. Se mejoraron algunas técnicas, como el pulimento de la piedra, la alfarería, la cestería, el hilado, el trabajo de la madera y el hueso, y la tejeduría, beneficiada con la incorporación del telar, y se introdujo la metalurgia, tecnología novedosa y compleja que supone conocimientos y habilidades especiales.

La desigual distribución de recursos, la mayor población y sedentarismo y la adaptación a medios ecológicos específicos, acentuaron la necesidad de buscar en otras partes, u obtener por intercambio, productos imprescindibles. Tal necesidad impulsó la circulación en un área que, atravesada por recuas de llamas, vinculaba las yungas, limítrofes con el Chaco, con el litoral del Pacífico, a través de los valles y quebradas, la Puna, y los valles occidentales. Ese movimiento generó una intensa dinámica cultural, pues con productos y objetos circulaban ideas, técnicas, creencias y prácticas sociales.

La tendencia general al sedentarismo y el crecimiento de la población impulsaron el aumento de los sitos, en tamaño y densidad, y una permanencia más larga y continua en el mismo lugar. Los asentamientos consistían, en general, en viviendas aisladas o pequeños poblados junto o cerca de los campos de

cultivo, formados por habitaciones conectadas a un espacio central para actividades comunes. A veces, sin embargo podían formarse poblados más grandes y concentrados, como Yutopián (Catamarca) o Cerro Colorado (Jujuy).

La cerámica fue característica de estas sociedades aldeanas andinas. Su elaboración se relacionaba con el universo mágico y simbólico, evidente en motivos y diseños decorativos o en el uso que se le daba, y las características particulares de esas alfarerías permiten distinguir estilos diferenciados. Importante en la vida cotidiana para almacenar, transportar líquidos, cocinar y consumir alimentos, la cerámica sirvió también para elaborar figuras modeladas —humanas o animales—, vasijas decoradas para uso ceremonial y pipas, vinculadas al consumo de alucinógenos, una práctica ligada al mundo mágico.

La producción textil, utilitaria o simbólica, avanzó al incorporarse el uso del telar, hasta alcanzar un lugar fundamental: esenciales como abrigo, algunas piezas de gran calidad elaboradas con lana de vicuña, adquirieron un elevado valor simbólico. También se usó el algodón, producido en las tierras más cálidas. La metalurgia, la tecnología más compleja del periodo, requería complejos procesos de producción e involucraba conocimientos específicos de las técnicas y materiales utilizados. Fue aplicada, casi exclusivamente, a la elaboración de objetos suntuarios, destinados a ofrendas o adornos personales que, debido a las dificultades y costos de su producción, adquirieron enorme valor y sirvieron para expresar prestigio y alta posición social.

En un mundo social dominado por las relaciones familiares y el parentesco, las actividades rituales tenían lugar, fundamentalmente, en el ámbito doméstico. Los muertos solían ser sepultados bajo el piso de las habitaciones o patios de las viviendas, donde se realizaban ofrendas y ritos. Su ajuar funerario consistía en algunas piezas de cerámica, con seguridad textiles, que no resistieron el paso del tiempo y, en el caso de personas destacadas, adornos y alguna pieza de metal.

Estas diferencias en el tratamiento dado al difunto informan sobre la posición social de cada uno y su lugar en la sociedad. Las diferencias sociales no parecen haber sido tan profundas pero, a juzgar por la riqueza del ajuar de algunas tumbas, existían, al menos en tales casos, distinciones sociales marcadas. El tratamiento de los muertos se relacionaba además con el culto de los ancestros o antepasados, que derivaba de la importancia del parentesco en la vida de las comunidades y en su organización. Las magníficas esculturas de piedra conocidas como "suplicantes", quizá las expresiones estéticas de más calidad, representaban al ancestro mítico y debieron ser fundamentales en esos cultos.

Tal actividad religiosa era parte de un entramado más amplio que incluía las enormes piedras —menhires— del valle de Tafí (Tucumán), a menudo esculpidos con motivos geométricos o antropomorfos. Los sacrificios humanos, muy frecuentes, incluían la decapitación, como sugieren las representaciones de "cabezas-trofeo" y la presencia de hachas de piedra esculpidas, usadas quizá para sacrificios humanos. También tuvo un papel central el consumo de alucinógenos —se encontraron numerosos objetos vinculados con su conservación, preparación y consumo— y conocemos representaciones de felinos, asociadas a tales prácticas. Se trata de la primera aparición del complejo "felino-alucinógenos-cabeza trofeo", de gran desarrollo en el periodo siguiente.

Las sociedades complejas del noroeste argentino

Al comenzar la era cristiana, algunas de las florecientes comunidades aldeanas del noroeste argentino muestran indicios de una profundización de las desigualdades sociales que, en algunos casos, se hicieron hereditarias. El proceso, que pronto se generalizó, dio lugar al surgimiento de unidades políticas más

centralizadas. Crecieron el ceremonialismo y las prácticas religiosas que contribuyeron a reforzar la autoridad y prestigio de quienes las ejecutaban, así como las diferencias sociales.

La desigualdad social

Unos cinco siglos después, tales cambios se articularon para dar lugar a un nuevo tipo de sociedad: creció la producción agropecuaria, avanzó la tecnología, aumentó la población, los asentamientos se hicieron más densos, se profundizaron las diferencias sociales —tanto dentro de cada comunidad como entre comunidades—, se perfilaron amplias áreas de interacción entre comunidades que controlaban recursos de diferentes nichos ecológicos y se acentuó la circulación de bienes utilitarios y simbólicos. Al mismo tiempo, surgieron liderazgos políticos y se desarrolló el monumentalismo en los centros ceremoniales.

En el noroeste argentino se constituyeron entonces dos grandes áreas de interacción: una, al norte, tenía su centro en las poblaciones de Yavi e Isla (Jujuy); la otra, más al sur, tuvo su núcleo en los valles centrales de Catamarca. Al mismo tiempo, se consolidaba en el actual altiplano boliviano otra amplia área de interacciones centrada en Tiwanaku o Tiahuanaco, enorme centro urbano al sur del lago Titicaca que ejerció gran influencia en los Andes meridionales.

El área Yavi-Isla se conformó entre 1 500 y 1 300 años atrás. Ambas comunidades, estrechamente conectadas, actuaron como centros: a través de Yavi, accedían a los recursos de la Puna —pastoreo de llamas y alpacas, sal, metales— en tanto que por intermedio de Isla, controlaban la producción agrícola de la quebrada y valles vecinos del este. Pronto, esas interacciones se extendieron hasta las yungas cálidas por el este, y los oasis de la puna árida occidental y el valle superior del río Loa, por el oeste.

San Pedro de Atacama, con fuertes influencias de Tiwanaku, fue clave en estos circuitos por su emplazamiento y sus relaciones con el oeste y el sur del altiplano.

De este modo, Yavi e Isla controlaban áreas altamente productivas donde, gracias al manejo y control de los recursos hídricos, podían obtener importantes recursos agrícolas y pastoriles. Además, otras innovaciones significativas expresaban y reforzaban los procesos sociales y políticos en marcha. En los poblados, por ejemplo, muchos rodeados por importantes obras agrícolas, se utilizaron piedras canteadas para levantar muros, se delimitaron espacios de uso público, como plazas, y se incorporó el uso de escalinatas y monolitos de piedra. El material arqueológico, a veces de gran calidad, revela, por su parte, la prosperidad alcanzada y la creciente diferenciación social expresada, por ejemplo, en la cantidad y calidad de la piezas que integraban el ajuar funerario de algunas tumbas.

Todos estos elementos indican que nos encontramos ante sociedades más complejas, extensas y diferenciadas que las antiguas comunidades aldeanas, aquellas que los especialistas suelen definir como jefaturas o señoríos. Estas jefaturas estaban insertas en amplias redes de circulación caravanera que permitían a sus élites intercambios de bienes y productos así como prácticas sociales y rituales, creencias e ideas, representaciones estéticas e iconográficas. Sus dirigentes monopolizaban el uso de bienes suntuarios y la realización de los rituales que legitimaban su autoridad, controlaban la producción, circulación y distribución de bienes y debieron desarrollar relaciones con jefaturas vecinas para asegurar ese control.

La otra integración, algo más temprana, se desarrolló en el valle de Ambato (Catamarca) y se extendió a las áreas vecinas, probablemente hasta la llanura de vegetación chaqueña de Santiago del Estero. Tal integración no constituyó una entidad homogénea sino un conjunto de unidades políticas autónomas, cada una con su territorio y distinto desarrollo temporal. Esas

unidades, sin embargo, compartían un sistema de representaciones con un estilo artístico y una iconografía particulares que, aunque con variantes locales, se caracterizaban por la importancia de la figura del felino, el tema del sacrificador y la representación de cabezas-trofeo, elementos destacados en las sociedades andinas. Tal sistema compartido de representaciones es lo que se conoce como cultura de La Aguada. La amplia aceptación de este estilo y de la ideología que expresa se relacionaba con el desarrollo de desigualdades sociales hereditarias en tales sociedades, pues legitimaban y reforzaban esos procesos y la supremacía de los linajes y señores más importantes.

Con centro en el valle de Ambato, esa esfera de interacciones abarcaba una extensa región con recursos de gran valor material y simbólico. Articuladas, esas sociedades tenían acceso al cebil de las selvas y bosques orientales y al no menos valioso cobre arsenical de la zona cordillerana, usado para obtener el bronce arsenical —por aleación con otros minerales, en especial estaño— con el cual se fundían distintos objetos, utilitarios y suntuarios. Estos recursos fueron esenciales para el desarrollo de un activo movimiento de caravanas de llamas que impulsó y reforzó la integración de una amplia unidad regional.

Su base material fue la expansión y crecimiento de la producción agraria y pastoril que permitió sostener el crecimiento de la población y disponer de excedentes para liberar del trabajo productivo a más individuos que se volcaron a actividades especializadas, sea la producción de bienes de valor simbólico —que, como la metalurgia, requería conocimientos y habilidades especiales—, sea para cumplir funciones especializadas de carácter político o religioso.

La expansión de los asentamientos y la creación de extensas áreas agrícolas con andenes y obras de riego contribuyeron a conformar un nuevo paisaje, pero el rasgo más destacado es la presencia de dos complejos arquitectónicos monumentales de carácter ceremonial. Uno, donde realizaron complejas ceremo-

nias religiosas, conocido como "Iglesia de los indios" o La Rinconada, es impresionante por su tamaño y monumentalidad. Ambos están formados por un montículo piramidal rectangular que dominaba un espacio abierto, o plaza, flanqueada por construcciones con paredes de barro. Allí debieron realizarse sacrificios pues en el montículo de La Rinconada se hallaron huesos humanos. La distribución de centros ceremoniales, asentamientos aldeanos y obras agrícolas testimonian la existencia de un orden territorial, económico, social y político —la jefatura— que institucionalizó las desigualdades sociales mediante el principio del rango y consagró el papel predominante de algunos linajes.

Las jefaturas también dieron forma a una ideología que integraba ideas, representaciones, prácticas sociales y rituales en parte ya conocidas. La imagen del jaguar domina todas las manifestaciones de la vida social: su figura aparece grabada sobre hachas de metal y placas de bronce, tallada o esculpida en morteros y recipientes de piedra, grabada o pintada en la cerámica, tallada en objetos de madera —vasos, tablillas y tubos— y, a juzgar por algunas representaciones, en tatuajes y adornos corporales y faciales. Muchas piezas decoradas con representaciones del jaguar estaban vinculadas al consumo ritual de alucinógenos, que permitía a los hombres —chamanes primero, sacerdotes luego— entrar en contacto con el mundo de lo sagrado.

Algo más tarde surgieron jefaturas en otros valles, como los de Andalgalá, Hualfín y Abaucán (Catamarca), donde también se expandió la producción agropecuaria por la extensión de los sistemas de andenes y regadío, condición esencial para asegurar la posición de los señores y linajes gobernantes, y se encuentran manifestaciones de arquitectura ceremonial y de una iconografía similar en la que predominan el jaguar y figuras humanas que representan a los señores, reconocibles por sus complejos vestuarios, adornos y tocados.

Las grandes jefaturas

Hace unos mil años comenzó a cambiar la configuración política y social del noroeste argentino. Las manifestaciones estilísticas vinculadas a La Aguada habían desaparecido y se inició una época de inestabilidad política, competencia y desequilibrio. La población tendió a concentrarse en grandes centros y proliferaron las instalaciones defensivas, estratégicas o de carácter abiertamente militar, conocidas con el nombre de pucará o *pucara* —literalmente "fortaleza", en quechua.

En los principales valles y quebradas se formaron entidades políticas más complejas y diferenciadas, con una marcada homogeneidad estilística, una fuerte expansión de la agricultura y el pastoreo, incremento de la producción artesanal especializada, mayor densidad de población y cambios en las formas y distribución de los asentamientos. Con el tiempo, el poder central de esas unidades, que dominaban territorios de cierta extensión donde se distribuían aldeas y asentamientos rurales menores, se localizó en el pucará. Los campesinos, la fuerza laboral que sostenía esas formaciones sociales se distribuían, en cambio, en poblados dependientes y asentamientos rurales en las tierras de los alrededores, donde se encontraban las unidades de producción (*chacras*). Pucarás y chacras eran así los extremos opuestos pero complementarios de una sociedad polarizada.

Los pucarás, en general rodeados de murallas defensivas, estaban instalados en sitios estratégicos que permitían vigilar y controlar los espacios vecinos. Algunos, como Agua Caliente de Rachaite (Jujuy), Tilcara (Jujuy), Santa Rosa de Tastil (Salta) o Quilmes (Tucumán), llegaron a ser grandes conglomerados con una importante población. El carácter de la guerra —ejércitos reducidos, armas de poca precisión y bajo alcance— valorizaba los sitios con ventajas defensivas, capaces de brindar protección a sus habitantes e incluso a quienes vivían en los alrededores.

El pucará tenía también significaciones políticas y simbólicas. Allí residían los jefes que coordinaban y planificaban la actividad agraria, controlaban la producción artesanal especializada y los intercambios a larga distancia —en especial bienes de valor simbólico—, organizaban la defensa, encaraban empresas militares y dirigían los cultos y rituales que aseguraban la prosperidad de la comunidad. Los pucarás se vinculaban con la *Pachamama*, la Madre Tierra, responsable de la prosperidad de los hombres, y con los antepasados, que aseguraban la unidad simbólica y la protección de la comunidad. Las actividades ceremoniales y rituales realizadas en espacios y edificios de uso comunitario aseguraban la continuidad del orden social.

Más allá, estaban las *chacras*, asentamientos rurales donde se desarrollaban las actividades productivas esenciales, el cultivo de las tierras y la cría de llamas y alpacas; allí residían los productores agrícolas cuyo trabajo contribuía al sostenimiento y a la reproducción material de la sociedad. Las nuevas unidades sociopolíticas se apoyaban pues en la unidad esencial de esos elementos: el pucará —centro social, político y religioso— y las chacras —instalaciones productivas básicamente agropastorales.

Un par de siglos después, sin duda como resultado de estos procesos, la población había aumentado, había más asentamientos —algunos eran ya grandes conglomerados— y la economía se había expandido. Se colonizaron nuevas tierras en diversos paisajes para obtener recursos agrícolas y ganaderos, e imponentes obras, andenes de cultivo y sistemas de regadío aseguraron un impresionante desarrollo agrícola. Algunas de esas obra pueden aún observarse, como las de Coctaca y El Alfarcito en la quebrada de Humahuaca (Jujuy), Las Pailas en el valle Calchaquí (Salta) y Caspinchango y Quilmes en el de Santa María (Tucumán). Esa expansión, aunque en menor escala, alcanzó a los ambientes puneños con agua suficiente.

El pastoreo de llamas fue importantísimo: usadas como transporte, se comía su carne, se aprovechaba su lana para con-

feccionar prendas de abrigo y los excrementos servían como abono o combustible. Para su cría, se recurría en invierno a los pastos de las vegas del fondo de los valles y quebradas; en verano, a los pastizales de altura, ubicados en o cerca de la puna. Los restos de numerosos corrales testimonian la importancia de esa actividad, que obligaba a amplios desplazamientos estacionales.

Durante todo ese tiempo, y pese a trastornos y reacomodamientos, los vastos sistemas de intercambio siguieron funcionando. Los centros del noreste de la puna continuaron articulados con las poblaciones del sur del altiplano boliviano pero también con la Quebrada de Humahuaca y los centros del oeste de la Puna. Más al sur, las comunidades de quebradas y valles mantenían contactos e intercambios con los valles orientales, con los oasis de la puna y, en menor medida, con el actual norte chileno. Grandes poblaciones, como Santa Rosa de Tastil y La Poma (Salta) y Volcán (Jujuy) tuvieron un papel clave en esos circuitos.

Es probable que, en algunas partes, comenzara a emplearse en esta época un sistema especial para acceder a recursos de distintos pisos ecológicos. Este sistema, conocido como "control de un máximo de pisos ecológicos", estuvo muy extendido en los Andes centrales y centro-meridionales y es posible que algunas entidades mayores —Tilcara, Volcán, Santa Rosa de Tastil, algunos centros del valle de Hualfín— ocuparan tierras en distintos pisos ecológicos instalando colonos y asegurándose el control directo sobre la producción local.

Las comunidades de los valles de La Rioja y San Juan, asociadas a la cultura Angualasto, alcanzaron por entonces cierta especialización pastoril y mantuvieron intercambios con las regiones vecinas, como el centro y norte del actual territorio chileno y el resto del noroeste argentino. Los hallazgos sugieren algunas diferencias sociales, aunque sin alcanzar una jerarquización social bien definida. La falta de grandes asentamientos aglutinados y fortificados señala la ausencia de un control político centralizado. De estas poblaciones descenderían los *capayanes*,

Pueblos aborígenes, *ca.* 1500



que vivían en la zona en el momento de la invasión europea. Más al sur, en el centro y norte de Mendoza, perduraron las condiciones anteriores: comunidades de agricultores aldeanos, identificadas con el nombre de Agrelo, que fabricaban una cerámica gris decorada con motivos geométricos incisos, y se extendían por los principales valles, donde perduraron hasta el siglo XIV o XV.

La dominación incaica

Hace unos 500 años los Andes meridionales se encontraban bajo el dominio de los señores del Cuzco, los llamados incas, que habían conquistado las tierras del actual noroeste argentino en las últimas décadas del siglo XV, incorporándolas a su poderoso imperio, el Tawantinsuyu, término quechua que significa literalmente "los cuatro *suyus* [o partes]", en referencia a las cuatro grandes partes —los suyus— en que se dividía. La dominación incaica, implantada sobre una compleja y heterogénea realidad económica, sociopolítica, cultural y lingüística, se extendió a lo largo de medio siglo hasta la caída del imperio frente a los conquistadores españoles en 1530.

La presencia incaica marcó el desarrollo posterior de la población local. Los incas importaron sus propios modelos económicos, introdujeron nuevas formas de organización política y social, impusieron pautas culturales y religiosas y extendieron el uso de su lengua, el quechua, convertido en lengua franca. Buscaban con ello asegurar a la élite cuzqueña el aprovechamiento de los recursos económicos regionales, facilitar el control territorial y neutralizar posibles resistencias o rebeliones.

La región fue dividida en cuatro provincias, cada una con su centro administrativo: Tilcara, La Paya, Tolombón y Tambería del Inca. Los restos del *capac ñam*, el complejo sistema incaico de caminos, que en el actual territorio argentino se extendía por más de 2 000 km, revelan un sistema de dominación que articu-

laba territorios, economías y sistemas políticos. Una vía troncal cruzaba el territorio de norte a sur, desde la puna jujeña al centro de Mendoza: en torno a ella se situaba la mayoría de los asentamientos incaicos de la región que, según su función, se identifican como tambos o alojamientos en los caminos, pucarás, centros administrativos y depósitos o collcas. En todos se reconocen rasgos característicos de la arquitectura cuzqueña.

Los incas buscaban asegurar el acceso los principales recursos, en especial minerales, como los que había en Capillitas (Catamarca), Famatina (La Rioja) y Angualasto (San Juan) También alentaron la metalurgia, la producción agrícola y algunas artesanías, como tejidos y cerámicas, actividades en las cuales las poblaciones locales tenían larga experiencia. En zonas de alto potencial agrícola introdujeron técnicas más complejas, en especial los sistemas de riego y alentaron la cría de llamas y alpacas para la obtención de lana destinada a la producción textil. La apropiación de esos recursos implicó la explotación de la mano de obra local mediante la imposición de sistemas de trabajo obligatorio, como la *mita*, el más generalizado, que implicaba el envío por turnos de trabajadores destinados a cumplir tareas asignadas por los funcionarios incas. Para ello, implementaron controles políticos y administrativos otorgando un poder sin precedentes a los funcionarios cuzqueños y los jefes locales leales, convertidos mediante regalos y privilegios en agentes imperiales. Esta situación profundizó las distinciones económicas y jerárquicas.

Aún sin borrar del todo las diferencias, la férrea dominación política y los mecanismos de control estatal tendieron a homogeneizar a las poblaciones conquistadas dando cierta uniformidad cultural a la región. Se difundió el quechua, empleado como lengua franca; se ampliaron las vías de comunicación favoreciendo el desplazamiento de personas y grupos; se extendió el urbanismo y el uso del metal, y se introdujeron en todas partes técnicas agrícolas semejantes. Además, se impusieron usos incaicos, como el *quipu* —sistema de notación tridimensional for-

mado por cuerdas de colores y nudos que servían para registrar y recordar información—, elementos estilísticos, prácticas y rituales religiosos, entre otros. La política incaica de trasplantar pueblos —*mitmaq*— provocó movimientos de población que quebraron localismos y acentuaron la amalgama cultural. No faltaron, empero, resistencias y rebeliones, que fueron significativas en los valles calchaquíes; además, las fronteras del imperio eran altamente conflictivas, como la chaqueña, convulsionada por los ataques de chiriguanos y juríes. Demasiado breve, la dominación incaica no borró por completo las diferencias entre las distintas zonas ni las viejas rivalidades étnicas.

CAZADORES-RECOLECTORES Y CULTIVADORES DEL HOLOCENO TARDÍO

Sin embargo, en la mayor parte del territorio se conservó, aunque con cambios, el antiguo modo de vida cazador-recolector y, en algunas áreas, se introdujeron prácticas agrícolas, aunque sin alcanzar los niveles de complejidad característicos del noroeste andino. La mayor parte de esas sociedades mantuvieron su organización de bandas y algunas alcanzaron el nivel de tribu.

Cazadores-recolectores de las planicies y llanuras meridionales

El modo de vida cazador-recolector se extendió a casi todos los ambientes de la Patagonia y las pampas y perduró hasta la invasión europea, aunque no faltaron los cambios: se profundizaron los procesos iniciados, se introdujeron nuevas tecnologías y se adecuaron las anteriores para ajustarlas a las nuevas condiciones, se diversificó e intensificó la explotación de los recursos disponibles, aumentó la población y se ampliaron las redes de intercambio.

El espacio patagónico-fueguino en el Holoceno tardío

En el norte del territorio patagónico los cazadores-recolectores avanzaron sobre los ambientes esteparios cercanos al río Limay; en el este, establecieron asentamientos temporales en la costa atlántica para aprovechar de los recursos del litoral. El aumento del número sitios conocidos podría deberse a un aumento de la población —consecuencia de un modo de vida exitoso— o como resultado de ocupaciones transitorias derivadas de la alta movilidad de las poblaciones, sea por necesidades de caza o la búsqueda de materias primas esenciales. Esa alta movilidad, por otro lado, favoreció la intensificación de los contactos con otros grupos, el intercambio de bienes y la circulación de ideas, técnicas y prácticas sociales. Producto de esos contactos habría sido la adopción de la cerámica por algunos grupos y el uso más generalizado de arcos y flechas que hizo posible aumentar la caza.

Esa intensificación de las relaciones se extendió fuera del ámbito patagónico propiamente dicho, alcanzando la costa meridional de Tierra del Fuego y las islas vecinas, el valle central chileno, la llanura pampeana y las sierras centrales. En conjunto, esos contactos e intercambios contribuyeron a homogeneizar el modo de vida de los pueblos patagónicos, tal como lo observaron los primeros viajeros que visitaron la región en el siglo XVI y dieron a sus pobladores el nombre de "patagones", hoy reemplazado por el de tehuelches. Ese modo de vida generalizado no ocultaba algunas diferencias que se expresaban en la lengua, los sistemas simbólicos de expresión —especialmente el arte rupestre— y el reconocimiento de la territorialidad de cada grupo.

En Tierra del Fuego convivían dos modos de vida diferentes. En el interior, los hoy llamados onas o *selk'nam*, emparentados con los cazadores del continente, desarrollaron formas culturales similares. En los canales e islas vecinos, en cambio, se mantuvo el antiguo modo de vida de caza, pesca y recolección adaptado a ese medio marino frío y riguroso. Estos grupos fueron

conocidos luego como yámanas, o *yahgashaga*, y alacalufes, o *kawésqar*. Hacia la cordillera, en el sur mendocino y en Neuquén, otros cazadores-recolectores basaron su economía en la recolección del fruto de la *Araucaria imbricata* —el *pehuén*—, del que tomaron su nombre, *pehuenches,* actividad que combinaban con la caza y la explotación de las minas de sal gema. Desde muy temprano sufrieron las influencias de los grupos del otro lado de la cordillera andina, con los que tenían intensos contactos.

Los cazadores pampeanos

Tras el lento retroceso de las aguas que habían inundado parte de su territorio, las costas bonaerenses alcanzaron su nivel actual y el ambiente pampeano tomó sus rasgos físicos y climáticos actuales. Las ocupaciones humanas se extendieron desde entonces a casi toda la región pampeana. En la costa occidental del Río de la Plata y la depresión del río Salado, las ocupaciones más antiguas datan de hace unos 2 000 años. El avance posterior, lento pero continuo, fue posible por el establecimiento de circuitos de intercambio que permitieron a esos grupos locales obtener piedras adecuadas para confeccionar instrumentos.

En las sierras de Tandilia y Ventana, los cazadores-recolectores visitaban periódicamente cuevas y abrigos, dejando allí algunas pinturas rupestres, en general motivos geométricos. Pero las ocupaciones más importantes y numerosas estaban en la llanura interserrana, junto a lagunas, arroyos y ríos: eran campamentos base donde procesaban los recursos obtenidos mediante la caza y la recolección y confeccionaban artefactos e instrumentos. La alta densidad de materiales sugiere ocupaciones más frecuentes o permanencias más largas.

La época presenció cambios tecnológicos importantes, como la manufactura de cerámicas y la introducción del uso de arcos y flechas, que se manifestaron en una mejor y más amplia

disponibilidad de alimentos, y su uso se extendió luego a otras partes de la región y aún más allá. Los recipientes de cerámica —los primeros restos datan de hace unos 3 000 años— facilitaban la conservación y almacenamiento de alimentos y su cocción por hervor, que permitía recuperar en el caldo componentes alimenticios que se perdían en el asado o ahumado. El uso del arco y la flecha, atestiguado por el hallazgo de pequeñas puntas triangulares de piedra para proyectiles más pequeños y livianos, repercutió en las actividades de caza: daban más velocidad, efectividad y alcance al disparo y tenían menor costo en trabajo y materia prima que la lanza-jabalina, arrojada con la mano, o los proyectiles impulsados por la tiradera o propulsor.

El número de especies cazadas aumentó: además del guanaco, la presa principal, no desdeñaban el venado de las pampas, el ñandú y otros animales pequeños como mulitas, vizcachas y pequeños roedores. Al mismo tiempo, se explotaron de modo más intenso otros recursos locales, como ocurrió en ambientes costeros fluviales, lagunares y marítimos, donde tomó importancia la fauna acuática —aves, peces y algunos moluscos— y se confeccionaron redes y arpones.

Al oeste, en la pampa seca (actual provincia de La Pampa) los cazadores-recolectores desarrollaron, desde hace unos 2 000 años, una estrategia distinta: aunque el guanaco era la presa principal y su aprovechamiento era total, se volcaron cada vez más a la explotación de los montes circundantes: morteros y manos de piedra servían para moler ocre rojo y también para procesar vegetales, como los frutos del algarrobo. Los contactos con otros grupos se hicieron más amplios e intensos, incluyendo tanto recursos básicos y materias primas como objetos suntuarios de alto valor simbólico. Materiales arqueológicos e informes del siglo XVI señalan que esas redes alcanzaban al noreste argentino, las sierras centrales y el Chaco, el litoral entrerriano y el litoral oriental del Río de la Plata, la Patagonia septentrional, la región cordillerana y el actual valle central chileno.

Las sociedades aldeanas de las Sierras centrales y el occidente santiagueño

El modo de vida de las comunidades cazadoras-recolectoras de las Sierras centrales se mantuvo con pocos cambios hasta hace unos 2 000 años, mostrando ser exitoso pues la población creció y se expandió por la región. Después de esa fecha, lentamente y quizá como resultado de contactos con poblaciones andinas, se incorporaron a la vida cotidiana la producción de cerámica y el cultivo de la tierra, y surgieron los primeros poblados o aldeas. Al principio, esas innovaciones no cambiaron mucho la vida de las comunidades: la primera, escasa y poco elaborada, se integró a prácticas anteriores aplicadas a la piedra, el hueso y las fibras vegetales. El cultivo —maíz y, quizá, calabazas y frijoles— fue una actividad más en una economía que se centraba en la caza y la recolección. Apenas unos 1 500 años atrás la producción de cerámica aumentó y su calidad mejoró, en tanto el cultivo se integraba definitivamente a la vida comunitaria aldeana.

La nueva economía se organizó para aprovechar recursos de distintos ecosistemas, asegurar su provisión durante todo el año y atenuar riesgos ambientales como heladas, inundaciones, sequías o plagas: trabajaban pequeñas chacras en diferentes zonas, al mismo tiempo que recolectaban vegetales silvestres, en especial semillas de algarrobo, y cazaban guanacos, ciervos y ñandúes en los prados o "pampas" de altura donde, más adelante, se incorporó también el pastoreo de camélidos. Esta estrategia de subsistencia requería alta movilidad y los asentamientos se ajustaban a esa situación, combinando poblados más o menos estables cerca de las zonas de cultivo con asentamientos temporales destinados a actividades específicas.

Alguna aldeas crecieron en tamaño y complejidad hasta constituirse en sitios estables de residencia donde se reconocían áreas con funciones diferenciadas: depósitos, talleres, basurales e incluso actividades comunitarias a veces protegidas por empalizadas

de ramas y arbustos espinosos. Las viviendas, llamadas “casas pozo”, estaban excavadas en el suelo y solo el techo de paja, sostenido por postes, sobresalía del terreno: frescas en verano y abrigadas en el invierno se acomodaban bien a un clima con amplia variación térmica. La tecnología, que incorporó el uso del arco y la flecha —para la caza y la guerra—, avanzó en forma notable, mejorando su calidad técnica y decorativa. Como en otras partes, estas poblaciones participaban en amplias redes de intercambio que incluían el litoral atlántico, los bosques orientales, valles y quebradas de los Andes, la llanura pampeana y el litoral fluvial.

Las prácticas funerarias resaltan algunos rasgos sociales: el entierro de los muertos bajo los pisos de las viviendas indica la preeminencia del parentesco en las relaciones sociales; la falta de señalamiento de la tumba y la carencia de ajuar funerario, o solo pocos bienes personales, indican la falta de marcadas diferencias sociales. Las pinturas rupestres, realizadas en aleros y abrigos rocosos de todos los ambientes serranos, alcanzaron un notable desarrollo, como en Cerro Colorado, donde miles de figuras en rojo, blanco y negro representan una amplia variedad de temas y motivos.

Este nuevo modo de vida perduró hasta la llegada de los primeros invasores europeos a la región a mediados del siglo XVI. A estos pueblos los españoles genéricamente llamaron *comechingones*.

Más al norte, las sociedades aldeanas asentadas entre los ríos Salado y Dulce compartieron, en general, la orientación de los cambios producidos en las Sierras centrales, aunque con algunos rasgos propios vinculados a diferencias ambientales y a las relaciones con regiones vecinas. En la zona, el cultivo se practicaba al menos desde los inicios de nuestra era, probablemente introducido desde las estribaciones orientales de los Andes. En esta etapa agrícola temprana se destacó cultura de Las Mercedes, cuyos portadores, que también conocían la alfarería, se expandieron por la región y se instalaron en pequeños poblados, junto o

cerca de ríos y arroyos. Tal ubicación les permitía explotar en forma intensa los recursos, muy variados, de las tierras cercanas, evitando trasladarse a sitios más lejanos. Esas aldeas, levantadas sobre albardones —montículos formados por los sedimentos arrastrados por los ríos— que las protegían de las inundaciones, se transformaron en asentamientos únicos.

Así, cazaban guanacos, ñandúes, algunos carnívoros y armadillos en la llanura vecina; en los ríos pescaban bagres y dorados y capturaban aves, batracios y reptiles; en los bosques recolectaban algarrobo y recogían miel y cera de abejas, y cultivaban maíz y zapallos junto a los ríos aprovechando las tierras humedecidas por las crecidas. En la cerámica destacan algunas piezas, de gran tamaño, que servían como urnas para enterrar a los muertos, así como la elaboración de pipas usadas con tabaco y cebil, alucinógenos cuyo consumo ritual estaba ampliamente difundido. Eran frecuentes los intercambios de bienes con comunidades del actual noroeste argentino; algunos motivos decorativos comunes sugieren además que compartían creencias, tradiciones y prácticas sociales. Este modo de vida fue exitoso, se expandió y perduró, con pocas variantes, hasta la llegada de los invasores europeos.

Las poblaciones del litoral fluvial

Hace unos 3 000 años, las condiciones ambientales del litoral fluvial habían comenzado a cambiar: aunque se mantuvieron las altas temperaturas, el clima se tornó más árido, el volumen de cursos y espejos de agua se redujo y los bosques y selvas se retrajeron cediendo lugar a estepas y praderas. Al mismo tiempo, la presencia humana se extendió a otras zonas de la región.

Los grupos que vivían al norte de la región y en el curso medio y superior del río Uruguay se expandieron y readecuaron sus estrategias de subsistencia para aprovechar un espectro mayor de recursos mediante la pesca, la caza y la recolección junto a los

ríos y en las tierras vecinas. Un milenio después alcanzaron las islas del Delta, ya libres de agua. Sus pequeños asentamientos se ubicaban frente a ríos, lagunas y esteros donde obtenían buena parte de sus recursos. Flexible y versátil, esa economía requería una alta movilidad, pero permitía aprovechar diversos recursos.

Las bandas se reunían periódicamente en lugares con recursos abundantes: allí aprovechaban para acordar matrimonios intergrupales, realizar rituales para afianzar lazos y vínculos, e intercambiar bienes exóticos. Estos grupos producían ya cerámica, conocida en el litoral desde hace al menos unos 2 500 años. Introducida en el litoral desde el noreste por poblaciones amazónicas que ya la utilizaban, la alfarería no modificó el modo de vida local que perduró mucho tiempo.

En tanto, a lo largo de las costas del Paraná medio (Santa Fe y Corrientes) se distribuyeron otras poblaciones ribereñas, con un modo de vida similar, asociadas con la cultura arqueológica Goya-Malabrigo, caracterizada por su excelente cerámica. Su mayor expansión se produjo hace alrededor de un milenio, cuando avanzaron por el Paraná medio e inferior, el Delta, el curso inferior del río Uruguay y ambas costas del Río de la Plata. Sus campamentos eran a veces pequeños, con ocupaciones breves, pero en otros casos se trataba de sitios extensos con ocupaciones reiteradas. Su ubicación, en elevaciones cercanas a lagunas y esteros, refleja su carácter ribereño. Se desplazaban en canoas por los ríos y riachos, pescaban con anzuelos de hueso, redes y arpones, en tanto arcos y flechas de punta de hueso —en ocasiones boleadoras— servían para cazar.

Durante ese tiempo, grupos de la llanura central comenzaron a acercarse a la orillas del Paraná mientras otros, originarios de la región amazónica, se desplazaban a lo largo de los grandes ríos avanzando hacia el sur y el oeste. Los primeros, cazadores-recolectores de la tradición llamada Esperanza, comenzaron a dejar sus restos junto al río Paraná medio hace unos 2 000 años. Sabemos poco sobre ellos: se movían por la llanura central, des-

de las estribaciones de los Andes y las Sierras centrales hasta las orillas del Paraná, en un amplio circuito estacional que unía ambas regiones. La caza a distancia —venados, guanacos, ñandúes, roedores y armadillos— y la recolección vegetal proporcionaban sus recursos básicos. En algún momento comenzaron a usar cerámica, seguramente por sus contactos con poblaciones que ya la empleaban, sea en los Andes o en el litoral. Los querandíes de la época de la invasión europea representarían la perduración de este modo de vida.

Hace unos 3 000 años, otras poblaciones habían alcanzado el extremo noreste de la Mesopotamia: los *guaraníes*, quienes hablaban una lengua perteneciente a la familia *tupí-guaraní*. Al parecer no eran los primeros y algunos datos sugieren que otros cultivadores amazónicos de lengua *gé*, les habían precedido. Típicos cultivadores amazónicos y buenos ceramistas, los guaraníes provenían del Amazonas medio desde donde habían iniciado, mucho antes, largos desplazamientos hacia el sur siguiendo los principales ríos amazónicos. Hace unos mil años, se habían expandido ya por los cursos superiores de los ríos Uruguay y Paraná, y algunos de sus grandes afluentes, como el Paraguay. La mayor concentración de población guaraní se encontraba cerca de la confluencia entre el Paraná y el Paraguay, y se extendía por este río hasta la confluencia con el Pilcomayo; en cambio, decrecía gradualmente en densidad hacia el sur.

Los guaraníes se desplazaban en canoas por los ríos, ocupando espacios selváticos aptos para el cultivo, que practicaban mediante el método de roza o “tala y quema”: talaban parte del bosque, quemaban la vegetación cortada dejando las cenizas para enriquecer el suelo, sembraban y esperaban el crecimiento de las plantas, beneficiado por las frecuentes lluvias. En el momento de las primeras exploraciones españolas los guaraníes habían alcanzado la región del Delta, en tanto otros grupos, llamados chiriguanos o *ava* —nombre que se daban a sí mismos— habían avanzado hacia el este siguiendo los grandes ríos, Berme-

jo y Pilcomayo, hasta alcanzar las estribaciones de los Andes. Belicosos guerreros, los ava sometieron a poblaciones locales y atacaron las fronteras del imperio incaico.

Densamente poblada, la zona de los grandes ríos de la región fluvial constituían vías o corredores activos por donde circulaban personas, bienes y conocimientos. Hacia el año 1500, numerosas entidades convivían en el territorio: a veces en forma pacífica, en otras ocasiones sosteniendo cruentos conflictos. Mantenían dinámicos contactos con poblaciones extrarregionales, como aquellas que vivían en las selvas y bosques del sur brasileño, en las extensas llanuras situadas al occidente, en las sierras pampeanas y en las tierras altas del actual noroeste argentino.

* * *

Durante la década de 1510 nuevas gentes aparecieron en el litoral atlántico. Venían de más allá del mar en extrañas embarcaciones; su aspecto físico, lengua, ropas, armas y costumbres no se asemejaban a nada conocido. En los años siguientes continuaron explorando las costas; luego, desde el norte, entraron en el territorio, lo exploraron y conquistaron algunas partes, fundando poblados y estableciéndose en ellos. Algunos pueblos los enfrentaron y fueron sometidos; otros siguieron resistiendo o migraron a lugares más seguros.

Los recién llegados obligaban a los nativos sometidos a servirlos y trabajar para ellos, abusaban de sus mujeres, buscaban desesperadamente oro y plata y eran capaces de matar —o de matarse entre sí— por obtenerlo. Imponían sus costumbres y creencias a los vencidos y no dudaban en aplicar duros castigos a quienes se resistieran. En las zonas conquistadas, los pueblos originarios pronto vieron su mundo destruido y desarticulado. La guerra, el saqueo, el trabajo forzado, la pérdida de tierras y la difusión de enfermedades desconocidas provocaron un colapso demográfico y destruyeron las bases materiales y las estructuras

sociopolíticas nativas. La introducción de una economía monetaria contribuyó a disolver antiguas prácticas económicas y a socavar los lazos comunitarios. La imposición del cristianismo, al cambiar antiguas costumbres y creencias, contribuyó eficazmente a la desintegración cultural.

Otras regiones, aún más extensas, permanecieron fuera del control de los europeos: la llanura chaqueña, las tierras interiores del litoral, las pampas meridionales, toda la meseta patagónica. Allí, los pueblos originarios resistieron, frustraron los intentos de penetración y conquista, como hicieron los *reche* de la Araucanía, mantuvieron su independencia y, durante un tiempo, resguardaron sus ancestrales costumbres y su identidad étnica. Guerreando o negociando, sus jefes tuvieron un papel activo en las políticas fronterizas e incluso, en algunos momentos y lugares, hicieron fracasar políticas adoptadas por el gobierno colonial que los perjudicaban o consiguieron volver a su favor decisiones de funcionarios locales.

No obstante, la cercanía de esos extranjeros no dejó de afectarlos. Primero la guerra, luego las relaciones informales y más tarde el comercio tuvieron repercusiones, de manera directa, en sus modos de vida. Se vieron forzados a modificar sus costumbres e incluso adoptaron prácticas de sus enemigos para enfrentarlos en combate. Junto al mestizaje biológico, resultado inevitable de los contactos, muchos productos, técnicas, actividades económicas y prácticas sociales fueron, con el tiempo, incorporados y adaptados a su propio modo de vida. Algunos pueblos llegaron a transformar su propia identidad étnica para acomodarla a esa nueva situación. En síntesis, el mundo indígena se convirtió, biológica y culturalmente, en un mundo mestizo que mutaba con rapidez. Esta capacidad para resistir y transformarse les permitió conservar su independencia hasta fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando los nuevos estados nacionales emprendieron políticas destinadas a la ocupación definitiva de sus territorios y su sometimiento al nuevo orden.

CONQUISTA Y COLONIA

Jorge Gelman

LA CONQUISTA DEL TERRITORIO

La conquista del territorio de la actual Argentina por parte de los españoles fue un proceso lento y difícil si se lo compara con la de otros territorios aparentemente más complejos, como el de México y Perú. Parte de esas dificultades tienen que ver con la misma pobreza del territorio (en términos de lo que buscaban los españoles: metales preciosos y masas indígenas para someter, así como acceso a los bastimentos indispensables para la supervivencia), la enormidad de un espacio relativamente poco poblado, así como la misma diversidad y fragmentación de las poblaciones indígenas que lo habitaban. Paradójicamente, la conquista de Mesoamérica y de Perú, poblados por muchos millones de habitantes, con organizaciones estatales consolidadas y grandes ejércitos indígenas, con una población mayormente sedentaria y prácticas avanzadas de cultivo, irrigación y pastoreo, fue más rápida y eficaz que la del territorio argentino. Aunque no se pueden explicar aquí todas esas diferencias, en los casos de los grandes imperios azteca e inca, la derrota de sus cabezas imperiales facilitó mucho la de sus súbditos, sometidos a una disciplina, habituados al pago de tributos, establecidos en poblados más o menos fijos. Además, estos grandes imperios habían conocido un proceso de expansión muy fuerte, que continuaba al momento de la llegada de los europeos, y por ello tenían tam-

bién muchos enemigos recientes que los españoles supieron descubrir y con quienes establecieron alianzas para derrotar a las cabezas de los imperios.

En el caso rioplatense también había enemistades y querellas más o menos tradicionales entre diversos grupos indígenas que los españoles buscaron descubrir y supieron aprovechar. Sin embargo, una diferencia fundamental con los casos recién mencionados fue que el sometimiento de un grupo indígena no implicaba normalmente más que el de un conjunto humano limitado, con un dominio territorial acotado, sin capacidad de influir en otros grupos indígenas, aun muy cercanos en el espacio. De esta manera la conquista española de este territorio implicó una guerra prolongada, con avances y retrocesos por territorios estrechos, cuyo control, además de ser inseguro, no facilitaba necesariamente el de sus vecinos. Por supuesto que hay algunas diferencias importantes que tienen que ver con la misma diversidad de los grupos indígenas que habitaban el territorio, como se vio en el capítulo anterior. En algunos casos se los puede calificar como organizaciones de cazadores-recolectores nómadas, sin estratificación social ni jefaturas consolidadas y sin asentamiento fijo, y en el otro extremo se trataba de sociedades sedentarias que practicaban la agricultura y el pastoreo, algunas de ellas incluidas en el imperio incaico al que habían sido incorporadas recientemente y habituadas a tributar. En medio de estos dos extremos había un diversísimo arco de agrupaciones indígenas, con distintos modos de organización social y política, con un variado acceso a los recursos y uso de su trabajo, pero que en la mayoría de los casos conformaban grupos de una dimensión demográfica relativamente reducida y eran independientes unos de otros, aunque en ocasiones pudieran establecer acuerdos de cooperación o alianzas para fines específicos.

La otra cuestión que es necesario señalar sobre este proceso de conquista española es que se trató de una dominación parcial, que al inicio apenas cubrió una muy pequeña parte del territorio

y que aún en su época de consolidación y apogeo en el siglo XVIII no abarcaba más que una fracción del actual territorio argentino, ya que enormes áreas, sobre todo de la zona pampeana y patagónica y de la región chaqueña, permanecieron bajo la dominación de grupos indígenas autónomos de las autoridades españolas y luego de las criollas durante la mayor parte del siglo XIX.

Por lo tanto hablar del mundo colonial argentino es complicado. Para empezar, gran parte del mismo territorio no se hallaba sujeto a la autoridad española y, sin embargo, tenía estrechas relaciones con el espacio colonial. Pero además "Argentina" es un concepto que remite a un Estado-nación construido en el siglo XIX tardío; como todos, este Estado-nación es una construcción o una "invención" social y cultural, y es el resultado de la interacción de numerosos factores que no estaban predeterminados durante la etapa colonial, aunque es evidente que algunas de las características de este Estado nacional tienen que ver con ese pasado.

Por otro lado, la historia de los pueblos que habitaban este territorio colonial es inseparable de un conjunto más vasto, que era el mundo imperial español. Si se considera solamente la cuestión institucional, los territorios coloniales de la actual Argentina fueron cambiando de jurisdicción administrativa a lo largo de los más de dos siglos y medio de esa dominación. Y dichas jurisdicciones fueron siempre más amplias que la actual Argentina. Así hasta 1776, cuando se crea el virreinato del Plata, el territorio colonial argentino se hallaba incluido en el virreinato del Perú con capital en Lima y su máxima autoridad de justicia era la Real Audiencia de Charcas o La Plata en el Alto Perú. Solo las ciudades cuyanas, Mendoza, San Juan y San Luis, dependían de la Audiencia de Santiago de Chile.

Esta territorialidad institucional no se adecua tampoco a la actual con la creación del virreinato del Río de la Plata. No solo porque gran parte del territorio siguió bajo dominación indígena, sino que el que controlaba el virrey con asiento en Buenos

Aires abarcaba un espacio que incluía el Alto Perú (la actual Bolivia), el Paraguay y la Banda Oriental (actual Uruguay), territorios que por otra parte tampoco tenían la misma conformación territorial que tienen en la actualidad.

Veamos entonces cómo se inició el proceso de exploración y conquista española del territorio argentino. Ya desde antes de la llegada de Francisco Pizarro a Perú, se produjeron algunas expediciones navales que tocaron las costas del Plata. De ellas merece la pena mencionar la que iba al mando de Juan Díaz de Solís, quien intenta remontar el Río de la Plata en 1516, donde es muerto, y la de Sebastián Gaboto, quien en 1527 funda el fuerte de Sancti Spíritu (que sobrevive penosamente tres años) en la confluencia de los ríos Carcarañá y Coronda, en territorio de la actual provincia de Santa Fe. Estos viajes, además de un limitado conocimiento del área y de sus pobladores, sirvieron para estimular imaginativas leyendas sobre la existencia de lugares como la Sierra del Plata, la Ciudad de los Césares o del Rey Blanco, que avivaron los posteriores intentos por conquistar el territorio.

Mientras tanto, Francisco Pizarro comenzaba la conquista del Perú, que tendría un hito central en 1532 con la masacre de Cajamarca, luego de la cual se va sometiendo a gran parte del imperio incaico y se empieza a enviar a España el botín de oro y plata allí obtenido.

Es en este contexto que don Pedro de Mendoza, un grande de España, firma las capitulaciones con la Corona de Castilla para emprender en su nombre la conquista de las tierras del "río de Solís, que llaman de la Plata", organizando así una de las mayores expediciones que hubiera salido desde España a la conquista de América. Más de 2 000 personas entre tripulación y soldados, en varios navíos, emprendieron la marcha hacia el sur americano, fundando en febrero de 1536 la ciudad y puerto de "Nuestra Señora del Buen Ayre".

Pese a lo importante de las fuerzas salidas de la Península ibérica, la empresa comandada por Mendoza iba a fracasar en

gran medida, teniendo que abandonar la ciudad cinco años después en medio del hambre, las enfermedades y la hostilidad de los grupos indígenas de la región.

El único éxito duradero de la misma resultó de las exploraciones hechas al norte del río Paraná, que terminaron en el establecimiento de algunos sitios efímeros, hasta fundar en 1537 el primer asentamiento estable del territorio, el fuerte de Asunción, devenido en pocos años en ciudad con su respectivo cabildo. Sin embargo, y pese a los esfuerzos hechos por los asunceños de abrirse camino hacia el Perú, permanecieron aislados por muchos años luego del despoblamiento de esa primera Buenos Aires.

El fracaso de esa primera fundación de Buenos Aires tiene seguramente muchas explicaciones. Algunas de ellas son evidentes si se contrasta el fiasco de esta gran expedición, con tantos recursos y soldados, con el éxito de Pizarro (y antes que él de Hernán Cortés y de otros conquistadores) quien logró derrotar un gran imperio al mando de apenas unas centenas de españoles. Algunas de las claves de la conquista exitosa del Perú se encuentran en que se hizo desde el propio espacio americano, apoyada en territorios previamente conquistados de Centroamérica, con conocimiento del terreno sobre el que se avanzaba (y de las disputas internas que corroían la unidad del imperio), con recursos forjados sobre el territorio y pudiendo también establecer alianzas con los enemigos del Inca que proveyeron alimentos y soldados al jefe español.

Los seguidores de Mendoza, en cambio, llegaron a un territorio desconocido en gran medida, que distaba miles de kilómetros de cualquier otro asentamiento español, y se encontraron con unos grupos indígenas módicos, carentes de excedentes importantes susceptibles de ser transferidos por las buenas o por las malas a los recién llegados, con quienes establecieron primero relaciones amigables, devenidas pronto en enemistad ante la presión española por conseguir permanentemente recursos de ellos. Las imágenes descritas por el cronista de la expedición, Ulrico

Schmidl, de unos españoles encerrados en un modesto fortín, carentes de cualquier alimento y comiéndose unos a otros en medio de la desesperación y hostigados por indios belicosos, parecen ser el reflejo quizá algo exagerado de una situación insostenible y que llevó al abandono de esa primera ciudad en 1541.

En contraste con este fracaso, unos años después comenzaría un proceso de conquista del territorio argentino que, sin dejar de ser problemático, avanzaría a paso más firme y decidido, pero esta vez desde el interior de territorios conquistados antes por los españoles, tanto en la zona bajo previo dominio incaico, como desde la ciudad de Asunción, que buscaba denodadamente romper el aislamiento en que había quedado desde 1541.

Las razones que motivaron esta segunda ola de conquista eran múltiples, pero sin duda un factor fundamental fue el descubrimiento por parte de los españoles del Cerro Rico de Potosí en 1545, que pronto habría de convertirse en la mina de plata más importante del orbe. También la empujaban las llamadas guerras civiles de Perú, la búsqueda de nuevos Eldorados y, en medio de todo ello, la voluntad de quienes controlaban los territorios ya conquistados de "descargar la tierra" de hombres.

Como es sabido, poco después de la conquista inicial de Perú se inicia un conflicto abierto entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, sus descendientes y seguidores por el control del territorio, que inicialmente otorga el Alto y Bajo Perú a los pizarristas y el norte de Chile a los almagristas. Desde ambos territorios intentan avanzar sobre el norte argentino, el cual ya había sido atravesado por Almagro a mediados de los años treinta. En este marco se produce la conocida "entrada de Diego de Rojas" quien, viniendo desde el Cusco, recorre parte del noroeste argentino entre 1543 y 1544, cuando es muerto tras un enfrentamiento con unos grupos indígenas. En todo caso se puede decir que estas disputas son un importante estímulo para que se produzcan avances sobre el territorio argentino desde Perú, la actual Bolivia y Chile que redundarán en las primeras fundaciones

españolas en esa parte del territorio, por un lado en lo que será la provincia de Tucumán y por el otro en Cuyo que tendrá una dependencia institucional (y una fuerte relación económica y social) con Santiago de Chile.

Estas entradas buscaban dominar nuevos territorios, encontrar más y mayores tesoros y reinos de la abundancia, así como masas indígenas para someter y convertir en tributarias de los conquistadores. Las noticias más o menos fundadas o fabuladas eran estimuladas de hecho por diversos actores del mundo colonial ya conquistado, agentes de la Corona o religiosos, que veían en ellas un poderoso aliciente para favorecer la expansión de los dominios del rey y de la "verdadera fe". Desde el punto de vista de los sitios previamente conquistados, el estímulo a nuevas conquistas tenía además la clara ventaja de descomprimir la presión en las plazas ya establecidas. El hecho de que buena parte del esfuerzo de la conquista se realizara con la inversión de recursos privados era posible porque la Corona estaba dispuesta a otorgar a cambio no solo una parte de las riquezas conseguidas en esos nuevos territorios del rey, sino también honores y poder político. Eso ocasionaba inevitablemente que un segmento de los conquistadores se quedara con la parte más importante de esos "premios", mientras otro se considerara injustamente mal provisto o desprovisto de ellos. De esta manera los primeros poblados coloniales en territorio americano sufrían fuertes tensiones internas y a menudo se transformaban en nidos de conspiradores que se trataban de desplazar unos a otros para así "valer más". Es por ello que las autoridades de estos poblados buscaban frecuentemente "descargar la tierra" de hombres, promoviendo que los disconformes salieran a hacer nuevas conquistas en busca de aquello que no habían podido conseguir hasta el momento.

Pero sin duda un elemento central en la conquista del territorio rioplatense fue el descubrimiento de riquísimas minas de plata en el Alto Perú, especialmente el Potosí. Estas minas, que se convirtieron pronto en sinónimo de riqueza y abundancia en

gran parte del orbe, generaron por un lado el interés de la Corona y de sus conquistadores de establecer una red de ciudades en su derredor que le sirviera de fuente de abasto de todos los insumos y alimentos que ella misma no podía producir, así como que le proveyera de una red de contención y defensa contra los grupos indígenas hostiles a los españoles en territorios cercanos a las minas. También, para frenar una posible intromisión y expansión hacia esas tierras de las naciones europeas enemigas o competidoras, ante todo de Portugal que ya estaba instalado en Brasil.

A la vez, los nuevos señores de las minas del Alto Perú necesitaban abrir caminos que permitieran sacar todo el provecho posible a la explotación de las mismas. En los términos usados por el oidor de la Audiencia de Charcas don Juan de Matienzo en los años 1560, o en los del fundador de la ciudad de Santa Fe y luego de la segunda y definitiva Buenos Aires, Juan de Garay, se trataba de "abrir puertas a la tierra". Esta expresión significaba, en el caso de Asunción, de donde vendría Garay con sus huestes fundadoras, romper el aislamiento y encontrar una vía para vincularse con el Alto Perú por un lado y con el Atlántico por el otro, y en el caso de los altoperuanos significaba sobre todo abrir un camino directo al Atlántico, a través de una ruta coronada por diversos poblados españoles que permitiera sacar la plata de Perú de manera rápida y segura y traer a cambio mercancías españolas y europeas baratas.

Pero ello entraba en contradicción abierta con la política de la Corona que había establecido un sistema de organización política y comercial que concentraba el poder y los privilegios en las élites limeñas. En los años cuarenta del siglo XVI se crea el virreinato del Perú con capital en Lima, que incluía todos los territorios españoles de América del sur. Y con ello se establece un sistema de monopolio comercial que centralizaba en las ciudades capitales de los dos únicos virreinatos americanos (México en Nueva España y Lima en Perú) y en sus élites el control del tráfico comercial y obviamente sus mayores privilegios.

Para el caso específico de las minas altoperuanas, este sistema "de flotas y galeones" significaba un verdadero quebranto, ya que la plata producida en ellas debía salir por Lima, embarcarse en la flota del Pacífico para alcanzar Panamá, allí desembarcar, atravesar el istmo y reembarcar en la flota que debía atravesar el Caribe para llegar luego a España (primero al puerto de Sevilla y luego al de Cádiz, los únicos autorizados a efectuar este comercio americano hasta avanzado el siglo XVIII). El mismo recorrido a la inversa debían hacer las mercancías europeas, los llamados "efectos de Castilla", que entraban al territorio americano a cambio de gran parte de la plata americana que salía del continente. Como es obvio este sistema era muy perjudicial para los dueños de la plata americana y en general para la mayor parte de los consumidores en América del Sur de mercancías europeas, quienes debían pagar precios exorbitantes por las mismas. En otras palabras este circuito oficial de comercio devaluaba enormemente la capacidad de compra de la plata altoperuana al favorecer los altísimos precios de los "efectos de Castilla" que llegaban por la ruta oficial al Potosí, pero también a muchos otros sitios de la región. Es por ello que muchos intereses regionales del Alto Perú, pero también de Chile y de Asunción, necesitaban abrirle puertas a la tierra. Como dijera el oidor Juan de Matienzo, el objetivo para ellos era "evitar pasar dos mares y tan peligrosos y malos caminos como agora se pasa, que son de esta ciudad o de Potosí hasta el puerto de Arica…".

Pero, como dijimos, ello entraba en disputa con los planes de la Corona y con los intereses de las élites limeñas. Volveremos luego sobre este tema.

Sea como sea, este conjunto de intereses fue impulsando las "entradas" al territorio argentino desde Chile, el Alto Perú y Asunción, las que van conformando en la segunda mitad del siglo XVI una red de ciudades que sería la base de ocupación española del territorio argentino durante prácticamente todo el periodo colonial. En total fueron fundados más de 30 poblados

españoles en este territorio hasta fines de ese siglo, pero muchos de ellos tuvieron una vida efímera, sobre todo por la hostilidad indígena o por problemas de locación, sobreviviendo apenas 12. Luego, en el siglo XVII o en los inicios del XVIII el ritmo de fundaciones es más lento, hasta que en la segunda parte de este último siglo, bajo el influjo borbónico, se inicia una nueva oleada de fundaciones más sistemática, sobre todo en regiones de frontera en las que buscaban expandirse.

Esas 12 ciudades iniciales fueron Santiago del Estero (1553), San Miguel de Tucumán (1565), Córdoba (1573), Salta (1582), La Rioja (1591), San Salvador de Jujuy (1593), las que con San Fernando del Valle de Catamarca, fundada en 1683, conformarían la Provincia de Tucumán; en la región cuyana fueron fundadas Mendoza (1561), San Juan (1562) y más tarde San Luis (1594), y finalmente en el litoral permanecieron las ciudades de Santa Fe (1573), Buenos Aires (1580) y San Juan de Vera de las Siete Corrientes (1588), las que junto a Asunción conformarían primero una única gobernación, dividida en 1618 en la del Paraguay y la del Río de la Plata o Buenos Aires. Como dijimos, muchas más desaparecieron y aun varias de las antes mencionadas terminaron siendo desplazadas de sus sitios originales, ya sea por la hostilidad de grupos indígenas cercanos o para mejorar su situación en relación con la disponibilidad de recursos y con las rutas comerciales que empezaban a desarrollarse rápidamente.

LA RESISTENCIA Y LAS ALIANZAS INDÍGENAS

La suerte de los primeros poblados españoles, así como muchas de sus características dependieron de la relación entablada con la población indígena que habitaba esas regiones.

Si la primera Buenos Aires tuvo que ser abandonada al cabo de unos años o si varios poblados fundados en los valles calchaquíes desaparecieron, se debió en primer lugar a la fuerte hosti-

lidad indígena en esos lugares, ya sea desde el inicio o al cabo de algún tiempo de interacción cuando el papel que aspiraban tener los recién llegados se hizo evidente para los nativos.

Por el contrario, el éxito de Asunción se puede localizar justamente en la capacidad de entablar acuerdos más o menos firmes con los grupos guaraníes de esa región. Como en muchos otros lados del territorio americano, esos acuerdos fueron inducidos por amenazas de violencia por parte de los españoles, pero sobre todo impulsados por la búsqueda de aliados entre algunos grupos indígenas que querían enfrentar exitosamente a sus enemigos de antaño. En el caso de los carios de la región asunceña, se trataba de buscar respaldo para frenar a los guaycurúes chaqueños, sus tradicionales enemigos. Así, los españoles desprendidos de las huestes de don Pedro de Mendoza establecieron acuerdos con los primeros, sellados con el intercambio de presentes: del lado español estos consistieron en la entrega de algunas herramientas de hierro y diversos abalorios, y en el sentido inverso, sobre todo de mujeres, como era habitual en los pactos locales. Estas mujeres, que algunos españoles recibieron numerosas, constituyeron una fuente de acumulación para los europeos fruto de las múltiples tareas que realizaban (desde hilados hasta el trabajo de la tierra), a la vez que entablaron con ellas relaciones sexuales de las que nació una nutrida población mestiza, característica de la región. Pero esta "alianza", idealizada en muchos relatos de testigos y luego de historiadores, no debe ocultar que esa relación también se caracterizó por la violencia, que varias veces se expresó en enfrentamientos abiertos y guerras, como ocurrió apenas pocos años después de la fundación de Asunción.

Tampoco en la zona de influencia incaica del territorio argentino fue sencilla la dominación española. En algunos casos los conquistadores lograron establecer acuerdos de sujeción con grupos que encontraban inicialmente alguna ventaja en ello, como el de los juríes de Santiago del Estero o algunos grupos de la quebrada de Humahuaca, pero en otros encontraron una fiera

resistencia, como es el caso más característico de los diaguitas o calchaquíes.

Los pueblos que habitaban estos valles, que atraviesan las actuales provincias de Catamarca, Tucumán y Salta, ofrecieron una bravía resistencia a la dominación hispana, de la misma manera que parecen haberla ofrecido al Inca. Ellos provocaron el abandono o destrucción de varias de las primeras fundaciones españolas en la región y protagonizaron tres grandes ciclos de rebeliones masivas que conmovieron todo el espacio del Tucumán colonial y más allá.

El primero de estos ciclos se inicia a mediados de los años 1560, encabezado por el cacique Juan Calchaquí, y se prolonga hasta finales de los años ochenta cuando el gobernador Ramírez de Velasco realiza una feroz entrada en los valles. Pero todavía en los noventa el cacique Viltipoco, de Humahuaca, logra convocar a varios miles de guerreros indígenas, que serán finalmente derrotados y sus jefes muertos.

La segunda gran ola rebelde abarca entre 1630 y 1643 aproximadamente, siendo unos de sus principales líderes el cacique Chalemín, quien encabeza un gran levantamiento sobre todo en el sur del Tucumán, logrando atacar las ciudades de Salta y San Miguel e incendiar La Rioja, aunque finalmente es derrotado, desatándose una fuerte represión.

A pesar de ello hay todavía un tercer gran ciclo de levantamientos calchaquíes entre mediados de los años 1650 y 1660, marcado por la presencia de un exótico andaluz, Pedro Bohorques, quien llega a Tucumán hacia 1657 y manipula tanto a españoles como a grupos calchaquíes hasta lograr ser aceptado por estos como un "Inca" y encabezar la primera etapa de este ciclo final de rebelión calchaquí. Bohorques había convencido a los españoles de que él era el único capaz de sacar a los calchaquíes el secreto de sus tesoros guardados (supuestos tesoros que en la mente de los españoles era lo único que podía justificar tan obstinada resistencia a su dominación) y a los calchaquíes de ser

descendiente del último inca Paulo. En todo caso, luego de un tiempo Bohorques es apresado y termina siendo muerto en Lima por el garrote vil (y luego colgado y decapitado para escarmiento público), mientras la rebelión continúa hasta ser definitivamente derrotada y la población calchaquí reprimida sistemáticamente y los sobrevivientes "desnaturalizados", es decir desplazados hacia sitios muy alejados de sus tierras. En el caso más extremo, el de los fieros guerreros quilmes, los sobrevivientes terminan instalados al sur de la ciudad de Buenos Aires, a más de 1 000 kilómetros de su lugar de origen.

Esta situación de guerra abierta y prolongada en el tiempo se produjo en muchos otros lugares, aunque en escala más modesta.

Se podría decir que en el caso de los grupos indígenas de la región pampeana y del litoral, la conquista se produjo por acciones de guerra acotada en las que cuando triunfaban los españoles se les otorgaba el dominio de grupos humanos pequeños, en los que la captura de un jefe no implicaba necesariamente la sujeción de un grupo subordinado o este era muy limitado. La propia itinerancia tradicional de esos grupos dificultaba enormemente su control y muchas veces cuando en Buenos Aires o en Santa Fe se otorgaba una encomienda de indios a un conquistador, ello consistía en la entrega de un jefe encadenado, sin súbditos, los que eventualmente el encomendero tenía que ir a buscar al campo por su cuenta y riesgo.

Muy distintas eran las encomiendas de Paraguay, de Santiago del Estero o de la quebrada de Humahuaca que podían incluir varios cientos o en algunos casos extremos miles de indígenas cada una. También en Córdoba se repartieron en encomienda varias decenas de miles de indios.

Podemos tomar como ejemplo Mendoza, una región donde hallamos los más diversos tipos de conquista y colonización española del territorio argentino. Allí, en la zona del piedemonte de la cordillera, se encontraban los pueblos huarpes, que domesticaban

animales, practicaban la agricultura y habían desarrollado complejos sistemas de riego por acequias que se continuaron usando luego de la conquista española. Ellos habían sido incorporados al imperio incaico, por lo cual también tributaban al señor del Cusco. Pero en las cercanas regiones de la Payunia al sureste y en las estribaciones cordilleranas al sur de la actual provincia habitaban los pueblos denominados puelches y pehuenches que, a diferencia de los huarpes, no habían sido sometidos al Inca. Se trataba de grupos nómadas de cazadores-recolectores, agrupados en pequeños núcleos de unas pocas decenas de personas, que solo de manera excepcional y puntual se reunían en coaliciones mayores para la guerra o para algunas actividades en las que la colaboración a mayor escala se imponía. Los españoles lograron dominar con relativa facilidad a los huarpes, sin embargo no lograron hacerlo con los puelches y pehuenches, pese a diversos encuentros militares y algunas victorias hispanas, las que no les aseguraban ningún dominio humano ni territorial significativo.

LA CONFORMACIÓN DEL MUNDO COLONIAL TEMPRANO

De esta manera relativamente precaria los españoles fueron estableciendo una red de "ciudades" con sus cabildos, en Tucumán, Paraguay, Cuyo y el litoral rioplatense, cada una de las cuales albergaba un número reducido de pobladores, en el mejor de los casos unas pocas centenas, y trataba de expandir su control sobre las áreas rurales habitadas por indígenas que se hallaban sometidos al régimen de encomienda, de manera más firme o más endeble. La constitución de estos poblados se manifestaba en primer lugar en el establecimiento de la autoridad real (simbolizada por la vara de la justicia), y su principal expresión material era el nombramiento de los regidores del cabildo. Este era concebido como la representación de los vecinos de la nueva ciudad, en cuyas manos el rey depositaba el ejerci-

cio de la justicia. El estatus de "vecindad" inicialmente estaba restringido a los líderes de la hueste conquistadora, quienes a su vez se veían beneficiados con los principales premios de la conquista: el reparto de solares para vivienda en la traza urbana y de terrenos para quinta o chacra y estancias en zonas menos o más alejadas de ella respectivamente. También, o quizá deberíamos decir sobre todo, recibían indios en encomienda.

La encomienda fue la institución fundamental de sujeción de la población indígena, a la vez que el principal privilegio de los conquistadores, por lo cual vale la pena detenerse un poco para explicar sus características en el territorio. Pasada la etapa inicial de la conquista española de América cuando las formas de sujeción de la población local se daban de cualquier manera y predominaban situaciones de cuasiesclavitud, la Corona decide reglamentarlas por medio de la encomienda. Ante la presión de algunos actores con influencia en la Corte —especialmente religiosos— y la evidencia de la dramática caída demográfica indígena, el rey establece las formas en que los antiguos pobladores debían servir a los conquistadores a cambio de que estos los "protegieran" y fomentaran en ellos la fe cristiana. Si bien conviven diversas formas de forzar el trabajo indígena para beneficio de los españoles, la institución básica para ello fue la encomienda. Ella misma fue variando en el tiempo y tuvo rasgos específicos en las diversas regiones americanas. En principio suponía que el receptor del privilegio, el encomendero, tenía derecho a percibir un tributo de los indígenas a él encomendados, a cambio de proveerles asistencia religiosa.

Sin embargo, en ese tiempo dicho tributo no estaba "tasado", es decir que no había una reglamentación que indicara claramente la forma y el monto del tributo que esos indígenas debían dar a sus encomenderos, de manera que en general la encomienda temprana se diferenció bien poco de la esclavitud. En el caso del virreinato del Perú, apenas en los años cuarenta del siglo XVI se empezó a intentar limitar algo los alcances del

tributo y será solo en los sesenta, especialmente bajo el virreinato de Francisco de Toledo, cuando se reglamentará decisivamente el mismo. Se suprime entonces la percepción del tributo bajo la forma de "servicio personal" (es decir de trabajo que en muchos casos era ilimitado y alcanzaba a casi toda la población indígena, varones, mujeres y niños), se establece que la población tributaria son solo los varones adultos y se fija un monto, una "tasa", que cada tributario debía entregar al año. Ella permitiría recompensar los méritos del encomendero y sus esfuerzos por evangelizar a la población indígena, pero a la vez debía liberar la mayor parte del tiempo de los indígenas para que se procurasen su sustento de manera autónoma, para lo cual se les garantizaba también el dominio sobre tierras propias.

Aunque sabemos que esta reforma del sistema tributario no siempre se aplicó y en algunos lugares subsistieron las formas previas de explotación indígena, sin duda allí donde tuvo efecto favoreció la pervivencia de la comunidad indígena. En el territorio argentino casi no llegó a aplicarse.

En algunas zonas relativamente acotadas del territorio se llegó a pagar el tributo "al estilo del Perú", es decir bajo la forma de un monto de dinero o bienes producidos por los grupos indígenas en sus tierras, pero en la mayor parte del territorio rioplatense la forma más frecuente del tributo fue la del "servicio personal", en la cual el encomendero recibía de "sus" indígenas el trabajo que utilizaba de manera casi indiscriminada en diversas actividades organizadas por él mismo, haciendo prácticamente imposible que dichos indígenas continuaran algún tipo de vida comunitaria de manera autónoma, favoreciendo de este modo una fortísima y rápida desestructuración de la vida indígena en común y una caída demográfica catastrófica.

Así por ejemplo los encomenderos de Mendoza empleaban a sus indígenas en diversas labores locales, en el cultivo de chacras (parcelas de tierra), trabajo doméstico, etc. pero sobre todo los llevaban al otro lado de la cordillera, a trabajar en las minas de

oro que por entonces conocían un primer gran ciclo de expansión y de las cuales muchos de los encomenderos eran propietarios. En estos trajines y fatigosas tareas consumieron sus vidas buena parte de los huarpes. Los encomenderos de Córdoba hicieron lo propio, haciéndolos trabajar la tierra, organizando obrajes textiles en los cuales empleaban la mano de obra de varones, mujeres y niños de sus encomiendas, apropiándose incluso de buena parte de las tierras de esos pueblos. Y también enviaban contingentes de indios encomendados al Potosí a contratarlos como peones mineros a cambio de un sueldo que se quedaba en su mayor parte el encomendero.

En los años setenta del siglo XVI, el gobernador Gonzalo de Abreu realizó una visita por Tucumán, con el fin entre otras cosas de "ordenar" las encomiendas y el panorama que describe da la pauta de qué significaba este sistema en la región. En 1576 dicta unas ordenanzas para reglamentar las encomiendas que, sin embargo, consagran el servicio personal de los varones, mujeres y niños de los pueblos encomendados, obligados a realizar las tareas más diversas tanto dentro como fuera de sus pueblos. Y si bien no dejaba de ser una primera limitación a la explotación de la población indígena de la región se ha calculado que estas ordenanzas autorizaban la entrega de hasta 55% del tiempo total de trabajo de los varones adultos y 50% del de mujeres, jóvenes y ancianos. Tampoco impedían la injerencia del encomendero sobre las tierras reservadas a los indígenas, ni frenaban la continuidad en esas tierras de los "pobleros", especie de capataces del encomendero que muchos testimonios indican como los principales responsables de las situaciones más extremas de explotación indígena.

Es evidente que este tipo de sistema no podía conducir más que a una catástrofe, que se expresó muy rápidamente en una caída demográfica pronunciada. Las cifras de población aborigen en el momento del primer contacto con los españoles en la región son imposibles de conocer dada la ausencia de sistemas contables destinados a ese fin, sumado al muy escaso control

español sobre la misma. Apenas hacia finales del siglo XVI y en el XVII se empiezan a tener algunas cifras más o menos creíbles, generalmente sobre los varones adultos sometidos a encomienda, así como algunos cálculos de contemporáneos sobre la población indígena en general. Con base en los mismos es posible conjeturar unas cifras de población indígena que se pueden considerar aceptables, al menos como una aproximación para el territorio de la gobernación del Tucumán, que abarcaba la región central y noroeste del territorio argentino bajo dominio español, en las últimas dos décadas del siglo XVI. Es decir en un momento relativamente temprano de la conquista española, pero en el cual seguramente ya se ha producido una caída importante de población por las enfermedades traídas por los españoles, así como por los sistemas de explotación implantados. Ese cálculo es de unos 500 000 indígenas en la región. En el mismo territorio del Tucumán colonial las cifras disponibles para 1596 son de unos 56 500 tributarios. Para 1607 esa cantidad se habría reducido a 16 200 para seguir descendiendo hasta mínimos menores a 2 000 tributarios al despuntar el siglo XVIII, momento en que parece iniciarse un cambio de tendencia, pero desde ese nivel ínfimo. Para calcular el total de población indígena sometida al régimen de encomienda se deben multiplicar esas cifras de tributarios por un número que según los investigadores puede variar entre cuatro y cinco. Aunque debemos tomar estas cifras como meras aproximaciones, resulta evidente que entre finales del siglo XVI y los inicios del siguiente se produce una caída dramática de la población indígena sometida a la encomienda, que se profundiza a lo largo del siglo XVII. Ello es el resultado del fallecimiento de un buen número de personas, de la desestructuración casi completa de sus formas de vida tradicional, así como de la huida de otros y de los inicios de un proceso de mestizaje biológico y cultural, ya sea forzado por los conquistadores o buscado por algunos indígenas como forma de eludir los aspectos más severos y descarnados de la dominación colonial.

Esta situación de crisis demográfica evidente a inicios del siglo XVII dispara la realización de unas visitas del territorio por el oidor de la Audiencia de Charcas, don Francisco de Alfaro, quien buscará poner un límite a la explotación descontrolada de la población indígena de Tucumán, Río de la Plata y Paraguay, dictando unas ordenanzas en este sentido en 1611 para los dos últimos territorios y en 1612 para Tucumán. En ellas se prohibía taxativamente la esclavitud y el servicio personal de los indios; se garantizaba para ellos las tierras de sus reducciones separadas de las del encomendero, y se tasaba el tributo en una cantidad de cinco pesos por tributario, estableciendo claramente que dichos tributarios eran los varones de entre 18 y 50 años. Sin embargo se dejaban abiertas ciertas vías para el servicio personal, en tanto se autorizaba reemplazar el pago de los cinco pesos de tributo anual por bienes y/o por trabajo, aunque limitando el trabajo a un máximo de 30 días al año. También se reglamentaba en las ordenanzas el trabajo "mitayo" que las comunidades debían ofrecer a los españoles, es decir el trabajo forzado y remunerado que debían entregar a empresarios españoles, urbanos o rurales, limitándolo; se prohibía la presencia del poblero, así como se debía terminar con el "yanaconazgo" que era una forma de servidumbre personal de los indígenas.

Como era de esperarse, este intento por limitar la explotación a la que se veían sometidos los indígenas por los encomenderos provocó una fuerte reacción de estos últimos, quienes lograron finalmente moderar algunas de las restricciones que se les quería imponer. Así por ejemplo lograron duplicar la tasa del tributo o, aún más, su conmutación en trabajo hasta 120 días al año. Sin embargo se mantuvieron vigentes las restricciones al servicio personal permanente y se garantizó la autonomía de las tierras de la comunidad de manera que los indígenas pudieran emplearlas para su propia producción y necesidades.

El problema central con las ordenanzas de Alfaro no fueron tanto las modificaciones que lograron introducir los encomen-

deros, sino que llegaron demasiado tarde. Los efectos del sistema previo de encomienda habían sido demoledores a esta altura del siglo XVII y, por lo tanto, la eficacia de estas ordenanzas para limitar la explotación indígena no podía revertir una situación que presentaba ya resultados gravísimos sobre esa población en casi todo el territorio.

Mientras esto sucedía con la población indígena, más lentamente comenzaba a crecer la población española o mestiza (que podía incluir a indígenas "hispanizados" escapados de los pueblos de encomienda), que desde temprano empezaría a desempeñar un papel central en el sistema colonial en el territorio argentino. Poco a poco los núcleos urbanos fundados por los conquistadores empezaron a expandirse y a ocupar también parte de las tierras que rodeaban esos núcleos, fundando chacras, estancias y haciendas, destinadas a abastecer el consumo de las poblaciones locales y también a otros mercados que empezaban a expandirse, especialmente en las zonas mineras del Alto Perú.

ENTRE POTOSÍ Y EL ATLÁNTICO: LAS REGIONES DURANTE EL PERIODO COLONIAL "CLÁSICO"

Como ya se mencionó, en los primeros años que siguieron a la formación de los poblados españoles en el territorio argentino la vida económica se centraba en la explotación de la población indígena encomendada, ya fuera cobrándoles un tributo al estilo del Perú (en bienes producidos por los indígenas) o, más frecuentemente, haciéndoles trabajar en actividades organizadas por el propio encomendero o alquilándolos como mano de obra en la minería u otras actividades en lugares a veces muy alejados. Algunos encomenderos comenzaron a organizar labores destinadas a producir bienes que pudieran ser vendidos en los mercados mineros, que crecían cada vez más en la segunda mitad del siglo XVI, especialmente Potosí. En algunos casos se

trataba de obrajes textiles en los que hacían trabajar a todos los integrantes de la familia indígena, o en haciendas productoras de vinos y aguardientes o de diversos bienes agrícolas.

Sin embargo, la propia crisis demográfica indígena de la región puso pronto en crisis este tipo de actividad, pero no el impulso que provenía de la demanda de bienes de los centros mineros que, al revés, era cada vez más potente hacia finales del siglo XVI. La producción minera de Potosí tuvo un primer ciclo de crecimiento fuerte entre su descubrimiento y los años 1560 cuando se agotaron los filones más ricos en plata. Pero a partir de entonces la aplicación de un nuevo proceso tecnológico, la amalgama con mercurio, permitió extraer más fácilmente el metal del mineral y la producción dio un nuevo salto que llevó la producción de plata potosina a nuevos picos que convirtieron la moneda acuñada en la ceca de Potosí en una de las más conocidas y valoradas en el comercio internacional.

Hacia inicios del siglo XVII crece pujante una ciudad junto al Cerro Rico que llega a albergar a más de 100 000 personas, quienes se dedican a extraer plata del Cerro o a proveer diversos servicios a ese núcleo central de la actividad económica, pero necesitan ser provistos de casi todo lo demás. Como ha explicado el historiador Carlos Sempat Assadourian, Potosí era una ciudad enorme para esa época y riquísima, pero no producía sus alimentos ni la ropa que vestía a sus habitantes, ni siquiera la leña que cocinaba esos alimentos o los medios de producción para extraer la plata del cerro. Por lo tanto se convirtió cada vez más en un "polo de arrastre" que generó una poderosa atracción para gran parte de Sudamérica. Casi todos los pueblos fundados por los españoles, y aun muchas regiones indígenas dentro o fuera del territorio dominado por ellos, se vieron incentivados a producir bienes que podían encontrar salida en el mercado minero a precios elevados y pagaderos en el ansiado metal precioso.

Así, las ciudades españolas del territorio argentino, que hasta entonces producían casi todo lo que necesitaban para el con-

sumo local de sus mercados minúsculos, se vieron estimuladas a especializarse en la producción de algunos bienes que encontraban buena salida en el mercado minero, limitando la producción para el consumo directo o de los mercados locales y dedicando gran parte de sus tierras y trabajo a producir los bienes que llevarían al Potosí.

En un rápido recorrido por el territorio observamos que Paraguay encuentra la llave de su relación con el "espacio peruano" en la yerba mate, cuyo consumo se difunde rápidamente por toda la región y que en el mercado potosino ocupa un lugar destacado entre los llamados "vicios" junto a los vinos y aguardientes y las hojas de coca. En un recorrido que empezaba bajando desde Asunción hasta Santa Fe y más tarde hasta Buenos Aires (por la imposibilidad de atravesar directamente la zona chaqueña en manos de indios hostiles a la dominación colonial), la yerba mate era trasladada desde allí a casi todo el virreinato de Perú, con dos grandes vías hacia Potosí y hacia Santiago de Chile. En Corrientes se producía también yerba mate, además de tabaco y algunos bienes artesanales, que incluían en su caso buena parte de las embarcaciones que surcaban constantemente el sistema fluvial del río Paraná y luego también del Uruguay. Las regiones más australes del litoral, Buenos Aires y Santa Fe (Entre Ríos fue colonizada tardíamente en el siglo XVIII), eran zonas con una gran aptitud ganadera en las que inicialmente se desarrolló un sistema de caza de animales salvajes, cimarrones, conocido como "vaquería". Resultado de la reproducción espontánea del ganado traído en la primera expedición de Pedro de Mendoza, en la región pampeana vagaban miles de vacunos y equinos salvajes y los pobladores de Buenos Aires y Santa Fe, así como los de Córdoba y Cuyo, buscaron sacar un rédito del mismo realizando expediciones a una zona que no controlaban políticamente, para faenar el máximo de ganado vacuno y quitarle el cuero y a veces un poco de sebo, y en el caso del equino someterlo y venderlo en los mercados regionales. Esos cueros se podían vender en parte en el

comercio atlántico por Buenos Aires o ser utilizados localmente en diversas actividades artesanales. Las vaquerías en la región pampeana tuvieron gran importancia para esas ciudades hasta fines del siglo XVII cuando se pone de manifiesto una creciente escasez de ganado cimarrón y las expediciones de caza se deben realizar en territorios cada vez más alejados y con resultados más magros. Simultáneamente a este tipo de actividad, en las ciudades del litoral se practicaba una agricultura destinada al consumo de los mercados locales y se criaban animales cuyo destino era el consumo local y el envío al Alto Perú. En primer lugar, de vacunos que Buenos Aires o Santa Fe enviaban al Potosí de manera creciente en la segunda mitad del siglo XVII, y cada vez más de ganado mular que tenía gran demanda en el mundo andino.

La mula se convirtió rápidamente en el medio de transporte de mercancías por excelencia de todo el espacio peruano, sobre todo de la mayor parte de su territorio montañoso por donde no podían circular las carretas, un medio de transporte más eficaz pero inútil en la zona. Esas mulas fueron reproducidas durante todo el periodo colonial en gran parte del territorio argentino; una de las primeras regiones en criarlas en cantidad fue Córdoba. Luego de la quiebra de los obrajes textiles cordobeses debida a la crisis de las encomiendas y la competencia de otras regiones productoras, la demanda de mulas estimuló la formación de estancias en la campaña cordobesa y se produjo así un proceso de ocupación del espacio rural con sistemas de trabajo que ya tenían poco que ver con la encomienda. De allí en adelante algunos grandes propietarios españoles criarán mulas usando mano de obra esclava, peones y arrendatarios, así como una multitud de pequeñas o medianas estancias y estanzuelas, trabajadas directamente por los titulares de las explotaciones y sus familias, que producirán unas pocas mulas al año para vender en los mercados andinos, así como algunos otros bienes para el consumo directo o para la venta en pequeña escala en los mercados locales.

Algo parecido pasaba en otras regiones del territorio mediterráneo argentino, en el camino a Perú. Así en Tucumán como sobre todo en Salta o Jujuy se criaban mulas o se invernaban las mulas procedentes de Córdoba, de Santa Fe y del norte de Buenos Aires en su camino hacia las zonas mineras. En Tucumán había una importante producción agrícola y también artesanal que en la ciudad elaboraba suelas curtidas o fabricaba las carretas que circulaban por las regiones más planas que la vinculaban con el litoral.

En muchas de estas regiones había también una intensa actividad textil que ya no se ubicaba centralmente en grandes instalaciones obrajeras, sino que se realizaba en su mayoría en el seno de las familias campesinas. Desde Córdoba a Jujuy, pasando por Santiago del Estero o Corrientes, La Rioja o Catamarca, miles de familias campesinas dedicaban parte de sus labores anuales, sobre todo de la mano de obra femenina e infantil, al hilado y confección de prendas de lana y algodón, los ponchos y mantas, los lienzos, que tenían como destino primero proveer de abrigo y vestimenta a los integrantes de la familia pero que normalmente dejaban también un pequeño excedente para ser colocado en los mercados regionales y brindar así a esa familia un complemento a sus ingresos. Estos microprocesos familiares, sumados, abastecían gran parte de los mercados regionales del textil. Así los tejidos de lana de las campesinas cordobesas o los lienzos de algodón de las catamarqueñas circulaban por distintos mercados, teniendo en ellos un papel destacado.

En este panorama regional, Cuyo, especialmente Mendoza y San Juan, se especializaron tempranamente en la producción de vinos y aguardientes que circularon con profusión en distintos mercados coloniales.

De esta manera, la fuerza del mercado minero había llevado a todas las regiones del territorio a salir muy pronto del relativo asilamiento o autosuficiencia en que se encontraban al inicio, lo que tuvo múltiples consecuencias en diversos terrenos. La más

obvia era esta especialización productiva que, aunque parcial —ya que todas seguían elaborando también parte de sus bienes de consumo—, acompañaba la mercantilización de sus economías agrarias y artesanales. Cada una de las regiones dejaba de producir al menos una parte de los bienes que inicialmente destinaba al consumo de los mercados locales y de los productores directos, para dedicarse más a aquello que encontraba salida en Potosí o en otros grandes mercados. Así, esta especialización parcial creaba también una demanda local insatisfecha, que debía ser colmada mediante la importación de esos bienes desde otros lugares. En otros palabras, Asunción, Santa Fe, Córdoba y otras regiones que inicialmente producían por ejemplo vino, pese a lo inadecuado de su dotación de recursos para esa actividad, dejaron de hacerlo para importarlo desde Cuyo u otras regiones con mayor capacidad para ello. De esta manera la demanda de Potosí y otros grandes mercados mineros fue produciendo un crecimiento de la economía mercantil que fue multiplicando poco a poco los mercados, que buscaban no solo alcanzar a los más ricos del Alto Perú, sino también a otros más modestos pero múltiples que requerían esos bienes que habían dejado de producir. Es necesario señalar que estos mercados no crecieron indefinidamente ni abarcaron al conjunto del espacio colonial, sino que se limitaron mayormente a sus centros urbanos, ya que el campo siguió proporcionando en pequeña escala la mayor parte de los bienes que necesitaban para su subsistencia, además de aquéllos destinados a los mercados interregionales.

La segunda consecuencia de este sistema fue que la plata producida en los centros mineros, y que la Corona buscaba concentrar en los puertos para enviar a la Península, no hacía un recorrido directo entre las minas y ellos. Es verdad que una parte importante pero menor de dicha plata y de los metales preciosos en general era recogida por los funcionarios reales de manera directa por la vía de diversos impuestos cobrados sobre la producción minera (el quinto real equivalente a 20% de la pro-

ducción bruta o luego el diezmo, la mitad del anterior) o sobre diversas actividades económicas, el comercio interno y externo, el control de monopolios, etc. Sin embargo la mayor parte de la plata producida en los centros mineros se dispersaba por las regiones americanas en pago de las mercancías que estas vendían en sus mercados, tal como hemos explicado anteriormente. De esta manera la Corona debía armar un complejo sistema de monopolio comercial, en alianza con las principales élites virreinales, para garantizar el flujo de esa plata hacia la metrópoli.

Este sistema era el denominado inicialmente de flotas y galeones que, como ya señalamos, otorgaba a las élites limeñas el monopolio del comercio de efectos de Castilla y esclavos en todo el virreinato del Perú, entre Panamá y Buenos Aires, por medio del cual debían conseguir concentrar en Lima, la capital virreinal, la mayor parte de la plata y el oro que circulaba por ese territorio, para embarcarla luego en la flota del Pacífico y enviarla a España. Como mencionamos este sistema significaba una pérdida muy grande de poder adquisitivo de la plata americana, la cual se desvalorizaba ante los altísimos precios que cobraban los agentes de los comerciantes limeños para vender los "efectos" y los esclavos. Esto fue clave para impulsar el desarrollo del comercio de esclavos y ultramarinos por Buenos Aires. Pero como esta actividad mercantil contradecía las reglas del comercio monopólico se desarrolló mayormente como contrabando, característico de la ciudad de Buenos Aires al menos hasta la creación en 1776 del virreinato del Río de la Plata.

Aunque por su propia naturaleza este comercio ilegal es difícil de cuantificar, diversos estudiosos han calculado que por lo menos las tres cuartas partes del tráfico realizado por Buenos Aires tenía ese carácter. Ya desde las primeras décadas de vida de la segunda Buenos Aires resulta evidente que el contrabando era el eje de su actividad económica. Una de las principales formas que adquiría eran las denominadas "arribadas maliciosas" de navíos, los que solicitaban detenerse en el puerto alegando razones

de fuerza mayor y una vez hecho esto desembarcaban esclavos y mercancías diversas de manera ilegal, buscando llevarse sobre todo la plata y el oro que llegaba por varias vías a Buenos Aires.

Ante esta situación la Corona tuvo actitudes ambiguas. Por un lado quería acabar con ese comercio para defender el sistema de monopolio, pero por el otro debía también permitir una cierta actividad económica a la ciudad de Buenos Aires que le hiciera posible sobrevivir y cumplir así con una misión político-militar estratégica, que era ser el bastión que impidiera la expansión portuguesa o de otras naciones en sus dominios. Para combatir el contrabando la Corona ordenó la instalación de una "Aduana Seca" en Córdoba en 1622, donde pretendía establecer el límite en la articulación de la economía atlántica de Buenos Aires con la del Alto Perú. Según la orden real allí se prohibía totalmente el paso de algunas mercancías (sobre todo de los esclavos introducidos por Buenos Aires hacia el norte y de la plata altoperuana hacia Buenos Aires), así como también se gravaban fuertemente aquellas otras mercancías autorizadas a atravesarla. Pero la fuerza de ese comercio era muy difícil de contener con medidas legales y la influencia de Buenos Aires como polo comercial se fue incrementando. La propia Aduana Seca fue mudada a Jujuy a finales de ese siglo, convalidando de alguna manera la creciente influencia de las élites comerciales porteñas en un espacio cada vez mayor.

Este cuadro regional no estaría completo sin incorporar el territorio que desde inicios del periodo colonial y hasta fines del siglo XIX permaneció bajo el control de diversos grupos indígenas que resistieron la dominación blanca. Estos ocupaban sobre todo dos amplios espacios, el de Pampa-Patagonia y el chaqueño. El conocimiento de estas sociedades y de las relaciones que tejieron con el mundo colonial y poscolonial ha avanzado mucho en los últimos tiempos y las investigaciones muestran una realidad mucho más compleja de lo que se creía. Eran pueblos que convivían en alianza y conflicto unos con otros, así como

con los vecinos del mundo colonial y luego criollo. Fueron profundamente transformados por la presencia del mundo virreinal, así como por la adopción del caballo y otros ganados europeos, como el vacuno o el ovino del que extraían la lana para tejer ponchos que consumían o vendían en los mercados "huincas". Desde el punto de vista económico es observable, al menos en el espacio controlado por los indígenas que atraviesa la cordillera de los Andes y se extiende desde el Pacífico al Atlántico en Pampa-Patagonia, una cierta especialización económica que parece aumentar a medida que se avanza hacia el siglo XVIII y un intenso tráfico de bienes, tanto entre grupos indios como entre estos y el mundo colonial. Ese comercio entre grupos indígenas era de tal magnitud que incluía ferias estacionales, como una que transcurría en el territorio de la actual provincia de Neuquén (Las Manzanas) y otra en el sur de la actual provincia de Buenos Aires.

En los extremos de estos circuitos, algunos grupos indígenas se conectaban con los cristianos del litoral pampeano, con los cordobeses, mendocinos, etc., de quienes adquirían bienes que se habían convertido en habituales en las tolderías como el azúcar, la yerba mate, el aguardiente, diversas herramientas y armas, etc., así como conseguían ganado, a veces por transacciones comerciales diversas, otras mediante acciones violentas, de los "malones". Este ganado, más el que diversos grupos indígenas criaban en la zona de Tandilia-Ventania o en otras regiones, era llevado principalmente del lado chileno, a cambio del cual obtenían diversos bienes como los "ponchos pampa" de los araucanos, que se vendían luego en mercados como el de Buenos Aires.

Por su lado, los indígenas del Chaco parecen haber tenido un alto nivel de autarquía en cuanto a sus necesidades de subsistencia aprovechando el rico medio ecológico que habitaban. Sin embargo establecieron relaciones diversas en sus fronteras con los españoles, adquiriendo por el comercio o por la guerra diversos bienes que incorporaban a su consumo, a la vez que ofrecían en los mercados blancos sobre todo ganados vacunos y equinos.

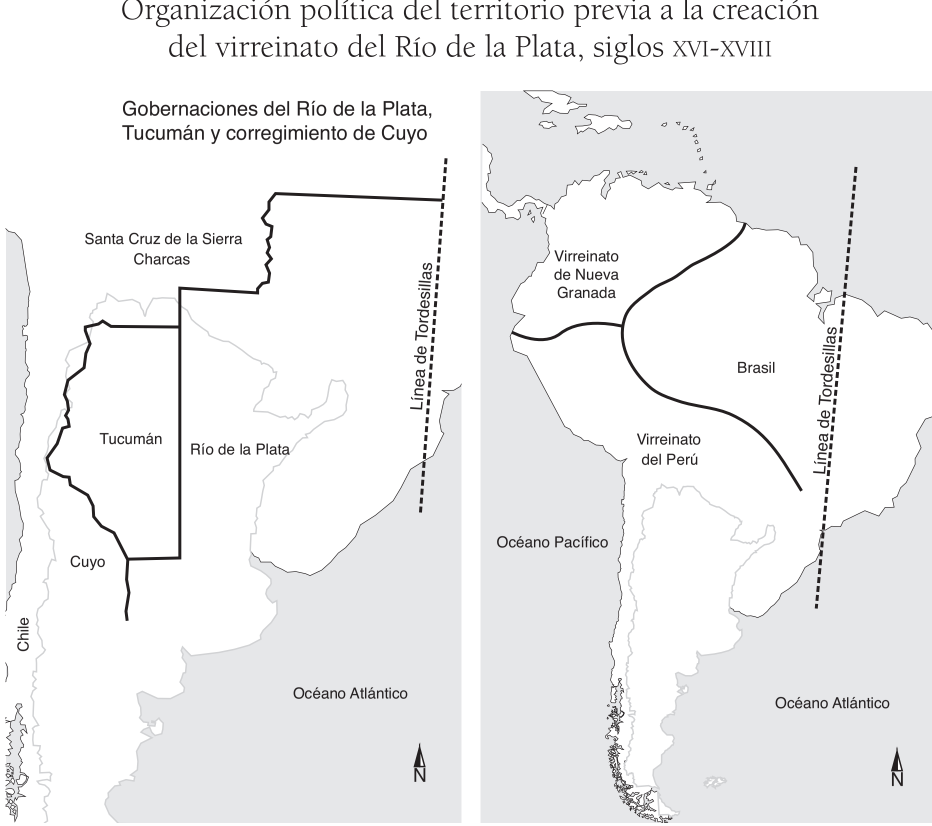
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y LAS CIUDADES

El espacio conquistado por los españoles en el actual territorio argentino estuvo incluido durante casi todo el periodo colonial en el virreinato del Perú. No solo estaban sujetos a un virrey con asiento en Lima, sino que la más alta jerarquía judicial en las colonias, la Real Audiencia, tampoco tuvo sede en territorio rioplatense hasta la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776. Las ciudades aquí fundadas y sus entornos rurales estaban organizados en gobernaciones, que inicialmente eran dos, la de Tucumán (que comprendía todas las ciudades desde Córdoba en el centro del territorio hasta Jujuy en el norte), y la del Río de la Plata y Paraguay (que incluía desde Asunción en el noreste hasta Buenos Aires en su extremo más austral). Esta última gobernación se dividió en 1618 en dos, la de Paraguay al norte y la de Buenos Aires que comprendía a las ciudades y regiones más australes desde la ciudad de Corrientes. Finalmente, las ciudades de Cuyo ubicadas en la zona central del territorio cerca de la cordillera de los Andes (Mendoza, San Juan y San Luis) mantuvieron su sujeción original a la Capitanía General de Chile hasta casi el final del periodo colonial.

De esta manera, los pobladores de las gobernaciones de Tucumán, de Paraguay y del Río de la Plata dependían como justicia de última instancia de la Audiencia de Charcas o La Plata (ubicada en el Alto Perú, actual Bolivia), mientras que los de Cuyo dependieron de la Real Audiencia de Santiago de Chile.

El centro de la vida social y política de la colonia transcurría en las ciudades. Pese a que en ellas, con la única excepción de Buenos Aires, residía una parte menor de la población de cada distrito, concentraban todos los símbolos y atributos del poder real y municipal. La ciudad era el lugar de residencia de los "vecinos" que era la categoría social esencial que separaba a quienes participaban de forma plena en la vida política colonial de los que no. La "vecindad" se fue ampliando con el tiempo, pero

Organización política del territorio previa a la creación del virreinato del Río de la Plata, siglos XVI-XVIII



siempre delimitaba un privilegio. En un inicio estaba limitada a los conquistadores-encomenderos y con el paso del tiempo y el peso creciente de pobladores urbanos que no pertenecían a este grupo de origen y que fueron ganando honores y recursos por otras vías (comerciantes, hacendados, mineros, etc.), la vecindad se fue ampliando para designar en general a los varones, jefes de familia con "casa poblada" que por sus actividades y recursos eran considerados independientes, es decir que no estaban subordinados por estatus o trabajo a terceros. De esta manera no solo las mujeres y los niños estaban excluidos por definición de la vecindad sino que una buena parte de la población masculina adulta en situación de dependencia también lo estaba. Y de igual forma estaban excluidos los pobladores rurales que eran considerados dependientes de la ciudad.

Estos dispositivos socioinstitucionales se habían importado de España, pero se adaptaron de diversos modos en el territorio americano donde entre otras cosas tenían un papel central las diferencias étnicas que a la vez eran indicadores de estatus social. La población indígena era considerada subordinada, en estado de "infantilidad", pero también lo estaba obviamente la población de origen africano traída como esclava. A su vez la mezcla de estas poblaciones entre sí y con los españoles, más o menos intensa según la región y el periodo, dio lugar a grupos étnicos diversos, catalogados por las autoridades coloniales en sectores con distintos grados de cercanía a los españoles.

En principio, todos estos grupos, las llamadas "castas", estaban excluidos del estatus de vecindad, reservado a los que pudieran demostrar "limpieza de sangre", pese a que en casi todos lados y en grados desiguales finalmente la realidad social permitiera una cierta movilidad y el ingreso a ese estatus de gente de origen étnico diverso. Sin embargo la categoría étnica seguía siendo una barrera infranqueable, por lo que el paso de esa "línea social" para alguien con ancestros indígenas o africanos implicaba necesariamente ser reconocido como "español" es decir pasar también la

"línea de color". De esta manera se comprende que en el mundo colonial las categorías étnicas, definidas inicialmente por el grupo de origen y ciertas características fenotípicas, se fueron convirtiendo cada vez más en categorías socioétnicas. Así por ejemplo se ha observado en el sur de la Banda Oriental del Uruguay del siglo XVIII, una región con importantes posibilidades de movilidad social en la época, que el matrimonio de una mujer indígena con un "español" podía terminar convirtiendo al conjunto del grupo familiar en "español" si se trataba de una familia que progresaba e ingresaba en los rangos de las élites locales. A veces estos cambios de catalogación étnica se trataban de respaldar con una declaración oficial de limpieza de sangre, pero más frecuentemente dependían de los consensos sociales tejidos en cada comunidad.

Sea como sea, el estatus de vecino era un privilegio al que se asociaban derechos y obligaciones exclusivas. Entre los primeros estaba el de ser representados por el cabildo de la ciudad (y eventualmente ejercer una función en él), entre los segundos (una obligación, pero también un privilegio) formar parte de las milicias urbanas, clave del sistema defensivo y represivo del orden colonial.

El cabildo fue la institución básica de toda ciudad española, la encargada de impartir justicia en primera instancia en la figura de sus alcaldes de 1º y 2º voto, pero también de organizar toda la vida municipal por medio de ellos y del conjunto de sus regidores y diversos funcionarios, ordenando y garantizando el abasto de la ciudad, controlando pesos y medidas, presidiendo junto a las autoridades religiosas las principales celebraciones vinculadas al culto así como al orden monárquico, etcétera.

En este último aspecto, las ceremonias organizadas por el cabildo se convertían a menudo en la expresión de disputas sociales y políticas que se manifestaban las más de las veces en pugnas por ocupar un determinado lugar en dichas celebraciones, en órdenes alterados en una ceremonia, los que generaban muchas veces situaciones de inusitada violencia. Ello puede

asombrar al lector del presente, pero estos acontecimientos tenían una intensidad que no puede más que expresar el papel central que dichos símbolos tenían en la definición del honor y prestigio diferenciado de cada uno, lo que a la vez era testimonio del poder detentado. El cabildo junto a las autoridades eclesiásticas tenía una participación destacada en las festividades religiosas, las más importantes en la monarquía católica. Las numerosas descripciones que tenemos sobre las festividades del Corpus en distintas partes del territorio argentino, así como en el resto de la América colonial, muestran las procesiones como una verdadera demostración pública de las jerarquías sociales diferenciadas. Otro tanto sucedía con las ceremonias por la asunción de un nuevo monarca, la recepción de un nuevo virrey, etcétera.

Los cabildos coloniales tenían también otra atribución muy importante, el derecho de establecer un vínculo sin intermediarios con las autoridades reales, con el monarca. Si bien en el entramado institucional de la monarquía católica se erigía un conjunto de instituciones que tenían en principio una jerarquía superior a la de la ciudad y del cabildo, como las gobernaciones, las audiencias reales y los virreyes, ellas no alteraban este privilegio básico de una ciudad expresado en su cabildo, de comunicarse directamente con el monarca para solicitar una merced real, para tratar de cambiar la orden de alguna audiencia que le afectaba, etc. Incluso el derecho castellano consagraba el principio de "se acata, pero no se cumple" que implicaba que la ciudad no podía dejar de obedecer una orden dada por el virrey o la Real Audiencia de su jurisdicción, sin embargo, mientras apelaba directamente a la Corona podía no acatarla, es decir dejarla temporalmente sin efecto hasta que el rey y su Consejo de Indias se pronunciaran.

Como se ve era un privilegio central y otorgaba a todo el sistema político colonial una gran flexibilidad e importantes niveles de autonomía a cada región, a cada ciudad con su cabildo, pese a estar integrados en ámbitos mayores, gobernaciones, capitanías y virreinatos.

Naturalmente, en las ciudades coloniales del territorio argentino había jerarquías sociales que tenían que ver con los derechos de conquista, con la vecindad, con la definición étnica de las personas, pero también con la actividad y los niveles de riqueza. Así en todas ellas residían las élites que estaban constituidas por vecinos "españoles", ya sea peninsulares o americanos, que se dedicaban a diversas actividades según la región. En la mayoría de las ciudades poseían haciendas y estancias en sus entornos agrarios, en algunos casos conservaron sus encomiendas hasta muy tardíamente, y muchas veces también se dedicaron al comercio, actividad que ocupaba el centro de sus intereses en ciudades como Buenos Aires, pero que también tenía un papel central para otras élites como las de San Miguel de Tucumán, Corrientes o Córdoba, por ejemplo. Pero en todas, casi por definición, controlaban el cabildo local. La consagración de un sector urbano como parte de las élites locales necesariamente implicaba su presencia en esta institución básica de la ciudad. Y muchas veces la lucha entre facciones de las élites se expresaba en enfrentamientos por el control de los cargos del cabildo.

En la primera mitad del siglo XVII se produjo una agria disputa entre dos sectores de élite en la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos conformado en su mayor parte por primeros conquistadores y sus descendientes, los llamados "beneméritos", se enfrentó con otro grupo integrado por personas llegadas más recientemente, varios de origen portugués, arribados a partir de la alianza entre ambas coronas de 1580 (que duraría con problemas hasta 1640). Este último grupo, conocido como los "confederados", controlaba casi por completo el comercio porteño en las primeras décadas del siglo XVII, sobre todo el contrabando de esclavos y otros bienes importados, y sus integrantes se habían enriquecido enormemente. Sin embargo sus adversarios más pobres conservaban los méritos de conquista, el prestigio y honor que ellos no alcanzaban, lo que hacía perdurar una especie de empate entre ambos grupos que no terminaba de definirse.

El vuelco de la situación a favor de los confederados se dio cuando al calor de una serie de cambios institucionales implementados por la Corona, que incluían la puesta en venta de los cargos de regidores del cabildo, don Juan de Vergara, líder de la facción confederada, compró para sí y sus aliados los seis cargos de regidor del cabildo de Buenos Aires.

Las élites de las ciudades coloniales eran así más o menos permeables a los cambios y eran frecuentemente renovadas por recién llegados. En el siglo XVIII ingresaban cada vez en mayor número algunos peninsulares que venían por su propia iniciativa o eran enviados por la Corona a cumplir diversas funciones en las colonias. Pero no siempre esos nuevos llegados eran bien recibidos o lograban ser incluidos en las élites locales. Estas podían desplegar mecanismos que limitaban el ingreso de estos *parvenus*, organizando matrimonios dentro del mismo grupo, cerrando la posibilidad de acceso a sus negocios y al cabildo local, etc. Pero en otros lugares se fueron creando mecanismos de cooptación de estos recién llegados, quienes eran aceptados en sus círculos sociales, en sus actividades económicas y aun en sus familias por la vía del matrimonio. De esta manera la distinción entre criollos y peninsulares o, mejor dicho, entre españoles americanos y españoles peninsulares no siempre era importante o sencilla de establecer, aunque en algunos sitios implicaba una separación más nítida y autorizaba el nacimiento de un incipiente sentimiento de identidad española americana opuesta a la peninsular. Esto se hará mucho más evidente en la segunda mitad del siglo XVIII cuando se incremente la presencia de peninsulares en el territorio americano y los monarcas borbones implementen una serie de reformas que privilegiaban el papel de los peninsulares por sobre los americanos. Ya volveremos luego sobre este tema.

Debajo de las élites había en las ciudades un complejo entramado social compuesto por diversos sectores, integrados por quienes desempeñaban en ellas las actividades artesanales, comerciales y de servicios, típicas de una ciudad. Desde panaderos

a herreros, curtidores, zapateros, pulperos (abarroteros) y tenderos de todo tipo, hasta los empleados estables o estacionales en las distintas actividades y los criados particulares de las casas, muchos de ellos esclavos de origen africano.

Si bien, como en España, las actividades artesanales tendían a estar regidas por los gremios de origen medieval, su desarrollo en América fue irregular, con una importante presencia de estas instituciones en algunas ciudades como las capitales virreinales tempranas, México y Lima, pero débil y tardía en otras como el Río de la Plata. El intento de constituir gremios que regularan el acceso a cada actividad artesanal, establecieran el tipo y cantidad de la producción, los precios, salarios, etc., fue muy tardío en el Río de la Plata y los que surgieron tendieron a languidecer o directamente a fracasar. El ejemplo más conocido es el intento fallido del virrey Juan José de Vértiz de establecerlos formalmente hacia 1780, esfuerzo continuado luego por otros virreyes, como Arredondo. Los únicos que lograron constituirse temporalmente como tales en la capital virreinal fueron los plateros y zapateros que presentaron pronto sus respectivos reglamentos. Sin embargo pronto se crearon conflictos que terminaron minando la continuidad de los mismos. Una de las razones para ello parece haber residido en el fuerte peso de las castas en las actividades artesanales urbanas y los problemas que suponía establecer jerarquías sólidas en cada actividad que sancionaran la línea de color, excluyendo de los gremios a esos sectores. Los artesanos de color supieron defender sus derechos a participar en esas actividades y pusieron en jaque los intentos gremiales limitativos.

De todos modos, esas actividades necesitaban el permiso de las autoridades y el pago de los respectivos derechos. Claro que algunas estaban más reguladas que otras. Así por ejemplo el abasto de carne de las ciudades era otorgado en calidad de monopolio por el cabildo a algunos oferentes, pero no sucedía lo mismo con el pan que podía ser vendido por distintos panade-

ros, aunque no cualquiera podía establecer una panadería. A la vez, cada actividad artesanal o comercial tenía sus jerarquías, tanto entre ellas como en el interior de cada una. En muchas ciudades rioplatenses era frecuente que en las jerarquías más bajas de las actividades artesanales, así como en las del comercio, se emplearan numerosos esclavos quienes constituían una parte importante —creciente a lo largo del periodo colonial— de la población urbana. Esa esclavitud tenía entonces una característica muy peculiar en las ciudades coloniales: además de constituir la mayoría de los criados domésticos, unos cuantos desarrollaban ciertas labores a cambio de un salario o actividades por cuenta propia, como la venta de comida o de otros bienes de consumo, etc. Los ingresos así obtenidos debían compartirlos con sus amos, pero es evidente que estos esclavos podían adquirir una relativa autonomía, e incluso acumular algún capital que en determinados casos les permitía intentar comprar su libertad. Un estudio hecho por Lyman Johnson sobre la manumisión de esclavos en el Buenos Aires colonial señala como hecho característico (aunque no original de Buenos Aires, sino presente en varias ciudades coloniales) que una cantidad no despreciable de esclavos alcanzaba cada año la libertad. La mayoría eran libertades compradas, sobre todo por esclavos urbanos más que rurales y preferentemente por sectores acriollados o nacidos en América, quienes además de conocer los mecanismos de la vida colonial que les permitieran llegar a ese estadio y tuvieran las redes sociales apropiadas, habían logrado acumular un capital por sí mismos o con la ayuda de familiares y paisanos.

Pero, como dijimos, salvo en el caso de Buenos Aires, la mayoría de la población residía en el campo, tanto en pequeños poblados rurales que concentraban los servicios para atender esas áreas, como sobre todo en el propio campo en calidad de campesinos, propietarios de pequeñas parcelas o arrendatarios u ocupantes de tierras del rey ("realengas") o de particulares, trabajando para un hacendado, estanciero o labrador.

EL MUNDO RURAL

Antes de abordar la situación en el sector rural es necesario que definamos someramente a los actores centrales de ese mundo. Empecemos diciendo que en los campos coloniales no había solo grandes hacendados o estancieros que monopolizaban la tierra y los recursos frente a una población rural en su mayor parte carente de toda propiedad. Los estudios de las últimas décadas han dejado en claro que esto estaba muy lejos de la realidad y que en todos lados había diversos tipos de productores, con una fuerte presencia, a veces mayoritaria, de los medianos y pequeños.

Es necesario aclarar también que estaremos empleando conceptos para designar actores sociales rurales de manera algo estilizada, ya que muchas veces una misma palabra para los contemporáneos podía tener distintos significados, a la vez que estos pueden estar muy alejados del que tienen hoy día. Un caso típico es el de estancia (y su derivado estanciero) que actualmente es sinónimo de gran explotación rural y en la época no tenía ninguna connotación de riqueza ni de prestigio social, apenas si indicaba una orientación preferente hacia la ganadería, en contraste con el labrador más bien dedicado a la agricultura. Podía haber un estanciero rico y otro muy pobre, de la misma manera que un labrador que trabajara la tierra con sus manos y otro que podía tener una docena o más de esclavos haciéndolo.

La hacienda en cambio tenía un significado más definido que indicaba no tanto una orientación productiva como el tamaño de la explotación y la importancia social de su propietario. Una hacienda colonial típica del territorio argentino era una gran explotación agraria cuyo objetivo era abastecer de algunos bienes a algunos mercados más o menos importantes, ya fuera de mulas, cereales, vinos y aguardiente, etc., pero a la vez se caracterizaba por tener una producción muy diversificada que incluía todo tipo de alimentos y productos artesanales. Esta plu-

riproducción se destinaba al consumo directo de sus habitantes y/o al pago de al menos una parte de los salarios de los peones que allí trabajaban; siendo la parte mercantil unos pocos productos que se podían vender bien en los centros mineros o en otros mercados menores. Esta combinación buscaba optimizar los ingresos por medio de esas ventas, reduciendo al mínimo los gastos mercantiles y los consumos que se trataba de cubrir con la producción propia. Así, el propietario trataba de prevenirse de las malas coyunturas de los pocos mercados a los que podía llegar con sus bienes, cubriendo internamente sus gastos, aun los salarios. En general, estas haciendas combinaban distintos tipos de mano de obra, desde peones asalariados hasta esclavos, pasando por arrendatarios que se instalaban en parte de las tierras a cambio de algún fondo de renta pagadero en bienes o en trabajo en la hacienda principal.

Este tipo de gran explotación agraria era característica de muchas partes del territorio interior argentino y estaba casi ausente en el litoral, donde era más frecuente la estancia que, más allá de su tamaño que, como dijimos, podía ser modesto o más grande, se caracterizaba por una mayor mercantilización y especialización, preferentemente en la cría de ganado vacuno y/o mular. La propia locación litoraleña favorecía esa especialización y mercantilización, dado que el estanciero podía ubicar su producción en diversos mercados con mayor facilidad, ya fuera porque el transporte fluvial y marítimo era mucho más barato que el terrestre, lo que le permitía combinar mercados internos con externos, ya porque el producto de su principal actividad era más fácil y barato de transportar a mercados interiores: el ganado podía llegar caminando hasta un mercado interior de destino… aunque por el camino tuviera que pagar derecho de pastura en distintos parajes.

A la vez, estas estancias litoraleñas, cuando eran grandes, tenían menos población estable en su interior y el tipo de mano de obra preferente estaba constituido por un puñado de esclavos o de peones libre de mucha confianza, que aseguraban la mano

de obra indispensable para todo el año, y un número mayor de trabajadores estacionales, mensuales, por jornada o por tarea, los "peones y jornaleros", que entraban y salían de las estancias según las necesidades cíclicas de la empresa y de los propios trabajadores. De esta manera se trataba también de explotaciones agrarias mucho más flexibles que las haciendas, en la medida en que podían regular mejor su trabajo en función de sus necesidades cambiantes.

Entre las explotaciones de mayor tamaño de todo el territorio argentino se encontraban, como en el resto de Hispanoamérica, las que pertenecían a órdenes religiosas, sobre todo a los jesuitas, quienes fueron de lejos los mayores propietarios de tierras y productores agrarios de la América colonial. En todas las regiones, desde Jujuy hasta Buenos Aires y la Banda Oriental, los jesuitas poseían haciendas, chacras y estancias, que en casi todos los casos los convertía en el primer productor agrario de cada lugar. En este espacio su mayor complejo de haciendas y estancias se ubicaba en Córdoba, en cuya ciudad residía también la cabecera de la orden de toda la región y el colegio que regenteaban. De esta manera los jesuitas fueron allí los mayores productores de mulas, como en otros lados de yerba mate, textiles, cereales o vacunos.

Además los jesuitas administraban las misiones de Paraguay que merecen una mención aparte. Estas eran bien distintas a las unidades que acabamos de describir y constituían complejos productivos, sociales y políticos muy peculiares en el contexto ibérico. Las del Alto Paraná y Paraguay, que ocuparon un amplio territorio que actualmente pertenece a la Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, estaban ubicadas en la frontera entre los dominios españoles del virreinato del Perú y grupos de indígenas no sometidos y los dominios del rey de Portugal en Brasil. Su misma ubicación explica en parte una serie de características especiales que tuvieron estas misiones. Ellas gozaban de importantes niveles de autonomía en relación con las autoridades locales, y los indígenas que habitaban en ellas tenían ciertos "privilegios" de los que carecían

los que vivían en el territorio interior, como portar armas en situaciones de guerra o pagar un monto mínimo de tributo a la Corona del que se hacía cargo la misión. Además la organización social dentro de las misiones contemplaba que cada familia tuviera derecho a una parcela de tierra para proveer las necesidades propias, a la vez que todas debían trabajar una determinada cantidad de tiempo en las tierras comunes en beneficio de la orden, así como para proveer a las necesidades de los enfermos, huérfanos y desamparados en general. De esta manera la orden jesuita, con el apoyo de varios monarcas hasta mediados del siglo XVIII, estableció un régimen bastante peculiar en el contexto colonial que fue por un lado una herramienta importante en la defensa de las fronteras del imperio español, a la vez que permitió unos niveles de vida sustancialmente mejores a sus habitantes en comparación con los de los indígenas sometidos al régimen ordinario de encomienda. La evolución demográfica de esta misiones es una clara expresión de este contraste: mientras la población encomendada no cesaba de caer en toda América durante el siglo XVII y parte del XVIII, en estas misiones la población aumentaba casi constantemente hasta alcanzar, a mediados del siglo XVIII, unas cifras superiores a los 100 000 habitantes, cuando un siglo antes no llegaban a 40 000. En estas misiones además se llevaba a cabo una intensa actividad cultural, que incluía talleres de pintura, de artesanías diversas o de música, impartidos por algunos maestros indígenas afamados en todo el territorio.

Volviendo a los distintos tipos de establecimiento existentes en el ámbito rural, aparte de esas grandes unidades productivas y sociales, en todos lados había explotaciones pequeñas o medianas, que se diferenciaban de aquellas en que reposaban mayormente en el trabajo del propio grupo doméstico. Ya sea como arrendatarios, como ocupantes más o menos informales de tierras ajenas (“agregados”, “pobladores”, etc.) o como propietarios de pequeñas parcelas compradas o recibidas en herencia, millares de campesinos trabajaban la tierra y realizaban artesanías para pro-

ducir distintos bienes destinados al consumo de su grupo familiar, pero también para vender una parte, mayor o menor según las circunstancias y las regiones, en los mercados. Este tipo de unidades se encontraba en todas las regiones rioplatenses y se combinaba de varias maneras con las más grandes antes descritas. Así por ejemplo en Salta encontramos una diversidad de modelos agrarios en espacios relativamente acotados, según lo estudió en detalle Sara Mata. En la región occidental de los valles calchaquíes predominaban algunas grandes y muy grandes haciendas, algunas de las cuales contaban con indios de encomienda en el siglo XVIII y alojaban a numerosos arrendatarios que les debían, además de distintos tipos de rentas, una deferencia que la enorme distancia social fomentaba. En cambio, en los valles centrales cercanos a la ciudad predominaban las pequeñas explotaciones campesinas con niveles importantes de autonomía, las que proveían a Salta de diversos bienes de consumo, y por último, en la frontera oriental en expansión en el XVIII había explotaciones ganaderas del tipo de la estancia, con mano de obra asalariada y algunos pocos esclavos, con ciertos niveles de movilidad social.

Estas situaciones se repetían en distintos grados en todas las zonas del territorio, en algunas de las cuales prevalecían las grandes haciendas o estancias y en otras donde la pequeña unidad campesina dominaba. A la vez hubo cambios en esta situación a lo largo del tiempo que aquí no podemos detallar. Pero se podría señalar a manera de ejemplo que durante buena parte del siglo XVII y la primera parte del XVIII hubo problemas en muchos mercados regionales, originados sobre todo por una baja pronunciada y larga de la producción minera de Potosí. En esta coyuntura en la que los precios de los bienes de consumo caían en los principales mercados, las grandes haciendas y estancias tenían dificultades por una reducción fuerte de sus ingresos que no podían compensar del todo con la de sus gastos. En esa misma época se ha observado que en diversos lugares las explotaciones campesinas, cuyo costo esencial era el uso de la mano de obra familiar,

podían enfrentar con más dinamismo la situación y ocupar un lugar importante en los mercados. Lo mismo sucedía con algunas comunidades indígenas del Alto Perú y seguramente del Tucumán colonial, pero también con las explotaciones en manos de los religiosos que tenían una lógica de producción y acumulación algo distinta de la de los hacendados particulares. Por su parte, los momentos de fuerte expansión mercantil, precios altos y presión demográfica podían ser más favorables para las grandes empresas que para las pequeñas, que incluso podían ver amenazado el dominio a veces precario sobre las tierras que trabajaban.

LA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN COLONIAL

Como veíamos, la población colonial del territorio argentino era mayormente rural, salvo algún caso excepcional, y luego de la catástrofe demográfica indígena que continuó a lo largo del siglo XVII y en algunos casos más allá, en general el siglo XVIII fue una época de crecimiento poblacional, aunque los datos que tenemos no son muy seguros. El primer recuento que abarca prácticamente todo el territorio y cuyas cifras son relativamente confiables es el llamado censo de Carlos III, realizado en 1778 en casi toda Hispanoamérica. Allí se pueden observar algunas características de la población rioplatense y también las diferencias regionales.

En el cuadro 1 podemos observar varios rasgos interesantes sobre la población bajo dominio colonial en el territorio argentino. El primero es que pese al crecimiento consistente de Buenos Aires y del litoral (regiones incluidas en la gobernación del Río de la Plata) durante el siglo XVIII, la gobernación de Tucumán sigue siendo el eje demográfico del territorio. No solo Córdoba tiene más población que Buenos Aires, la segunda jurisdicción en este terreno, sino que la mayoría de las regiones de la gobernación norteña tienen poblaciones más abultadas que las de Cuyo

Cuadro 1. Población urbana y rural, 1778
(*cifras absolutas y porcentajes*)

Regiones	*Total*	*Urbana*	*%*	*Rural*	*%*
Buenos Aires	37 130	24 205	65	12 925	35
Corrientes	16 000				
Santa Fe	10 000	4 500	45	5 500	55
Entre Ríos	11 600				
Mendoza	8 765	7 478	85	1 287	15
San Juan	7 690	6 141	80	1 549	20
San Luis	6 956	3 684	53	3 272	47
Córdoba	40 203	7 283	18	32 920	82
Santiago	15 456	1 776	12	13 680	88
Tucumán	20 104	4 087	20	16 017	80
La Rioja	9 723	2 172	22	7 551	78
Catamarca	15 315	6 441	42	8 874	58
Salta	11 565	4 305	37	7 260	63
Jujuy	13 619	1 707	13	11 912	87
Total	*224 126*	*73 779*	*37*	*122 747*	*63*

Nota: los datos de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos son para los años 1780-1784, en Jorge Comadrán, *Evolución demográfica argentina durante el periodo hispano* (1535-1810), y D. Barriera, comunicación personal.

o el litoral. En el caso de la población de Entre Ríos, que corresponde a unos años posteriores a 1778, se debe tener presente que no existía como jurisdicción separada y que hacia 1780 se hallaba bajo autoridad santafecina a cuya población debería ser adicionada. La indicamos separadamente a efectos de facilitar ver su evolución hacia adelante. Según estos datos, Cuyo sumaba 11% del total, Buenos Aires y el litoral 31% y el restante 58% se concentraba en las jurisdicciones de la gobernación de Tucumán.

El segundo rasgo que se observa es que la población rural duplica aproximadamente a la urbana, pero con fuertes diferencias regionales. En un extremo tenemos a dos ciudades cuyanas, Mendoza y San Juan, con una altísima concentración de población, y la tercera, San Luis, les sigue un poco atrás, pero también con mayoría de población urbana. Con seguridad, estos indicadores reflejan en parte los problemas que por entonces tenían las

dos primeras para controlar sus territorios más fronterizos ante grupos indígenas poderosos, así como el peso de actividades rurales centradas en la vid, cultivada y procesada preferentemente en las inmediaciones de las ciudades. En estos casos la definición de lo "urbano" separado de lo "rural" es aún más difícil que en el resto de las jurisdicciones, ya que el denominado "curato rectoral", que incluye la ciudad, también comprende estos sectores agrarios periurbanos (lo mismo sucede con Santa Fe cuyo sector urbano incluye las chacras). El caso de Buenos Aires, que les sigue en cuanto al peso del sector urbano, expresa el carácter eminentemente mercantil y portuario de sus actividades económicas que ocupan a la mayoría de su población, mientras que el sector rural, pese a su fuerte crecimiento en el siglo XVIII, todavía no tiene un desarrollo mayor en términos relativos.

En el otro extremo se encuentra la mayoría de las regiones del Tucumán colonial donde predominan guarismos cercanos a 80% de población rural, con sus extremos en Jujuy y Santiago del Estero.

Esta distribución rural/urbana tiene alguna relación con la composición étnica de la población de las regiones. Es necesario insistir que las categorías étnicas indicadas en los padrones son muy lábiles y deben ser tomadas con extrema precaución, como meras aproximaciones a fenómenos mal conocidos. Ellas indican además categorías socio-étnicas, es decir que no reflejan estrictamente el origen étnico de cada poblador o sus características fenotípicas, sino la percepción que de ello tienen los censistas y que está fuertemente influida por la posición social que esas personas ocupan. Así, es probable que un hacendado o un gran comerciante mestizo o pardo exitoso sea censado como "español", mientras que otro con orígenes y aspecto similar pero ocupado como peón será censado seguramente como mestizo, pardo, "natural", etc.

En este sentido se puede suponer que estas categorías además de tener en cuenta el origen de las personas reflejan de al-

Cuadro 2. Composición socioétnica, 1778
(*cifras absolutas y porcentajes*)

Regiones	*Españoles*	*%*	*Indios*	*%*	*Negros*	*%*	*Mestizos*	*%*
Buenos Aires	25451	68	2087	6	8918	24	674	2
Corrientes								
Santa Fe								
Entre Ríos								
Mendoza	4491	51	1359	16	2129	24	786	9
San Juan	1635	21	1527	20	1215	16	3313	43
San Luis	3708	53	1282	18	578	9	1388	20
Córdoba	18493	46	4084	10	17626	44		
Santiago	2247	14	4897	32	8312	54		
Tucumán	3166	16	4069	20	12869	64		
La Rioja	2617	27	5200	53	1906	20		
Catamarca	4590	30	2817	18	7908	52		
Salta	3190	27	3070	27	5305	46		
Jujuy	653	5	11181	82	1785	13		
Total	*70241*	*38*	*41573*	*22*	*68551*	*32*	*6161*	*8*

Fuente: Jorge Comadrán, *Evolución demográfica argentina durante el periodo hispano* (1535-1810).

guna manera la mayor o menor permeabilidad de las sociedades, su diversa capacidad de permitir la movilidad de su población entre unos sectores y otros, así como la mayor o menor distancia social (y por lo tanto también étnica) entre sus pobladores.

Como se puede observar en el cuadro 2, la población estuvo mayormente agrupada en 1778 en tres categorías, "españoles", "indios" y "negros", considerando a los "mestizos" solo en Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis). Este es un problema importante ya que sabemos que el sector mestizo tenía una fuerte presencia en casi todos lados y aquí probablemente esté en gran parte subsumido en el sector denominado de negros y mulatos o incluso en el de españoles.

En todo caso lo que estos datos parecen mostrar es un peso relativamente menor de la población reconocida como indígena, una más importante presencia de la de origen africano y de castas o mulatos y la primera minoría es la definida como española.

Pero hay en ello profundas diferencias regionales. La población indígena tiene un peso abrumador en Jujuy, es mayoría en La Rioja y tiene peso menor, pero significativo, en diversas partes del Tucumán colonial, especialmente en Santiago y luego en Salta.

La población africana y de castas, constituida en parte por esclavos africanos y afro-descendientes libres y esclavos, también parece haber incluido en varios casos, como decíamos, a un difusa población mestiza que incluso podía ocultar sectores indígenas mestizados. Tal parece haber sido el caso de Santiago del Estero con un porcentaje excesivamente alto de este sector que no aparece corroborado en otras fuentes, las que por el contrario testimonian el predominio de la población indígena y mestiza en la región. Sea como sea este grupo del censo de 1778 tiene un peso muy grande en algunas jurisdicciones. Sabemos que la población de origen africano había crecido significativamente durante el siglo XVIII, llegando a ocupar un porcentaje no despreciable de la población de lugares con economías mercantiles pujantes como Buenos Aires o Mendoza. Pero observamos aquí cifras absolutas o relativas mayores en lugares como Córdoba, Tucumán, Catamarca, Santiago o Salta, lo que en algunos casos podría indicar también la pujanza de sus economías y la riqueza de sus élites, pero en otros debe estar ocultando cantidades apreciables de mestizos. Por su lado, lugares como Jujuy o San Luis tienen menores cifras de población africana y de castas reflejando probablemente su mayor pobreza relativa así como la presencia de una abundante población indígena en el primer caso (como en La Rioja), empleada como mano de obra más barata por sus élites. Pero también indica que la población indígena de Jujuy o La Rioja se hallaba más claramente diferenciada del resto por una división social profunda, mientras que en las regiones donde predominaban las castas esa población indígena se hallaba integrada como parte de una población mestiza indiferenciada. En esto, insistimos, las diferencias étnicas son también socio-étnicas.

Por el otro lado tenemos las regiones en las que la población considerada española era mayoritaria. El caso sin duda más notable es el de Buenos Aires, en el que casi alcanza 70% de su población en esta categoría, pero también observamos porcentajes elevados en Mendoza, San Luis y Córdoba. Estas cifras reflejan solo en parte la composición de origen europeo de sus poblaciones, ya que también muestran una mayor homogeneidad social y, junto a ella, una mayor capacidad de movilidad ascendente de sectores subalternos, que son reconocidos aquí como españoles y en otros lados permanecen como mestizos y castas.

En todo caso hay ciertos rasgos bastante comunes en todo el espacio colonial: la población calificada como española se concentra mayoritariamente en las ciudades y en los pueblos, mientras que la indígena en el campo. Por su parte, la población de origen africano, tanto esclava como libre, si bien está presente en el sector rural de diversas maneras tiene un peso mayor en los sectores subalternos de las ciudades.

LAS REFORMAS BORBÓNICAS: CAMBIO Y CONTINUIDAD

En las primeras décadas del siglo XVIII los borbones llegados al trono español luego de la Guerra de Sucesión comienzan una serie de cambios en la forma de gobernar la Península y el conjunto del sistema imperial. Con una cronología algo distinta, ya que en España se inician antes que en América, las llamadas reformas borbónicas se sustentan en una serie de cambios ideológicos que a la vez apuntan a fortalecer el decaído poder de la monarquía, promover el crecimiento económico de sus territorios y aumentar los recursos fiscales.

Estos cambios se implementarán de manera progresiva en las colonias desde los años cuarenta del siglo XVIII pero cobrarán un gran impulso durante el reinado de Carlos III, entre 1763 y

1788, y la presencia en la Secretaría de Indias del activo ministro José de Gálvez.

Entre los fundamentos ideológicos de dichas reformas se encontraba un cambio radical en la concepción del papel del monarca. Durante el reinado de los austrias el papel central del rey consistía en mantener el orden natural de las cosas creado por Dios, es decir el lugar diferente de cada uno mediante el uso mesurado de la justicia. La nueva concepción prevaleciente en el siglo XVIII, vinculada a la Ilustración, le otorgaba al monarca la capacidad de transformar la realidad, promover la felicidad de sus súbditos, el poblamiento de sus territorios, el crecimiento económico y el conocimiento. Ello implicaba cambiar completamente la forma de gobernar el imperio. En el viejo esquema predominaba lo que se ha llamado la "monarquía compuesta", es decir un sistema de ejercer el gobierno que ubicaba en el centro al monarca y en su derredor a los reinos y cuerpos políticos diversos que componían la monarquía, con amplios grados de autonomía y capacidad de negociar el ejercicio del poder, para cada una de esas partes, de manera directa con el centro (eso justifica lo que señalamos antes sobre el derecho del cabildo de comunicarse sin intermediarios con el rey y el principio de "se acata, pero no se cumple"). Este sistema otorgaba gran autonomía a todas las partes de la monarquía y un peso central en cada una de ellas a las élites locales, que naturalmente ejercían el gobierno en nombre del rey.

En la nueva concepción, para poder promover el cambio y la felicidad de los súbditos, tal esquema ya no podía subsistir, era necesario crear un Estado centralizado, una verdadera monarquía absoluta con una cadena de mandos vertical, obediente, que garantizara que una orden real se aplicara sin titubeos en cada uno de los rincones del imperio. Los borbones y sus principales asesores e ideólogos entendían que ello era imprescindible para devolver a España el lugar que le correspondía en el concierto de naciones (que había perdido progresivamente a lo largo del siglo XVII), para fortalecer el sistema defensivo del con-

junto del espacio imperial que se encontraba cada vez más amenazado por sus poderosos enemigos europeos y para ello necesitaba incrementar radicalmente los ingresos fiscales con los cuales financiar armadas y ejércitos.

En los años treinta y cuarenta del siglo XVIII los círculos cercanos al rey caracterizaban al territorio imperial americano como uno donde reinaba la desidia, la corrupción, donde las élites locales ejercían el gobierno en su propio beneficio y en desmedro de la Corona. Y suponían que buena parte de la culpa de todo ello la tenía la débil estructura administrativa allí presente, así como el sistema de ventas de los cargos que cada vez más a lo largo del siglo XVII había permitido que se ofrecieran a remate casi todos los cargos, con la única excepción del de virrey. De esta manera, desde los puestos de regidores de cabildo hasta los oidores de las reales audiencias, los oficiales de la Real Hacienda, los corregidores, etc. estaban ocupados por miembros de las élites más poderosas del territorio americano que usaban esas funciones en su beneficio y el de sus familias.

Es así que entonces se decide llevar a cabo unas reformas muy importantes, que adquieren un primer impulso en los años cuarenta y cincuenta y mayor dinamismo desde inicios de la década siguiente. No podemos detallar aquí ese conjunto amplio de iniciativas, pero en lo que se refiere al territorio argentino lo primero que es necesario destacar es una medida política con efectos en el desempeño económico de toda la región tomada en los años cuarenta: luego de un largo ciclo de decadencia de la minería de plata de Potosí se decide otorgarle un conjunto de beneficios importantes para relanzarla. Es así como se rebajan una serie de impuestos que la afectaban (sobre todo se reduce el impuesto directo a la producción de plata del quinto al diezmo) y se le conceden mejoras en su rentabilidad por la vía de asegurarle la provisión de sus insumos básicos (mercurio y pólvora) de manera regular y a precios subsidiados, a la vez que se refuerza el trabajo mitayo, forzoso, que muchas comunidades indígenas

debían ofrecer a los mineros del Cerro Rico. Todo ello surte el efecto esperado y desde esos años comienza una curva ascendente de la producción de plata de Potosí y de la zona altoperuana en general, que además de generar recursos para las arcas del rey será un nuevo estímulo al crecimiento de las economías regionales decaídas, entre ellas las del interior del territorio argentino.

Pero desde un punto de vista más general, y para poder llevar a cabo todas las reformas económicas, fiscales, poblacionales, etc., la Corona parte de considerar que necesita reforzar y reformular las características de la administración estatal. Lo primero que hace es suprimir la venta de los cargos de la administración hacia 1750, ampliar fuertemente la estructura del Estado y alejar a las élites locales del ejercicio del poder. Ello implicaba que todos los nuevos cargos por crearse en esa estructura ampliada así como los viejos puestos que iban a ir dejando los funcionarios que los habían comprado, serían ser ocupados de manera casi exclusiva por nuevos funcionarios de carrera, peninsulares y formados en las universidades españolas con este nuevo espíritu borbónico.

Una de las medidas borbónicas más importantes para este territorio fue la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776, con capital en Buenos Aires, y la creación de grandes unidades administrativas en su interior bajo la forma de intendencias y gobernaciones militares en reemplazo de las viejas gobernaciones y corregimientos (ellas fueron las intendencias de Salta de Tucumán, Córdoba de Tucumán, Paraguay y Buenos Aires, más las gobernaciones de Montevideo y las Misiones, y en el Alto Perú las intendencias de Cochabamba, Potosí y La Paz y las gobernaciones de Moxos y Chiquitos).

El virreinato del Río de la Plata pasaba a comprender así un extenso territorio, antes sujeto al de Perú, que incluía desde la Banda Oriental del Uruguay y el Paraguay hasta el Alto Perú y comprendía también la región de Cuyo, desprendida de Santiago de Chile para integrarse administrativamente a la nueva inten-

El virreinato, las intendencias y las gobernaciones rioplatenses



dencia de Córdoba de Tucumán. Esto tuvo muchas consecuencias, entre ellas la sanción oficial de un lugar de preeminencia para Buenos Aires que pasaba a ser la sede del virrey que gobernaría todo ese territorio en nombre del Rey, la instalación allí de su corte y de un aparato administrativo ampliado que incluiría una Real Audiencia en la ciudad y un conjunto de funcionarios con diversas atribuciones. Desde el punto de vista económico, que desarrollaremos luego, implicaba alterar radicalmente el esquema del comercio colonial. Si antes los comerciantes de Buenos Aires debían ejercer esa actividad desconociendo la legislación real y bajo la forma del contrabando dado el papel monopólico de las élites limeñas, ahora la situación se revertía a favor de los porteños que administrarían ese sistema monopólico en un territorio que incluía hasta el Alto Perú, con su densa población tributaria y sus ricas minas de plata.

Este nuevo y ampliado esquema de poder se proponía, como dijimos, el desplazamiento de las élites locales de los principales ámbitos de ejercicio del poder. Por un lado, todos los nuevos funcionarios, el virrey, los intendentes, los miembros de la Real Audiencia, de la Aduana de Buenos Aires, los oficiales de la Real Hacienda en cada uno de los distritos, los administradores de los estancos reales (monopolios como el de tabacos y naipes), etc., debían ser peninsulares sin lazos con las poblaciones a su cargo. Los españoles americanos apenas si podían ejercer alguna función menor en este esquema administrativo, aunque continuaba reservado para ellos el cabildo que seguiría considerado como representación de los vecinos de la ciudad (no en exclusiva, por supuesto, en la medida que muchos españoles peninsulares formaban parte del vecindario de las ciudades y en tanto tales podían ejercer mayor o menor influencia en los cabildos junto a los americanos). Sin embargo en el nuevo esquema de gobierno el cabildo veía muy limitadas sus atribuciones previas y su jerarquía en una estructura estatal que se quería vertical, en la cual el cabildo ocupaba un escalón muy bajo.

Estas reformas también implicaban, desde el punto de vista de la Corona, el sometimiento o desplazamiento de todos aquéllos poderes que se podían resistir al funcionamiento de una administración obediente. En este sentido hubo también una fuerte ofensiva para reordenar las jerarquías religiosas, en detrimento de las órdenes que formaban parte de estructuras mundiales difíciles de controlar por la Corona y a favor del clero secular, bajo su tutela directa por efecto del Patronato Real. En este sentido la orden más afectada fue la de los jesuitas, que era la más poderosa y la que había ido adquiriendo a lo largo del siglo XVII mayores niveles de autonomía en relación con la administración real y disponía también de un poder territorial, humano y económico enorme en todo el territorio de la monarquía. En 1767 los jesuitas fueron expulsados de todo el imperio y ello tuvo efectos muy fuertes en el territorio rioplatense.

Los jesuitas habían tejido lazos muy fuertes con la población, en cuyos colegios se formaban los hijos de las élites, como confesores y líderes espirituales de muchos de ellos, pero también por las numerosas actividades sociales y económicas que realizaban. La expulsión por lo tanto no podía más que provocar enérgicas reacciones que incluyeron, al igual que en otros sitios del imperio, algunos levantamientos violentos como en la ciudad de Jujuy donde hubo una revuelta armada de los vecinos que debió ser reprimida por fuerzas enviadas por el virrey de Perú.

Pero además, la expulsión de la orden dejaba sin dueño o sin administrador a las mayores propiedades agrarias del territorio, a varios miles de esclavos que allí vivían y trabajaban y a las majestuosas, ricas y densamente pobladas misiones del Paraguay. La Corona creó las llamadas Juntas de Temporalidades que debían gestionar estas propiedades hasta que fueran pasando a otras manos y también otorgó a administradores reales el control de las misiones, lo que implicó cambios drásticos en las mismas. Las numerosas haciendas y estancias de los jesuitas poco a poco fueron pasando a manos de particulares y en varios casos fueron

la base del enriquecimiento territorial de algunas familias principales de muchas regiones, pero en el caso de las misiones significó un punto de quiebre hacia su crisis definitiva.

Las misiones del Paraguay ya venían de una situación muy complicada desde el Tratado de Madrid de 1750 que obligaba al desplazamiento de varias de ellas para entregar esas tierras a Portugal. En ese momento se produjeron fuertes conflictos y guerras que alteraron el normal funcionamiento de las misiones que dieron lugar a un cambio de tendencia en su dinámica demográfica y económica. Pero la expulsión jesuita de 1767 marca el fin de esa experiencia como hecho diferencial de la conquista española de América. Desde ese momento miles de guaraníes salen de las misiones y se dispersan por el territorio, y buena parte del patrimonio territorial y económico que habían acumulado a lo largo de un siglo y medio se empieza a disolver, como sucedió por ejemplo con el enorme hato ganadero de las misiones que fue faenado aceleradamente hasta su casi desaparición. Muchos indígenas misioneros van a integrarse como mano de obra dependiente en las explotaciones agrarias en expansión en la región más austral del litoral, en Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y la Banda Oriental.

En todo caso, desde el punto de vista político, las reformas buscaron alterar radicalmente la forma de gobernar los reinos, desplazando a las élites locales e imponiendo una estructura administrativa y militar ampliada e integrada por funcionarios de carrera peninsulares que obedecieran fielmente las órdenes emanadas del rey y transmitidas por una cadena de instituciones y funcionarios con jerarquías escalonadas en una estructura de tipo piramidal.

Aunque se puede discutir desde diversos ángulos el éxito de estas reformas, parece evidente que el intento no podía más que generar tensiones y malquistar la voluntad de unas élites acostumbradas a gobernar los territorios de su residencia, a eludir muchas órdenes reales que contradijeran los intereses locales, a

casi no pagar los impuestos, etc. Y los nuevos funcionarios recién llegados no podían ser vistos más que como intrusos, de la misma manera que otros numerosos peninsulares que por entonces estaban llegando al territorio americano para desempeñarse en el comercio o en distintas actividades, presionando sobre el control que las élites ejercían sobre ellas.

En distintos lados hubo reacciones airadas, como en el caso mencionado de la expulsión de los jesuitas, aunque en el Río de la Plata no llegaron a la amplitud y nivel de violencia que tuvo por ejemplo la rebelión de los comuneros en Nueva Granada que se definió como una reacción contra los cambios introducidos por los borbones y que de hecho logró frenar varios de ellos. Las grandes rebeliones en el sur andino de los años 1780, con importantes ramificaciones y repercusiones en el territorio rioplatense, tuvieron entre sus motivaciones algunos cambios introducidos por las reformas borbónicas. Así por ejemplo el alza de muchos impuestos, como la alcabala al comercio interior, la generalización de la condición de tributario a muchos indígenas que antes la eludían, etc., fueron elementos que, si bien no pueden ser señalados como la explicación principal de estos levantamientos, sin duda los espolearon y ayudan a entender la masividad y la participación de diversos sectores sociales y étnicos en ellos.

Pero además de las reacciones a veces violentas contra alguno o varios de los cambios que atentaban contra lo que fue denominado en distintas partes “la antigua constitución”, es decir las formas tradicionales de ejercer el gobierno de los reinos, también se dieron formas más sutiles de ir alterando los objetivos borbónicos. Así por ejemplo las élites intentaban incorporar a estos nuevos funcionarios en actividades y negocios llevados a cabo por ellos, buscaban también incluirlos en su mundo social, el único en el que podían encontrar solaz los recién llegados, y finalmente integrarlos en algunos casos a sus familias por la vía del matrimonio.

Un estudio de Susan Socolow sobre los funcionarios del Buenos Aires virreinal muestra estos fenómenos de manera ejemplar. Al analizar el cuerpo de funcionarios reales instalados en la capital desde 1776 observa que en su mayoría y sobre todo en sus peldaños más altos, los mismos cumplían con el ideal borbónico. Ellos eran funcionarios de carrera, peninsulares, y solo en los escalones muy bajos ingresaban algunos criollos, aunque tenían bastantes más posibilidades en las filas de los ejércitos, donde podían compartir cargos de responsabilidad con los peninsulares. La inmensa mayoría de estos funcionarios peninsulares vinieron solteros a Buenos Aires y terminaron contrayendo matrimonio con las hijas de algunas familias principales de la región, entre ellas cuatro virreyes, Antonio de Olaguer y Feliú, Joaquín del Pino, Rafael de Sobremonte y Santiago de Liniers, casados todos ellos con las hijas de poderosas familias locales. De esta manera, en Buenos Aires las élites encontraron las maneras de frenar la ofensiva borbónica, la que no parece haber creado grandes cambios en la influencia de las grandes familias locales sobre la administración ni enfrentamientos importantes entre los nacidos a uno u otro lado del Atlántico.

Sin embargo, lo que es válido para las élites porteñas no necesariamente lo es para otros sectores sociales ni para otras regiones del territorio. Así por ejemplo un estudio sobre los españoles "no de élite" llegados en esta misma época a la región muestra que estos ocuparon lugares destacados en actividades artesanales, en marinería y sobre todo en el comercio al menudeo, como dueños de tiendas y pulperías. Este último rol, en el cual eran preponderantes, parece haberlos ubicado en un lugar en el que, a la vez que les permitía una amplia sociabilidad y la posibilidad de un cierto ascenso económico, los ubicaba como una pieza sensible del engranaje social mediante el cual, ante situaciones de crisis familiares o más generales de la población, podían convertirse en los duros acreedores de los pobres urbanos o rurales, quienes parecen haber empezado a distinguir a

estos "godos" con un recelo y una antipatía que se haría más evidente en el momento de la revolución.

Igualmente, en algunas ciudades del interior del territorio, unas élites a veces más cerradas sobre sí mismas vieron con mucho recelo a estos recién llegados y se generaron tensiones y conflictos de diversa intensidad. Pero no siempre la situación era igual y también en diversos casos del interior las reformas borbónicas pudieron convivir con un cierto fortalecimiento de las élites locales. Tal parece haber sido el caso de Córdoba durante la intendencia del marqués de Sobremonte, quien más tarde se convertiría en virrey del Río de la Plata. Bajo su gobierno ilustrado, Córdoba parece haber vivido una época de prosperidad, en la que sus élites tuvieron pocos motivos de queja. Para empezar, la creación de la intendencia de Córdoba de Tucumán puso bajo control de esta ciudad un conjunto de regiones y ciudades, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis, que pasaron a ser subordinadas suyas. De esta manera la ciudad tuvo importantes mejoras impulsadas en buena medida por el intendente, y sus élites adquirieron un mayor relieve. El cabildo de Córdoba tuvo una época de esplendor cuando fue controlado por las principales familias locales, encabezadas por los Allende. Si bien este cabildo, como en otros distritos, había perdido a manos de los intendentes u otros funcionarios peninsulares algunas de sus funciones tradicionales, también logró reforzar su poder territorial por otros medios, por ejemplo mediante el aumento de la cantidad de jueces pedáneos encargados de administrar el territorio rural, que eran mayormente reclutados entre sus filas. Otro tanto parece haber sucedido en Tucumán o en otras regiones del territorio. De esta manera el balance de la ofensiva borbónica es ambiguo y encontramos situaciones muy diversas y reacciones igualmente distintas.

Las iniciativas borbónicas no solo incluyeron un recambio en la forma de organizar y ejercer el poder, sino que buscaron diversas vías para incrementar el control efectivo sobre el terri-

torio y expandir y asegurar las fronteras. En este sentido se tomaron varias iniciativas que afectaron el territorio rioplatense, que apenas podemos mencionar. Por un lado se reforzó todo el sistema militar con la reglamentación y el aumento del sistema de milicias, a la vez que se incrementó el peso de los ejércitos de línea, sobre todo en lugares sensibles por la amenaza de naciones enemigas. Ese fue el caso de la zona portuaria de Buenos Aires y Montevideo, liberada a su vez definitivamente de la presencia de los portugueses en Colonia en 1777 (ciudad fundada por estos en 1680, que fue centro activo de contrabando para toda la región y que había cambiado de manos ocho veces desde entonces hasta la toma definitiva por los españoles en el último cuarto del siglo XVIII). También en las fronteras con grupos indígenas no sometidos u hostiles se reforzó la creación de fuertes y fortines y se conformaron regimientos de blandengues destinados a cuidarlas militarmente.

Parte de esta misma política de consolidación territorial consistió en la formación de numerosos poblados españoles, en los que se trató de reunir a nuevos vecinos con derechos políticos (cabildos) y obligaciones de formar milicias para defenderlos de sus enemigos. Esto produjo un reguero de fundaciones, sobre todo en espacios que estaban en disputa tanto con naciones enemigas como con diversos grupos indígenas, en la Banda Oriental, en Corrientes o en el territorio entrerriano, donde fueron fundados varios poblados especialmente sobre la costa de río Uruguay. Pero si bien fue aquí donde se produjo el mayor esfuerzo poblador hubo situaciones similares en diversas fronteras, como en el sur de Córdoba (con la fundación de Río Cuarto), en la frontera mendocina (donde se fundaron varios fuertes) o en la de Salta (con la fundación de Orán). De esta misma época fue la fundación de la línea de fortines en la frontera del río Salado en Buenos Aires, que si bien no significó un avance sustancial en los territorios controlados por la ciudad, sí aseguró el espacio ocupado y habilitó la expansión de las explotaciones rurales porteñas.

Así como se buscó fortalecer el dominio sobre el territorio también se intentó aumentar el control sobre las personas. Así los distritos administrativos se subdividieron (en cuarteles, barrios, pedanías, partidos) y se amplió el número de funcionarios para controlar a los residentes. También se tomaron diversas iniciativas que buscaban frenar situaciones consideradas peligrosas para el orden social. En 1776 la Corona dictó una real pragmática que otorgaba mayor poder a los padres para controlar los matrimonios de sus hijos y evitar los "malos enlaces". En el territorio americano esto significaba impedir la unión de personas de diferente calidad social, que en este caso se asociaba fuertemente a la condición étnica. Un estudio sobre los "juicios de disenso" entablados en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires mostró que esa pragmática fue usada asiduamente por las familias destacadas, aunque la intensidad era distinta en lugares con élites más estables y cerradas que en otros con mayor movilidad, como la ciudad portuaria.

Por otra parte preocupaba a las autoridades la proliferación de personas que tanto en las ciudades como en las campañas no tenían una ocupación fija y eran vistas como potenciales criminales, vagabundos, ociosos y eventualmente ladrones. Así, en muchas regiones se fueron dictando medidas para incrementar el control sobre los sectores subalternos sospechosos de ser tales, como por ejemplo la implementación de la "papeleta de conchabo", que obligaba a toda persona que no contara con una actividad independiente que le asegurara su sustento a probar que se encontraba empleado en alguna actividad, lo que debía demostrar en todo momento que se lo requiriera con esta papeleta firmada por su empleador. El virrey Sobremonte dictó en 1804 una norma en este sentido para todo el territorio virreinal, con la siguiente fundamentación: "conviniendo al buen orden por todos términos desterrar la holgazanería en que viven muchos que debían estar ocupados en oficio o labranza o de peones de campo, ordeno que todos los que deben vivir asalariados por

falta de oficio o bienes propios, se conchaben en el término de un mes, y tomen papel de amo conocido que bajo su firma acredite estar a su servicio, cuidando de renovárselo cada dos meses, y en esta inteligencia las patrullas, partidas y rondas no necesitarán otra prueba para aprehenderlos por vagos que la de faltar este papel".

Esta etapa es rica también en cambios educativos y culturales. Por un lado, la propia prosperidad que la acompaña en la capital virreinal y en otros lados del territorio provee los recursos para que las familias más importantes envíen a algunos de sus hijos a formarse en la Universidad de Chuquisaca en el Alto Perú o incluso en España, como es el caso de Manuel Belgrano, futuro protagonista de la independencia rioplatense e hijo de uno de los más ricos comerciantes porteños de la segunda mitad del siglo XVIII. El clima de ideas de la Ilustración, con todas las limitaciones o particularidades que puede haber tenido en el contexto imperial, favorece la difusión de la educación. Como afirma José Carlos Chiaramonte, se crean cátedras en diversos lugares del mundo colonial, como en los Reales Estudios de Buenos Aires (que reemplazan el colegio jesuita) y en la Universidad de Córdoba, en la que se enseñan diversas materias técnicas, además de las más clásicas de teología o filosofía. Y las familias de la élite ven como una necesidad que al menos algunos de sus hijos sigan esos estudios, además de continuar con las actividades económicas de sus padres o incluir siempre algunos hijos en la carrera eclesiástica, ella misma bastante transformada en esta etapa. También cada vez más algunos hijos de las élites emprenden la carrera militar que tuvo amplio desarrollo en este periodo. El mismo Belgrano, al regresar de su estadía en España, es designado secretario del recién creado Consulado de Buenos Aires y desde allí, además de promover la difusión de las ideas de los fisiócratas y neomercantilistas (especialmente italianos, como Genovesi, Galiano y Filangieri), apoyó la creación de una escuela de dibujo y una academia de náutica en 1799.

Igualmente es una época en la que, a la par de la idea de la difusión del conocimiento y el progreso, se crean en distintos lugares del territorio peninsular y colonial sociedades laicas de difusión de las luces, las sociedades de amigos del país, que promueven la creación de periódicos y ámbitos de sociabilidad letrada. En este aspecto el territorio rioplatense no se encuentra a la vanguardia del mundo colonial, y su primer periódico es el *Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico*, aparecido en abril de 1801. Sin embargo, aunque tardíamente, este periódico fue un importante canal de difusión de las nuevas ideas. Allí se pueden leer artículos destinados al mejoramiento de las prácticas agrícolas, del comercio y las industrias, así como algunos estudios históricos, geográficos y obras literarias.

LAS REFORMAS Y LOS CAMBIOS EN LAS ECONOMÍAS REGIONALES

Como ya señalamos, las reformas borbónicas incluyeron algunos cambios en las políticas económicas que afectaron profundamente el Río de la Plata, a la vez que coincidieron a finales del siglo XVIII con algunas transformaciones en la economía europea que también tuvieron implicaciones locales. Estas últimas tienen que ver con el desarrollo de la revolución industrial que despunta en Inglaterra y comienza a cambiar algunas cosas en el escenario económico internacional. Por primera vez en la historia económica mundial una región conoce un desarrollo que le permite abastecer de bienes manufacturados —en un inicio sobre todo textiles— a su importante mercado interno y pronto necesita y está en condiciones de conquistar mercados en el resto del mundo. Ello implica también la necesidad de conseguir cada vez más materias primas para sustentar esa industria y alimentos para su población crecientemente urbana. De esta manera empieza poco a poco a promoverse una división internacional del trabajo que durante el siglo XIX va a ter-

minar por producir procesos de especialización en distintas partes del mundo: por un lado, los pocos países del atlántico norte industrializados y por el otro, los proveedores de alimentos y materias primas.

A finales del siglo XVIII es todavía un proceso incipiente y localizado sobre todo en algunas partes de Inglaterra, pero ya empieza a generar efectos en diversos lugares del mundo. El Río de la Plata los sentirá parcialmente por una demanda creciente de cueros que sus planicies pampeanas y litoraleñas están en condiciones de proveer, pero también indirectamente por la mayor demanda de algunos bienes como el tasajo o charqui por las economías esclavistas del Caribe que no cesan de crecer, estimuladas por la demanda de azúcar de las economías del norte en expansión.

Pero tanto o más importante que esto para las regiones rioplatenses son algunas políticas borbónicas que alteran muchos aspectos de las economías regionales en la segunda mitad del siglo XVIII. La primera de ellas la mencionamos anteriormente: las medidas tomadas para relanzar la producción de plata de Potosí y de la minería altoperuana en general (la más importante de todas, como demostró Enrique Tandeter, fue el reforzamiento de la mita minera, el trabajo forzado que debían ofrecer las comunidades indígenas de la región). Luego de un largo ciclo de decadencia, la producción de plata potosina retoma su ritmo ascendente en los años cuarenta del siglo XVIII, y si bien no habría de alcanzar los altísimos niveles de principios del XVII se convierte de nuevo en un pujante motor de las economías regionales del sur andino, entre ellas todo el noroeste del territorio argentino. Pero sus efectos positivos se manifiestan también en Paraguay, en Cuyo y en la gobernación de Buenos Aires, donde crece la producción de mulas, de yerba mate y de diversos bienes que podían venderse con beneficio en los mercados andinos. Todo esto acompañado además por un ciclo climático que parece haber sido favorable en casi toda la segunda mitad del siglo XVIII, con

el cual la producción agraria de las distintas regiones rioplatenses conoció un ciclo de crecimiento tal como se pone de manifiesto en las series del diezmo, el impuesto cobrado sobre la producción agraria para el sostenimiento de la actividad religiosa. Aunque la interpretación de este indicador fiscal es compleja y ha provocado muchas polémicas entre los historiadores, parece cierto que se trata de una etapa de crecimiento económico y agrario en casi todas las regiones del Río de la Plata.

Por el otro lado, la creación del virreinato en 1776 tendrá diversos efectos económicos de trascendencia. Sobre todo porque viene acompañado en 1778 por el Reglamento de Libre Comercio que autoriza al puerto de Buenos Aires, junto a otros varios en Hispanoamérica y en España, a practicar el comercio directo y legal dentro del imperio, a la vez que el Auto de Libre Internación habilita a los comerciantes porteños a internar los efectos de Castilla y esclavos introducidos legalmente por Buenos Aires a todo el territorio del nuevo virreinato. No solo los autoriza sino que les otorga el monopolio de ello, consolidando así su control de unos circuitos comerciales que venían disputando, vía el contrabando, con los limeños desde inicios del siglo XVII y que entonces consiguen convertir en dominio legal. De todos modos, así como antes los comerciantes porteños conseguían abastecer ilegalmente una parte del mercado altoperuano, el nuevo monopolio recién adquirido no separará del todo a las élites limeñas o de distintas regiones de Perú de los mercados del Alto Perú. Algunos estudios sobre el mercado de Potosí a finales del siglo XVIII muestran claramente que los comerciantes rioplatenses tenían allí un virtual monopolio del abasto de efectos de Castilla, aunque los efectos de la tierra seguían llegando desde diversos lugares del territorio, incluyendo el ahora separado sur peruano.

El Reglamento de Libre Comercio de 1778, que en realidad empieza a tener efectos en la región a partir de 1783 cuando termina la guerra en la que España se implicó en apoyo de Norteamérica contra Gran Bretaña, tuvo también importantes impli-

caciones para la economía del litoral rioplatense. Junto con las políticas borbónicas de colonización de la Banda Oriental y de Entre Ríos estimuló una etapa de expansión ganadera que produjo un aumento sostenido de las exportaciones de cueros y más tímidamente de carne salada, producida esta última en algunos establecimientos de la Banda Oriental. En este incremento por momentos muy fuerte de las exportaciones de cueros influyó también lo que puede ser considerado como la liquidación del hato de ganado "alzado" o no sometido a rodeo, que se encontraba bajo jurisdicción jesuita en las misiones y que entonces quedó bajo control de administradores reales. En efecto, las misiones, especialmente la de Yapeyú, controlaban un enorme hato vacuno en parte doméstico y sobre todo alzado, que durante la dominación jesuita era explotado de manera regular con el objetivo sobre todo de proveer de carne a los habitantes de las misiones y secundariamente comerciar algunos de sus derivados como el cuero. Con la expulsión jesuita, coincidente con la creciente demanda de las economías del norte europeo, se abrió la región a una caza masiva de ese ganado para exportar por el Atlántico. Se ha calculado que entre 1776 y 1786 cerca de 15% del total de cueros exportados por Buenos Aires y Montevideo tenía esa procedencia, lo que demuestra la importancia que adquirió el faenamiento del ganado misionero. Pero ese ritmo de extracción afectó la existencia misma del ganado alzado de la región, cuya importancia fue desde entonces decreciente, debiendo sostenerse las exportaciones principalmente de la cría en estancia, sobre todo en la Banda Oriental y en Entre Ríos (aunque es verdad que algunas muy grandes estancias orientales parecían más terrenos de caza que verdaderas estancias de cría como señaló el historiador uruguayo Pivel Devoto), siendo la campaña de Buenos Aires todavía un lugar secundario en la provisión de estos bienes para el mercado atlántico.

Otro elemento que es necesario tomar en cuenta para las economías regionales rioplatenses del periodo es la importancia

creciente del mercado de la ciudad de Buenos Aires. Si en 1778 era la ciudad más poblada de la región, con casi 25 000 habitantes, a finales del siglo tenía casi 40 000 pobladores estables. Además de sus propios habitantes era lugar de residencia temporal de numerosos transeúntes, marineros, comerciantes y carreteros del interior del territorio y gozaba de los salarios y niveles de vida más elevados de la región. Todo ello convirtió a la ciudad de Buenos Aires a medida que avanzaba el siglo XVIII en un mercado poderoso que, además de estimular la producción agraria en su propio entorno cercano para garantizar su alimentación, era una alternativa importante para diversas economías regionales que encontraban allí una salida complementaria o a veces alternativa de la altoperuana.

Este era claramente el caso de las economías cuyanas cuya producción de vinos y aguardientes se destinaba en proporciones muy elevadas al mercado de Buenos Aires, lo cual no dejó de generarle problemas cuando la apertura del mercado porteño a los navíos peninsulares inundó por momentos la plaza con los vinos mediterráneos de mejor calidad y buenos precios.

Otro tanto sucedía con la economía cordobesa. Si bien el eje de su actividad en esta etapa lo constituía la producción de mulas que enviaba al revitalizado mercado altoperuano, una parte de sus ingresos dependía de los tejidos de lana producidos en el seno de las familias campesinas que remitían en cantidades crecientes a Buenos Aires.

Algo parecido acontecía con las economías de algunos grupos indígenas autónomos de la región pampeano-patagónica. En ese espacio habitaba una variedad de grupos, algunos dedicados a la cría de animales, a su caza y eventualmente a su saqueo en distintos puntos de la frontera española. Mucho de ese ganado era llevado a intercambiar con los mapuches trascordilleranos por diversos bienes que estos producían, ente los cuales destacaban los ponchos pampas, de gran aceptación en el mercado de Buenos Aires, especialmente por su tejido apretado que

le otorgaba una gran resistencia al agua, y hacia allí llegaban por diversas vías comerciales que algunos grupos indígenas pampeanos tenían establecidas con la ciudad portuaria.

En todo caso, ya sea por la recuperación de la minería altoperuana como por los cambios en el comercio atlántico y las medidas que acompañaron la creación del virreinato del Río de la Plata, casi todas las regiones del territorio conocen una etapa de crecimiento económico al menos hasta finales del siglo XVIII. Algunos sectores parecen haber sufrido por la apertura del comercio atlántico por Buenos Aires, sobre todo por la competencia que podía significar en el mercado portuario, como la producción vitícola cuyana, pero la mayoría de las actividades económicas y de las regiones parecen haber vivido una etapa de cierta prosperidad y crecimiento ya fuera vinculada a los revitalizados mercados andinos, ya al mercado porteño o al comercio atlántico de nuevo tipo que la incipiente revolución industrial animaba. Es verdad que esto último todavía era limitado y la causa de ello era en parte la propia inmadurez del proceso en el norte del Atlántico, pero también el control monopólico ejercido por España que obligaba a colocar a las casas comerciales peninsulares como intermediarias de un comercio que tenía sus destinos en otros lados.

La evolución demográfica de las distintas regiones de la futura argentina parecen testigos de esta relativa bonanza económica (véase el cuadro 3). Aunque los datos no son seguros (los del litoral en la primera fecha son particularmente dudosos ya que no son los del censo de Carlos III, sino que provienen de los ofrecidos por Félix de Azara algunos años después), parece indudable que la población creció en todas partes, aunque a ritmos distintos. Y si bien Buenos Aires tuvo el crecimiento demográfico más dinámico en este periodo convirtiéndose en el distrito más poblado, otras zonas del territorio crecieron a buen ritmo, como Cuyo o el centro y norte. En todos los distritos para los que se ha podido estudiar la recaudación del diezmo agrario en esta etapa se observa un crecimiento, con alguna excepción

Cuadro 3. Evolución demográfica, *ca.* 1778-1800

	1778	*1800*
Buenos Aires	37 130	72 168
Corrientes	16 000	18 728
Santa Fe	10 000	12 600
Entre Ríos	11 600	11 700
Mendoza	8 765	11 755
San Juan	7 690	11 163
San Luis	6 956	13 442
Córdoba	40 203	51 800
Santiago	15 456	22 942
Tucumán	20 104	23 654
La Rioja	9 723	13 293
Catamarca	15 315	21 913
Salta	11 565	13 528
Jujuy	13 619	18 189
Total	*224 126*	*316 875*

Fuente: Jorge Comadrán, *Evolución demográfica argentina durante el periodo hispano* (1535-1810).

temporal como la de Corrientes que desde los años noventa pareció tener dificultades.

Esta situación empezará a cambiar hacia finales del siglo XVIII y los inicios de la siguiente centuria. A partir de 1796 se suceden una serie de acontecimientos internacionales y locales que van a alterar un rumbo que parecía favorecer la expansión del imperio y de sus distintos rincones y va a trastocar muchas de sus variables, convirtiéndolas a veces en una amenaza.

LA CRISIS DEL ORDEN COLONIAL

La revolución francesa de 1789 y su secuela napoleónica llevan a Francia a un enfrentamiento de largo aliento con Gran Bretaña que pondrá en peligro la estabilidad de la monarquía borbónica en la Península ibérica y con ello también el control de su vasto imperio transatlántico. Durante gran parte del siglo XVIII

España había participado en el juego europeo al lado de Francia, lo que había tenido su última expresión en la intervención en la guerra norteamericana contra su metrópoli británica entre 1778 y 1782. Sin embargo tras la Revolución francesa España coincidió con Gran Bretaña en su oposición a esa experiencia revolucionaria. Pero tras la llegada de las tropas napoleónicas a la Península en 1794 los borbones se aliaron de nuevo con Francia y desde 1796 participaron activamente en el enfrentamiento de los aliados de Napoleón contra Inglaterra. Ello le creó enormes dificultades en su relación con las colonias por el control de los mares de que gozaba el nuevo enemigo. En respuesta a la expansión cada vez mayor de Napoleón y sus aliados por el territorio continental, Gran Bretaña bloqueó con sus navíos los puertos europeos y trabó casi cualquier posibilidad de comunicación de España con sus colonias. Ello se reforzó drásticamente en 1805 tras la batalla de Trafalgar, cuando una parte importante de la flota española fue destruida por la armada inglesa.

Es así que desde 1796 se frenó el crecimiento del comercio de las colonias españolas con su metrópoli y en el Río de la Plata las cifras del comercio exterior cayeron dramáticamente. La imposibilidad de importar bienes manufacturados europeos y de exportar plata y cueros por los circuitos habituales forzaron a la Corona a permitir una cierta apertura en el comercio monopólico reformulado en 1778 por medio de permisos de comercio con "neutrales", es decir con naciones que no fueran enemigas directas de España en el conflicto europeo. Pero sobre todo esta situación estimuló nuevamente las formas de comercio que habían sido las habituales de Buenos Aires durante el periodo previo a la creación del virreinato: el contrabando o el comercio directo con otras naciones. Resulta casi imposible conocer los niveles del comercio rioplatense en el periodo que sigue a 1796 porque una parte sustancial del mismo se realizaba al margen del control oficial. Pero los signos de dificultades en distintas partes del territorio rioplatense parecían multiplicarse, así como

la búsqueda por algunos sectores de sus élites para encontrar alternativas a los circuitos económicos en crisis por la situación europea y las alianzas cambiantes de la metrópoli. Algunos estudios sobre los comerciantes de la capital virreinal muestran un sector de la élite desorientado por la crisis del sistema monopólico que le había permitido enriquecerse enormemente en los últimos 20 años y añorando la vuelta de esa etapa para ellos dorada, mientras otros se lanzan a actividades nuevas, buscan rutas alternativas para reactivar el tráfico de esclavos, la exportación de carne salada a las regiones azucareras de América, la importación de manufacturas europeas creando vínculos comerciales con naciones que les permiten acceder a los productos británicos, coyunturalmente enemigos. Así parece irse definiendo un grupo mercantil muy activo en esta etapa, diferenciado del sector monopolista, y al que las limitaciones legales y prácticas que le imponía la situación de la metrópoli le resultan una pesada carga.

A este panorama complicado y de resultados inciertos se suma en los inicios del siglo XIX una situación de crisis agraria y, a veces, epidémica y demográfica en buena parte del territorio rioplatense. Entre 1800 y 1804-1805 en muchas regiones entre el Alto Perú y Buenos Aires se presentan sequías de gran magnitud y prolongadas en el tiempo, plagas y enfermedades que aquejan a mucha gente, arruinan cosechas, ponen en peligro partes del hato ganadero, detienen el ritmo de diversas actividades económicas y provocan subidas en los precios de los consumos básicos que afectan severamente a la población.

En el extremo del Alto Perú se combina una sequía prolongada con una crisis minera y de subsistencia que afecta también a su población con una crisis de mortalidad pronunciada. En Tucumán entre 1800 y 1801 una serie de sequías favorecen la difusión de enfermedades que se manifiestan en altas tasas de mortalidad y pobreza. En Buenos Aires la sequía provoca alzas del precio del trigo y del pan nunca vistos en 1803 y 1804, crean-

do problemas sociales en numerosos sectores y tensiones que se manifiestan en acusaciones de acaparamiento e intervenciones reiteradas del cabildo para tratar de frenar infructuosamente el alza del precio que llega a multiplicar varias veces el corriente en los años previos.

Todas estas dificultades van a tener un punto culminante en 1806 y 1807 cuando se producen dos invasiones inglesas sucesivas en el Río de la Plata. En el marco de la guerra que libraba Gran Bretaña contra Napoleón, quien había logrado consolidar su dominio en gran parte de la Europa continental y establecido el "bloqueo continental" limitando seriamente el comercio de Inglaterra, esta nación buscó aprovechar su dominio de los mares para debilitar el espacio imperial extraeuropeo de las naciones aliadas de Napoleón, a la vez que conseguir mercados donde colocar los excedentes industriales que Europa ya no le compraba.

Es así que en junio de 1806 una flota inglesa con 1 500 hombres al mando de William Carr Beresford llegó a las costas rioplatenses y en poco tiempo logró tomar la capital virreinal. Mientras el virrey Sobremonte salía de la ciudad con su guardia y con el tesoro allí reunido para evitar que cayera en manos enemigas, las autoridades de las principales corporaciones que quedaban en Buenos Aires se apresuraron a reconocer a las nuevas autoridades, en tanto respetaran la religión católica y los mantuvieran en sus cargos. Sin embargo rápidamente la situación comenzó a cambiar y se fueron presentando conflictos y resistencias en diversos sectores del campo y de la ciudad, como el caso de Santiago de Liniers, un oficial francés al servicio de la Corona española, quien comenzó a organizar en la Banda Oriental un ejército para enfrentar a los ingleses, y en su marcha hacia la ciudad capital consiguió sumar muchos reclutas y finalmente provocó la rendición inglesa el 12 de agosto.

Este enfrentamiento, que fue sucedido al año siguiente por otra invasión también repelida, en este caso sobre todo por la resistencia urbana organizada por el cabildo de Buenos Aires y

liderada por su alcalde de primer voto don Martín de Álzaga, tuvo profundas consecuencias en el territorio virreinal, en primer lugar en Buenos Aires y la Banda Oriental donde transcurrieron los principales acontecimientos bélicos.

Tras la victoria sobre los ingleses en la primera invasión, un cabildo abierto en Buenos Aires, que parece haber convocado en la plaza a una multitud de varios miles de habitantes, exigió al virrey que delegase el mando militar en la persona que aparecía como el héroe de la jornada, don Santiago de Liniers.

Se produjo inmediatamente un enfrentamiento, ya que el virrey no aceptaba la situación y se dirigió a Montevideo para tratar de recomponer su autoridad con sectores que le permanecían fieles, mientras en Buenos Aires, Liniers, autoridad militar de hecho, convocaba a la formación de milicias masivas ante la expectativa de una nueva ofensiva británica en la región.

Ambos hechos tienen una importancia capital para entender la dinámica posterior en la región. En primer lugar una asamblea del "pueblo" de Buenos Aires había producido un cambio en las autoridades que debían gobernar en nombre del rey, alterando radicalmente la forma en que se ordenaba el poder y se designaba a los funcionarios reales. Si bien el cabildo solicitaba de la Corona la confirmación de este hecho (y lo lograría con creces al año siguiente al obtener la revocación de Sobremonte como virrey y la designación en su lugar de Liniers), era evidente que se trataba de una alteración sustancial del sitio donde radicaba la soberanía y generaba en este sentido una práctica que habría de resurgir unos años después. La llegada en 1809 de un nuevo virrey designado en España, Baltasar Hidalgo de Cisneros, no dejó de producir conflictos y resistencias en la ciudad, aunque finalmente fue aceptada.

El segundo hecho fundamental fue la constitución de unas milicias de carácter masivo, especialmente en la ciudad, las que desde allí pasarían a desempeñar un papel fundamental en todo el juego político local junto con el cabildo que había tenido tam-

bién un papel importante en la defensa de Buenos Aires, desplazando a las corporaciones que habían actuado de manera ambigua en esa situación de crisis, como la Real Audiencia, el Consulado de Comercio o las jerarquías religiosas. Entre septiembre y octubre de 1806 se constituyeron numerosas milicias organizadas según los órdenes jerárquicos y geográficos de ese mundo colonial. Entre ellas, la más numerosa y activa fue la de los patricios conformada por nativos de Buenos Aires comandados por Cornelio Saavedra. Junto a ellos estaban los "arribeños" (los de las provincias de "arriba", es decir del interior virreinal), las diversas milicias de indios, pardos y morenos, así como las de las diversas regiones de la Península, catalanes, aragoneses, andaluces, gallegos, vascos y montañeses, así como diversos escuadrones de caballería y artillería. El historiador Tulio Halperín ha destacado la trascendencia de este hecho. Por un lado se trataba de una movilización militar de una magnitud nunca vista ya que cerca de 30% de los varones adultos de la ciudad fueron reclutados por ella. De repente la milicia se convirtió en la principal actividad de sus habitantes y en ella se constituyeron nuevos liderazgos, los que pasarían a ocupar un lugar central en la vida política local que no habrían de abandonar por bastante tiempo. Esto alteraba fuertemente el equilibrio tradicional de las élites locales. Las milicias se convirtieron también en un modo de vida para muchísima gente ya que sus integrantes cobraban un salario que excedía en sus escalones más bajos al de las ocupaciones similares en la ciudad o el campo.

Todo ello a su vez se debía financiar de maneras originales ya que el flujo del "situado" de Potosí, que era el dinero que cada año venía del Alto Perú y constituía el rubro central del fisco virreinal en Buenos Aires, se había interrumpido. Por lo tanto se trató de cobrar nuevos impuestos a la actividad económica local (y en 1809 la libertad virtual de comercio otorgada por el virrey Cisneros tuvo en ello su principal argumento), y por momentos esta necesidad se satisfizo con impuestos y contribuciones excepcionales que debían pagar las élites más ricas

de la región. Y con ese dinero se financiaron unas milicias cuyos integrantes eran mayoritariamente parte de los sectores subalternos… se alteraba así el sentido tradicional del flujo de dinero de buena parte del sistema impositivo colonial.

La situación no era igual en los diversos rincones del virreinato. Cada una de las regiones seguía su trayectoria influida por motivos diversos. Así por ejemplo el cabildo de Córdoba proclamó su subordinación al virrey Sobremonte (quien había sido su intendente unos años antes y había tejido fuertes relaciones con las élites locales), cuando este fue depuesto de hecho por el de Buenos Aires a principios de 1807. O el de Montevideo que, una vez vencidos por segunda vez los ingleses, solicitó a la Corona la constitución de una nueva intendencia que la tuviera como cabecera poniendo de manifiesto su rivalidad tradicional con Buenos Aires. También, un fenómeno más general empezaba a emerger a la superficie: mucha ciudades con sus cabildos, que habían sido relegadas a un lugar de subordinación a otras transformadas en cabeceras de las intendencias en 1782, comenzaron a reclamar la recuperación de su autonomía, de su jerarquía, como sucedería también con Jujuy en relación con Salta o en otros lugares.

Mientras tanto, la situación en España se hacía insostenible para la Corona. En 1807 Napoleón solicita autorización para pasar con sus tropas rumbo a Portugal provocando la emigración de la corte portuguesa a Brasil, transformado de repente en cabeza y cuerpo del imperio portugués. Pero las tropas napoleónicas se instalan también en España, alcanzando a inicios de 1808 la enorme cifra de 100 000 soldados estacionados allí. Esto despierta reacciones violentas en diversos puntos de España, donde crece la animosidad contra el ministro Godoy señalado por su complicidad con los franceses y su manipulación del débil monarca Carlos IV. En el mes de marzo una sublevación fuerza la renuncia del odiado ministro y la abdicación del rey en favor de su hijo Fernando VII. Mientras se empiezan a desarrollar movimientos de tipo insurreccional contra las tropas francesas,

Napoleón cita a Carlos IV y Fernando VII en Bayona y los obliga a abdicar en su favor, designando luego como rey de España a su hermano José. La sublevación no hace más que multiplicarse por distintos lugares de España y se empiezan a organizar juntas para gobernar el territorio en nombre del rey prisionero.

Entre este momento y 1810, cuando la resistencia española parecía a punto de sucumbir y solo resiste recluida en el istmo de Cádiz amparada por las cañoneras de los navíos ingleses, durante esos dos años que algunos historiadores han llamado "el bienio trascendental", se van a suceder vertiginosamente los acontecimientos a ambos lados del Atlántico, que van a terminar algunos años después en la independencia de casi todos los territorios del imperio español, entre ellos los que habían conformado el virreinato del Río de la Plata. La prisión de los monarcas había puesto en cuestión las bases mismas de la legitimidad del gobierno imperial y había generado movimientos "juntistas" en muchos lados del imperio que invocaba "la retroversión de la soberanía a los pueblos". Es decir que ante la ausencia del monarca los pueblos que integraban la monarquía recuperaron la soberanía que habían delegado en el rey, en un pacto de sujeción que quedaba suspendido temporalmente ante la ausencia de una de las partes. Esto no tenía que terminar necesariamente en las independencias americanas, pero abrió una senda que diversas circunstancias y la acción de distintos actores a ambos lados del océano conducirían finalmente a ellas.

EL LARGO SIGLO XIX

*Pilar González Bernaldo de Quirós**

Si asociamos la historia del siglo XIX latinoamericana con el proceso de descolonización del continente, podemos sin lugar a dudas tomar como punto de partida el año 1808, cuando la presencia militar francesa en la península ibérica desencadena una crisis dinástica en España que desata el proceso de ruptura. Pero como ha sido señalado en el capítulo anterior estos cambios se inscriben en una cronología más amplia que remite tanto a los efectos de las reformas borbónicas en los equilibrios locales y regionales, como a los conflictos europeos que prefiguran una nueva geopolítica imperial que verá imponerse la primacía de Gran Bretaña en el comercio atlántico. Este capítulo concluirá con los festejos del centenario de la Revolución de Mayo en 1910. Hemos diferenciado tres grandes periodos que estructuran nuestra exposición. Una primera etapa que se abre con la crisis monárquica y se cierra con la promulgación de la Constitución federal de 1853, durante la cual asistimos al derrumbe de la autoridad central y al lento y conflictivo ordenamiento del antiguo espacio virreinal en una confederación de provincias bajo la supremacía de Buenos Aires. Un segundo periodo que se inicia con el derrumbe de la confederación rosista y la promulgación de la Constitución federal de 1853, y culmina con la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880, se caracteriza por la pugna entre una au-

* Con la colaboración de Javier Sabarrós.

toridad nacional y las veleidades autonomistas de las provincias federadas. Ello alimenta una variedad de conflictos internos y externos, acompañados de una anarquía financiera que estallará en 1890. El tercer periodo, que calificamos de gran aceleración, corresponde a la etapa de consolidación del poder nacional asociado a un momento de gran expansión de la economía agroexportadora. La *belle époque* local combina así optimismo y crecimiento económico gracias a la intensificación de los flujos de capitales y de mano de obra. Los beneficios de este crecimiento serán empero desigualmente repartidos, alimentando el conflicto entre capital y trabajo que desentona con el optimismo prevaleciente. Ello se acompaña a finales del periodo de un resquebrajamiento del credo liberal tanto en lo político y jurídico como en lo económico, impulsando importante cambios sociales, demográficos y políticos que anuncian el siglo XX.

EL MOVIMIENTO INSURRECCIONAL Y EL LARGO PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ENTIDAD POLÍTICA NACIONAL

La etapa que se inicia con la crisis monárquica y la pérdida del Alto Perú (1808-1812) y se cierra con la promulgación de la Constitución federal de 1853 se caracteriza por la fragmentación del antiguo espacio virreinal y la multiplicación de conflictos entre las diferentes entidades que se reclaman depositarias de la soberanía. La dimensión política del proceso revolucionario que conjuga la ruptura del vínculo colonial con la fragmentación política de la soberanía provoca una desestructuración del espacio económico virreinal que introduce nuevos desacuerdos en torno al control de las entradas fiscales que ahora se concentran en los dos puertos que abren el acceso al mercado atlántico, el puerto de Buenos Aires y el de Montevideo. Es en torno a esta cuestión que van a definirse los “unitarios” (centralistas) y los federalistas en el Río de la Plata.

PROCESO INSURRECCIONAL Y DISLOCACIÓN DEL ESPACIO RIOPLATENSE

Las dos incursiones de las tropas británicas en el Río de la Plata en 1806 y 1807 introducen, como ya se ha señalado, una serie de cambios que marcarán el derrotero de la insurrección en la región. La destitución del virrey Sobremonte implica una alteración en las reglas de funcionamiento de las instituciones políticas, singularmente validadas por la corona al nombrar al defensor de la plaza de Buenos Aires, Santiago de Liniers, virrey interino. La invasión británica deja, por otro lado, una población movilizada y organizada militarmente en cuerpos milicianos, brindando a los jefes de esta "ciudad en armas" una base inédita de poder. La experiencia introduce igualmente frentes de tensión entre aquellos que resisten la ocupación y quienes juran fidelidad al rey inglés, como lo expresa el prior de Santo Domingo, fray Gregorio Torres, en nombre de las diferentes órdenes religiosas, mientras que el obispo Lué se resiste a hacerlo. Ello acentúa la escisión entre el clero regular y el clero secular que condicionará en parte la actitud de unos y otros frente a la crisis española que estallará un año más tarde.

Durante el otoño austral de 1808 llegan las primeras y confusas noticias de la situación metropolitana, a las que se agregan las enviadas desde Río de Janeiro por el emisario de la infanta Carlota, hermana de Fernando VII y princesa consorte-regente de Portugal. La confusión no podía ser entonces mayor. Mientras que José Bonaparte y Carlota Joaquina reclaman simultáneamente el reconocimiento de su autoridad sobre los dominios americanos, en España la población se organiza en juntas gobernativas que se dirigen igualmente a los americanos en representación del rey cautivo. El virrey interino, Santiago de Liniers, intenta, no sin dificultad, asentar su autoridad sobre el principio de fidelidad a Fernando VII que implica, según su propia lectura, el mantenimiento del *statu quo*. En su nombre logra desbara-

tar la conjuración del cabildo de Buenos Aires en enero de 1809 y reprimir los movimientos altoperuanos de Chuquisaca y la Paz, aunque no consigue impedir la constitución de una Junta de Gobierno en nombre de Fernando VII en Montevideo, junta que desconoce su autoridad. A pesar de la inegable habilidad de Liniers para erigirse en fiel defensor de los intereses del monarca español, en el contexto de ocupación de la península por las tropas napoleónicas, esta posición era difícilmente sostenible debido a que sus orígenes franceses ofrecían un flanco fácil para quienes buscaban desacreditar sus intenciones legitimistas. La Junta Central en España decide finalmente nombrar a Baltazar Hidalgo de Cisneros como nuevo virrey, y el arribo de este al Río de la Plata, en junio de 1809, permite en efecto acabar con la secesión de Montevideo y asentar el poder virreinal sobre la autoridad de la Junta Central española. Será, sin embargo, un breve periodo de respiro. La caída de Andalucía, que acarrea la disolución de la Junta Central y su posterior reemplazo por un Consejo de Regencia, coloca al nuevo virrey nombrado por la desaparecida junta nuevamente en una situación delicada. A las primeras noticias llegadas sobre la caída de Andalucía, el cabildo de Buenos Aires convoca un cabildo abierto a fin de tomar posición respecto de las alarmantes noticias que llegan de la península. En ausencia del rey, la corporación urbana se autoproclama depositaria de la soberanía pero intenta evitar decisiones que pudiesen aparecer como irreversibles nombrando una junta de gobierno presidida por el ex virrey Cisneros e integrada por exponentes de las diferentes tendencias entonces manifiestas: realistas, moderados y autonomistas. La solución de compromiso se revela poco aceptable y genera rápidamente el descontento de las milicias urbanas y de la población de Buenos Aires, cuya movilización compele al ex virrey a renunciar a la junta, y una nueva Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del señor don Fernando VII se constituye el 25 de mayo de 1810. Esta última es presidida por Cornelio Saave-

dra, jefe del primer regimiento de patricios y de gran ascendencia sobre las milicias, y cuyos secretarios, Mariano Moreno y Juan José Paso, son ferviente promotores de un cuestionamiento radical del pacto de sujeción. La doble iniciativa de la junta, de desconocer la autoridad del Consejo de Regencia y atribuirse la representación del reino genera la desconfianza y la abierta hostilidad de ciertas ciudades que, como Montevideo, Córdoba, Salta, Potosí y Asunción, van a impugnar la decisión tomada en la capital. Actitudes díscolas que Buenos Aires decide cortar de raíz con el envío de un ejército revolucionario destinado a hacer reconocer su autoridad en el conjunto del territorio, paralelamente a la constitución de una Junta Grande integrada por los representantes de los diferentes cabildos del virreinato que integraban la junta con mandato imperativo.

PROCESO REVOLUCIONARIO

Con la constitución de la Junta Gobernativa en mayo de 1810 se inicia el proceso revolucionario en la región, que concluye con la declaración de independencia de las Provincias Unidas de América del Sur, en 1816 y la promulgación de la primera Constitución republicana de corte centralista en 1819, cuya ampliación provoca el derrumbe del poder central y la desintegración territorial del antiguo espacio virreinal. Durante esta primera etapa (1810-1816), que la historia tradicional calificaba de revolución que avanza bajo la "máscara de Fernando VII", vemos enfrentarse a los llamados "realistas", los autonomistas y los independentistas que se basan cada uno de ellos en lecturas diferentes de la crisis y cuyas respuestas a la misma están dictadas por complejas redes de alianzas constituidas en torno a la defensa de intereses económicos y de fidelidades a diferentes instituciones —cabildo, junta, triunvirato, directorio—, mediante las cuales se busca garantizar una base política a las dis-

tintas facciones enfrentadas. Los gobiernos que se suceden entonces al ritmo de destituciones, conspiraciones y movilizaciones populares deben, asimismo, confrontar diferentes focos militares abiertos en el Alto Perú, en la Banda Oriental y en Paraguay, que tienen como resultado la pérdida del Alto Perú luego del desastre militar del brillante tribuno de la revolución, improvisado comandante del ejército, Juan José Castelli, en Huaqui, en junio de 1811. A ello se agrega la derrota del ejército de Manuel Belgrano, otro elocuente jurista hijo de uno de los más ricos y exitosos comerciantes de la región, secretario del Consultado de Comercio y gran defensor del libre comercio, enviado por Buenos Aires a Paraguay en enero de 1811 (y que concluye con la declaración de la independencia del Paraguay en 1813). En la Banda Oriental, vecino territorio ribereño, la prolongación del conflicto comporta un triple peligro para Buenos Aires debido a las fuerzas realistas que allí se concentran, a la disidencia patriótica contra Buenos Aires que lidera José Artigas en una vasta región litoral y a la amenaza latente de una expansión militar portuguesa con el objetivo de controlar la ladera oriental del Río de la Plata. La guerra deviene rápidamente el horizonte de la revolución, según la expresión consagrada de Tulio Halperín-Donghi. Pero a diferencia de otras regiones del imperio, el poder revolucionario logra controlar parte del ex territorio virreinal y sustancialmente la ciudad capital con su puerto atlántico del que dependían buena parte de las economías regionales y que, como veremos luego, ofrecía recursos para financiar una campaña continental que contribuirá al definitivo triunfo de las fuerzas independentistas en América del Sur. El Río de la Plata no solo fue la única región del imperio donde el poder insurreccional no conoció reveses de las fuerzas realistas sino también una de las pocas que no aplicaron la Constitución de Cádiz.

La decisión que toma la junta de Buenos Aires en 1810 de no enviar representantes a las Cortes de Cádiz, que arrastra la posterior negativa de jurar la Constitución en 1812, instala la

cuestión constituyente en el centro de la dinámica insurreccional, otorgando a los grupos radicales y a los jefes militares reformistas el contexto propicio para convocar una asamblea constituyente que se reúne en enero de 1813. Si bien esta excluye de su juramento la fidelidad a Fernando VII e introduce una serie de reformas liberales, como la supresión del tributo, la libertad de vientres para los esclavos y la libertad de imprenta, no se resuelve a declarar la independencia y posterga la promulgación de un texto constitucional. Hay que recordar que el ambiente era poco propicio a los fervores revolucionarios. Entonces la relación de fuerzas estaba cambiando en la península y en Europa y el muy probable retorno de Fernando VII al trono era fuente de fluctuaciones en la política en el Río de la Plata, alimentando temores que efectivamente se concretaron en mayo 1814 con la restauración absolutista y la manifiesta intención de Fernando VII de recuperar sus colonias americanas. Esos fueron los años más difíciles del movimiento insurgente en el Río de la Plata y en toda las regiones del imperio que debieron hacer frente a la cada vez más explícita intención de Fernando VII de reconquistar militarmente las colonias díscolas. Si Buenos Aires logró mantenerse como sede de un poder autonómico que no terminaba de definir sus fundamentos, estaba lejos de controlar militarmente el conjunto del territorio. El año 1813 fue particularmente incierto con los desastres militares de Belgrano de Vilcapugio y Ayohuma, en el Alto Perú (hoy territorio boliviano), frente a las tropas realistas dirigidas por el general Joaquín de la Pezuela, que obligó al Ejército del Norte a emprender una nueva retirada hasta Jujuy, exponiendo continuamente las tierras bajas de Salta y Jujuy a los ataques realistas. La heroica defensa del frente norte por los “gauchos de Güemes” —calificativo con el que la historiografía argentina recuerda la guerra de guerrillas a la que se entregan en la provincia de Salta las milicias irregulares bajo el comando de Martín Miguel de Guëmes, un militar descendiente de la alta burocracia colonial y que abraza, como tantos otros, la

carrera de la revolución— tiene como efecto consolidar el poder de caudillos locales que constituyen una nueva amenaza para el poder central. Al este, las tropas de Carlos María de Alvear —un militar que había combatido en España contra los ejércitos de Bonaparte y que en 1812 regresa a su tierra natal con José de San Martín para servir en el ejército revolucionario— habían ciertamente terminado con las fuerzas realistas en la Banda Oriental, pero la disidencia de José Gervasio Artigas, líder de la revolución oriental, arrastra a las provincias del litoral de los ríos (Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes) asociadas en 1815 a la Liga de los Pueblos Libres, que quedan bajo su protección. Al oeste, la reorganización militar frente a la nueva amenaza realista también crea nuevas tensiones entre poderes locales y autoridad central. En Chile, la derrota de Rancagua en octubre de 1814 acaba con la Patria Vieja transformando la vecina república en una nueva amenaza para el poder insurgente rioplatense. Todo ello dificulta también la obtención de apoyos de las potencias del Atlántico. Con la ocupación francesa, Gran Bretaña se había convertido en gran aliada de las monarquías ibéricas, imponiéndose una neutralidad que la Francia de la Santa Alianza rompe apoyando a Fernando VII en su proyecto de reconquista del imperio. Estados Unidos, en guerra contra Gran Bretaña, tenía otras prioridades. Se inicia entonces la etapa más crítica de la revolución que llevó a que el director supremo considerara la posibilidad de negociar un retorno a la obediencia al rey de España. Sin embargo, la idea de una marcha atrás tampoco era fácilmente negociable. La restauración monárquica en España no brindaba demasiadas garantías para los grupos autonomistas y generaba la abierta hostilidad de los más radicales. La nueva amenaza realista en Chile terminó de convencer a los más reticentes de la oportunidad que presentaba el proyecto del nuevo jefe de la expedición al Alto Perú, nombrado en reemplazo del derrotado Belgrano, el teniente coronel José de San Martín. Convencido de que la insurrección no se ganaría militarmente por el Alto Perú, como las múl-

tiples derrotas lo demostraban, San Martín planteó la necesidad de un cambio de estrategia, diseñando el audaz plan de una campaña continental, proyectando el ataque al bastión realista del Perú por el Pacífico. Ello implicaba franquearse un paso a través de la cordillera de los Andes, enorme masa montañosa que cuenta en esta región con picos que alcanzan los 6 900 metros. José de San Martín fue sin duda el militar patriota con mayor genio estratégico. Hijo de un funcionario colonial, empieza una brillante carrera militar en España sirviendo a la corona en diferentes escenarios bélicos: en África contra los "moros" y en la península ibérica y Francia durante la guerra de independencia, destacándose en la batalla de Bailén, en la que su heroica actuación le mereció el grado de teniente coronel. Ganado a la causa de la independencia —muchos afirman que se afilia a la masonería en Cádiz y que allí toma contacto con varios promotores de la independencia americana—, pide su retiro del ejército español y luego de una corta estadía en Londres, donde conoce a otros independentistas americanos y según algunos crea la logia de Los Caballeros Racionales o Logia Lautaro; de ahí se embarca hacia Buenos Aires con otros oficiales masones ganados, entre quienes se encuentra Carlos María de Alvear, para integrarse al ejército patriota. Las autoridades revolucionarias le encargan a su llegada la formación de un regimiento de granaderos a caballo, con el que hará su bautismo de fuego en la batalla de San Lorenzo, gracias a la cual San Martín logra frenar las incursiones del ejército realista de la Banda Oriental hacia la ladera occidental del río Paraná. Inmediatamente después se le otorga la comandancia del desahuciado Ejército del Norte, desde donde diseña su estrategia continental de la guerra independentista. En 1814 logra que Gervasio Posadas, flamante director supremo de las Provincias Unidas, lo nombre intendente de Cuyo. Ello le permite instalarse en la ciudad de Mendoza, cabecera de intendencia y excelente lugar para organizar un ejército con el que emprender una campaña militar hacia Chile.

Aunque su aptitud política no igualó su genio militar, su participación a la Logia Lautaro fue un instrumento eficaz para lograr los apoyos políticos necesarios para emprender su expedición militar. En este contexto de aislamiento y amenaza de desagregación territorial, el nuevo director supremo sustituto, Ignacio Álvarez Thomas, decide convocar a un congreso constituyente que se reúne en la provincia de Tucumán en marzo de 1816. San Martín consigue influir sobre la decisión del congreso de declarar la independencia, alegando que debía llegar a Chile representando a la autoridad de un país independiente y no de un poder rebelde. El 9 de julio de 1816 el congreso declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. San Martín obtiene igualmente del nuevo director supremo y probablemente hermano de la Logia Lautaro, Juan Martín de Pueyrredón, un sólido apoyo para emprender la audaz travesía de la cordillera de los Andes que le permite lanzar la guerra ofensiva contra las fuerzas realistas en Chile en 1817 y la expedición libertadora desembarca en Perú en 1820, proclamando en 1821 la independencia del Estado peruano.

Entre los congresistas de Tucumán el consenso fue menor respecto a la forma de gobierno que debía adoptarse. Si los defensores de la república no faltaban, la restauración monárquica en Europa persuadió a más de un diputado de la conveniencia de optar por una monarquía constitucional, mejor adaptada al concierto de las potencias europeas en Viena en 1815 en torno a la restauración monárquica. El problema que se plantea aquí, como en otras partes del imperio, es el de las dificultades de encontrar algún miembro de las familias reales europeas que garantizase la continuidad sin comportar un riesgo para los poderes tan trabajosamente conquistados por los criollos. Manuel Belgrano piensa hallar la solución en la restauración de una dinastía inca, proposición que es igualmente desechada. Todo ello prolonga los trabajos del congreso que en 1817 se traslada a Buenos Aires, donde se promulga en 1819 la primera constitu-

Disgregación del virreinato del Río de la Plata:
territorio de las Provincias Unidas, 1816



ción de corte centralista, desconociendo con ello los reclamos autonomistas de las diferentes ciudades-provincias del antiguo virreinato del Río de la Plata. La constitución votada en Buenos Aires es inmediatamente rechazada por las provincias. Santa Fe, una de las provincias de la Liga de los Pueblos Libres, declara su independencia e instaura una república autónoma, siendo imitada por las provincias de Entre Ríos, Tucumán, Córdoba y La Rioja. Frente a ello, Buenos Aires intenta, como en el pasado, imponer su autoridad por las armas, en un contexto particularmente desfavorable puesto que los ejércitos nacionales que estaban movilizados en las campañas libertadoras terminan por levantarse contra la propia Buenos Aires. La batalla de Cepeda en febrero de 1820, en la que el ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata es derrotado por la coalición de fuerzas federalistas lideradas por los caudillos de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, apoyados por José Artigas de la Banda Oriental y el chileno José Miguel Carrera, sella el derrumbe del poder central, facilitando la emergencia de las provincias como nuevas entidades político-institucionales.

LA DISLOCACIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO COLONIAL

El proceso revolucionario que hemos resumido aquí tendrá efectos inmediatos y a más largo plazo sobre la economía regional. En primer lugar, el rechazo de la Audiencia de Charcas de aceptar la autoridad de la Junta de Buenos Aires implica la pérdida de las remesas de la caja de Potosí, que subsidiaba la de Buenos Aires. En otros términos, Buenos Aires, como cabeza del virreinato, pierde su principal fuente de recursos fiscales. El rechazo de los cabildos de Montevideo y de Asunción de reconocer la autoridad de la Junta de Buenos Aires le amputa, por otro lado, dos regiones importantes: Paraguay, amplio mercado para la economía regional, y la Banda Oriental, la región enton-

ces más activa en la producción ganadera. Pero es sobre todo la pérdida del Alto Perú la que tendrá un fuerte impacto sobre una economía regional que, como se indicó en el capítulo anterior, estaba estructurada en torno a los intercambios entre la zona altoperuana, la región mediterránea y el litoral atlántico. Y no solo se trata de la pérdida de los beneficios de las minas del Alto Perú (hasta 1810, 80% de las exportaciones de Buenos Aires tenían este origen) sino de una economía de gran diversidad productiva e inserta en vastos circuitos de comercialización. Las norteñas provincias de Jujuy y Salta, que habían orientado su producción hacia el mercado andino —producción y comercialización de mulas y carretas destinadas al Alto Perú—, se vieron particularmente afectadas. La zona de Cuyo también perdió, aunque en menor proporción, el mercado transandino. En cuanto a la región del litoral, su ubicación geográfica le permitió sacar un beneficio más inmediato de la desaparición de la regulación colonial, gracias a una mejor exposición al comercio atlántico. Sin embargo, a corto plazo todas la regiones resintieron un conflicto que tuvo un impacto devastador sobre la población —aunque es difícil cuantificar el número de muertes provocadas— y sobre los bienes, generando una importante trasferencia de recursos del sector productivo al sector militar.

En efecto, la resolución tomada por la Junta Gubernativa de 1810 de imponer su autoridad por medio del envío de unidades militares allí donde era cuestionada, activa una maquinaria de guerra que consume bienes y brazos en un contexto de desaparición del sistema financiero imperial. Ello transforma la aduana de Buenos Aires en fuente principal de recursos fiscales del poder revolucionario. Los propietarios son también sometidos a "contribuciones forzosas" para financiar los esfuerzos de guerra. Según los cálculos de Halperín-Donghi estas representan para el primer quinquenio revolucionario 10% de los recursos obtenidos por el fisco y afectan tanto a los propietarios urbanos como rurales, pero tiende a recaer sobre las familias menos vinculadas

a la revolución. Los propietarios rurales son además gravados con contribuciones en especie, que impone el abastecimiento del ejército, y con el aporte de recursos humanos, medida dirigida en particular a los propietarios de esclavos, entre los cuales se destaca la iglesia. La militarización también moviliza una mano de obra libre que la revolución ha convertido en ciudadanos-soldados. Aunque no todos pagan su impuesto de sangre —las deserciones son crónicas—, la tasa de militarización de la sociedad es muy alta. Considerando la cuota de reclutas para al ejército que cada provincia debía abastecer, fijada por el Congreso Nacional en 1816, un hombre adulto y válido por cada cinco debía alistarse. Si a ello agregamos las milicias reclutadas en las regiones, cifras por cierto difícilmente cuantificables en virtud de la extrema volatilidad de las mismas, no es difícil imaginar el impacto que esta transferencia de hombres del sector productivo al militar tiene para la economía regional, tanto en la producción como en la comercialización. La multiplicación de milicias acentúa la fragmentación del espacio económico regional e introduce una mayor inseguridad en el tráfico comercial, que, a su vez, aumenta los costos de la transacción.

La guerra, ciertamente devastadora, no afectó todas las regiones de la misma manera. Como es fácil suponer, sí tuvo un fuerte impacto en las regiones donde se concentraron las operaciones bélicas, en particular las provincias del Norte —perjudicadas sobre todo por la pérdida del Alto Perú y la guerra contra los realistas— y la Banda Oriental, que agotan y destruyen los recursos de toda esta región ganadera beneficiando indirectamente la producción de la campaña bonaerense. Junto con la guerra, la revolución introduce el librecambio, del cual, como vimos, dependían los ingresos fiscales para financiar la guerra y cuyo impacto diferencial se hará sentir sobre todo a partir de los años veinte. Pero incluso durante la primera década, es la ciudad de Buenos Aires y su puerto los que sacan mayores beneficios del libre comercio.

Las cifras demográficas, aunque muchas de ellas aproximativas, confirman esta desigual repercusión de la guerra sobre las diferentes regiones. Mientras que Buenos Aires tiene un crecimiento de más de 50% de su población entre fines del siglo XVIII y 1822, Santa Fe pierde población y la población de las provincias del interior se estanca.

CONSOLIDACIÓN DE LAS AUTONOMÍAS PROVINCIALES Y REORGANIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS COMERCIALES

La caída del régimen directorial en 1820 tiende, en realidad, a intensificar un problema ya presente durante la primera década revolucionaria: el principio de la retrocesión de la soberanía a partir del cual la Junta de Buenos Aires funda su autoridad sobre el resto del territorio del virreinato, es también invocado por las otras ciudades principales respecto de Buenos Aires —como vimos fue el caso de Asunción en 1811— y por las ciudades secundarias respecto de las principales. Los reclamos de soberanía de "los pueblos" desencadena un proceso de fragmentación de la soberanía que comienza por la dislocación de la pirámide de obediencias entre ciudades cabecera y secundarias y acaba con la decapitación de la primera de ellas, Buenos Aires, que en 1820 que pierde el vasto territorio sobre el cual sus élites pretendían imponer su autoridad. En 1813 por el Segundo Triunvirato se separan Mendoza, San Juan y San Luis, hasta entonces dependientes de la intendencia de Córdoba, creando la intendencia de Cuyo. En 1814 se constituyen las provincias de Entre Ríos y Corrientes independientes de la intendencia de Buenos Aires. La intendencia de Salta de Tucumán se divide para dar nacimiento a las provincias de Salta y Tucumán, y Santa Fe se separa de la intendencia de Buenos Aires. Por desagregación se van constituyendo las provincias como espacios político-administrativos que, con el derrumbe del po-

der central en 1820, se transforman en entidades de derecho público, con autonomía fiscal y monetaria, dando lugar entre las décadas de los veinte y los treinta a la promulgación de textos reglamentarios o constitucionales. En todos estos textos, la referencia a una entidad supraprovincial aparece de manera recurrente y vinculada tanto a la existencia de un vasto espacio de intercambios, que lo era también de alianzas familiares dentro del cual estos se inscribían, como a la existencia del puerto de Buenos Aires que vincula la región con la economía atlántica. Puesto que la aduana seguía siendo el principal recurso fiscal y un instrumento de control de los circuitos comerciales que incidía directamente en las economías provinciales, el control que pretende ejercer Buenos Aires sobre la misma fue motivo de constantes conflictos. Estos dieron lugar a coaliciones políticas y militares que se constituyeron a lo largo de todo el periodo, desde la Confederación liderada por Rosas hasta las diferentes ligas unitarias y facciones que buscan nacionalizar la aduana o abrir el comercio fluvial para evitar el control de Buenos Aires sobre el comercio atlántico.

Los treinta años de autonomía provincial lo fueron igualmente de fuerte politización de la población, tanto urbana como rural, asociada a la militarización de la sociedad. Durante estos años vemos surgir nuevos liderazgos y actores políticos, entre ellos, los caudillos retuvieron la mayor atención de la historiografía. La interpretación que de estos poderes se ha hecho ha cambiado sensiblemente desde la inaugural obra de Sarmiento, *Facundo, o civilización y barbarie,* que los define como encarnación de la barbarie americana. Sabemos hoy que el poder personal que estos hombres acumularon contribuyó a la edificación de los primeros andamiajes institucionales, erigiendo un sistema de fidelidades personales que tendieron *in fine* a supeditar el orden institucional a la capacidad personal de controlar amplias clientelas políticas. Ello no impidió a la “plebe”, como denominan las fuentes a los sectores populares, participar en la contienda polí-

tica para defender posiciones que consideraban protegían sus propios intereses, como lo demuestra la vitalidad del federalismo popular en la región.

NUEVA TENTATIVA PORTEÑA DE LIDERAR UNA ORGANIZACIÓN NACIONAL

Como las otras provincias, Buenos Aires inicia, luego del crítico año 1820, un proceso de organización institucional impulsado por un grupo de ilustrados porteños que bajo la denominación de Partido del Orden emprenden una serie de reformas liberales. La llamada "feliz experiencia", expresión con la cual la historiografía argentina bautizó este periodo de bonanza liberal en Buenos Aires y cuyos principales artífices son Bernardino Rivadavia y Manuel García, ministros del gobernador Martín Rodríguez, permite la consolidación de un nuevo orden institucional republicano representativo en el marco de un contexto económico particularmente favorable. La desaparición del Estado central libera por otro lado a Buenos Aires de los esfuerzos de guerra y de los costos de la administración del vasto territorio virreinal, que son así transferidos a los gobiernos provinciales, conservando esa ciudad la renta aduanera como principal entrada fiscal. De manera tal que la desintegración del poder central tiene por principal efecto el de confirmar la supremacía de la provincia de Buenos Aires respecto del conjunto de las provincias "desunidas" del Río de la Plata.

La prosperidad provincial reposa, sin embargo, sobre una ambigüedad político-institucional que no tarda en perturbar la alianza de las diferentes facciones que habían hecho posible la feliz ecuación rivadaviana en la provincia de Buenos Aires. Como hemos referido, tanto las constituciones provinciales como los pactos entre estados provinciales aluden a la existencia de una nación argentina, aún por constituirse, pero en nombre de la

cual se firman los mismos. Ambigüedad que permite mantener el *statu quo* entre los diferentes grupos regionales que defendían posiciones encontradas, centralistas, autonomistas o independentistas por medio de un régimen de "provisoriato" según el cual los poderes que surgen lo hacen evocando una soberanía nacional que solo un texto constitucional, constantemente postergado, puede asentar. Los textos legislativos buscan instalar y hacer funcionar las instituciones de manera provisional hasta que la constitución instituya la nación y con ella el principio de legitimidad que valide el régimen establecido. Esta intrincada situación plantea dificultades mayores en el ámbito internacional, que se hicieron particularmente patentes cuando en 1824 llega a Buenos Aires Woodbine Parish, para negociar un acuerdo de amistad y comercio en nombre de su majestad británica Jorge IV y que implica, como contrapartida, el reconocimiento de la independencia del nuevo Estado. Este reconocimiento permitía normalizar las relaciones con otras naciones, frenando con ello toda tentativa de reconquista española. Y este peligro no era una simple especulación: Fernando VII no economizaba esfuerzos para encontrar en Europa apoyos que le permitiesen emprender la recuperación militar de "sus dominios". Las presiones de Madrid habían llevado, incluso, a que León XII promulgara en septiembre 1824 la encíclica *Etsi iam diu*, en la que condena las guerras americanas como una amenaza a "la integridad de la religión". El destino de la Banda Oriental también parecía depender de este acuerdo con Gran Bretaña. Las tropas portuguesas, instaladas en la Banda Oriental desde 1817, se anexaron en 1821 este territorio, integrado como provincia Cisplatina. Y la independencia del Brasil en 1822 no cambia la situación puesto que en el flamante emperador Pedro I pretende recuperar la integridad de los dominios americanos de su padre, considerando la flamante provincia Cisplatina como parte integral de ellos. Para denunciar la anexión de estos territorios, Buenos Aires requiere la previa afirmación de un Estado nacional capaz de re-

clamar la soberanía territorial sobre los dominios heredados del antiguo virreinato.

La llegada de Parish precipita así la convocatoria a un nuevo congreso constituyente en Buenos Aires, que se reúne a fines de 1824. A fin de negociar el tratado con Gran Bretaña, el Congreso vota en enero de 1825 la Ley Fundamental que delega en la provincia de Buenos Aires las relaciones exteriores de la nación. En mayo, la asamblea promulga la ley que crea el ejército nacional y ordena incorporar la Banda Oriental a las Provincias Unidas en octubre del mismo año, declarando con ello la guerra al imperio de Brasil. En febrero de 1826, la Ley de Presidencia, también promulgada por el Congreso, designa a Bernardino Rivadavia como primer presidente de la nación argentina. La asamblea instala así una autoridad nacional antes de que los representantes de las provincias se pongan de acuerdo y voten un texto constitucional. Todo ello provoca un nuevo enfrentamiento entre los partidarios de la federación y los defensores de un poder centralizado en Buenos Aires. La ruptura se hizo ineludible durante la discusión de la Ley de Capitalización destinada a nacionalizar la ciudad de Buenos Aires. Por la misma, la provincia perdía su puerto y, junto con él, las entradas fiscales del comercio exterior que pasaban ahora a manos del poder nacional. Este proyecto fue considerado inaceptable por los grupos federales porteños que disponían de una importante base popular. Ello terminó de pulverizar la coalición bonaerense que había apoyado hasta entonces al grupo rivadaviano en su política de reformas. Los trabajos del Congreso, por su parte, también alteran el sistema de alianzas provinciales y facilitan la emergencia en el interior de la poderosa figura de Facundo Quiroga. Gracias a su alianza con Juan Bautista Bustos, hombre fuerte de Córdoba, Quiroga logra consolidar un bloque de provincias centrales (Cuyo, La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero) que se opone a la política de Buenos Aires. Es en este contexto de hostilidad creciente que los partidarios de la unidad deciden acelerar el

proceso y promulgar el 24 de diciembre de 1826 la Constitución de la República Argentina.

Bernardino Rivadavia, ahora presidente de una nación constitucionalmente instituida, debe entonces hacer frente a una situación interna y externa particularmente difícil. Como en 1819, el texto votado es producto de una relación de fuerzas dentro del Congreso, que la situación fuera de él no confirma. La oposición federal, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires, está cada vez más extendida y difícilmente puede Rivadavia imponer un orden que la mayoría de las provincias reprueban. La situación externa no es más halagüeña. La guerra contra el imperio de Brasil, que ciertamente había comenzado con el rutilante triunfo terrestre en la batalla de Ituzaingó, experimenta una situación menos resonante en el ámbito naval. La superioridad de sus fuerzas marítimas permite al imperio someter el puerto de Buenos Aires a un prolongado bloqueo cuyos efectos económicos desastrosos se hacen rápidamente sentir en el conjunto de la población, privando por otro lado al gobierno nacional de su principal fuente de recursos fiscales. Con los recursos aduaneros y políticos agotados, Rivadavia decide terminar la guerra de la manera menos deshonrosa posible, aceptando para ello la mediación británica. Pero la base de las negociaciones que Rivadavia considera aceptable, y que supone el retiro de las tropas imperiales brasileñas de la Banda Oriental y el reconocimiento de la independencia de Uruguay por las dos partes beligerantes, no es respetada por el emperador que impone a Manuel García, emisario del gobierno de Buenos Aires, un acuerdo que estipula como nueva base para la paz la anexión definitiva de Uruguay por el imperio de Brasil. La "humillación, el oprobio y la deshonra de la República argentina", como entonces se denuncia, obliga a Rivadavia a presentar su renuncia al Congreso. La segunda tentativa de organización constitucional se salda nuevamente con el derrumbe del gobierno nacional que deja como herencia una guerra con el imperio de Brasil, una nueva coalición de pro-

vincias del interior encabezadas por Facundo Quiroga y una situación de gran inestabilidad en la provincia de Buenos Aires.

HACIA LA ORGANIZACIÓN CONFEDERATIVA DE PROVINCIAS BAJO LA HEGEMONÍA PORTEÑA

Manuel Dorrego, jefe del partido popular porteño, asume el gobierno de la provincia de Buenos Aires en un contexto sumamente crítico. A pesar de que logra firmar la paz con Brasil sobre bases menos ominosas que las aceptadas por Manuel García, debe hacer frente al descontento que provoca en el ejército la paz firmada con Brasil. De regreso a Buenos Aires, el general Juan Lavalle encabeza, a fines de 1828, un golpe de Estado que acaba con el gobierno de Manuel Dorrego y con su vida. La arbitraria e inexplicable decisión de Lavalle de ejecutar a Dorrego sin juicio previo y como simple medida de prevención, tendrá efectos inmediatos y desastrosos para la facción unitaria. Convertido en mártir por Lavalle, el difunto Dorrego se convierte en emblema del federalismo popular porteño, movimiento que beneficia en particular a otro caudillo de la provincia, el rico estanciero Juan Manuel de Rosas, quien se erige en defensor del federalismo popular y única figura capaz de restablecer la paz dentro de un orden federal. Un nuevo levantamiento de la campaña bonaerense en 1829, que moviliza a "gauchos federales" y a "huestes bárbaras" en nombre de la federación, permite a Rosas, que aparece entonces como líder de este movimiento, acceder al gobierno de la provincia. En el interior del país, Facundo Quiroga sigue dominando una buena parte de las provincias centrales pero pierde el control de Córdoba, que pasa a manos de otro ex combatiente de la guerra contra Brasil, el general José María Paz, quien logra instalar, de regreso a su provincia natal en 1829, una fuerza militar capaz de ejercer una cierta hegemonía unitaria en el interior. En 1830 la liga militar entre defenso-

res del centralismo se institucionaliza mediante la creación del Supremo Poder Militar, que el propio Paz lidera. Los federales también se organizan y para hacer frente a la amenaza unitaria firman en enero de 1831 el Pacto de Confederación Argentina, tratado de "amistad y unión estrecha y permanente" y de alianza ofensiva y defensiva que regirá las relaciones interprovinciales durante los siguientes 20 años. En torno a este pacto federal se alcanza un cierto equilibrio de poderes entre los tres caudillos federales que dominan el territorio argentino: Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, Estanislao López en el litoral y Facundo Quiroga que recupera su antiguo predominio en el interior luego de la inesperada captura del general Paz en 1831, que acaba con la liga unitaria. Este equilibrio entre diferentes intereses provinciales, que defienden en nombre del federalismo los tres caudillos citados, se rompe con el asesinato de Facundo Quiroga en 1834 y la muerte de Estanislao López en 1838. Acontecimientos que brindan a Rosas la ocasión de hacer del pacto federal un instrumento de la hegemonía de Buenos Aires sobre el resto de la Confederación argentina.

El gobernador de Buenos Aires debió previamente hacer frente a la oposición dentro del propio federalismo porteño, en particular, la de los llamados "lomos negros", nombre con el que se conoce a la oposición federal que encabeza la "lista del pueblo" que se presentan a las elecciones de la legislatura provincial en 1833 con una boleta con el lomo negro —de allí el mote—, reclamando la promulgación de una constitución y oponiéndose a la concentración de poderes demandados por Rosas para asumir un segundo mandato en 1832. Frente a esta negativa, Rosas declina la invitación a asumir nuevamente la gobernación de Buenos Aires y se retira a sus quehaceres civiles y militares, organizando una exitosa campaña militar contra los indios enemigos de la frontera sur de la provincia de Buenos Aires, que le vale el pomposo título de "héroe del desierto". Muy hábilmente, logra imponerse como única solución frente a los temores des-

atados por el asesinato de Quiroga en 1834, y logra en 1835 que la legislatura provincial vote la suma del poder público con el que asume el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sin modificar las instituciones existentes —la sala de representantes como legislatura provincial sigue funcionando durante los 17 años del gobierno rosista—, las vacía de su dimensión representativa designando a los miembros de la legislatura. Ello le permite ejercer un poder sin límites en su provincia y una hegemonía indiscutible en el conjunto de la Confederación. Solo abusivamente podemos calificar este periodo de "*pax* rosista", teniendo en cuenta que este orden se construye sobre la base de una lógica facciosa como mecanismo de cohesión política y una lógica militar como mecanismo de cohesión social. Ello lo lleva a restringir cada vez más las libertades públicas, situación que provoca el surgimiento de una amplia gama de descontentos, entre los que se encontraban algunos sectores que apoyaban hasta entonces su política. El espectro de descontentos se va ampliando e integra, junto a la previsible oposición unitaria, a los federales constitucionalistas y a los jóvenes románticos que se pensaban, aún en 1837, como intelectuales orgánicos *avant la lettre*. La situación será particularmente delicada entre 1838 y 1842, periodo durante el cual Rosas debe hacer frente a todo tipo de conspiraciones y rebeliones dentro del territorio de la Confederación y a conflictos internacionales vinculados a la oposición, como la guerra contra la confederación peruano-boliviana (1837-1839). Rosas esgrime cuestiones tarifarias y territoriales para declarar la guerra pero secretamente lo que busca es deshacerse del mariscal Andrés de Santa Cruz que sospecha constituye un sólido aliado de los oponentes a su régimen. Debe al mismo tiempo hacer frente al bloqueo francés del puerto de Buenos Aires por el almirante Le Blanc (1838-1840) y con el cual el gobierno de Luis Felipe pretende exigir la exención del servicio militar a los súbditos franceses. En la Banda Oriental del Uruguay la oposición unida militarmente y organi-

zada con el apoyo del caudillo oriental Fructuoso Rivera, ha logrado tejer una densa trama de alianzas que implican no solo a la Francia de Luis Felipe, sino también a la provincia de Corrientes, bajo el gobierno de Genaro Berón de Astrada, a los republicanos de Río Grande do Sul y al Paraguay de Carlos Antonio López. La situación interna no es mejor. A la ruptura con la joven generación, dispuesta en un primer momento a apoyarlo contra la vieja guardia unitaria, se agrega en 1839 la conspiración urdida dentro del federalismo y en la que estaba implicado el propio presidente de la legislatura provincial, Manuel Vicente Maza, quien pagará con su vida esta deslealtad. El mismo año, un levantamiento de los productores rurales del sur de la provincia de Buenos Aires canaliza el descontento de sectores antes adictos al gobierno. Cinco años de intensos conflictos que la historiografía argentina caracteriza como "época del terror" por la fuerte represión ejercida contra los opositores y que sintetiza la divisa "Federación o muerte".

Si para 1842 Rosas logra controlar la situación en su provincia e imponer en el interior una paz fundada en la hegemonía de Buenos Aires, su política en la Banda Oriental —que consistía en inmiscuirse en los asuntos orientales aliándose con Manuel Oribe en una guerra civil que lo oponía al presidente Rivera— lo lleva a mantener un frente militar activo en la frontera occidental rioplatense del río Uruguay que ofrece a las provincias del litoral, Corrientes y luego Entre Ríos, la posibilidad de organizarse militarmente. La intervención en el conflicto oriental tiende, como hemos referido, a internacionalizar las propias disidencias argentinas, incluyendo en ellas al imperio de Brasil y a la República del Paraguay. Las intenciones de Rosas de incorporar Paraguay —cuya independencia no había sido reconocida— a la Confederación argentina llevan a Brasil a implicarse en el conflicto regional. La conjugación de todos estos factores provoca en 1851 la alianza de las provincias de Entre Ríos y Corrientes con los gobiernos de Uruguay y de Brasil contra el go-

bierno de Rosas en Buenos Aires. El 3 de Febrero de 1852, las fuerzas del ejército aliado compuestas por 20 000 argentinos, 4 000 brasileños y 2 000 orientales se enfrentan en los campos de Caseros al ejército de Rosas sellando, con la derrota de este último, la suerte del llamado "héroe del desierto" y de la Confederación rosista.

REESTRUCTURACIÓN DE LA ECONOMÍA RIOPLATENSE

A pesar de la guerra y la multiplicación de conflictos regionales la región experimenta, junto con Chile y Venezuela, los mayores índices de crecimiento económico de América Latina durante el periodo. Se trata no obstante de un crecimiento desigual que acompaña la reestructuración de las economías regionales postindependientes en torno al comercio atlántico. Como es de suponer esta reorientación económica beneficia a las regiones del litoral atlántico que, dado los altos costos del trasporte terrestre, están en mejores condiciones de colocar sus productos a un precio más competitivo y obtener los productos de importación a menor monto. Entre las regiones, Buenos Aires dispone de otras ventajas que la sitúan en una posición insuperable. En primer lugar el puerto, que le garantiza el acceso directo y rápido al comercio atlántico y la pone en una posición hegemónica respecto a las provincias del interior. Pero la provincia también cuenta con excelentes y abundantes recursos naturales para el desarrollo de una producción ganadera extensiva que comparativamente requería poca inversión de capital y cuyos principales productos encuentran fácil ubicación en los mercados europeos y americanos (cueros, sebos, carne salada de vacunos y lana). Ello permite a esta provincia realizar más rápidamente su reconversión económica gracias a la cual puede llegar al mercado atlántico. La rentabilidad de sus producciones —que creció a más del doble durante el periodo— favorece el enriquecimiento de

los ganaderos y vemos surgir entre ellos a un poderoso grupo de terratenientes, entre quienes se encuentra Juan Manuel de Rosas y sus primos, los Anchorena. Este cuadro debe empero ser matizado. Hoy sabemos que el desarrollo de la gran propiedad ganadera no implicó la desaparición de la pequeña producción agrícola y que nos encontramos en la provincia de Buenos Aires con una situación económica y social más diversificada que lo que la historiografía hasta entonces había descrito, y que sustenta el excelente desempeño económico de Buenos Aires durante esta etapa.

El cuadro de una Buenos Aires todopoderosa que concentra los beneficios del librecambio y de un interior empobrecido debe también matizarse. Las investigaciones más recientes sugieren situaciones más complejas vinculadas a la reactivación de los viejos circuitos andinos que permiten reavivar las economías del interior. En la región del litoral, las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes buscan orientar su producción ganadera al mercado atlántico, pero experimentan un crecimiento retardado por los efectos devastadores de las guerras civiles en la región y una situación de mayor vulnerabilidad respecto a las políticas fiscales de Buenos Aires. También se pueden observar diferencias entre la provincia de Entre Ríos, que gracias a la expansión de la producción ganadera sobre las tierras orientales vive un crecimiento espectacular a partir de los años treinta, y la vecina Santa Fe, una de las zonas más dinámicas de la economía tardocolonial que será la más afectada por las guerras civiles y que, a diferencia de Entre Ríos, no logra incorporar nuevas tierras sobre las cuales asegurar la expansión de la producción ganadera. Corrientes, con una economía más diversificada pero por la misma razón más afectada por la política librecambista porteña, logra compensar la situación desfavorable de ciertos productos que, como la yerba mate y el tabaco, deben ahora competir con las importaciones brasileñas, con la venta de materias primas y con productos derivados de la producción ganadera.

Las provincias del interior se vieron más afectadas por la dislocación del espacio virreinal dado que sus economías estaban insertas en los circuitos comerciales que alimentaban el mercado minero y buena parte de su producción estaba destinada a ese mercado (principalmente mulas y carretas). Dichos territorios conocerán igualmente mayores dificultades para reorientar su producción hacia el comercio atlántico, y buscarán, con éxitos desiguales, otras opciones regionales. Córdoba, cuya producción mular y de tejidos se vio particularmente perjudicada por la pérdida del Alto Perú logrará, luego de dos décadas de crisis, vincular su economía al mercado atlántico, gracias en buena medida a la expansión de una producción ganadera destinada a la exportación (principalmente cueros, vacunos y ovinos, y lana), sin por ello abandonar la producción para el consumo local y regional. La región de Cuyo encontrará en la vecina Chile, que tiene un crecimiento sustentado en la explotación minera y favorecido por la estabilidad política que impone el régimen de Diego Portales, una salida para la producción agrícola y ganadera regional (vino, aguardiente, ganado en pie) y la posibilidad de acceder a los productos ultramarinos vía el puerto de Valparaíso en el Pacífico. Las provincias del noroeste (Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja) presentan situaciones variadas. Las economías de Salta, Jujuy y Tucumán se orientan hacia el abastecimiento del mercado boliviano, proveyéndose de productos ultramarinos también en este mercado. Esta nueva alineación de la producción regional no es necesariamente un esquema rígido. Tucumán, cuya economía también está orientada hacia el comercio con Bolivia, articula estos circuitos con el mercado atlántico, en donde busca ubicar su incipiente producción azucarera. En todo caso, este rápido panorama de la producción y de los circuitos de comercialización de las economías regionales muestra la complejidad de las diversas situaciones que se resumen en la coexistencia, durante todo este periodo, de espacios económicos bifrontes: uno, dominado por la

moneda de plata boliviana; el otro, por el papel moneda del banco provincial de Buenos Aires. Sin embargo, el mejor desempeño de las economías del litoral genera una transferencia monetaria y de recursos humanos que otorga una indiscutible preeminencia a la región del litoral y en particular a Buenos Aires.

La desintegración del poder central en 1820 no coloca, entonces, a todas las provincias del Río de la Plata en pie de igualdad. Ello tampoco resuelve uno de los problemas que había alimentado la fragmentación territorial. Por un lado, el espinoso problema de la libre circulación de los ríos, exigida por las provincias del litoral fluvial (Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe) para poder acceder al comercio atlántico sin pasar por el puerto de Buenos Aires y negada por esta en nombre de su soberanía sobre el territorio provincial que incluía, según ella, el estuario del Río de la Plata. Por el otro, el estatuto de la aduana de Buenos Aires, que esta también considera bajo su soberanía, pero que implica no solo que las provincias subvencionen la economía bonaerense —los ingresos fiscales por habitante en Buenos Aires son 30 veces mayores que los de la provincia de Tucumán, por ejemplo— sino que somete a las economías del interior a la política impositiva de Buenos Aires, destruyendo, según estas denunciaban, la producción industrial local. Esta situación alimenta una prolongada controversia entre librecambistas y proteccionistas que perdurará a lo largo de todo el siglo, resurgiendo recurrentemente durante cada crisis.

CONSOLIDACIÓN DEL CICLO DE EXPANSIÓN DEMOGRÁFICA

A pesar del costo en recursos materiales y humanos, las guerras civiles no frenan el crecimiento demográfico. A partir de los años veinte, se observa por el contrario una consolidación de las dinámicas demográficas que aparecen desde mediados del siglo XVIII. Las fuentes estadísticas para este periodo son incompletas,

pero los cálculos realizados por Ernesto Maeder, a partir del cruce de datos extraídos de diversas fuentes, muestran que entre 1800 y 1869, fecha del primer censo nacional, la región quintuplica su población. Este importante incremento de la población se debe principalmente a un crecimiento vegetativo, aunque el aporte inmigratorio comienza a hacerse manifiesto a partir de los años treinta y tiene un impacto en la economía hacia mediados del siglo, cuando surgen las primeras colonias agrícolas en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Las cifras agregadas esconden, sin embargo, un importante fenómeno de movilidad espacial de la población. En efecto, la región litoral absorbe desde mediados del siglo XVIII una población oriunda de las regiones del noroeste, atraída por las posibilidades que ofrece el mercado regional en trabajo, pago en metálico y tierras abundantes. Luego de la independencia, este movimiento se verá acrecentado por las dificultades de subsistencia que encontraba la población en las regiones cuya economía estaba orientada a abastecer el mercado andino. Si a comienzos del siglo las provincias del interior concentraban el mayor número de habitantes, cuando se realiza el primer censo nacional la población de las cuatro provincias del litoral (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes) supera el total de los habitantes de las siete provincias del interior (Tucumán, La Rioja, Córdoba, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero). La reestructuración de los mercados regionales en torno al mercado atlántico conlleva así una redistribución regional de la población, contribuyendo las antiguas zonas de poblamiento al crecimiento demográfico de la región litoral.

Las migraciones internan promueven las relaciones interétnicas dentro de un territorio con una población étnica, social y jurídicamente muy heterogénea, compuesta de diferentes grupos indígenas del noroeste andino, del noreste guaraní y del sur pampeano y patagónico; de una población negra; de diferentes grupos mestizos, y de grupos criollos y peninsulares que reivindican la "pureza de sangre". Las migraciones tienen, por lo tanto,

un impacto considerable en las relaciones sociales en las zonas de nuevo asentamiento. Así, en la región bonaerense cohabitan e interactúan, en una estrecha franja delimitada por la frontera indígena y la banda occidental del Río de la Plata, mestizos de origen hispano-criollo, migrantes del interior de diferentes orígenes étnicos y tradiciones culturales, "indios amigos" provenientes de diferentes cacicazgos de indígenas pampeanos, una población africana, libre o aún esclava, que representa, según el censo de 1838, un tercio de la población de la ciudad de Buenos Aires, y un significativo número de comerciantes y trabajadores europeos. En las zonas de frontera, una población criollo-indígena, identificada con el calificativo de "gauchos", participa en un activo comercio de relaciones sociales y de mercancías con las sociedades indígenas que habitan los vastos territorios pampeanos y patagónicos. Comercio que implica el intercambio de mujeres, sea como testimonio de amistad o como botín de guerra, que se da en los dos sentidos a pesar de que las "cautivas" blancas en manos de los "malones" o partidas de indios son mejor conocidas en la literatura histórica —el romanticismo las consagra como heroínas de la civilización— que las cautivas indias —numéricamente mucho más numerosas— en manos de los blancos. La región del litoral de los ríos, principalmente Corrientes y Paraguay, cuenta con una importante población indígena guaraní, principal mano de obra para la producción agrícola-ganadera y que es movilizada durante los múltiples conflictos que estallan entonces. En la región del litoral se observa asimismo, ya para los años treinta, la presencia significativa de una población de origen europeo y mayoritariamente masculina. Si los flujos no son numéricamente importantes respecto al periodo posterior, su impacto en el comercio se hace sentir. Surgen entonces las pequeñas colectividades de ingleses, escoceses, irlandeses, ligures, genoveses, vascos, gallegos, franceses y norteamericanos, vinculados todos ellos al comercio urbano, al comercio fluvial o al de exportación. Podemos considerar que entonces se

inicia el largo ciclo que acabará a mediados del siglo XX, constatando ya en este periodo temprano ciertos patrones que van a confirmarse con las migraciones de masas: la presencia de italianos del norte, particularmente genoveses, de una inmigración española proveniente de las provincias cantábricas y atlánticas (vascos, asturianos y gallegos) y de franceses del suroeste. Los dos primeros grupos nacionales son los que contribuirán masivamente a los flujos migratorios del periodo. A ellos debemos sumarles los irlandeses, que representan un porcentaje mínimo de las corrientes que se dirigen en su mayoría al norte y que ocuparán un lugar apreciable en la cría del lanar. Todo ello difiere de la situación que se encuentra en las provincias del interior andino, de vieja colonización, donde predomina durante todo el periodo una sociedad fuertemente jerarquizada, en la cual la población indígena sigue siendo sometida a las mismas formas de explotación y de relaciones de dependencia repudiadas por la revolución.

LA REVOLUCIÓN Y LA PROPULSIÓN DE UNA CULTURA ILUSTRADA LAICA EN EL RÍO DE LA PLATA

La creación del virreinato del Río de la Plata eleva a Buenos Aires a la condición de capital virreinal que cuenta, como pudimos apreciar, con condiciones naturales óptimas para el desarrollo del librecambio, tan reclamado por los sectores ilustrados criollos. No obstante, la ciudad-puerto está lejos de poder igualar a las otras capitales virreinales en instituciones culturales, educativas o artísticas. La "ciudad" se reducía entonces a un bloque de 10 manzanas, con construcciones rudimentarias y una vida social de aldea, aspecto que según los propios actores siguió caracterizándola hasta los años ochenta. La oferta educativa era escasa y estaba en manos de la iglesia o de establecimientos privados, aunque ya hacia fines del siglo XVIII vemos surgir

las primeras escuelas para varones, dependientes de los cabildos. Pero estas eran escasas y su impacto limitado a ciertas ciudades principales. Ello no impidió el desarrollo de un sector letrado, formado en las universidades de Córdoba y de Charcas y que fue un importante agente de difusión del pensamiento ilustrado en el siglo XVIII. La revolución introdujo, con el nuevo plan de estudios diseñado por el deán Gregorio Funes y aprobado en 1813, cambios importantes en el sistema de enseñanza. Este buscaba formar a jóvenes capaces de responder a las nuevas competencias requeridas por la revolución, acrecentadas con la multiplicación de instancias administrativas y políticas.

Los sectores letrados, entre los cuales debemos destacar la presencia de un clero secular ganado a las nuevas ideas del siglo, tendrán un papel destacado durante las primeras décadas de la revolución. Los veremos asumiendo importantes funciones en las variadas instancias gubernativas y también desempeñar un papel de primer orden en la difusión de una nueva cultura política, por medio de la participación en publicaciones periódicas destinadas tanto a informar como a formar opinión. La relación entre las nuevas instancias gubernativas y la instauración de nuevos espacios de comunicación pública será establecida desde los primeros momentos de la insurrección, cuando la Junta Gubernativa ordena, al poco tiempo de su constitución, la creación de la *Gaceta de Buenos Aires,* propuesta tanto como órgano destinado a comunicar las decisiones de gobierno que como instancia de legitimación democrática de las nuevas autoridades públicas.

Durante el gobierno de Rivadavia se toman varias iniciativas que tienen como propósito desarrollar la educación pública, promover nuevos métodos pedagógicos como los que ofrecían las Sociedades Lancasterianas y desarrollar instituciones de enseñanza para mujeres; tarea esta última que queda a cargo de la Sociedad de Beneficencia. Este impulso de la educación pública tendrá efectos evidentes en la ciudad de Buenos Aires pero también en otros estados provinciales. En los años veinte funcionan en Bue-

nos Aires y en Córdoba dos colegios secundarios que abrían el acceso a la Universidad, experiencia que se extiende luego a otras provincias. La Universidad de Córdoba, fundada en la época colonial por la Compañía de Jesús, queda en los años veinte bajo la autoridad de la provincia de Córdoba. En este marco se funda en 1821, por iniciativa del presbítero Antonio Sáenz, la Universidad de Buenos Aires, organizada por departamentos (Primeras letras, Estudios preparatorios, Medicina, Ciencias exactas, Jurisprudencia y Ciencias sagradas). El plan de estudios refleja las prioridades del nuevo Estado que implican la institucionalización de ciertos saberes que posteriormente se erigen en saberes de Estado. La creación de la Universidad se asocia a medidas de promoción de la ilustración pública que inspiran, entre otras cosas, la creación de nuevas asociaciones culturales. Entre ellas destaca La Sociedad Literaria en 1822, definida como "sociedad de amigos de la provincia", que retoma en buena medida los objetivos de las Sociedades de Amigos del País que se habían desarrollado hacia fines del siglo XVIII, pero que adquieren ahora una nueva dimensión política. No se trata solo de propagar la Ilustración sino de informar y formar opinión mediante publicaciones periódicas. La sociedad editará dos periódicos durante su corta existencia, *El Argos de Buenos Aires* y *La Abeja* que tienen un papel significativo en la constitución de una esfera pública literaria.

La llegada de Rosas al poder, investido con la suma del poder público en 1835, no modifica inmediatamente este panorama, aunque durante su gobierno la libertad de prensa será restringida, las asociaciones más controladas y el financiamiento de instituciones culturales y educativas reducido sensiblemente. Hacia fines de los años treinta la disminución constante de los recursos destinados a las escuelas públicas provocará la decadencia de las mismas. No nos encontramos sin embargo con el "desierto educativo" denunciado por la oposición rosista puesto que por entonces se desarrollan en la ciudad pequeños establecimientos privados de enseñanza destinados, claro está, a los sectores altos

y medios de la población. Durante el primer y segundo gobierno de Rosas, vemos por otro lado surgir y consolidarse la primera promoción de intelectuales rioplatenses que la historiografía argentina conoce como la Generación del 37. Muchos de estos jóvenes —pocas personalidades femeninas descollarán, salvo la figura tutelar de Mariquita Sánchez de Thomson, madre de uno de los miembros de la generación y cuyas tertulias eran uno de los lugares obligados de la sociabilidad patricia porteña— habían sido formados en las escuelas públicas rivadavianas y habían pasado por las aulas de la flamante Universidad de Buenos Aires. En torno a este mundo estudiantil surge un movimiento literario, de inspiración romántica, que busca romper con los cánones del neoclasicismo imperante y al mismo tiempo prolongar la gesta independentista mediante la elaboración de una nueva agenda para la emancipación cultural, destinada a promover una producción inspirada en "las condiciones del tiempo y del espacio". Destaca entre ellos la figura emblemática del poeta Esteban Echeverría quien, de regreso de una prolongada estadía en Francia, difunde entre los jóvenes las nuevas corrientes literarias. La proscripción del movimiento romántico está vinculada al carácter claramente político que este toma en el año 1838, cuando la Sociedad Literaria se transforma en Joven Argentina. De inspiración mazziniana y con con una fuerte impronta del socialismo utópico, los jóvenes se proponen finalizar la obra iniciada por los próceres de la independencia —los llamados "prohombes de Mayo"— con el desarrollo de nuevos vínculos sociales —la asociación fourierista— que concluirían la gesta emancipadora por medio de la creación de una nueva sociedad fundada en vínculos contractuales y solidarios. El gobernador de Buenos Aires, que según estos jóvenes debería reconocer en la asociación un inigualable instrumento de transformación social, ordena a Vicente López y Planes, prohombre de Mayo y padre de uno de los miembros de la asociación, hacer entrar en razón a estos pretenciosos imberbes so pena de expulsión. Muchos de estos jóvenes

desempeñarán un papel político de primer orden en la oposición al régimen rosista, organizando la resistencia primero en el territorio de la Confederación, tanto en Buenos Aires como en Cuyo y en Córdoba, luego desde el exilio, concentrándose en un primer momento masivamente en la vecina ciudad de Montevideo y luego trasladado en su mayoría a Chile y en menor medida a Bolivia y Brasil. Entre estas figuras, destacan dos futuros presidentes de la república, Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre, e importantes intelectuales y hombres políticos como Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Vicente Fidel López, Mariano Fragueiro, Félix Frías y Guillermo Rawson.

La acción político-cultural emprendida por esta generación, en buena medida desde "la provincia flotante" como califica Alberdi en 1873 el territorio de la emigración política, tendrá un papel fundamental en la formulación de los diferentes proyectos políticos posrosistas. De hecho, muchas de las obras que servirán de inspiración al proyecto político nacional serán publicadas durante el exilio. Entre ellas podemos destacar el *Facundo* (1845) y *Los viajes* (1847), de Sarmiento, y las *Bases y Puntos de partida* (1852), de Alberdi. La común oposición a Rosas no impide la división del exilio argentino alrededor de Alberdi que defiende el proyecto federalista del primer presidente de la Confederación Argentina, Justo José de Urquiza; de Sarmiento que apoya junto con Mitre la iniciativa de organización nacional emprendida desde Buenos Aires, y de Frías que será uno de los iniciadores junto con Thompson de la organización del movimiento del laicado que convergerá hacia los años ochenta en las primeras iniciativas de organizar un partido político católico.

Las disensiones en el marco de nuevas prácticas asociativas tuvieron un efecto multiplicador de las iniciativas culturales con un claro impacto en las políticas educativas. La sociabilidad "culta", como la califica Sarmiento en el *Facundo*, estaba destinada a desarrollar un espíritu público que requería ser acompañado por una firme política educativa popular, proyecto que será

firmemente defendido por Sarmiento durante el periodo posterior y con resultados que ya comienzan a hacerse manifiestos. Las primeras cifras sobre alfabetización datan del primer censo nacional de 1869. Entonces, casi 24% de los habitantes mayores de siete años estaban alfabetizados (entre los cuales, solo se encuentra 18% de las mujeres) cifras muy altas en el contexto latinoamericano. Estas son aún más significativas para Buenos Aires donde ya en el censo de 1855 se registran 55% de alfabetizados, entre los cuales 52% corresponde a las mujeres.

LA ORGANIZACIÓN NACIONAL

La Constitución federal de 1853, inspirada en el proyecto que publica en 1852, en el exilio, el jurista Juan Bautista Alberdi, es el producto de un acuerdo entre los grupos liberales y la coalición de provincias del litoral encabezadas por Justo José de Urquiza. Este compromiso federal-liberal de 1853 logra generar un amplio consenso que explica la sorprendente longevidad de un texto que asegura una significativa continuidad institucional en la región y permite perpetuar durante todo el periodo una tradición jurídica liberal. Ese consenso en torno a lo que Natalio Botana define como un principio de legitimidad y una fórmula prescriptiva destinada a dar vida a un proyecto de nación, fue un importante instrumento utilizado por los aún frágiles gobiernos nacionales para imponer la autoridad del Estado federal sobre el conjunto de las provincias. Puesto que, aunque la Constitución adopta la forma republicana representativa federal, siguiendo en buena medida el modelo que ofrecía la Constitución de Estados Unidos de 1787, tiene, respecto a su prestigioso modelo, una orientación más marcadamente centralista, fundada en las atribuciones que se reconocen al Estado federal. Los 30 años que transcurren entre la promulgación de la Constitución de 1853 y la definitiva resolución de la “cuestión capi-

tal", con la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880, se caracterizan por el paulatino avance del poder central sobre los autonomismos provinciales.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN RÉGIMEN POLÍTICO NACIONAL

En 1851 el caudillo federal de Entre Ríos, Justo José de Urquiza retira la delegación de relaciones exteriores a Rosas por medio de un "pronunciamiento" en que declara que la provincia de Entre Ríos reasume el ejercicio de las facultades delegadas en Buenos Aires entre tanto se organizara constitucionalmente la república. Menos de un año después, en febrero de 1852, se enfrentan en los campos de Caseros las fuerzas del ejército aliado encabezado por Urquiza con al ejército de Rosas, sellando con la derrota de este último la suerte de la Confederación rosista. Urquiza ingresa triunfalmente a Buenos Aires e incita las diferentes provincias a convocar una asamblea constituyente con el objetivo de promulgar la tantas veces postergada constitución que garantice definitivamente la unidad. Si la opción por un régimen federal había adquirido un amplio consenso entre las élites provinciales, incluyendo la de Buenos Aires, la dirigencia de esta última se resiste a someterse a la autoridad de la Confederación bajo el mando militar de Urquiza, quien luego de ser loado como liberador de Buenos Aires será acusado por Sarmiento en su *Campaña en el ejército grande* de ser el más espantoso heredero del tirano Rosas y del caudillaje que este mismo denunciara en su *Facundo, o civilización y barbarie*.

Ante la oposición porteña, Urquiza decide intervenir militarmente, asumiendo el gobierno de la provincia y decretando en agosto de 1852 la nacionalización de la aduana de Buenos Aires. Con estas medidas logra lo que los porteños no habían conseguido por sí mismos: la unión de las diferentes facciones políticas, ahora movilizadas contra la ocupación del "caudillaje"

del interior. La "gloriosa revolución" del 11 de septiembre de 1852 emprendida por los porteños contra la aún rudimentaria autoridad nacional que el acuerdo de San Nicolás otorgaba a Urquiza, inicia el proceso de secesión de la provincia de Buenos Aires al retirar esta sus representantes de la convención constituyente reunida en Santa Fe. En 1853, las 13 provincias firman la Constitución de la Confederación Argentina que instaura una república representativa y federal e instala a las autoridades federales en la ciudad de Paraná, en la vecina provincia de Entre Ríos. En Buenos Aires, el gobernador Pastor Obligado convoca a un congreso constituyente que promulga en mayo de 1854 la Constitución del Estado de Buenos Aires.

Las antiguas Provincias Unidas del Río de la Plata disponen de dos gobiernos constitucionales que se reclaman de la "nación argentina". En la Confederación Argentina, los resultados de las primeras elecciones nacionales llevan a José de Urquiza a ocupar la presidencia de la Confederación en 1854. Pero la unidad es precaria. La promulgación de un texto fundamental no pone fin al antiguo sistema político fundado en el equilibrio de alianzas personales entre diferentes poderes regionales, poco dispuestos a someterse a una nueva autoridad federal por el simple hecho de que era una emanación del nuevo orden constitucional. La fuerza no ha perdido su poder persuasivo y, para imponer la autoridad de la Confederación en el conjunto del territorio, Urquiza necesita recursos para financiar un ejército. Ahora bien, con la "gloriosa revolución" del 11 de septiembre de 1852, Buenos Aires había recuperado la aduana y los beneficios de la recaudación impositiva del comercio atlántico. Sin estos recursos era muy difícil para Urquiza sentar las bases de una autonomía financiera sobre la cual sustentar la autoridad de la Confederación. Para solventar esta difícil ecuación, Urquiza creó el Banco Nacional de la Confederación con la misión de recaudar impuestos y captar los ahorros de los particulares con la oferta de intereses atractivos. La experiencia fue un fracaso y Urquiza tuvo

que recurrir a empréstitos para hacer frente a los gastos de la nueva estructura burocrático-militar. El incremento de la deuda fue un elemento fuertemente desestabilizador tanto para las relaciones entre Buenos Aires y la Confederación como para la viabilidad del proyecto político de la Confederación que fracasó por no lograr asegurar al Estado una base económica estable.

Durante los primeros años, la cohabitación entre Buenos Aires y la Confederación es tensa pero se logra evitar el enfrentamiento armado gracias a un acuerdo de *statu quo* pactado entre las partes. En 1855 se firma un tratado que reconocía la unidad del sistema mercantil autorizando la circulación libre de productos en ambas jurisdicciones y acordando que las mercaderías extranjeras salidas de los puertos del estado de Buenos Aires para la Confederación, o viceversa, no pagarían mayores derechos que los impuestos a los productos provenientes de otros mercados. Pero las intrigas se multiplican y los dos poderes libran a una ruda competencia por el reconocimiento internacional de la autoridad nacional que ambos dicen representar: Buenos Aires, en nombre de la escasa viabilidad económico-financiera de la Confederación; la Confederación, en nombre de la autoridad que le concede el texto constitucional. Ello da lugar, incluso, a una escisión de la masonería entre el Gran Oriente de la República Argentina, creado en Buenos Aires en 1856, y el Gran Oriente para la Confederación que en 1857 proclama la "independencia de la francmasonería argentina" y se instala en Paraná. Con ambas autoridades masónicas se busca consolidar los apoyos diplomáticos para uno y otro gobiernos con los cuales imponerse como única alternativa política nacional.

En 1856 ambas partes se preparan para un enfrentamiento bélico que tendrá lugar en 1859 en el campo de Cepeda, donde las tropas de Buenos Aires al mando de Bartolomé Mitre fueron derrotadas. El 11 de noviembre se firma el armisticio por el cual Buenos Aires se declara parte de la Confederación comprometiéndose a jurar la Constitución Nacional de 1853. Urquiza

acepta en contrapartida el principio de convocación de una convención provincial destinada a examinar el texto constitucional. La integridad territorial de Buenos Aires queda garantizada pero los porteños deben aceptar que la aduana pase a la esfera nacional una vez que la provincia se incorpore oficialmente a la nación. El acuerdo dio lugar a un primer clima de entusiasmo, rápidamente ensombrecido por las rivalidades que alimentaron las enemistades y disidencias entre el nuevo presidente de la Confederación, Santiago Derqui, el ex presidente y jefe del ejército de la Confederación, Justo José de Urquiza, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Bartolomé Mitre. En septiembre de 1861 los ejércitos de Buenos Aires —dirigidos por Bartolomé Mitre— y los de la Confederación —bajo el comando de Justo José de Urquiza— volvieron a enfrentarse en los campos de Pavón. El inexplicable abandono del campo de batalla de Urquiza —que algunos explican por un acuerdo previo entre hermanos masones— otorgó la victoria política y militar a Mitre, y selló la suerte de la Confederación Argentina. Las autoridades federales se trasladan a Buenos Aires donde la política nacional, ahora bajo control de los liberales mitristas porteños, adquiere tintes más centralizadores. Las tres primeras presidencias —Bartolomé Mitre (1862-1868), Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880)— marcarán el ocaso del federalismo de tradición confederativa y constituirán una etapa importante del proceso de construcción de un Estado nacional resumido por Nicolás Avellaneda al finalizar su presidencia con la sentencia: "Nada hay en la nación superior a la nación misma".

LA CONQUISTA DEL NUEVO ORDEN

El 25 de mayo de 1862, exactamente 52 años después de la formación de la Junta Gubernativa en Buenos Aires, se inician las cesiones del Congreso Nacional en Buenos Aires. Durante la

primera década de gobierno nacional, Mitre y luego Sarmiento deben hacer frente a una serie de rebeliones contra el nuevo orden establecido en Buenos Aires. Ya antes de asumir oficialmente la presidencia de la nación, en octubre de 1862, ciertos caudillos y gobernadores provinciales federales desafían al jefe del liberalismo porteño y ahora presidente de la nación, Bartolomé Mitre. En La Rioja estalla una primera rebelión federal encabezada por un próximo discípulo de Facundo Quiroga, Vicente Peñaloza, apodado "El Chacho". Ello reactiva el viejo reflejo de coaliciones provinciales contra Buenos Aires que persuade a Mitre de abandonar la vía de las negociaciones para optar por la solución militar. El Chacho es vencido y ejecutado en 1863, pero la situación está lejos de quedar bajo el control de la autoridad federal. La respuesta del gobierno nacional a las diferentes rebeliones confirma los recelos que creaba en las provincias federales el gobierno nacional en manos de Buenos Aires. Las resistencias también vendrán de los sectores autonomistas porteños que en defensa de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires se enfrentarán a las autoridades nacionales. Cierto es que la "ley de compromiso" promulgada en octubre de 1862 había intentado resolver provisionalmente este problema otorgando al ejecutivo nacional jurisdicción sobre el municipio de Buenos Aires, con el fin de evitar que las autoridades nacionales quedasen cautivas del gobierno provincial que ejercía su jurisdicción sobre la ciudad de Buenos Aires. Pasado los cinco años de vigencia de este compromiso, la "cuestión capital" vuelve a atizar los conflictos entre los grupos autonomistas porteños y las autoridades nacionales residentes en la ciudad, dirimidos finalmente con la revolución de 1880 que pondrá término al problema de la capital con la federalización de la ciudad de Buenos Aires.

La conquista del nuevo orden bajo la autoridad nacional también pasará por una reconfiguración de alianzas regionales que comprometerán a Mitre en la guerra del Paraguay (1865-1870). Las distintas corrientes historiográficas han dado versio-

nes encontradas sobre los orígenes y motivaciones de una guerra que incluyó a cuatro países cuyas historias intrincadas se remitían a la dislocación del territorio virreinal y a los conflictos primero con Portugal y luego con el imperio de Brasil por el control de la ladera oriental del Río de la Plata. Son las injerencias de los gobiernos de Brasil, Argentina y Paraguay en la guerra civil de Uruguay las que, a través de un juego de alianzas y de intereses, conducen al tratado de la Triple Alianza firmado por Argentina, Brasil y Uruguay contra el régimen paraguayo de Francisco Solano López. El conflicto tiene un impacto devastador para Paraguay, que pierde más de la mitad de su población, pero también tiene repercusiones negativas para los "vencedores". En Argentina, el reclutamiento de contingentes para la guerra provoca levantamientos populares, en particular en las provincias del litoral, cuya población se identificaba más con el régimen amigo de Solano López que con el ancestral enemigo luso-brasileño, contra el cual muchos de esos hombres se habían enfrentado durante la guerra en la Banda Oriental. La resistencia al reclutamiento se hizo sentir hasta en la región de Cuyo, en tierras del Chacho, donde un grupo de hombres encabezados por Aurelio Zalazar se levantaron en 1865 contra las levas destinadas al ejército del Paraguay. Al poco tiempo estalló una nueva rebelión federal, liderada por otro lugarteniente del Chacho, Felipe Varela: la "revolución de los colorados", último alzamiento federal del interior que buscaba "liberar" las provincias de Cuyo, La Rioja y Catamarca derrocando al gobierno nacional de Mitre. Esta rebelión fue, como las precedentes, reprimida por las armas en 1867.

La elección de presidente sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento puede igualmente considerarse como una consecuencia de la guerra del Paraguay. En efecto, el conflicto debilita las alianzas de Mitre con las provincias, lo que permite al jefe del autonomismo porteño, Adolfo Alsina, con el apoyo de ciertos gobernadores del interior descontentos con la política de Mitre, proponer la fórmula Sarmiento-Alsina a fin de coartar la preeminencia del

partido mitrista. La política de Sarmiento no difiere sin embargo de la de Mitre. Como su predecesor, este busca imponer la autoridad nacional en el conjunto del territorio. Durante su mandato debe también hacer frente a los últimos levantamientos liderados por Varela en las provincias del norte y a la inestabilidad política que provoca en la vecina provincia de Entre Ríos el asesinato de Justo José de Urquiza en 1870. Como su predecesor, decide utilizar el artículo 6° de la Constitución para intervenir en la provincia y reprimir militarmente a las rebeliones de López Jordán en Entre Ríos y de los hermanos Taboada en Santiago del Estero en 1871 y 1873. Sarmiento termina su mandato reprimiendo una revolución en la provincia de Buenos Aires, encabezada ahora por el ex presidente Mitre que impugna los resultados de la elección que proclamó a Nicolás Avellaneda como nuevo presidente de la nación. Esta candidatura había sido apoyada por una nueva coalición, el PAN (Partido Autonomista Nacional), que reunía al autonomismo porteño y a los gobernadores de provincia. Arguyendo fraude, Mitre rechaza por las armas el resultado de una negociación política que lo excluía. Sarmiento moviliza al ejército nacional pero no interviene la provincia, indicio de que las relaciones de fuerza no eran aún favorables a la nación. Nicolás Avellaneda, originario de la norteña provincia de Tucumán, asume la presidencia de la nación en este particular contexto de tensión entre la provincia de Buenos Aires y la nación. Su presidencia concluye como había comenzado, con la movilización del ejército nacional contra una nueva insurrección en Buenos Aires, esta vez encabezada por el gobernador de esta provincia y candidato a la presidencia de la nación, Carlos Tejedor. Ello da lugar a la primera intervención federal en Buenos Aires y a un sangriento combate en las puertas de la ciudad que impone por la fuerza la resolución de la cuestión capital, federalizando la ciudad de Buenos Aires en 1880. Se cierra con ello un ciclo político abierto con la integración de Buenos Aires a la Confederación argentina que se caracteriza por el progresivo abandono de la tradición

confederativa que el federalismo de Urquiza encarnaba y el borrascoso avance de la centralización nacional, utilizando para ello dos de los instrumentos que la Constitución de 1853 otorgaba: la posibilidad de intervención federal de las provincias díscolas y la imposición de una autoridad nacional gracias al monopolio de la fuerza que la nación no duda en ejercer para acabar con las tentativas insurreccionales de los viejos reflejos federales. Así, durante el periodo se contabilizan nada menos que 26 intervenciones federales y 15 declaratorias de Estado de Sitio.

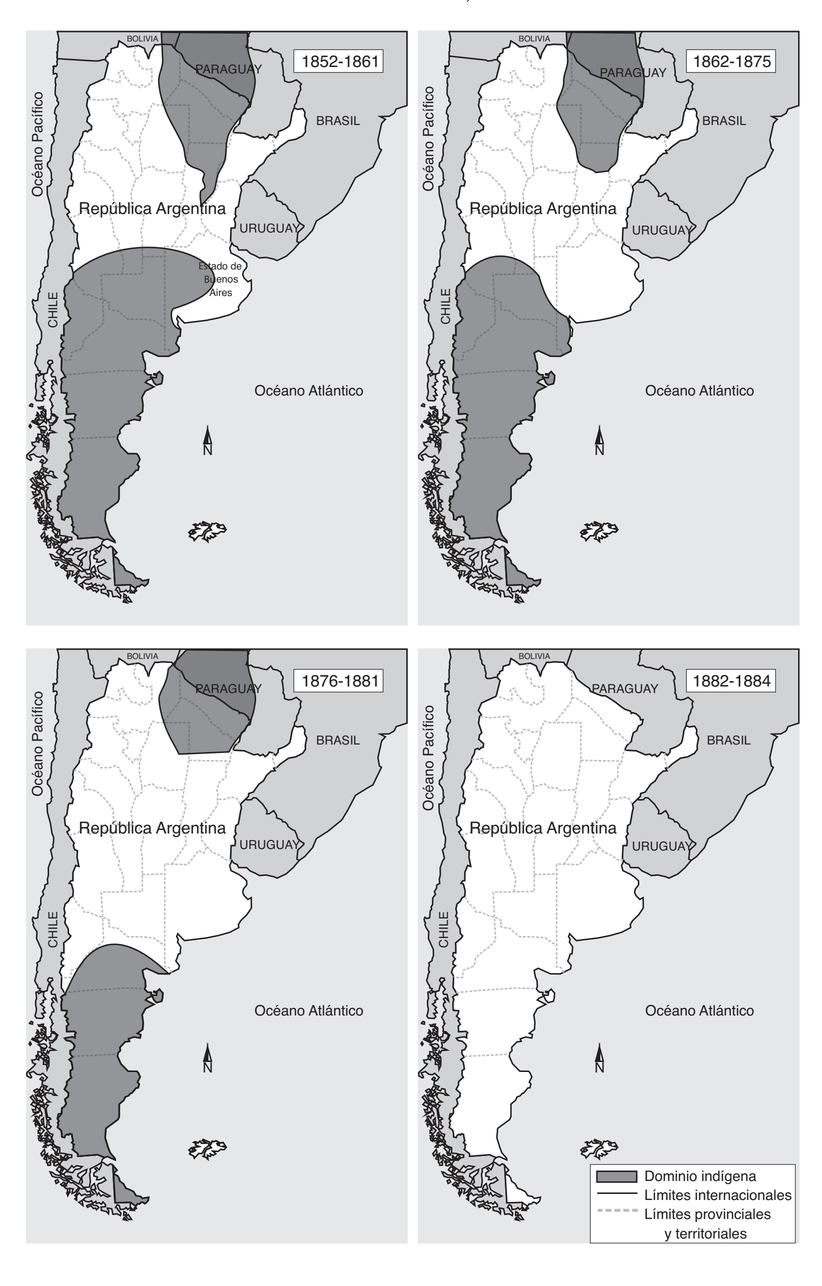
EL AVANCE TERRITORIAL

La conquista del orden destinado a garantizar el progreso implica integrar nuevas tierras al sistema productivo y acabar al mismo tiempo con la inseguridad que comporta la amenaza indígena para los productores locales. Hasta los años setenta los conflictos internos y externos habían monopolizado lo esencial de las tropas nacionales y provinciales, pero finalizada la guerra del Paraguay y derrocadas las últimas resistencias "coloradas" encabezadas por Felipe Varela, se inicia una política de expansión de la frontera noreste, con el fin de ocupar los territorios del Chaco boreal que según lo estipulado en el acuerdo de la Triple Alianza pasaba al dominio argentino. En 1872, Sarmiento crea la gobernación del Chaco y emprende una serie de campañas militares contra los indígenas de esa provincia, que continúan a lo largo de las presidencias de Avellaneda y Julio A. Roca, y que acaban en 1884 con las últimas resistencias ofrecidas por los grupos tobas y chiriguanos, que quedan desde entonces sometidos al Estado nacional.

Pero la preocupación más apremiante para el gobierno prevenía de la frontera sur, territorio de diferentes grupos indígenas: pampas y ranqueles al norte del río Colorado, pehuenches y manzaneros entre el río Colorado y el río Negro y tehuelches al

sur. Los diferentes gobiernos provinciales y luego nacionales habían alternado políticas de acuerdos destinadas a estabilizar la frontera mediante alianzas con "indios amigos", con otras que buscaban un avance de la frontera por medio de campañas militares. En algunos momentos, estas dos iniciativas fueron asociadas, como fue el caso de la política llevada a cabo por Juan M. de Rosas y que le permitió alcanzar el valle del Río Negro. En otros, aparecían como alternativas a la resolución de la "cuestión indígena", como ocurrió con los dos proyectos que durante la presidencia de Avellaneda defendieron sucesivamente Adolfo Alsina, ministro de Guerra entre 1874 y 1877, en favor de un sistema defensivo y Julio A. Roca que luego de la muerte de Alsina logró imponer una política ofensiva fundada en la tesis de la legitimidad que otorgaba la civilización sobre las tribus salvajes. La historiografía argentina ha avanzado considerablemente en el estudio de las sociedades indígenas, permitiendo explicar mejor los acontecimientos por medio de una doble mirada del conflicto que pone en evidencia las estrategias políticas de los indígenas destinadas a garantizar una convivencia pacífica y lucrativa con los blancos y el impacto que tiene el sistema de "indios amigos" en la concentración de poder en grandes cacicazgos así como el papel que ello tiene en el triunfo militar del ejército argentino. La campaña del "desierto" —término con el que entonces, y hasta hoy día, se denomina a los territorios indígenas— fue emprendida por Roca en 1879 y concluida por el general Conrado Excelso Villegas en sus sucesivas campañas al Nahuel Haupi, quien acabará en 1885 con la última resistencia ofrecida por el cacique Sayhueque. Dicha campaña tuvo un efecto devastador sobre las sociedades indígenas, que fueron diezmadas por la guerra y las enfermedades y desposeídas de sus territorios. El triunfo de "la civilización" sobre "la barbarie" valida entonces sin mayor problema lo que el inspirador de la Constitución argentina, Juan B. Alberdi justifica como una legítima utilización del derecho de conquista (civilizatoria) heredado de la corona española.

Formación territorial, 1852-1884



El escarpado camino hacia una política económica nacional

Vimos que la integración de Buenos Aires a la nación en 1862 resuelve el problema de los ingresos fiscales del Estado nacional gracias a la nacionalización de la aduana que se convierte en un elemento clave de las finanzas estatales. El gobierno nacional debió sin embargo asumir la importante deuda que había dejado el gobierno de la Confederación durante sus 10 años de existencia, en un contexto de aumento de los gastos nacionales vinculados al mantenimiento del orden interno, a la participación en la guerra del Paraguay y en la guerra contra las sociedades indígenas. De modo que, aunque los ingresos del Estado crecen paralelamente a la expansión del comercio exterior, el déficit aumenta durante todo el periodo. Si al comienzo de la unificación nacional este representa solo 1.6% de las rentas nacionales, en 1871 suma 11.6% para alcanzar 25.6% en 1882. Y el problema mayor que encuentran aquí los artífices de la unidad nacional reside en las propensiones autonomistas de la provincia de Buenos Aires. En efecto, la consolidación del Estado nacional requería que este impusiera el monopolio de la emisión de dinero y de la deuda en un contexto de ausencia de unidad monetaria y en el que el Banco de la Provincia de Buenos Aires tenía de hecho el predominio monetario. Mitre intenta en 1863 nacionalizar este banco pero con muy escaso éxito. Casi 10 años de inestabilidad financiera más tarde Sarmiento funda el Banco Nacional, cuyo objetivo es completar la unificación nacional mediante el monopolio de la emisión de moneda. Los efectos de la crisis bancaria de 1873 fueron devastadores para la iniciativa sarmientina y la devaluación de la moneda —que lleva a Avellaneda a decretar la inconvertibilidad en 1876— puso al Estado nacional al borde del *default*. Ello no solo hizo más frágil el proyecto de monopolización por parte del Estado central de la emisión de moneda y emisión de la deuda, sino que tuvo

el efecto contrario al buscado, consolidando el poder monetario y fiscal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Durante todo este periodo, el gobierno nacional financia el déficit con la contratación de empréstitos, tanto internos como externos. Cierto es que el contexto mundial lo facilitaba. Las economías del Atlántico norte contaban con una importante acumulación de capital en disponibilidad que colocan en inversiones directas o en préstamos otorgados, en este caso, al Estado nacional que lo utiliza masivamente para financiar los gastos del mantenimiento del orden interno y del pago de la deuda. Los datos estadísticos disponibles muestran cómo crece durante todo el periodo el peso de la deuda: en 1870 representa alrededor de 60% del comercio exterior y supera en 1882 el total de las transacciones. La situación financiera caótica va a prolongarse hasta la crisis de 1891 y tendrá un impacto considerable en la economía argentina, tanto en el nivel económico como en el político. Pero ello no impide, como vimos, un desarrollo de la producción y la exportación de la producción ganadera que permite, a su vez, el enriquecimiento de los productores y mejorar las condiciones de vida de los sectores medios urbanos y rurales, estimulando de esta manera las migraciones internas y las migraciones internacionales.

ECONOMÍA PRODUCTIVA Y COMERCIO INTERNACIONAL

Desde el punto de vista de la economía productiva se prolongan y consolidan los principales rasgos del periodo anterior: producción ganadera en la región del litoral —orientada a la producción de cueros y carne salada, a la que se agregan a finales de los setenta las primeras experiencias de exportación de carne congelada que tendrá un gran desarrollo en el periodo posterior— y un formidable incremento de la producción ovina con predominio de la producción y exportación de lana. Las economías del interior se mantienen gracias a circuitos andinos y pa-

cíficos, y se verán estimuladas, sobre todo las del oeste, por el *boom* californiano. Podemos destacar dos novedades importantes que anuncian y preparan el proceso expansivo de los años ochenta. Por un lado, el desarrollo de los transportes terrestres y fluviales que tendrán un impacto considerable sobre la producción y la comercialización de la producción ganadera. En efecto, durante este periodo se construyen 2 516 km de vías de ferrocarriles que permiten vincular los lugares de producción con los puertos de Buenos Aires y Rosario, y en el transporte fluvial se introducen los buques a vapor, instalaciones esenciales para la producción ganadera del litoral en plena expansión. Todo ello contribuye al desarrollo de una producción agrícola, promovida por la creciente demanda interior vinculada al crecimiento de los centros urbanos que los transportes permiten abastecer. La segunda novedad proviene del desarrollo de colonias agrícolas que introducen importantes cambios en la estructura productiva, como veremos posteriormente. Esta situación facilita el desarrollo de una economía capitalista en la región pampeana, conformándose durante el periodo un mercado de tierras —mediante un complejo proceso de transferencia de las tierras públicas a manos privadas—, un mercado de trabajo y un conjunto de empresas productivas gracias a la apertura de más de 400 000 km^2 de tierras laborables en el sur de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe y en Córdoba. En el interior predomina una producción diversificada que se destina a los mercados de Chile y Bolivia.

EXPANSIÓN DE LA PRODUCCIÓN GANADERA Y CONSOLIDACIÓN CAPITALISTA

La década de los cincuenta, cuando, como vimos, proliferaron los conflictos y enfrentamientos armados, conoce un contexto internacional particularmente favorable para la producción ga-

nadera, como el que ofrece la guerra de Crimea al provocar un alza de los precios de la lana sucia y del sebo. La exportación de la producción ganadera tradicional se mantiene entonces gracias a la demanda de cueros de Gran Bretaña y Francia y de carne salada (tasajo) que se colocan en los mercados esclavistas aún existentes en Brasil y en el Caribe. Pero a esta coyuntura favorable de los años cincuenta sigue, hacia fines de la década, una caída de los precios internacionales del cuero y del tasajo. El consumo interno de carne bovina permite compensar en algo la disminución de la demanda de los mercados externos, pero la producción no se recompone hasta la implantación de la industria frigorífica y las inversiones destinadas al mejoramiento del ganado que se introducen paulatinamente durante esta etapa. En medio de este contexto desfavorable, los productores comienzan a reorientar su actividad hacia el ganado lanar, iniciando un incremento espectacular de la producción ovina, conocida como el "*boom* del lanar", que casi cuadriplica el número de ganado ovino en 30 años, pasando de 15 millones de cabezas a 57 millones en 1881. Para los años setenta la exportación de lana al mercado mundial supera la de cueros y carne salada. Pero incluso esta expansión se vio afectada por varias crisis internacionales, entre ellas la de 1866 que tuvo un fuerte impacto sobre el precio de la lana, provocando una disminución de 50% de las exportaciones de este producto. Ello provocó descontento entre los productores ovinos que comienzan a cuestionarse el modelo de desarrollo ganadero-exportador y a exigir medidas para proteger y desarrollar una industria textil local, reactivando con ello el debate entre liberalismo-proteccionismo que recorre todo el siglo XIX, y cuyos ecos podemos rastrear hasta el día de hoy. En este contexto un grupo de terratenientes impulsa la creación de la Sociedad Rural Argentina con el propósito de modernizar la producción y consolidar una clase terrateniente que sea políticamente más activa, procurándose por medio de esta organización los medios de influir en las políticas económi-

cas nacionales. Si el impacto de la Sociedad Rural Argentina durante la primera época fue limitado —aunque logra en 1870 que los derechos aduaneros sean reducidos a 2% en 1870—, la incidencia de los terratenientes en la política se confirma con la llegada de Roca al poder en 1880.

LA COLONIZACIÓN AGRÍCOLA

El espectacular desarrollo de la producción ganadera se asoció a una incipiente producción agrícola, orientada hacia el mercado interno. Aunque los proyectos de desarrollo de colonias agrícolas fueron menos exitosos en Buenos Aires que en las vecinas provincias del litoral, el crecimiento demográfico de la región y, en particular, el de la población de Buenos Aires incentivó la producción agrícola, facilitada por la construcción en 1857 del primer tramo del ferrocarril Oeste en la región, que permitió vincular la ciudad y el puerto de Buenos Aires con su campaña cercana que estaba ya en condiciones de abastecer a la cada vez más numerosa población de la ciudad. Hacia 1870, la producción local ya había logrado sustituir las importaciones de harina de trigo proveniente de Chile y de Estados Unidos.

En el litoral, la provincia de Santa Fe, que como vimos había tenido un mal desempeño durante la primera mitad del siglo XIX debido al impacto negativo de las guerras civiles y a las dificultades para integrar nuevas tierras al proceso productivo, resolvió este último problema con la incorporación de territorios indígenas, multiplicando por más de cuatro el territorio de la provincia en la década de los sesenta. Esto se dio junto con un acelerado proceso de transferencia de tierras hacia manos privadas y el desarrollo de las primeras colonias agrícolas acompañadas por la formación de pequeñas y medianas propiedades rurales. Todo ello anunció el surgimiento de sectores medios rurales y el crecimiento de dos centros urbanos: Santa Fe, la capital de la pro-

vincia, y el puerto de Rosario, que vincula la economía del interior con el puerto de Buenos Aires por vía fluvial. Las vecinas provincias de Entre Ríos y Corrientes consolidaron la expansión ganadera en la zona oriental lindante con el río Uruguay, promovida por las demandas del mercado de Brasil y Uruguay y la posibilidad de acceder a través de ellos al comercio atlántico. A diferencia de Buenos Aires, en estas regiones el escaso desarrollo de centros urbanos no incentivó el desarrollo de la producción agrícola destinada a dichos mercados. En las provincias del interior, la producción y los circuitos de intercambio eran más variados y complejos. Córdoba consolidó su integración a los circuitos de la economía atlántica gracias a la construcción del tramo del Ferrocarril Central Argentino que en 1870 la acerca al puerto de Rosario. Pero a diferencia de Santa Fe, ello no se acompañó en un primer momento de un desarrollo de la producción agrícola, y las primeras experiencias de colonias en esta provincia tuvieron un éxito relativo. Las provincias del norte —Salta y Jujuy— siguieron exportando ganado en pie hacia Bolivia, mientras que las de Cuyo —San Juan, Mendoza y también La Rioja— experimentaron un incremento de la demanda de vacuno para el consumo y de mulares para el transporte proveniente de Chile, cuya economía conoció entonces un fuerte crecimiento estimulado por al desarrollo de los centros mineros y más también por el *boom* californiano. El crecimiento de la demanda chilena generó en la zona cuyana una presión sobre la tierra que no es ajena a la fuerte conflictividad social y política de la región en los años sesenta, que hemos ya evocado.

El panorama productivo aquí esbozado muestra una continuidad con el periodo prenacional en la diversidad de orientaciones de las economías regionales, con algunos cambios que serán confirmados en el periodo posterior, en particular, el impacto que tendrá el desarrollo del ferrocarril en la reorientación atlántica de las economías del interior. Otras novedades consistieron en la introducción de nuevos productos, como fue el caso

de la incipiente producción azucarera en el norte (Tucumán y Jujuy) y la vitivinícola en Mendoza. Estas dos provincias sabrán sacar particular provecho de su ubicación estratégica en tanto nexo de los mercados andinos y pacíficos con el mercado litoral-atlántico.

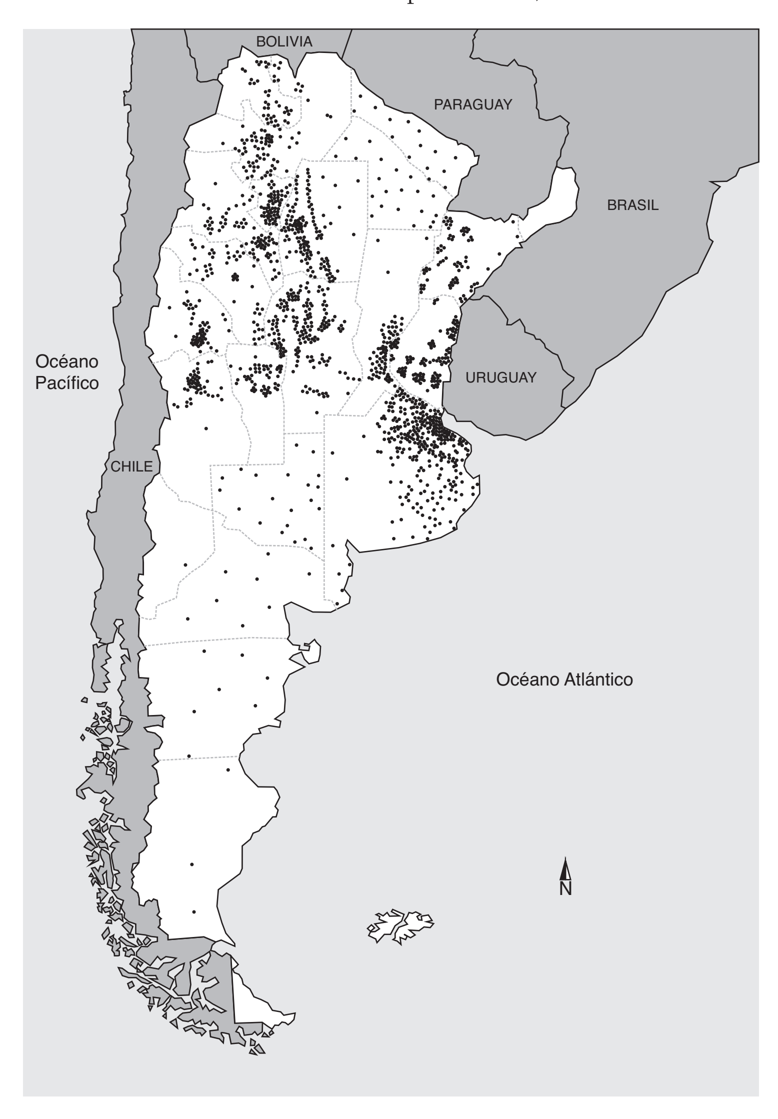
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

El dinamismo económico favorece el crecimiento demográfico aunque durante este periodo de contrastes se observan altos picos de mortalidad provocados por las múltiples guerras —civiles, internacionales y de conquista territorial— así como por las crisis epidémicas de cólera, tifus, fiebre amarilla y viruela. En particular debemos mencionar los efectos de las epidemias de fiebre amarilla que azotan la ciudad de Buenos Aires en 1857-1858 y en 1871, y de la epidemia de cólera que estalla en 1867 en el frente paraguayo. Las tasas de crecimiento son a pesar de ello altísimas, pasando de 28.2 por mil a 30.1 por mil en 1869. Este crecimiento espectacular esconde, sin embargo, el drástico derrumbe de la población indígena, que fue literalmente diezmada por las campañas militares, las enfermedades y las políticas de "civilización", como ya hemos mencionado. Según las cifras disponibles, en 1810 residían en los territorios de la Patagonia, la Pampa y el Chaco 190 000 indígenas. El censo de 1914 registra solo 18 425 "nativos".

El dinamismo de la economía litoral confirma la tendencia hacia la concentración de la población en esta región. El censo de 1869 muestra ya una neta ventaja para la zona del litoral, en la que cuatro provincias concentran 43% de la población de todo el país, y esta tendencia se confirma a lo largo del periodo.

Si las migraciones internas explican en parte el desequilibrio demográfico entre las regiones, la novedad en este periodo proviene del lugar cada vez más importante que adquiere el aporte

Distribución de la población, 1869



de los flujos migratorios internacionales. Como en otras regiones de América Latina, se implementan tempranamente en Argentina una serie de políticas destinadas a atraer nuevos pobladores provenientes de Europa con el objetivo de desarrollar una sociedad industriosa, civilizada y blanca que provea mano de obra para una economía en expansión. Con la caída de Rosas, los gobiernos de Buenos Aires y de la Confederación hacen de la promoción de la inmigración una prioridad de las políticas públicas. La Constitución de 1853, que el preámbulo destina a "todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino", reconoce en la promoción de la inmigración una de las atribuciones del Estado federal y ofrece a los inmigrantes los mismos derechos civiles que a los nacionales. La inmigración crece en las décadas de los cincuenta y sesenta atraída por el ciclo de prosperidad vinculado a la producción ganadera y al auge del lanar. En 1870, las llegadas alcanzan los 30 000 inmigrantes anuales y en 1873, a los 50 000. Movimiento que será frenado por la crisis económica de este último año que redujo los arribos a casi un tercio. La ley de inmigración y colonización de 1876 —que regirá la política migratoria argentina durante un siglo— fue diseñada para reactivar los flujos, brindando al Estado federal mejores instrumentos para promover la inmigración europea y otorgar a los candidatos otros beneficios además de los ya amplios que otorgaba la Constitución en términos de igualdad de derechos.

Ciertamente, los efectos son todavía moderados, si los comparamos con el aporte migratorio del periodo de las migraciones de masas (1880-1930). Durante el lapso estudiado se verifica, no obstante, un saldo migratorio acumulado de 172 816 personas que representan 10% de la población total de la República argentina. Tanto si tenemos en cuenta las entradas como los saldos migratorios, el colectivo migratorio más importante del periodo proviene del norte de Italia (Génova, Piamonte, Lombardía), representando durante la década de los sesenta dos de cada tres entradas y luego una de cada dos. Los flujos de españoles

son aún reducidos (procedentes de Galicia principalmente), pero desde los años sesenta conocen un crecimiento gradual. El tercer grupo migratorio está compuesto por los franceses, en su mayoría vascos, para quienes Argentina será el primer destino latinoamericano. Las migraciones de familias de colonos agrícolas, aunque numéricamente menos importantes, tendrán sin embargo efectos significativos en el sistema productivo, como vimos en el caso del desarrollo de las colonias agrícolas en Entre Ríos, Santa Fe y sur de Córdoba. Es en Santa Fe donde el impacto es más espectacular. Las cifras del censo provincial de 1858 muestran una población total de 41 261 personas, entre ellas 1 200 colonos suizos y alemanes, que representan entonces menos de 3% de los habitantes. En 1869, los colonos constituyen 10% de la población total de Santa Fe y para 1887, 45% de la misma. A fines de siglo, la población de Santa Fe, que había permanecido casi estancada durante la primera mitad del siglo XIX, se multiplica por 10, en buena medida gracias al aporte migratorio de los colonos europeos.

El censo de 1869 exhibe, sin embargo, que los migrantes se dirigieron mayoritariamente hacia zonas urbanas, contribuyendo al crecimiento espectacular de la ciudad de Buenos Aires: el censo de 1855 registra 91 395 habitantes; en el lapso de un poco más de 10 años, la población de la ciudad se había duplicado. Y en 1887 el censo arroja una población de 433 373 habitantes; en 30 años, la población de la ciudad se había casi cuadruplicado. Este crecimiento es, en buena medida, fruto de las migraciones internas e internacionales. La importancia de estas últimas marcan un rasgo característico de la ciudad desde los años veinte y anuncian la ciudad cosmopolita de fin de siglo. En 1855 los extranjeros representan 36% de la población de la ciudad, en 1869 aumentan a 46.6% y el censo de 1887 muestra que un habitante de cada dos ha nacido en el extranjero. La ciudad de Rosario es otro centro de atracción de extranjeros que representan, para 1869, 23.7% de la población.

Todo ello nos habla del dinamismo de la ciudad que se refleja en la proliferación de comercios y pequeños y medianos talleres, dando cuenta de una incipiente especialización de las diferentes funciones urbanas. Durante todo el periodo crece de manera también significativa la producción artesanal e industrial hacia la cual se dirigen los extranjeros. Entre los años treinta y cincuenta, el número de talleres se multiplica para dar luego la curva un salto abismal, multiplicándose casi por cuatro.

LA EDUCACIÓN EN EL CENTRO DEL DISPOSITIVO NACIONAL

Como se ha mencionado, las políticas culturales desempeñan un papel importante en el proyecto de la Generación del 37. Los actores saben que el establecimiento de un nuevo orden social y político debe estar acompañado de cambios culturales, aunque no siempre coincidan en los medios para promover ese tipo de cambios. En el caso de la formación de un nuevo espíritu público o ciudadano, es interesante señalar los matices en las posiciones de Alberdi y de Sarmiento. La postura del primero está centrada principalmente en lo que él llamó "la educación por las cosas" mediante la modernización del conjunto de normas que regulan a la comunidad. En consecuencia, los medios más eficaces para la modernización de una sociedad sería el establecimiento de nuevas legislaciones en materia civil o comercial, la extensión de una red ferroviaria y, muy particularmente, una política migratoria activa, en la que los inmigrantes europeos funcionarían como vectores de hábitos cívicos y comerciales. El impulso de modernización llevó a regular las conductas privadas por medio de la redacción del Código Civil que le fue encargado a Dalmacio Vélez Sarfield y promulgado en 1869 durante la presidencia de Sarmiento. Este último considera que las políticas educativas ocupan un lugar prioritario en las transformaciones culturales necesarias para el cambio social.

En esta concepción, el Estado —que la definición de los derechos políticos deja en manos de los hombres adultos— tiene un rol fundamental, como proveedor y garante de la instrucción pública. Estas posiciones, que Sarmiento defendió en obras como *Educación popular* (1849), tuvieron importante influencia en las políticas educativas que se pusieron en práctica a partir de 1862. Desde 1862 hasta 1880 se llevan a cabo los primeros intentos de organización de políticas nacionales en materia educativa, establecidas como funciones del Estado en la Constitución de 1853, en particular los artículos 5 y 14 que garantizan ciertos derechos individuales, entre los que se encuentran el derecho de enseñar y el de aprender. Alrededor de la interpretación de estos principios constitucionales giraron buena parte de los debates y de las dificultades de la ejecución de una política educativa nacional. Uno de estos debates fue, por ejemplo, el que enfrentó a los sectores liberales y a los sectores católicos. Los primeros, entre quienes se encontraban figuras como Eduardo Wilde (que ocuparía el Ministerio de Instrucción durante la presidencia de Julio Argentino Roca) o Vicente Fidel López (historiador y hombre político que en su juventud había formado parte de la joven generación romántica y que sería rector de la Universidad de Buenos Aires a partir de 1874), sostuvieron que el Estado debía legislar en materia educativa, garantizando las formas y los contenidos de un sistema educativo nacional unificado y uniforme. En cambio, los representantes del pensamiento católico (como Félix Frías o Gerónimo Cortés) argumentaban, apoyándose en el derecho constitucional de la libertad de enseñar y aprender, que el Estado debía permitir y favorecer un sistema educativo plural, en el que la formación impartida en instituciones particulares (principalmente, colegios religiosos, y en menor medida, los colegios privados de comunidades extranjeras) tuviera la misma validez que la de las instituciones públicas. Finalmente, la cuestión se resolvió a partir de una legislación que permitía la validación de

la formación impartida en establecimientos privados, adoptada en 1878. Pero como veremos, católicos y liberales volverían a enfrentarse durante la presidencia de Roca.

Otra cuestión por resolver eran las relaciones entre el Estado nacional y los estados provinciales. Ante la incapacidad de algunas provincias para ofrecer educación pública, el Estado nacional debía intervenir como garante de ese derecho constitucional. Una de las iniciativas consistió en un programa de subvenciones con fondos del Estado nacional para favorecer el desarrollo de los sistemas educativos provinciales. Este proyecto, presentado por Sarmiento en calidad de presidente de la nación y por Nicolás Avellaneda, su ministro de Instrucción, se adoptó en 1871, como la ley 463 de subvenciones. No obstante, en el tenso contexto de la relación entre las provincias y el Estado nacional, la cooperación no pudo establecerse de un modo eficaz. Otra iniciativa importante del Estado nacional fue la creación de dos nuevas instituciones: las escuelas normales nacionales y los colegios nacionales. La primera de su tipo fue la Escuela Normal de Paraná, fundada en 1871, también durante la presidencia de Sarmiento, que promovió la contratación de personal docente de origen norteamericano para suplir la falta de profesionales locales. En los años siguientes, estas escuelas, dependientes del Estado nacional, comenzaron a instalarse en el resto del país (en Mendoza, Catamarca, Tucumán, San Juan y Santiago del Estero), en ocasiones, apoyándose en estructuras provinciales ya existentes. Por otra parte, los colegios nacionales, uno de los proyectos más importantes de la política educativa del presidente Bartolomé Mitre, fueron un paso importante en la institucionalización de la educación media pública. Inspirados en el modelo enciclopedista francés, estos colegios tenían por propósito la preparación de una élite para su ingreso en la educación superior.

El ámbito de la educación superior es también un espacio de intervención del Estado nacional, con propósitos culturales y científicos, pero también como medio de facilitar el desarrollo

económico. Durante este periodo se observa en las dos casas de altos estudios del país, Córdoba y Buenos Aires, una tendencia a la profesionalización de la educación superior. En Córdoba comienzan a organizarse los estudios científicos para formar ingenieros y arquitectos, tendencia que se vio también reflejada en el programa curricular de abogacía. La universidad porteña también empieza a integrar nuevas disciplinas. Al igual que la Universidad de Córdoba, la de Buenos Aires comienza a funcionar como una institución formadora y certificadora de los profesionales que se hacen cada vez más necesarios tanto para las actividades vinculadas al desarrollo productivo —principalmente en el área de las matemáticas aplicadas y las ciencias físico-naturales— como a las administrativas indispensables para la consolidación institucional de la República. Las diferentes crisis epidémicas había por otro lado llevado a una temprana toma de conciencia de las necesidades de una política higienista que liderara tempranamente otro de los exponentes de la Generación del 37, Guillermo Rawson, y que acompaña la construcción de la profesión médica.

Las políticas educativas que se implementaron durante el periodo tuvieron un impacto considerable en la vida cultural. Según los datos disponibles, las tasas de escolarización de la población pasan entre 1850 y 1883 de 6.5 a 28.6% para el conjunto del territorio nacional, cifras que alcanzan 64.6% en la ciudad de Buenos Aires. Ello constituirá un importante impulso a la expansión de un público de lectores que alimenta el desarrollo de la prensa periódica —en 1877 se editaban 148 periódicos en todo el país, cifras que colocan a Argentina no muy lejos de Estados Unidos en número de publicaciones periódicas— y la producción y circulación de libros, en particular de manuales escolares. En estas décadas se forjan y publican los primeros relatos canónicos de la génesis de la nación y del panteón de los padres fundadores, empresa no desvinculada de los esfuerzos por comenzar a organizar los archivos y fuentes documentales que se realizan en instituciones como la Biblioteca y el Museo

Público de Buenos Aires. Es entonces cuando aparece la primera biografía de Manuel Belgrano, primer esbozo de la *Historia de Belgrano* de Bartolomé Mitre, con varias reediciones y que es el primer gran relato sobre los orígenes nacionales y republicanos de la gesta independentista.

La ampliación del público de lectores, asociada al desarrollo de nuevas prácticas culturales garantizadas en buena medida por la Constitución que incluye entre las garantías individuales la libertad de asociación, serán los principales pivotes de la producción y legitimación de la producción literaria de una élite cultural local. Ello implica no solo transformaciones en las empresas editoriales —que introducen transformaciones técnicas y comerciales— sino igualmente en la demanda del público de lectores. Fenómeno que permite explicar el inusitado éxito que conoce la publicación del modesto poema *El gaucho Martín Fierro* en el que su autor José Hernández relata las desventuras de un gaucho de la campaña de Buenos Aires. Entre la primera publicación en 1872 y su 11a. edición de 1878, el libro había logrado vender más de 48 000 ejemplares, suma nunca antes alcanzada en un público de lectores que se encontraba mayoritariamente en la campaña.

LA GRAN ACELERACIÓN

El periodo que se inicia con la presidencia de Julio A. Roca en 1880 y que se prolonga más allá del centenario, se caracteriza por una aceleración de la integración de Argentina al proceso de mundialización que había comenzado con las revoluciones políticas y productivas de fines del siglo XVIII. Desarrollo económico, revolución productiva, crecimiento demográfico, avance científico-tecnológico, son algunos de los factores que alimentan las dinámicas sociales y expectativas individuales y familiares que se traducen en nuevas representaciones sociales y territoriales, pro-

ceso que la noción de "modernización" buscó sintetizar. Los hombres que encabezaron estos cambios festejaron el centenario de una Argentina profundamente transformada y difícilmente gobernable a partir de la estructura política que había permitido a estas élites gobernantes impulsar esos cambios. La Argentina "moderna" nació de ese ambivalente éxito del proyecto de la Generación del 80 que anunció el fin del orden conservador.

ESTADO NACIONAL Y ORDEN CONSERVADOR

La federalización de la ciudad de Buenos Aires marca un momento de inflexión importante entre una situación previa que Natalio Botana define de "empate" entre la autoridad nacional y los poderes provinciales y el definitivo triunfo del Estado federal sobre las resistencias autonomistas de las provincias, en particular sobre la más recalcitrante de todas ellas, Buenos Aires. Se inicia entonces un periodo en el que el Estado nacional se impone en el conjunto del territorio y logra la unificación mediante mecanismos políticos basados en el control de la sucesión, que Botana califica de "gobierno elector". Son las instituciones, presidencia, gobernaciones, municipios y cuerpos legislativos que producen sus propios representantes por medio de complejas negociaciones. La adecuación entre sucesiones pactadas entre gobernantes y resultados salidos de las urnas requiere empero una alta dosis de fraude dentro de un régimen republicano representativo que había adoptado desde épocas muy tempranas (1821 en la provincia de Buenos Aires) el sufragio universal masculino. Estas prácticas son sistemáticamente denunciadas por los perdedores pero masivamente utilizadas por todos. Todo ello garantiza una sorprendente estabilidad, sobre todo si tenemos en cuenta que durante este periodo el país vive una de las crisis financieras más agudas de su historia. Desde el punto de vista político, la estabilidad institucional fundada sobre un régi-

men mixto federal-centralista de hecho, fue acompañada de un significativo atraso de la modernización de la vida política. A medida que los cambios prodigiosos que experimenta Argentina durante la gran aceleración transforman la sociedad, este desfase entre prácticas políticas y expectativas sociales será cada vez más explosivo.

Podemos distinguir dos momentos dentro del llamado orden conservador. La presidencia de Julio A. Roca en 1880 marca el inicio del primero, cuando el Estado nacional se impone políticamente en el conjunto del territorio y garantiza "paz y administración" como condición de progreso. Proceso que lleva a una consolidación del Estado nacional mediante un desarrollo institucional que Oscar Oszlak resume como el proceso de avance del Estado sobre espacios de intervención que antes eran del dominio de las provincias o de los particulares. Pero desde el punto de vista económico, el Estado no logra imponer su autoridad sobre el sistema monetario. La crisis político-económica de 1890 marca así el fin de un ciclo de consolidación del Estado a partir de la autonomía financiera de las provincias y de un régimen político que pretendía combinar consolidación del Estado moderno, instituciones democráticas y un sistema político arcaico y restrictivo. La crisis de 1890 inicia una etapa de fuerte conflictividad social y de reclamos de sectores medios urbanos y rurales a los que la república de notables había cerrado todo acceso a la política. El ciclo se cierra con la reforma electoral de 1912, llamada Ley Sáenz Peña, que implica una apertura del sistema político que marca el fin del orden conservador.

PAZ Y ADMINISTRACIÓN

Dos candidatos, apoyados por diferentes alianzas políticas compiten por la sucesión del presidente Nicolás Avellaneda que llega en 1880 al fin de mandato. Carlos Tejedor, gobernador de

Buenos Aires, cuenta con el apoyo de los nacionalistas porteños y correntinos. El PAN (Partido Autonomista Nacional) y la Liga de Gobernadores, un acuerdo entre mandatarios de Córdoba, Santa Fe y Tucumán, respaldan la candidatura del tucumano Julio A. Roca, quien goza asimismo de las simpatías de la mayoría de los oficiales del ejército nacional, cuerpo al que pertenecía. Las tensiones entre el presidente Avellaneda, que apoya la candidatura de Roca, y el gobernador Tejedor, que intenta imponer la propia, llevan al primero a abandonar la ciudad de Buenos Aires donde, como se lo recordaba Tejedor, el presidente residía en tanto que "huésped" del gobernador de Buenos Aires. Avellaneda instala entonces las autoridades nacionales en la vecina localidad de Belgrano. La escalada belicosa entre los dos poderes que impulsan dos candidaturas presidenciales termina en una guerra civil que se dirime en un violento enfrentamiento armado en las puertas de Buenos Aires. Las autoridades de la provincia bonaerense capitulan y en septiembre el Congreso nacional sanciona la ley de federalización que declara capital de la república al municipio de la ciudad de Buenos Aires.

Con los fusiles aún humeantes, Julio A. Roca asume la presidencia de la nación, resumiendo los objetivos de su gobierno con el lema "paz y administración". Con esta fórmula sintetiza los objetivos de apaciguamiento de la vida política y consolidación del aparato administrativo del Estado nacional, proyecto fomentado y sustentado en el programa político-intelectual de la Generación del 80. Cuenta para ello con una situación particularmente propicia: la última guerra civil había acabado con el autonomismo porteño, el más sólido enemigo del gobierno nacional y resuelto, después de 30 años de conflictos, la "cuestión capital". Nada parece obstruir el camino que tan laboriosamente habían abierto sus predecesores. En su mensaje al Congreso de 1881, Roca declara: "Parece que fuéramos un pueblo nacido recién a la vía nacional, pues tenéis que legislar sobre todo aquello que constituye los atributos, los medios y el poder de la Na-

ción". El periodo es, en efecto, particularmente prolífico en leyes que tienden a una centralización administrativa y política como lo ilustra la sanción de la ley de territorios nacionales en 1884. Inspirándose en el "nacionalismo unificador", corriente de ideas que había acompañado los procesos de unificación en Alemania e Italia, la ley de territorios nacionales ofrece al Estado federal prerrogativas de un poder central sobre los territorios recientemente conquistados a los indígenas que quedan bajo la soberanía de la nación. Nueve gobernaciones que representan más de la mitad del territorio de la república quedan entonces sujetas al gobierno nacional : Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chaco, Formosa, Misiones y parte de las provincias de Salta y Jujuy que formaban el territorio de los Andes. Todo ello consolida la tendencia centralizadora del federalismo argentino que se manifiesta igualmente en las leyes destinadas a consolidar las bases del progreso económico, como lo fueron la ley de unificación monetaria de 1881, la ley de bancos garantidos de 1887 y la ley de educación común de 1884.

Este avance del Estado nacional sobre las autonomías provinciales implica igualmente una redefinición de las áreas de su legítima intervención. En este proceso la Generación del 80 debe enfrentar una serie de resistencias que provienen de espectros ideológicos opuestos: el de los liberales que defendían el Estado de derecho y se oponían a toda intervención que implicara una violación a ese principio jurídico liberal, y el de las autoridades eclesiásticas, apoyadas por un incipiente laicado, que reivindicaban una amplia esfera de administración de las almas que iba del monopolio de los actos civiles vinculados al suministro de los sacramentos (registro de bautismos, matrimonios y defunciones) a la caridad, que comprendía tanto la salud como la beneficencia, pasando por la educación. Estos conflictos internos se combinan además con relaciones tensas con la Santa Sede por la vieja cuestión del ejercicio del derecho de Patronato, que el Estado argentino reivindica desde la independencia como atri-

buto de su soberanía. Si las primeras tensiones se hacen sentir en los años cincuenta, el conflicto se agudiza a medida que avanza la política antiliberal de la iglesia, producida por la "cuestión romana" y que formaliza el Concilio Vaticano I (1868-1870) y estalla con la política de separación de la iglesia y el Estado que implementa Roca. Entre 1881 y 1888, el gobierno sanciona una serie de leyes laicas a las que los católicos se oponían: creación del registro civil, secularización de los cementerios, matrimonio civil y fin de la obligatoriedad de la enseñanza católica en las escuelas (ley de 1884). Todo ello provoca la más importante confrontación entre liberales y católicos que se había conocido en el territorio nacional. Sin embargo, y a pesar de las distintas tentativas de organizar políticamente al sector católico, este no logra cuestionar el modelo liberal-cientificista entonces hegemónico entre los grupos dirigentes.

Durante todo el periodo un solo "partido" rige la vida política nacional, el Partido Autonomista Nacional, diseñado como una alianza de fuerzas políticas provinciales —gobernadores y caudillos de distrito— organizada en torno a mecanismos informales de negociación que implican vínculos de parentesco y sociabilidad de clase. El PAN promueve la candidatura de Roca y luego la de su sucesor y concuño, Miguel Ángel Juárez Celman. La bonanza económica y la euforia alimentada por esa fe en el progreso que caracterizaba a la Generación del 80 favorecen particularmente a Juárez Celman, quien decide asociar el poder ejecutivo nacional con el que otorga el PAN como máquina de control de la sucesión, lo que lo lleva rápidamente a enfrentarse con su mentor, Julio A. Roca. Las dos funciones se confunden y las intervenciones federales en las provincias se dirigen entonces a derrocar a los gobiernos que no responden a las directivas del presidente-jefe de partido. Así fueron removidos Juan Posse en Tucumán (1886-1887), Ambrosio Olmos en Córdoba (1888) y Tiburcio Benegas en Mendoza (1889). Esta fuerte concentración del poder político, calificada de "unicato" por la oposición, ali-

menta un descontento particularmente agudo en la juventud universitaria que ve cerrada toda posibilidad de acceso a la vida política. En nombre de la regeneración política, los jóvenes reclaman en 1889 una apertura "sin dependencia de gobiernos ni de círculos, buscando sacudir la inercia que domina y postra a la sociedades". De esta oposición nace la Unión Cívica, que pasa de la movilización de la opinión a la revuelta armada en 1890. La llamada "revolución del Parque" fue derrotada por Juárez Celman, pero con ella muere, como lo vaticina el senador roquista por Córdoba, Manuel D. Pizarro, el gobierno de Juárez Celman.

LA CRISIS DEL RÉGIMEN CONSERVADOR

En efecto, la revolución de los cívicos, sumada a la crisis económica, obliga a Juárez Celman a presentar su renuncia. Todo ello pone en evidencia los desajustes entre la sociedad y la política, que se acompañan de nuevos e intensos conflictos entre capital y trabajo. Más de dos décadas transcurren entre la emergencia en 1890 de esta nueva fuerza política, la Unión Cívica, y la primera experiencia de sucesión presidencial abierta en 1916. Se trata de un periodo de fuerte conflictividad social, frente a la cual los gobiernos conservadores tienden a alternar una política de cierre y de represión con otra de apertura y reforma a fin de responder a una doble presión política proveniente de los sectores de las élites, que los sistemas de alianza dejan fuera del juego, y de los nuevos sectores sociales, cuyos reclamos no apuntan necesariamente a una integración en el sistema político formal —muchos de ellos eran extranjeros— pero que ponen cotidianamente a prueba la viabilidad del régimen.

La primacía del PAN durante toda esta etapa no impidió la formación de otras alianzas destinadas a propulsar candidaturas divergentes. Juárez Celman, cuya renuncia a la presidencia im-

plicó la pérdida del control del PAN, promovió en 1896, con el apoyo de ciertos grupos católicos, una nueva coalición llamada Partido Modernista, que promocionó la candidatura de Roque Sáenz Peña. El oficialismo respondió a esta iniciativa con los viejos reflejos de la política criolla: la alianza con la sección más moderada de la Unión Cívica, liderada por el infatigable Mitre, que tenía el doble interés de consolidar la posición del PAN frente a las candidaturas divergentes y proponer para ello a Luis Sáenz Peña, padre del candidato del partido opositor y figura políticamente débil que garantizaba a Roca y a Pellegrini el control del PAN. El deber filial hizo el resto: Roque se retira para no obstruir la ruta de su padre Luis, logrando Roca sortear la amenaza que podía representar para el PAN el Partido Modernista promovido por su concuño. Ello le permite imponer su propia candidatura en 1898, para lo cual debe sortear la resistencia que le opone entonces su ex aliado Pellegrini, ahora agrupado con los autonomistas porteños en un nuevo Partido Autonomista. Todo este intrincado juego de maniobras múltiples da cuenta de las características de la vida política: importancia del juego de alianzas personales, gran flexibilidad política de las mismas, omnipresencia de ciertas personalidades que, como Mitre, Roca o Pellegrini, dominan la vida política de entonces, e importancia de los vínculos familiares en la designación de la dirigencia política. Este sistema de alianzas no solo se impone en la selección del candidato sino también en los mecanismos para hacer prevalecer los acuerdos, mediante todo tipo de prácticas fraudulentas. Esta política, denominada "criolla" por sus detractores, se revela cada vez más ineficaz para responder a los vertiginosos cambios que la sociedad está experimentando entonces.

Dos movimientos confluyen hacia la crisis del orden conservador que cierra el largo siglo XIX. Por un lado la ineficacia de la política criolla para regular la competencia política cada vez más compleja entre diferentes sectores de las élites. La crisis involucra por otro lado cada vez más a una incipiente clase media ur-

bana cuyas expectativas de movilidad social ascendente dependían en buena medida del gobierno, ya sea porque este era potencialmente el empleador o porque se consideraba que de él dependía el desarrollo de la oferta de servicios para el sector económicamente más dinámico. Todo ello explica la emergencia de la Unión Cívica Radical en 1891, menos como un partido de "clase media" —David Rock ha demostrado que en sus orígenes sus líderes eran de la misma extracción social que la dirigencia del PAN— que como una organización política que buscaba integrar esos reclamos, lo que implicaba introducir el principio de pueblo elector. La UCR que funda su doctrina en la "intransigencia revolucionaria" y la movilización popular coloca en el centro de sus reclamos la pureza del voto como garantía de representación democrática. En el mismo terreno de la impugnación del régimen conservador, pero desde una pretendida representación de intereses de clases, Juan B. Justo funda en 1894 el Partido Socialista, partido que se adhiere a la II Internacional y que logra hacer elegir en 1904, en la persona de Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de Argentina y de toda América. Los socialistas argentinos asocian la promoción de la "vía parlamentaria", como medio de representar y defender los intereses de los trabajadores, con la organización de los trabajadores por medio de la central obrera Unión General de Trabajadores, creada en 1907.

El segundo foco que alimenta la inestabilidad tiene que ver con la fuerte conflictividad social que conoce Argentina en este periodo de marcado crecimiento económico pero de gran desigualdad en la distribución de los réditos del mismo y que no estuvo exento de crisis durante las cuales se repartían también de manera desigual los costos de las mismas. Los diferentes grupos socioeconómicos se organizan entonces ya sea para reclamar derechos o para defender sus intereses sectoriales. Ya había sido ese el caso de los productores ganaderos durante la crisis del lanar de los años sesenta y de la liga agraria durante la crisis de los noventa. Pero serán sin lugar a dudas las organizaciones de

los trabajadores las que ejercerán mayor presión sobre el sistema político, desarrollando amplios espacios de contestación en torno a los cuales se organizan diferentes grupos que cuestionan al poder en su doble dimensión de forma de gobierno representativa y de democracia como expresión de la voluntad popular.

Las primeras organizaciones gremiales datan del periodo anterior a la primacía del PAN, pero hasta fines del siglo XIX no logran coordinar sus acciones. El movimiento se va consolidando entonces en torno a dos principales sectores de actividad: los trabajadores del puerto de Buenos Aires y Rosario y los trabajadores ferroviarios. La crisis de los noventa será un importante disparador para el incipiente movimiento obrero que desarrollará con la huelga su principal arma de combate. En 1901 las organizaciones de resistencia se agrupan en torno a la Federación Obrera Argentina (FOA) que reúne a anarquistas y socialistas, que es reemplazada por la FORA (la Federación Obrera Regional Argentina) en 1905. Durante la primera década del siglo se vive la maduración del anarquismo entre los trabajadores, gracias al manejo de la FORA que les permite imponer el principio de "huelga general de productores" que inspiran las grandes huelgas de 1902, 1904 y 1909. Cierto es que las disidencias dentro del movimiento obrero fueron importantes: entre los anarquistas que rechazaban toda intervención del Estado y hacían de la huelga general el elemento no negociable de la resistencia obrera; los sindicalistas abiertos a las negociaciones que permitiesen una mejora de la condición del trabajo obrero, y los socialistas que promovían la participación en la vida política como mejor medio de defender los intereses de las clases trabajadoras. A pesar de ello el movimiento obrero llevó a cuestionar las reglas de la vida política o en todo caso su efectividad para garantizar la paz social. Todo lo cual obligó al gobierno a reaccionar frente a los peligros que implicaba ese "ataque al orden constitucional establecido" como lo denunció Joaquín V. González. La Ley de Residencia en 1902 y posteriormente la Ley de Defensa Social en

1910 fueron las respuestas represivas del gobierno; ellas autorizaban al gobierno a expulsar del territorio nacional, sin juicio previo, a todo extranjero que comprometiera la seguridad nacional o perturbara el orden público, lo que implicaba una manifiesta violación de los derechos civiles que la Constitución nacional garantizaba a los extranjeros, y que a pesar de ser abundantemente denunciada perduró durante más de medio siglo. Este tipo de medidas establecidas para debilitar la capacidad de resistencia de las organizaciones de trabajadores se alternaron con iniciativas de reforma destinadas a coartar el poder de movilización de las federaciones obreras. Entre estas últimas podemos mencionar el proyecto de código de trabajo de Joaquín V. González destinado a introducir una serie de reformas que buscaban mejorar las condiciones de los trabajadores. La iniciativa fracasó tanto por la oposición de ciertos sectores conservadores como por la de los sindicatos —dominados entonces por los anarquistas— que rechazaban toda injerencia del Estado en las relaciones laborales. Si existen aún divergencias en cuanto al papel que desempeñaron los reclamos sociales en el reformismo de las élites, así como sobre el lugar del reformismo dentro del orden conservador, prima un cierto consenso entre los historiadores respecto a la convicción que llevó a hombres como Joaquín V. González, José Nicolás Matienzo o Indalecio Gómez a integrar la reforma electoral y la cuestión social como medios de estabilizar la vida institucional argentina.

LA GRAN EXPANSIÓN PRODUCTIVA

En un contexto de aceleración de los intercambios y las conexiones internacionales que caracteriza la primera mundialización, Argentina se integra exitosamente al mercado mundial mediante una fuerte especialización, como exportadora de materia prima agropecuaria e importadora de productos manufac-

turados. El país conoce entonces un crecimiento espectacular: entre 1870 y 1913 su economía registra uno de los mayores crecimientos del PIB per cápita del mundo, con tasas medias de crecimiento de 2.5%, un tercio más altas que las de Estados Unidos.

Principales variables económicas, 1881-1916

Año	*Población (en miles)*	*Producto (1900 = 100)*	*Exportaciones (millones de libras)*	*Importaciones (millones de libras)*	*Ferrocarriles (kilómetros)*
1881	2 565	21.86	11.6	11.1	2 442
1885	2 880	44.70	16.8	18.4	4 541
1890	3 377	58.59	20.2	28.4	9 254
1895	3 956	82.69	24.0	19.0	14 222
1900	4 607	100.00	31.0	22.6	16 767
1905	5 289	164.30	64.6	41.0	19 682
1910	6 586	197.43	74.5	70.4	27 713
1916	7 885	201.02	99.4	59.8	34 534

Fuente: Fernando Rocchi, "El péndulo de la riqueza: la economía argentina en el periodo 1880-1916".

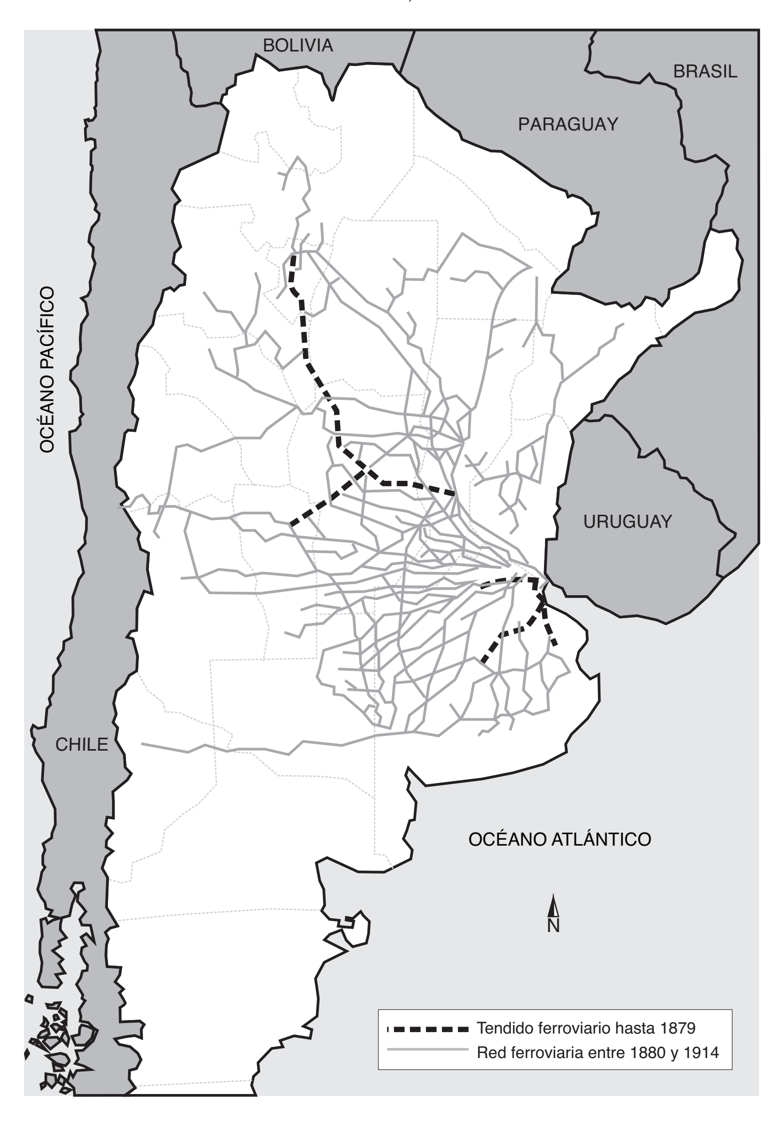
Los especialistas coinciden en considerar que ello fue resultado de la confluencia de tres factores que resultaron determinantes: la disponibilidad de recursos naturales que las campañas militares contra los indígenas habían procurado; una mano de obra abundante que fue masivamente provista por los flujos de migrantes europeos, y la afluencia de capitales, proceso en el cual Inglaterra tuvo un papel central. Al entusiasmo eufórico de los años ochenta, que la crisis de 1890 va a sosegar momentáneamente, siguen años de excepcional prosperidad. Durante la primera década del siglo XX, las exportaciones se triplican, los flujos de migrantes llegan a picos nunca antes vistos, la afluencia de inversiones extranjeras también alcanza los máximos niveles históricos, la construcción de vías férreas duplica la longitud existente y los depósitos en oro en la caja de conversión crecen. Todo ello alimenta el clima del centenario. La fuerte conflictividad social más que cuestionar este modelo convenció a ciertos sectores de las élites liberales de la necesidad y viabilidad de las

reformas que permitirían perpetuar el progreso sobre bases que imaginaban no muy diferentes.

El crecimiento espectacular de la economía argentina fue en particular producto de la expansión de la producción agrícola que tuvo como epicentro la región pampeana, en donde se incorporaron alrededor de 40 millones de hectáreas ubicadas en zonas de buena calidad productiva y que una densa red de ferrocarriles conectó con el mercado atlántico. Los ferrocarriles se habían desarrollado inicialmente a partir de dos centros: los puertos de Buenos Aires y de Rosario en la provincia de Santa Fe. En 1895 el sistema se organizaba en torno a estos dos puertos a los que se agregó después el puerto de Bahía Blanca en el sur este de la provincia de Buenos Aires. Ello dio un trazado particularmente denso para la región pampeana con importantes prolongaciones que permitían conectar estas zonas productivas con algunas de la zona del interior, como la conexión entre Córdoba y Tucumán, y estos con poblaciones más alejadas. Los tramos menos provechosos fueron financiados por el Estado, a diferencia de otros, más rentables, en manos de capitales privados. A fines del siglo el ferrocarril del Norte llegó hasta Salta y Jujuy. En 1912 el transandino llegó a Chile y en 1913 conectó la Patagonia. En los 24 años transcurridos desde la presidencia de Roca, las líneas férreas se habían prolongado más de 13 veces respecto de su extensión en 1880.

La producción ovina, que predominó hasta los años ochenta en la zona del litoral, conoce entonces cambios significativos vinculados a los avances tecnológicos y a las nuevas oportunidades que ofrecía el mercado. Junto con la producción de merinos para la lana, que se desplaza hacia las zonas periféricas de la Pampa y hacia los territorios patagónicos recientemente integrados pero poco aptos para la explotación agrícola, se desarrolla ahora la producción de nuevas razas de calidad que, como la Lincoln, son destinadas a la exportación de carne congelada. Las cifras disponibles muestran claramente cómo este mercado re-

Red ferroviaria, 1879-1914



emplaza al de la carne salada que desde mediados de siglo había tenido una disminución constante.

El desplamiento de la producción ganadera hacia las zonas más marginales libera la fértil región pampeana para la producción agrícola. En pocos años el proceso agrícola expansivo transforma a Argentina en el "granero del mundo". Crecimiento vertiginoso si consideramos que en los años setenta del siglo XIX, Argentina importaba aún harina y que para el centenario, las exportaciones agrícolas ya superaban a las ganaderas. Contribuyeron al mismo varias provincias, entre las que se destaca Santa Fe, que confirmó su perfil agrícola, ocupando a fines del siglo el primer lugar en términos de superficie sembrada (50% del total) destinada principalmente al cultivo de trigo y lino. Buenos Aires concentró la mayor expansión del maíz y compartió con Córdoba y Entre Ríos los cultivos de trigo y lino.

Fuera de la región pampeana, la expansión de una producción agrícola destinada al próspero comercio atlántico es más limitada. Sin embargo, dos regiones logran consolidar una economía productiva gracias a la explotación de cultivos tradicionales: la caña de azúcar en Tucumán y la vid en Mendoza. En Tucumán la industria azucarera, ya incipiente durante las primas décadas de la segunda mitad del siglo XIX, es favorecida gracias a una protección aduanera y estimulada por la construcción del ferrocarril que acerca esta producción al mercado del litoral y permite la expansión de la producción hacia las provincias vecinas de Salta y Jujuy. La expansión del cultivo es veloz. En los inicios de los años setenta la producción ocupa 2.3% de la tierra sembrada, abarcando a fines de siglo más de 50% de la misma. La vid, cuyo cultivo también se remonta a la colonia, logra durante este periodo convertirse en una producción floreciente en Mendoza. Como para la industria azucarera, la llegada del ferrocarril fue determinante: de 16 000 hectolitros que se producían en 1853 se llega a casi un millón a fines de siglo y casi tres millones en momentos del centenario. Ello otorga un importante

dinamismo a dos regiones cuyas producciones logran insertarse favorablemente en el mercado interno e internacional. Entre los cultivos tradicionales, la producción de tabaco encontró mayores dificultades para expandirse. Esta fue lenta y dificultosa en las regiones del norte, y hacia fines del siglo, las provincias de Corrientes y de Misiones promueven su producción. En la región del noreste, donde la incorporación de las tierras indígenas ofrecía nuevas oportunidades, se desarrolló igualmente la explotación de bosques y el cultivo del algodón, pero con un peso muy moderado en el comercio exterior.

Durante mucho tiempo la historiografía argentina asoció este proceso expansivo con la configuración de una oligarquía que concentró la propiedad de la tierra y controló el Estado, y cuya traducción político-institucional fue el orden conservador. Esta visión de grandes latifundistas, cuyos orígenes se remontarían al proceso de acumulación producido durante el gobierno de Rosas, está siendo seriamente revisada. Sabemos hoy que la situación fue más compleja y que las grandes propiedades que predominaron en las regiones de integración más reciente como la Patagonia, alternaron con las pequeñas y medianas propiedades en manos de colonos, con arrendamientos y con formas de aparcería que encubrían también situaciones muy variadas.

La industria, que conoce entonces un desarrollo significativo, está relacionada con la expansión agropecuaria. Algunos sectores destinados a la exportación de materia prima transformada como los frigoríficos, los molinos harineros y los ingenios azucareros; otros, al mercado interno, y vinculados a la alimentación, la construcción, el vestido, los muebles, y los textiles. Entre estos sectores, destacan los frigoríficos que comportan un cambio en el tipo de producción artesano-industrial predominante entonces, y se distinguen por el alto nivel de inversiones de capital, la mayor especialización del trabajo y el grado de concentración de mano de obra. Encontramos aquí, como en el caso del mundo rural, una estructura diversificada con grandes, media-

nos y pequeños propietarios de industrias de transformación, y un sector de trabajadores urbanos.

Si gracias a un contexto internacional particularmente favorable los hombres de la Generación del 80 habían logrado trazar el camino del progreso que la Argentina del centenario celebraba, la aceleración de los factores que hacían posible el crecimiento sin igual durante el periodo genera asimismo gran inestabilidad, vinculada en particular con la cuestión monetaria.

OPTIMISMO, EXPANSIÓN Y CRISIS

Cuando Roca llega al poder, la crisis financiera que había llevado en 1876 al Banco Nacional a una virtual situación de quiebra estaba superada. La política monetaria había permitido restablecer el equilibro de la balanza comercial, que alcanza a partir de 1878 un superávit. El plan de saneamiento financiero que había adoptado Avellaneda luego de la crisis del 1873-1876 había dado sus frutos, el riesgo había disminuido sensiblemente y las inversiones volvían a afluir. El clima de optimismo expansivo acompañó todo esta primera etapa de inversión en infraestructura. Este clima también se tradujo en una expansión del crédito que provocó una burbuja especulativa en el precio de la tierra así como el aumento de las importaciones que generó importantes salidas de oro. Los bancos comenzaron a perder reservas y cuando se hizo evidente que estos ya no podían responder con metálico a todas las obligaciones monetarias, el Banco Nacional suspendió en 1885 la convertibilidad, tanto del circulante como de los depósitos. Ello, junto con la reforma monetaria que reemplazó el sistema bimonetario en papel y en metálico por uno en peso oro, acentuó la desconfianza que dio lugar a una gigantesca fuga de capitales. Se piensa ahora que las salidas fueron entonces mayores que las sumas requeridas para pagar el servicio de la deuda.

Las medidas tomadas por el gobierno de Juárez Celman para hacer frente a la situación acentuaron los efectos de la crisis, como fue el caso de la creación de un sistema nacional de bancos privados, llamados “bancos garantidos”, así denominados porque la ley hacía posible la emisión siempre que la garantizara un depósito equivalente en títulos públicos en oro. La ley alentó una multiplicación de bancos provinciales que pedían préstamos para garantizar los títulos y utilizaron esta deuda para emitir millones de pesos que duplicaron el *stock* de dinero existente, con el que financiaron las inversiones pero también los gastos de la administración. La extraordinaria expansión del crédito y de los presupuestos provinciales se hizo bajo estas inciertas condiciones. Como nadie confiaba en la moneda circulante, la tendencia era a comprar dinero oro, disminuyendo los depósitos. Todo ello llevó a una situación crítica que terminó por estallar en 1890 con la quiebra de la casa Baring en Inglaterra.

La crisis arrastró con ella al gobierno de Júarez Celman, pero el colapso financiero que dejó a las provincias quebradas, y en particular a la más poderosa de todas ellas, Buenos Aires, liberó al Estado nacional del más importante freno a la centralización financiera que había encontrado desde la unificación nacional, representado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires. La crisis de los noventa tuvo así el inopinado efecto de concluir en el área financiera lo que la federalización de Buenos Aires había hecho posible desde el punto de vista político: someter el autonomismo porteño a la autoridad de la nación. La situación de *default*, de la cual la deuda nacional pudo ser protegida por un tratado con Rothschild, dejó al fin a las quebradas provincias sometidas al Estado nacional. Este creó su propia institución de crédito, el Banco de la Nación Argentina, y su propia institución monopólica de emisión de moneda, la Caja de Conversión. Las medidas tomadas entonces para hacer frente a la crisis —alza impositiva, reducción de gastos, contracción de moneda— lograron reducir

el riesgo país. A partir de 1893 la situación comenzó a mejorar y para 1895 el peso papel había comenzado a valorizarse. Aunque los efectos de la crisis de los noventa se hicieron sentir hasta la segunda presidencia de Roca y la de Figueroa Alcorta, en el primer quinquenio del siglo XX, la extraordinaria aceleración de las exportaciones creó un ambiente de confianza que despejó por muchos años el peligro de quiebra.

Argentina se prepara a celebrar el centenario en un clima de fuertes contrastes que asocian crecimiento económico y conflictos sociales. La emergencia de la "cuestión social" que se identifica con los desajustes económicos, políticos y morales producidos por la crisis económica de 1890, no solo implica una amenaza a ese orden que se consideraba condición de progreso sino que estimula nuevas divisiones entre los sectores gobernantes y la *inteliguentsia*. No hay entonces consenso respecto a la política que se debía implementar para poner término a este nuevo peligro que acechaba a la civilización: el de la revolución proletaria. Los "liberales reformistas", nebulosa que atraviesa diferentes sectores socioprofesionales y diferentes familias político-ideológicas, logran imponer la idea de reforma del sistema político y aceptar una sensible modificación del dogma liberal respecto a las funciones del Estado. Entre sus posturas, se encuentra la defensa de una posición intermedia entre el *laissez-faire* y el socialismo que implica el reclamo de una administración eficaz y transparente, la defensa y la confianza en el orden institucional y la forma de resolver los antagonismos sociales en el marco de políticas adoptadas por vías parlamentarias y esclarecidas por estudios científicos. En este punto coinciden con los conservadores: la solución a estos problemas reside en las reformas institucionales que deben emprender los sectores gobernantes desde el Estado. Pocos están dispuestos a considerar que los movimientos contestatarios, que alcanzan con las huelgas de 1909 su punto más álgido, están señalando los límites de un régimen político que desatiende la problemática de la representación de los intereses sociales.

INMIGRACIÓN DE MASAS Y URBANIZACIÓN TEMPRANA

El crecimiento acelerado de la producción agrícola-ganadera no hubiese sido posible sin el importante aporte migratorio que soluciona el problema de la escasez de trabajadores en la zona litoral y que las migraciones provenientes de las provincias del noroeste y noreste ya no alcanzaban a resolver. Durante el periodo de migraciones de masas (1830-1930) más de 60 millones de personas atraviesan el Atlántico en busca de nuevas oportunidades. Si la mayoría de esta "Europa en movimiento" se dirige hacia Estados Unidos, Argentina es el primer destino latinoamericano de estos flujos, concentrando más de la mitad de ellos. Entre 1881 y 1914 más de 4 millones de personas procedentes de ultramar que viajan en segunda y en tercera clase desembarcan en el puerto de Buenos Aires. Los italianos continúan siendo mayoría, con más de dos millones de entradas; siguen en orden de importancia los españoles con 1.4 millones de entradas registradas, y los franceses, tercer colectivo migratorio, con 170 000 inmigrantes registrados. A ello debemos agregar una inmigración proveniente de los límites de Europa, como los llamados "rusos", en su mayoría judíos que huyen de la oleada de violencia antisemita desatada en el imperio ruso, y otros flujos calificados de "exóticos" como los denominados "turcos", flujos compuestos por sirio-libaneses y armenios. Aunque la legislación migratoria definía al inmigrante como un poblador, los saldos migratorios muestran que los retornos son importantes, aunque varían según los contextos. Para las tres décadas que nos ocupan, uno de cada tres migrantes retorna. En su mayoría se trata de hombres jóvenes, aunque el desarrollo de colonias agrícolas atrae igualmente una inmigración familiar. Las investigaciones recientes muestran por otro lado que las llamadas "migraciones golondrinas" no implicaban tan cortas estancias y que las migraciones estacionales podían alternar trabajos urbanos y rurales, prolongando la re-

sidencia. Nos encontramos, en todo caso, frente a un fenómeno masivo (en 1914 más de un habitante de cada tres había nacido en el extranjero) que tuvo un impacto considerable en la sociedad, y que forjó el imaginario nacional de una Argentina "blanca", producto del crisol de razas que sustenta una sociedad abierta y cosmopolita que ofrece oportunidades para que los hijos siempre superen a los padres. La realidad de las relaciones interétnicas y sociales se adapta muy escasamente a este imaginario y los grandes flujos migratorios coinciden, como vimos, con grandes desigualdades sociales y con el desarrollo de un nacionalismo virulento que señala a los extranjeros como responsables de todos los males y como amenaza para la integridad nacional y familiar, como lo denuncia explícitamente Eugenio Cambaceres en su novela *En la sangre* o Julián Martel en *La Bolsa,* esta última obra constituye la expresión literaria local del mito de la conspiración judía mundial. Ello no es una manifestación excepcional vinculada a la crisis de los noventa, sino un componente fundador del nacionalismo argentino. A pesar de eso, el imaginario de una sociedad argentina abierta y cosmopolita sigue vigente hasta nuestros días. Ciertamente, el movimiento nacionalista buscará representaciones alternativas a la tradición liberal como testimonia la invención del "gaucho" como símbolo de la identidad nacional. Es entonces cuando el popular poema de José Hernández, *El gaucho Martín Fierro,* es erigido en poema épico nacional. Ello no impide relecturas cosmopolitas de esta tradición, como la que ofrece Alberto Gerchunoff en *Los gauchos judíos* escrita en 1910 para celebrar la integración de los inmigrantes judíos a la sociedad argentina.

Los flujos migratorios masivos constituyen el principal factor que explica el crecimiento acelerado de la población en Argentina. En 1869 el primer censo nacional registra un total de 1 897 000 habitantes; en el segundo censo de 1895 estos se han más que duplicado. En 1914, cuando se organiza el tercer censo

nacional, la población total suma 8 162 000. En otros términos, en poco más de 40 años los habitantes han aumentado más de 300%. La población de origen migratorio se concentra sobre todo en la zona del litoral argentino y masivamente en los centros urbanos que tienen un crecimiento espectacular. Entre 1869 y 1887 la ciudad de Buenos Aires incrementa su población a un ritmo anual de 7.3%, manifestando un mayor dinamismo que ciudades como Chicago o Boston. Entre 1904 y 1909 el ritmo "disminuye" a 5.8% pero es, con excepción de la ciudad de Hamburgo, la más alta del mundo occidental. Desarrollo que pone cotidianamente a prueba los servicios públicos, que aunque crecen significativamente durante el periodo, no logran responder a las necesidades de una población cada vez más numerosa. A las dificultades de gestión sanitaria y de provisión de servicios de salud se agrega el espinoso problema de la vivienda que agrava el problema sanitario. Ello fomenta tanto el desarrollo de las vecindades en el centro de la ciudad y la extensión de la ciudad hacia los barrios que surgían de los fraccionamientos, como una constante tensión entre los trabajadores urbanos y los poderes públicos. Hechos que explican tanto el poder de movilización de las organizaciones de trabajadores como el papel que tienen las iniciativas de la sociedad civil. Junto al sector del laicado movilizado en torno a las nuevas corrientes del catolicismo social, se desarrollan asociaciones de las colectividades migratorias destinadas a ofrecer servicios, en particular, en educación, salud y asistencia a sus compatriotas. Estos dos últimos rubros son masivamente garantizados por sociedades de ayuda mutua que, según el censo de 1914, están integradas en más de 70% por extranjeros.

La masiva presencia de extranjeros representa un desafío para la nación recientemente unificada. Las alarmantes misivas de Sarmiento, entre otros, sobre los múltiples peligros que acechan a una nación sin ciudadanos y para la cual la presencia de súbditos de otras naciones constituye una cotidiana amenaza

para su soberanía, incitan a los sucesivos gobiernos a implementar una política de nacionalización que coloca en el centro de la misma a la escuela pública. La Ley Nacional de Educación de 1884 da a la enseñanza pública una función nacionalizadora que se traduce en el desarrollo de una cultura patriótica aún presente en las escuelas argentinas hoy día. Si, como veremos, el gobierno logra imponer su hegemonía educativa, su política de naturalización de los extranjeros tiene escasos resultados y la Argentina del centenario sigue siendo esa “nación sin ciudadanos” que denunciaba Sarmiento. Hacia fines del siglo XIX, los mismos que habían promovido una activa política de poblamiento comienzan a ver en ella un obstáculo para la consolidación nacional. Antes de que las corrientes nacionalistas de los años treinta formulen este peligro en términos de incompatibilidad cultural-racial, se observa ya con la crisis de los noventa y las movilizaciones de la primera década del siglo XX que los extranjeros comienzan a ser identificados como la fuente de los problemas de la república: la fragilidad de las instituciones democráticas era producto de su negativa a naturalizarse y la alta conflictividad social responsabilidad de las ideologías “disolventes y exóticas” (léase anarquismo) que estos introducían. Los detractores de los extranjeros tendrán sin embargo razón en señalar que ese aporte masivo de inmigrantes cambiará significativamente la sociedad argentina arrastrando con ello a la república de notables. El impacto de la inmigración puede evaluarse con las cifras que brinda el censo de 1914 sobre la economía productiva. Los extranjeros no solo ofrecen mano de obra para la economía agroexportadora —60% de la producción agrícola se encuentra entre sus manos—, sino que concentran más de 75% de los comercios e industrias manufactureras que existen entonces en el país. La concentración de inmigrantes en centros urbanos (más de 70% se había establecido en ciudades) hizo de los extranjeros el motor principal de la transformación social que impulsó la urbanización.

CULTURA CIENTÍFICA Y PROGRESO

La consolidación del Estado a partir de 1880 tiene su correlato en los modos en los que se organiza la vida cultural e intelectual. Las estructuras que albergan las actividades educativas y científicas ya existentes comienzan a modernizarse y a adaptarse al proceso de federalización. Un ejemplo de ello es el traslado de dos instituciones importantes, el Archivo de Buenos Aires y la Biblioteca Pública a la esfera del Estado nacional, que en 1884 se transforman en el Archivo General de la Nación y en la Biblioteca Nacional, respectivamente. Al frente de la dirección de esta última es nombrado Paul Groussac, tras la muerte de su fugaz primer director, José Antonio Wilde. Hombre de letras, de origen francés, su carrera se desarrolla desde su juventud en los ámbitos de la educación y la cultura, ocupando la dirección de la Biblioteca Nacional desde 1885 hasta su muerte, en 1929. A lo largo de los 44 años de su gestión, impulsa una vigorosa tarea de catalogación y clasificación de las colecciones existentes, promueve la copia de documentos de archivos europeos para enriquecer los fondos de fuentes históricas e impulsa la Ley de Depósito Legal, dispositivo jurídico fundamental para la conservación centralizada de la producción editorial. Además, desde su puesto de director, funda dos publicaciones, *La Biblioteca* (1896-1898) y los *Anales de la Biblioteca* (1900-1915), que se convierten, en particular la primera, en dos espacios privilegiados de consagración y de debate intelectuales.

Por otra parte, la modernización de las instituciones culturales y educativas suscita vivos debates acerca de la función del Estado. En el terreno de la educación, estas discusiones se dan entre 1881 y 1884. Un momento importante de este periodo es el Primer Congreso Pedagógico Sudamericano, impulsado por el presidente Roca, que se reunió en Buenos Aires entre abril y mayo de 1882. En este foro, comienzan a tomar forma los problemas en torno a los cuales se organizará el debate sobre la

educación en los años por venir: la función del Estado nacional en un sistema común de educación, la interpretación de las garantías constitucionales del derecho de enseñar y aprender y la cuestión de la laicidad que se da en el marco del conflicto entre liberales y católicos, ya mencionado. Dos años después, en julio de 1884, el Congreso aprueba la ley 1420 de Educación Común, cuya resolución más importante es la de establecer la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad de la educación primaria. El periodo que va del último cuarto del siglo XIX a las primeras décadas del XX constituye uno de los momentos más importantes de la educación nacional, cuyas políticas cambiarán profundamente el paisaje cultural de la población. El retroceso del analfabetismo es uno de los casos en los que los resultados de las políticas educativas son más elocuentes. Vimos que en la etapa anterior las tasas de escolarización habían aumentado sensiblemente y ello se acrecienta aún más luego de los años ochenta. Así mientras que el censo de 1869 registra un porcentaje de analfabetismo de 77%, los datos de 1914 señalan un descenso a 35%. Sin embargo, los efectos de un acceso más amplio a la cultura como resultado de las políticas educativas también se pondrán de manifiesto en los niveles superiores del sistema educativo y las universidades deberán enfrentar nuevos desafíos, crisis y transformaciones.

Así como se discute en el espacio público el modo de modernizar y reorganizar la educación común, la educación superior será también protagonista de debates. Las dos grandes cuestiones que se plantean en estos años son, en primer lugar, el vínculo de las universidades con el poder público y los términos de una posible autonomía y, en segundo lugar, la orientación profesionalista de sus enseñanzas y de sus graduados. Para intentar dar respuesta a estos problemas, se sanciona, en 1885, la ley 1597, conocida también como Ley Avellaneda que intenta, por sobre todas las cosas, sentar las bases de una autonomía —cierto, aún limitada— del funcionamiento administrativo y de la forma

de gobierno de las universidades. Como se ha mencionado, la formación universitaria estaba, en su mayor parte, orientada a una enseñanza específica para una práctica profesional, modelo en el que las profesiones liberales (la abogacía, la medicina y la ingeniería) ocupaba un lugar central. En consecuencia, el papel de la universidad en la actividad de investigación o cultural continúa siendo marginal hasta comienzos del siglo XX. La vida intelectual sigue nucleándose alrededor de espacios como las revistas literarias (como la mencionada *Biblioteca* de Groussac) o instituciones como el Ateneo o la Junta de Historia y Numismática, fundada en 1893, y que en 1938 se transformará en la Academia Nacional de la Historia. La voluntad de abrir ámbitos de reflexión y de investigación "desinteresada" inspirará en Buenos Aires la fundación de la Facultad de Filosofía y Letras, en 1896. Concebida en un principio como el espacio de reflexión pura, su evolución decepciona a sus impulsores cuando se transforma en un centro de atracción de estudiantes deseosos de adquirir un diploma para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria. Otro ejemplo interesante es el de la Universidad Nacional de La Plata, cuyo proyecto estuvo ligado desde su concepción a la actividad científica. El proyecto fue impulsado por Joaquín V. González, intelectual, hombre político y una de las más importantes personalidades del reformismo liberal argentino. Finalmente concretado con la fundación de la Universidad Nacional de La Plata en 1905, el proyecto reúne a varias figuras del reformismo, como José Nicolás Matienzo, Rodolfo Rivarola y Ernesto Quesada. Situada en la capital de la provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata funciona desde un comienzo apoyada en estructuras que la precedieron, como el Museo y el Observatorio Astronómico, y aspira a transformar a La Plata en una ciudad universitaria. Entre otros de los rasgos distintivos del proyecto, se cuentan la fundación de un Colegio Nacional dependiente de la Universidad, la puesta en marcha de un amplio plan de extensión universitaria y la fundación de la Facultad de

Ciencias Jurídicas y Sociales en la que se promueve la investigación científica para una mejor compresión de los fenómenos sociales de la época y con el propósito de articular los saberes a la acción política.

Durante las últimas décadas del siglo XIX, la ampliación y diversificación del espacio social permite el surgimiento de nuevos arquetipos de intelectual latinoamericano. En el caso de la modernización de los espacios científicos universitarios, de la que el proyecto de Joaquín V. González y de los "reformistas liberales" es un ejemplo insoslayable, da cuenta también de un cambio de signo en el clima cultural de la *inteliguentsia* argentina. Los años de la *pax roquiana* son los de la Generación del 80, entre cuyas eminentes figuras del campo cultural pueden nombrarse a Lucio V. Mansilla, Paul Groussac o Miguel Cané. Se trata fundamentalmente de hombres de letras cuya intervención en el campo cultural debe desarrollarse en paralelo a la acción política o al servicio público. Esta figura no especializada del intelectual da como resultado una producción fragmentaria, de calidad y profundidad irregulares, en general asociada a la práctica edificante de las "bellas letras" y fuertemente marcada por un tono impresionista en el cual se manifiestan los tópicos sociales de la clase patricia a la que pertenecen. Estos hombres de letras, "*gentlemen* escritores" como los califica David Viñas, comienzan a entrar en conflicto con un nuevo tipo de intelectual, anclado particularmente en la cátedra universitaria. Los universitarios defienden un tipo de intervención especializada, cuya legitimidad proviene del campo de las nuevas ciencias sociales (en particular, la sociología, pero también otras disciplinas, como la psicología social o la economía política) y que comienzan a promover la figura del experto. De este modo, empieza a constituirse una nueva corriente en la *inteliguentsia* que se conoce como "positivista" (denominación que puede llevar a identificaciones fallidas con la ortodoxia comteana o spenceriana), y que la noción de "cultura científica" abarca más ampliamente. Entre las

figuras más prolíficas de este periodo (como Juan Agustín García, José Ingenieros, José Ramos Mejía y Carlos Octavio Bunge) cabe destacar a Ernesto Quesada, intelectual de una variada y vastísima obra, que mantuvo con Cané, entre 1904 y 1905, una polémica a propósito de la legitimidad de la sociología en el ámbito universitario en el se enfrentan estas dos concepciones de la intelectualidad: la del ensayista y la del científico.

Hacia comienzos del siglo XX, las repercusiones de las políticas de educación común comienzan a ponerse de manifiesto en el mundo universitario. La ampliación del acceso a la escolaridad les permite a los hijos de los inmigrantes ingresar en la universidad, un vector de movilidad social y de integración nacional que habrá de cristalizarse por ejemplo en el título de la obra teatral de Florencio Sánchez *M'hijo el dotor*, estrenada en Buenos Aires en 1903. La universidad se abre también lentamente a las mujeres quienes asocian aprendizaje de saberes técnicos con un combate por la igualdad de derechos. La primera graduada en farmacia es Élida Passo en 1885 pero se le niega su inscripción en medicina alegando la incomodidad que implicaría para ella compartir una carrera con los hombres. No obstante, pocos años más tarde egresan de medicina Cecilia Grierson y Elvira Rawson, primeras médicas y militantes feministas que abren el camino que pocos tiempo después será transitado por otras mujeres que, como Alicia Moreau, egresada en 1914, reúnen militancia socialista con reclamos de igualdad de género. Esta tímida apertura lo es aún más si consideramos que entre 1900 y 1910 la población de estudiantes universitarios se duplica, y pasa de 2 500 a 5 000. Comienzan entonces a surgir las primeras formas de organización sindical estudiantil: se fundan los primeros centros de estudiantes universitarios y, en 1908, se crea la Federación Universitaria de Buenos Aires. Estas organizaciones permitirán la canalización de los reclamos estudiantiles, en particular en lo que respecta a la formación de las ternas profesorales, el monto de los aranceles y los regímenes de exámenes. Entre 1903 y 1906 se registran

distintas protestas y movimientos de huelga que conducen, en 1906, a la reforma de los estatutos de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo los reclamos de los estudiantes continúan y se intensifican especialmente en las instituciones más resistentes a la modernización (como el caso de Córdoba, cuya universidad seguía funcionando a principios del siglo XX con los estatutos de 1880) y desembocarán en el movimiento de la reforma universitaria de 1918, una experiencia de renovación institucional y política con repercusiones en toda América Latina.

SUFRAGIO UNIVERSAL Y PODER MILITAR

Marcelo Cavarozzi

La Argentina de 1912 parecía ser la tierra prometida; los inmigrantes provenientes de Europa y de las naciones del desfalleciente imperio otomano año tras año se apiñaban por cientos de miles en el puerto de Buenos Aires atraídos por la posibilidad de buenos ingresos —al menos comparándolos con los de sus lugares de origen y los que ofrecían otras "nuevas naciones" de la época. A esta circunstancia fundamental se agregaba que la Argentina poseía un sistema de educación pública abierto y de buena calidad y formulaba una vaga promesa de "paz social"; el país del Plata parecía ser una sociedad en la cual aquellos que se dedicaran a trabajar, aprender y obedecer, es decir, quienes se abstuvieran de promover conductas o ideas "peligrosas" no iban a ser sometidos a persecuciones. En este último sentido, si bien en la Argentina de la *belle époque* las mayorías estaban excluidas de la participación política, los recién llegados eran atraídos por la esperanza de escapar tanto de los *pogroms* de los zares y de la violencia de los terratenientes de regiones como Calabria o Andalucía, como de la pobreza y el hambre. El producto bruto interno creció hasta 1913 a un ritmo acelerado con lo que el ingreso per cápita se transformó en uno de los más altos del mundo. Los pilares de este crecimiento fueron, por un lado, la expansión de la frontera agraria resultado de la incorporación de la tierra fértil de la Pampa húmeda. La tierra estaba principalmente destinada a la producción de cereales, lana, car-

ne vacuna y aceites vegetales. El segundo pilar era, por el otro lado, la inversión extranjera, sobre todo la británica. En aquel año, las colocaciones de capital en Argentina —que alcanzaban 29% del total latinoamericano— sumaban casi 6% del capital invertido en el mundo fuera de las fronteras nacionales de los respectivos inversores. Era ciertamente una cantidad enorme para un país de una población que no alcanzaba los ocho millones de habitantes.

Buena parte de esa inversión se destinó al tendido de la red ferroviaria que tomando como epicentro a la ciudad de Buenos Aires y, en menor medida, a Rosario —situada a 300 kilómetros al norte de la capital sobre el río Paraná— transportaba bienes primarios a los puertos y manufacturas, muchas de ellas importadas, al interior. Como debe resultar obvio, los trenes también eran muy útiles para el transporte de tropas y pertrechos en caso de que se requirieran para aplacar a los "revoltosos" en los puntos donde así lo dispusiera el gobierno central. Y precisamente esta doble función de los ferrocarriles resaltaba que el capital extranjero, sobre todo el británico pero también el proveniente de Francia, los Países Bajos y Alemania, y las élites gobernantes argentinas habían armado en el medio siglo que precedió a la primera guerra mundial un *partnership* en el cual ambos invertían recursos y del cual extraían jugosos resultados. La eficiente y extendida infraestructura de transportes y comunicaciones, y el consiguiente despliegue de la "red de nervios y músculos" estatales, por un lado abarataba costos y, por el otro, le permitía al Estado y a la élite que ocupaba su cúpula, controlar efectivamente territorio y población.

La misma ciudad de Buenos Aires, la gran aldea transformada en una especie de París del hemisferio austral gracias al gusto de diseñadores franceses y la labor de albañiles gallegos y genoveses, era el símbolo de la confluencia de procesos que parecían constituir una arquitectura armónica: la explosión de arrogancia de los porteños que se sentían ascendiendo al tope del *ranking*

de razas del "mundo civilizado"; la centralización fiscal, cultural y administrativa que permitía diseñar políticas bastante equilibradas y efectivas; la concentración de poder a las que fueron sometidas élites provinciales díscolas, incluida la de la propia provincia de Buenos Aires que había sido derrotada en 1880 al pretender oponerse a la federalización de su ciudad capital, y *last but not least*, la conversión de la *city* porteña en una importante sucursal de la red financiera y mercantil global que tenía su centro en Londres.

El año 1910 fue utilizado por la élite gobernante para mostrar al mundo la excepcionalidad del fenómeno argentino al conmemorar fastuosamente el centenario de la separación del cargo del último virrey de la colonia y la paralela creación de la primera junta de gobierno. Era la celebración de una élite oligárquica, a la vez conservadora y progresista, que oscilaba entre visiones que asumían los valores e imágenes de la modernidad y el progreso encarnado especialmente por anglosajones y germánicos y otras que perseguían el rescate de la hispanidad católica como la raíz del ser nacional argentino.

A pesar del optimismo reinante, que contrastaba con el clima que imperaba en otros países sudamericanos otrora dinámicos como Chile, la élite que había manejado los asuntos públicos a partir del último cuarto del siglo XIX reconocía que todavía restaban desafíos pendientes. En ese sentido, resaltaba una cuestión en particular: la del régimen político. Si bien la economía lucía floreciente y se había avanzado decisivamente en la construcción de los aparatos del Estado nacional —las fuerzas armadas, la hacienda pública, los códigos y los tribunales que cubrían buena parte del territorio, y las escuelas primarias y secundarias fundadas a partir de la presidencia de Domingo F. Sarmiento— no se había resuelto uno de los más graves problemas que afectaban al régimen oligárquico: la ilegitimidad que lo impregnaba como resultado de las sistemáticas prácticas de fraude electoral en las que se apoyaba.

No resultó accidental, entonces, que Roque Sáenz Peña, uno de los políticos de la "situación" oligárquica más convencidos de la necesidad de la liberalización del régimen, fuera seleccionado en 1910 por el presidente saliente para ser su sucesor. Sáenz Peña y su ministro de Interior, Indalecio Gómez, implementaron la reforma mediante dos leyes; la primera que reemplazó el Registro Cívico por el padrón militar como base para la confección de las listas de electores y la segunda —conocida como "ley Sáenz Peña"— que estableció el voto obligatorio y secreto de los varones argentinos, nativos y naturalizados.

Que el voto "universal" excluyera al género femenino estaba de acuerdo con el clima machista de época; a esa altura las mujeres solo votaban en un par de países en el mundo y los varones de la élite argentina estaban muy lejos de querer innovar en ese aspecto; la no incorporación de los extranjeros al padrón, en cambio —que produjo una exclusión de niveles semejantes a la que sufrió el género femenino, pues el número de extranjeros mayores de edad era elevadísimo especialmente en Buenos Aires y el resto de la Pampa húmeda—, fue extensamente discutido en los cenáculos oligárquicos. Si bien la élite quería excluir a individuos "peligrosos" a quienes se temía por la portación, imaginada o real, de ideologías "extrañas", los sectores más *aggiornados* también eran conscientes de que al no permitirles votar se eliminaba un mecanismo de integración a la nueva nación. Los objetivos de los reformistas eran complejos y no estaban exentos de contradicciones; un par de dichos objetivos eran bastante explícitos: querían reducir la abstención y, por ende, expandir gradualmente la ciudadanía política, y asimismo procuraban integrar pausadamente al juego político al principal partido de oposición que llevaba más de 10 años rechazando participar en las elecciones. Este partido era la Unión Cívica Radical (UCR) fundada en 1890. En esta dirección apuntaba no solo la puesta en práctica de mayores garantías para la emisión y el escrutinio de los sufragios, sino también la implementación del régimen de

lista incompleta, que posibilitaba el acceso de las minorías a las instituciones de gobierno, al otorgar al partido político que obtuviera la segunda votación en cada distrito un tercio de los diputados nacionales y de los electores de presidente. Claro está que en la mente de la oligarquía reinante, la oposición debía juiciosamente orientarse a obtener ese tercio y abstenerse, por lo tanto, de articular pretensiones de ganar las elecciones.

Detrás de las reformas, sin embargo, subyacía un objetivo que no se hizo explícito y estuvo prácticamente ausente de las largas y arduas sesiones del Congreso nacional que culminaron con la aprobación de la ley Sáenz Peña en 1912. Dicho objetivo no era otro que el de arbitrar mecanismos políticos que permitieran superar la lucha de facciones que imperaba dentro de las filas de la misma élite gobernante y que extendía el uso del fraude y la violencia política en contra de los integrantes de la propia oligarquía. Los políticos "situacionistas" no solo le hacían trampas a aquellos que no pertenecían a sus filas, es decir a los radicales, y también a los socialistas criollos que se habían implantado en la ciudad de Buenos Aires, sino que además se hacían trampas entre ellos. El predominio de prácticas transgresoras de la legalidad estaba muy difundido: la aparente estabilidad del régimen político a partir de 1862, simbolizada por el respeto de los plazos constitucionales en los reemplazos presidenciales, en realidad ocultaba un bajísimo nivel de institucionalización.

¿Cómo se materializaba la baja institucionalidad? En primer lugar, se vinculaba a la ausencia de reglas para la sucesión presidencial y a las reiteradas intervenciones a las provincias. La mayoría de las sucesiones presidenciales producidas durante el medio siglo posterior a 1862 —año en el que culminó la unificación nacional cuando se produjo la incorporación de Buenos Aires a las otras 13 provincias— estuvo asociada a frecuentes rebeliones armadas en ocasiones de la respectiva renovación, renuncias presidenciales y clausuras temporales del Congreso impuestas a la fuerza por el presidente, amén de una extensa

serie de conjuras palaciegas, traiciones entre aliados y candidatos presidenciales sacados de la galera a último momento.

En segundo lugar, una parecida falta de respeto a las normas prevaleció en el ámbito de las relaciones entre nación y provincias: el postulado constitucional de que Argentina era una república federal fue permanentemente transgredido por las numerosas intervenciones que el gobierno federal impuso a las provincias. A veces las intervenciones respondieron realmente a la necesidad de resolver las frecuentes fricciones inter e intraprovinciales relacionadas con el proceso de construcción del Estado nacional, pero más a menudo tuvieron que ver con políticas de neutralización o eliminación de aquellas facciones de las élites provinciales que no respondían a las directivas y orientaciones de aquellos que ocupaban la cúpula del gobierno nacional. Se sucedieron así hasta 1900 más de 30 intervenciones que afectaron en al menos dos ocasiones a cada una de las provincias, con la excepción de la norteña Salta, una de las más ranciamente oligárquicas de todo el conjunto.

Sáenz Peña no llegó a encabezar la implementación en todo el país de su reforma, puesto que murió en 1914. Sin embargo, un par de elecciones provinciales, especialmente la realizada en Santa Fe a principios de 1912, prefiguraron resultados no previstos por los reformadores. Estos “inconvenientes” probaron no ser accidentales; la implementación de la ley produjo graves trastornos a sus promotores que se extenderían durante la siguiente década y media. Inesperadamente, al menos para ellos, las reformas en favor de la limpieza del sufragio llevaron a la derrota de los partidos de las élites gobernantes en los distritos más poblados. En buena medida los resultados desfavorables se debieron a que las élites conservadoras no pudieron superar sus divisiones; a ello se sumó que subestimaron groseramente la fortaleza de los radicales en las urnas. De todos modos, había una causa más estructural de la debilidad electoral de los partidos conservadores. En Argentina era muy reducido el peso de

las clases campesinas, sometidas a cargas serviles y atadas a la tierra; ese fenómeno, en cambio, proveyó continuado sustento electoral a los partidos manejados por las clases terratenientes en regiones como el valle central de Chile o el nordeste brasileño. Los terratenientes argentinos, a diferencia de los Errázuriz del Maule o los *coroneis* de Ceará o Bahia, no gozaron de un recurso tan preciado.

Sin embargo, *la maladie* facciosa que afectó a las élites gobernantes del periodo 1880-1916 no fue un patrimonio exclusivo de ellas. Los triunfadores en la mayoría de las elecciones que se sucedieron a partir de 1912, es decir los políticos de la UCR liderados por Hipólito Yrigoyen, fueron aquejados por parecido problema. Las disputas vinculadas a la designación de candidatos y al ejercicio del poder de gobierno, generó en los radicales parecida división a la que imperaba dentro de la oligarquía: los correligionarios de Yrigoyen no perdieron tiempo alguno en pelearse entre ellos.

En Santa Fe, como ya se apuntó, se realizaron en 1912 elecciones de gobernador. La provincia estaba intervenida por el poder ejecutivo nacional, lo que denotaba la conflictividad imperante en la oligarquía. Triunfó claramente la UCR, pero no sin que la selección del candidato provocara fuertes tensiones entre las facciones del partido; estas se resolvieron, solo provisionalmente, con la intervención del máximo líder nacional. Durante el par de años siguientes, sin embargo, todo empeoró. El funcionamiento de la primera experiencia de sufragio ampliado en Argentina estuvo empañada por los mismos problemas de antaño, es decir la repetición de cismas dentro del partido gobernante que generaron una permanente inestabilidad. En otras palabras, en la primera provincia en la cual imperó la ley Sáenz Peña las disputas entre facciones llevaron inmediatamente a una sucesión de numerosos cambios de gabinete. Más aún, cuando se debió convocar a la legislatura para la elección de un senador nacional, triunfó un político de origen radical; sin embargo, esta

victoria se produjo a costa del candidato oficialmente apoyado por la UCR y gracias al apoyo… de los legisladores conservadores. Debe tenerse en cuenta que la Constitución argentina establecía que los senadores nacionales serían elegidos por los miembros de las legislaturas provinciales.

DEL VOTO CANTADO AL VOTO CONTADO: EL SUFRAGIO COMO MERO LEGITIMADOR DE UNA "VERDAD SOCIAL"

Los focos del escenario político se centraron a partir de 1912 en la próxima contienda presidencial prevista para 1916. Obviamente ella adquiría un significado totalmente diferente al de las anteriores, en las que la sucesión presidencial era siempre decidida por unos pocos.

De todas maneras, a pesar que por primera vez la disputa de la presidencia dependía de las decisiones de los votantes, la expectativa en torno a las votaciones aún no traspasaba el propio espacio electoral. Más allá de las solitarias prédicas doctrinarias que hacían los dirigentes del pequeño Partido Socialista que no tenía apoyos más que en la ciudad de Buenos Aires, la política todavía no se perfilaba como un ámbito en el cual la sociedad argentina se planteara, y menos aún comenzara a dilucidar, conflictos que involucraran a actores sociales externos a las élites. Los reclamos de los trabajadores eran sistemáticamente encasillados como temas policiales y las protestas eran respondidas en consecuencia. Esta continuidad se reflejó en el hecho que la "Semana Roja" de 1909 se repitiera con mucha mayor intensidad una década más tarde en la "Semana Trágica". En ambos casos a la policía se sumaron bandas armadas parapoliciales; las víctimas fueron trabajadores y extranjeros, en este último caso sobre todo los judíos. La misma suerte corrieron los inquilinos de una zona del sur de la provincia de Santa Fe cuando se rebelaron en 1912, es decir el mismo año de sanción de la ley Sáenz Peña

demandando que los terratenientes redujeran los arriendos de sus campos. Si bien finalmente lograron algunas rebajas, fueron hostigados permanentemente por la policía, varios de sus dirigentes asesinados y el abogado napolitano que había redactado el manifiesto del “Grito de Alcorta” —tal fue el nombre con el que fue conocido el episodio— fue ejecutado al poco tiempo en Rosario por un sicario de los terratenientes.

El país se enfrascó en los preliminares de la contienda presidencial bajo la sombra de dos incógnitas. La primera incógnita era si Yrigoyen aceptaría ser candidato presidencial; si bien su liderazgo en la UCR era absolutamente indiscutido, su insistencia en que su rol era el de un “apóstol” al servicio de la “regeneración del país” hacía dudar de su decisión final. Incluso cuando la convención del partido lo designó candidato solo 10 días antes de la misma elección, Yrigoyen renunció a la candidatura, expresando que tenía “la convicción de que haría un gobierno ejemplar; pero un gobierno no es nada más que una realidad tangible, mientras que un apostolado es un fundamento único, una espiritualidad que perdura a través de los tiempos, cerrando un ciclo histórico de proyecciones infinitas”.

De todos modos, Yrigoyen finalmente aceptó la postulación. Pero, a pesar del empeño que los radicales pusieron en ganar los votos, el discurso de Yrigoyen, al mismo tiempo, disminuía el sentido propiamente político del sufragio al postular que la UCR constituía, sobre todo, una “verdad social”. La otra incógnita era si las fuerzas conservadoras se unirían para presentar un solo candidato; este dilema se resolvió de modo opuesto. El recientemente fundado Partido Demócrata Progresista llevó adelante la candidatura de Lisandro de la Torre, quien era partidario de las reformas que depuraban las prácticas fraudulentas, pero los conservadores más tradicionales presentaron otra fórmula que incluso obtuvo más votos que el político santafesino. De la Torre, de hecho, expresaba la modernidad del liberalismo argentino y, al mismo tiempo, su falta de viabilidad; él pretendía fortalecer un

espacio que se apartara de las prácticas tradicionales de los conservadores más rancios, sin percibir que la política de masas recreaba algunos de los vicios que rechazaba. Especialmente, este era el caso del personalismo yrigoyenista; De la Torre se había apartado definitivamente de la UCR en 1896 desafiando a duelo a Hipólito Yrigoyen y criticándolo por “un accionar en las sombras a través del cual ejercía una influencia hostil y perturbadora [guiado por un] afán oscuro de proselitismo sin horizontes”.

Sin embargo, finalmente la fórmula de la UCR se impuso por un escaso margen y logró reunir los electores necesarios a pesar de las desesperadas maniobras que el oficialismo intentó para convencer a un grupo de disidentes —precisamente de la provincia de Santa Fe donde no se habían resuelto las peleas internas de los radicales— para que no votaran a Yrigoyen en el Colegio Electoral. La fórmula Yrigoyen-Luna resultó apoyada por 49% del electorado frente a alrededor de 40% que recibieron las dos candidaturas surgidas del universo conservador. Claramente los radicales triunfaron en la mayoría de los distritos más “modernos”, es decir Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, la capital, Tucumán y Mendoza —la excepción, en ese sentido, fue su victoria en Santiago del Estero—, mientras que fueron derrotados en las provincias más “tradicionales”, esto es, Corrientes, Salta, La Rioja, Catamarca, San Luis, San Juan y Jujuy además del… bastión del propio Yrigoyen, la provincia de Buenos Aires, todavía gobernada por los conservadores, quienes obviamente controlaban los consabidos mecanismos de patronazgo y fraude.

Como es bien sabido, mientras en Argentina se producía el tránsito a un régimen más democrático, en el hemisferio norte los conflictos se estaban resolviendo de manera mucho más violenta. El asesinato del heredero de la corona austrohúngara en Sarajevo había encendido una mecha que ardió hasta noviembre de 1918. El principal resultado de la primera guerra mundial no fue empero la derrota de los imperios centrales; ni siquiera lo fue el colapso del zarismo que generaría el vacío en el cual triunfó la

revolución bolchevique, que, a su vez, conduciría tortuosamente al surgimiento de una alternativa no capitalista en el siglo XX. Más bien, durante los cuatro años de la guerra se vino abajo un mundo, aquel en cuyo pináculo estaba la Gran Bretaña victoriana, cuyos máximos dirigentes desde Palmerston en adelante, habían proclamado que su superioridad descansaba en la expansión del comercio mundial bajo la máxima del librecambio, las ventajas del ejercicio de un imperialismo de estilo informal y el mantenimiento de la paz entre las grandes potencias europeas.

El patrón oro, el librecambio y la división internacional del trabajo, que le asignaba a Argentina el papel de proveedora de alimentos, colapsaron durante esos años. El desplazamiento de Gran Bretaña del centro de ese sistema, la fractura del mercado mundial de capitales que terminó de derrumbarse en 1929 y el ingreso a una etapa de conflictividad expresa entre las grandes potencias contribuyeron al reforzamiento de estrategias nacionalistas y autárquicas en los países capitalistas centrales. Como ya veremos, con solo una década de retraso, esa tendencia también se difundió entre la media docena de países latinoamericanos que se habían integrado plenamente al sistema mundial en el medio siglo previo.

El reemplazo de Gran Bretaña por Estados Unidos como eje del sistema económico internacional, incluyendo el rol de prestamista de última instancia, trajo graves consecuencias para los países exportadores de alimentos y materias primas, especialmente para aquellos que como Argentina competían con Estados Unidos como exportadores de granos y carne vacuna. Sin embargo, la economía argentina no experimentó grandes trastornos durante la década de los veinte. A diferencia de otros países latinoamericanos cuyas exportaciones no competían con las norteamericanas, como Cuba —seriamente afectada por la caída del precio del azúcar—, Chile —que continuaba dependiendo del salitre como principal producto exportable— y Brasil —con similar dependencia en relación con el café—, Argentina

mantuvo una situación económica razonable. Este *statu quo* relativamente favorable, sobre todo en comparación con otras economías latinoamericanas como las mencionadas que enfrentaron serias crisis, contribuyó indudablemente a que los gobiernos radicales inaugurados en 1916 no produjeran grandes cambios en materia de política económica. De todas maneras, ni los conservadores ni los socialistas en el otro extremo del arco político se los reclamaron.

Donde el radicalismo sí introdujo reformas fue en el área de las políticas externas. En su primer gobierno Yrigoyen resistió las presiones norteamericanas para quebrar la neutralidad argentina en la guerra mundial, presiones que en realidad se sumaron a las británicas. También saboteó con bastante eficacia los proyectos de Estados Unidos para extender su hegemonía más desembozada en el continente americano. De tal modo contribuyó a profundizar el síndrome de escasa armonía que caracterizó las relaciones entre la gran potencia del norte y Argentina al menos desde 1889, año de la primera conferencia hemisférica celebrada en Washington, en la que los representantes argentinos se indignaron cuando fueron tratados como enviados de una "república bananera más".

Yrigoyen intentó asimismo implementar algunas tibias reformas en materia impositiva. La oposición de los derrotados en 1916, empero, fue frontal. La capacidad de bloqueo de las fuerzas conservadoras resultó extremadamente eficaz pues mantuvieron durante casi todo el periodo radical el control de la mayoría en el Senado nacional; en cambio, el radicalismo sí se convirtió rápidamente en el partido mayoritario en la Cámara de Diputados. De tal manera se fue conformando un juego de suma cero que tornó difícil la materialización de avenimientos institucionales. Los partidos que habían gobernado en la etapa previa se negaron a admitir su derrota y, por su parte, el presidente radical ignoró a menudo las prerrogativas del poder legislativo, que era precisamente uno de los ámbitos en el cual los conser-

vadores mantenían mucho peso. Una de las maniobras a las que recurrió Yrigoyen fue la de no facilitar la concurrencia de los ministros del poder ejecutivo cuando así lo solicitaban las cámaras para la presentación de informes. En una política que afectó aún más seriamente las relaciones entre los poderes constitucionales, Yrigoyen intervino a numerosas provincias, tanto a las gobernadas por su propio partido —que no cesó de enfrascarse en numerosas disputas internas— como a las controladas por los opositores. En estos últimos casos, el objetivo presidencial era claro: alterar en su favor las relaciones de fuerza en las legislaturas provinciales para facilitar la elección de senadores nacionales que le fueran adictos y lograr, por lo tanto, alcanzar la mayoría en la cámara alta.

Otro frente en el cual se produjeron cambios significativos fue el universitario. El proceso estalló a partir de protestas estudiantiles en la Universidad Nacional de Córdoba frente a la ruptura de los compromisos que había asumido el interventor de la universidad designado por el presidente Yrigoyen, quien inicialmente parecía haber coincidido con las demandas de democratización del gobierno de la universidad. El manifiesto de la reforma, que tuvo eco en otras universidades argentinas, especialmente la de La Plata, y en casas de estudio de otros países latinoamericanos, formulaba dos críticas a la universidad oligárquica: por un lado, denunciaba su mediocridad, producto del rechazo a la innovación y a la ausencia de una mirada crítica, y, por el otro, le adjudicaba una incapacidad para crear comunidad, carencia que los estudiantes reformistas atribuían, correctamente, al predominio de anacrónicos criterios jerárquicos y al reinado de la obsecuencia. Como la reforma fue, en sus orígenes, un fenómeno nacido en Córdoba, una ciudad situada espacial y culturalmente en la encrucijada entre la modernidad y el más rancio conservadurismo, no resultó extraño que el "Manifiesto liminar" de los estudiantes contuviera un violento ataque contra la Compañía de Jesús, ya que la orden había fundado la primera universidad en Córdoba

en el siglo XVII y había recuperado poder durante el siglo XIX. La reforma inauguró una docena de años durante los cuales las universidades argentinas tuvieron cierto florecimiento y se convirtieron en un espacio donde intelectuales y políticos de talante crítico pudieron circular libremente, incluidos pensadores de izquierda. Este proceso sería clausurado por el golpe militar de 1930, abriendo así un largo medio siglo de oscurantismo impulsado en general por el nacionalismo católico de derecha que, fomentado por los gobiernos en turno, gobernó autoritariamente las universidades públicas. Este largo ciclo fue interrumpido temporalmente durante el periodo 1955-1966 cuando los descendientes de la primera generación reformista volvieron a los primeros planos en varias universidades públicas, en particular en la Universidad de Buenos Aires, inaugurando un segundo ciclo de florecimiento de creatividad y movilización estudiantil que sería de nuevo clausurado por otro golpe militar.

Durante el periodo radical el conflicto institucional, abierta o larvadamente, fue permanente. Las oposiciones, sobre todo los conservadores, jugaron de manera desleal para terminar apoyando un golpe de Estado militar durante el segundo periodo de Yrigoyen iniciado en 1928; el oficialismo yrigoyenista no se quedó atrás y procuró arrinconar a la oposición recurriendo a prácticas que lindaron con la ilegalidad. Se debe subrayar, de todos modos, que Yrigoyen nunca quebrantó las regulaciones constitucionales.

La alta conflictividad política, sin embargo, no fue el resultado de que radicales y conservadores detentaran visiones opuestas del mundo. La UCR y su máximo líder no se apartaron significativamente de la cosmovisión de la élite que había llevado adelante la construcción del Estado argentino y había promovido la integración del país al sistema capitalista internacional como proveedor de alimentos y materias primas. En verdad, este no era un rasgo que distinguiera al radicalismo; ninguna fuerza dentro del espectro político argentino advirtió que el mundo de

la *belle époque* se había derrumbado sin remedio y que las naciones del Atlántico norte estaban comenzando a adoptar estrategias dirigistas y nacionalistas.

La estrategia que siguió la UCR durante sus 14 años de gobierno, que privilegiaba de manera excluyente las demandas centradas en la reforma del régimen político, ya había sido marcada un par de décadas atrás por el fundador del partido, Leandro N. Alem, quien sostenía que el radicalismo argentino no tenía un contenido social ni estaba inspirado en los radicalismos europeos. Alem también se opuso a la política de los acuerdos, que paradójicamente constituía otra de las bases de los conservadores de la llamada Generación del 80. El predecesor de Yrigoyen, que también era su tío, había concluido que la política de los acuerdos inevitablemente era tributaria de las personalidades, en detrimento de los principios.

De todos modos, debe advertirse que si bien Yrigoyen compartió también ciertos principios de Alem, como su crítica a las prácticas fraudulentas del régimen conservador y su intransigente rechazo al acuerdismo, en su quehacer político cotidiano se apartó del fundador en el tema central del personalismo. Yrigoyen no hizo más que reiterar y amplificar el sesgo personalista de la política argentina, precisamente al basar su atractivo en el voto popular. Durante los 14 años de gobiernos radicales, las consecuencias de este estilo político no solo se reflejaron en la conflictiva relación con las oposiciones, sino también en la dinámica que se creó dentro de la UCR, dinámica a la cual también contribuyó la mediocridad y el escaso apego a los valores democráticos de los radicales antiyrigoyenistas. Tanto los yrigoyenistas como sus adversarios alimentaron por igual el debilitamiento del funcionamiento partidario y, por supuesto, nada hicieron para impedir la agudización de los conflictos facciosos.

La concentración del poder gubernamental y partidario en Yrigoyen durante el periodo de su primera presidencia reforzó aún más su vínculo con sus bases de apoyo a lo largo de todo el

país. Pero también generó heridas y resentimientos por parte de aquellos dirigentes partidarios que se enfrentaron, y generalmente perdieron, con el líder supremo. Muestra de esto fue que la mayoría de las intervenciones a las provincias dispuestas durante su primer gobierno, 10 de 19, recayeron sobre gobiernos radicales. A los resentidos de tempranas épocas, como los "menchaquistas" de Santa Fe, los "lencinistas" mendocinos, los "cantonistas" sanjuaninos, se fueron sumando disidentes de otras provincias, en general blanco de los desplazamientos y amenazas orquestados por Yrigoyen. Todo el proceso culminó durante el invierno de 1924. En agosto de ese año, los dirigentes que se oponían al ya anciano líder, con el visto bueno implícito del sucesor de Yrigoyen en la presidencia de la nación, Marcelo T. de Alvear (1922-1928), fundaron el Partido Antipersonalista en un teatro de la capital. Ya desde antes incluso de su aparición formal, los antipersonalistas se plantearon como claro objetivo bloquear, o en todo caso derrotar, la posible candidatura presidencial de Yrigoyen en las siguientes elecciones presidenciales previstas para 1928. Esta estrategia, por cierto, incluía la búsqueda de aliados fuera de la UCR, en particular dentro de las filas conservadoras y del socialismo porteño, lo cual confirmaba la escasa preocupación que todos mostraban en conformar alianzas en torno a algún tipo de convergencia doctrinaria.

El primer paso que dieron los antipersonalistas, sin embargo, evidenció que uno de los pilares de su estrategia, es decir el apoyo del presidente Alvear, no era tan sólido ni tan irrestricto como suponían. En una jugada que intentaron en 1925, y que repetirían también fallidamente dos años más tarde, trataron de que el poder ejecutivo interviniera la decisiva provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador era leal a Yrigoyen. En ambas ocasiones los antipersonalistas, a quienes se sumaron los legisladores conservadores, fracasaron porque Alvear se opuso a la intervención. Especialmente en 1927 Alvear era enteramente consciente que la negativa a intervenir la principal provincia no hacía más

que asegurar el triunfo de Yrigoyen en las inminentes elecciones presidenciales, para las cuales los conservadores estaban ya encaminándose a apoyar una fórmula integrada por dos radicales antipersonalistas.

La actitud de Marcelo T. de Alvear, además de indicar su convencimiento de que los argumentos esgrimidos para disponer la intervención a Buenos Aires eran endebles, sugería algo más profundo: una reticencia a traicionar a Yrigoyen que iba más allá tanto de la incompatibilidad de sus estilos como del hecho de que Alvear obviamente apoyó la formación del antipersonalismo. Si bien abundaron las confrontaciones entre ambos, que a menudo eran el resultado de los intentos de Yrigoyen de imponer a sus partidarios en cargos públicos, la pertenencia al radicalismo de uno y otro descansaba en principios o, más bien, en sentimientos políticos compartidos.

Los episodios de 1925 y 1927 revelaron una lealtad de Alvear a su viejo jefe que ha sido oscurecida por las interpretaciones que, tanto dentro como fuera de la UCR, caracterizaron a Alvear como un oligarca, que representaba supuestamente el ala conservadora de su partido y por ello situado en las antípodas del ala popular y progresista encarnada, en estas visiones maniqueas, por el "presidente de la plebe", o sea Yrigoyen. Alvear era, claro está, un aristócrata proveniente de una familia cuyo linaje patricio tenía sus raíces lo más atrás que se podía ir en la región del Plata en búsqueda de antecedentes de alcurnia, es decir hasta las postrimerías del siglo XVIII. Sin embargo, su comportamiento durante la década de los veinte muestra que sería un error pretender interpretar sus acciones políticas como una simple resultante de su origen social; Yrigoyen y Alvear eran las dos caras de un movimiento político popular, democrático y policlasista que marcó la entrada de Argentina a la era de la política de masas. Este movimiento, la UCR, se nutrió tanto de los vicios de la política oligárquica como de los atributos plebeyos, integradores y antielitistas de la sociedad argentina que se conformó entre 1870 y 1930.

Al fracasar los obstáculos que se quisieron poner a la candidatura de Yrigoyen en 1928, el camino que quedaba era la conformación de la alianza electoral apoyada en la confluencia de antipersonalistas, conservadores y una rama disidente del socialismo —esta última, que se autodenominaba socialista independiente, desempeñaría, como veremos, un importante rol en la década siguiente. La alianza, de la cual se apartó una rama conservadora aduciendo que "el radicalismo sombra" —o sea el antipersonalismo— era lo mismo que el yrigoyenismo, finalmente llevó a dos antipersonalistas, Leopoldo Melo y Vicente Gallo, como candidatos. Esta fórmula sería batida rotundamente por Yrigoyen en las elecciones del 1 de abril ya que el "decrépito anciano" ganó en todos los distritos, excepto en la provincia de San Juan. Más aún, en la crucial provincia de Buenos Aires el triunfo yrigoyenista fue arrasador: 217 000 votos a 73 000. Además, la UCR obtuvo la mayoría de diputados en casi todas las provincias, a excepción de dos. La derrota abrumadora de la coalición antiyrigoyenista, sin embargo, no nos debe ocultar que ella representaba un amplio espectro de potentes fuerzas sociales que controlaban el grueso de los recursos materiales del país y manejaban la mayoría de los instrumentos que moldeaban la opinión pública. El problema que tenía esta coalición, claro está, era que el cemento que la mantenía unida era un atributo que ciertamente no servía para ganar elecciones de manera limpia: el desprecio al principio de la soberanía popular.

No fue de extrañar, entonces, que desde 1928, ya materializada la segunda llegada de Yrigoyen al gobierno, comenzara a circular dentro de los distintos ámbitos de la oposición la idea de un derrocamiento por la fuerza del líder radical. Para ello se requería avanzar en dos direcciones: la primera, lograr el apoyo activo de un sector decisivo de las fuerzas armadas o, al menos, su consentimiento; la segunda, promover entre la opinión pública un clima de repudio al gobierno radical. En relación con este último tema, el sendero en parte comenzó a ser transitado ape-

nas asumió Yrigoyen. El nuevo presidente tenía 76 años de edad y no resultó difícil imputarle una presunta senilidad; pronto se le agregó la caracterización de Yrigoyen como un individuo aislado de la realidad y enclaustrado por un entorno palaciego de correligionarios adulones y funcionarios corruptos. Cabe señalar que si bien el presidente sufría algunos problemas médicos, estos no lo incapacitaban en modo alguno para ejercer el gobierno. Pero solo cuando ya estaba avanzado 1929, y los efectos de la crisis mundial desencadenada en New York se hicieron sentir brutalmente en Argentina, fue que las consignas golpistas comenzaron a tener eco. La brusca contracción de la economía mundial afectó al gobierno desde el lado de las exportaciones y las inversiones de capital, al bajar el nivel de actividad, y también desde el lado de las importaciones, al disminuir el volumen de los recursos fiscales. Según Díaz-Alejandro, los términos del intercambio externo que eran de 117 en el quinquenio 1925-1929 descendieron en el siguiente a 78, tomando el de 1935-1939 como base 100.

La primera manifestación de la pérdida de popularidad del gobierno y de su presidente fue el severo descenso de las votaciones radicales, fenómeno que se manifestó tanto en los comicios celebrados en varias provincias, incluida la de Buenos Aires, como en la renovación bianual de diputados nacionales de principios de 1930. Sin embargo, esta circunstancia no indujo a los partidos de cuño oligárquico a jugar con limpieza la carta electoral; la desconfianza que le tenían a la ciudadanía era incurable. Los conservadores, a pesar de su evidente recuperación electoral, blandieron sin embozos la bandera golpista. En los mismos actos de campaña, sus invocaciones a la necesidad de terminar con el gobierno de Yrigoyen de cualquier manera, a las que sumaron de manera menos estridente los antipersonalistas y los socialistas independientes, fueron cada vez más explícitas. Así fue como un senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Antonio Santamarina, sostenía en un discurso de campaña que

entre sus partidarios "ante los excesos del gobierno se ha generado el temor, por lo demás bien fundado, de que nos veremos obligados a utilizar medios violentos para defendernos de los ataques que amenazan nuestros derechos".

En parecida vena, Rodolfo Moreno, otro conspicuo político bonaerense varias veces precandidato a la Presidencia de la República por las fuerzas conservadores, advertía que "si el oficialismo [nos] bloquea el camino legal, no debemos vacilar en utilizar otros recursos para lograr una verdadera democracia en la provincia y en el país".

Dado que los "otros recursos" eran obviamente los militares, los políticos conservadores y sus aliados se abocaron decididamente a la tarea de convencer a un grupo de oficiales superiores para que dieran el golpe. Este objetivo fue facilitado por la existencia de núcleos opositores al yrigoyenismo desde prácticamente los inicios de la década de los veinte. En 1921 se había creado la logia militar San Martín a la cual se adhirieron numerosos oficiales del ejército de orientación nacionalista y autoritaria. Muy cercano a este sector se ubicaba el militar que asumió el liderazgo del golpe, el teniente general ya retirado, José Félix Uriburu. Uriburu provenía de una aristocrática familia salteña y desde antes de que asumiera Yrigoyen estaba siendo seducido por un grupo de ideólogos ultramontanos, entre ellos los más connotados eran Matías Sánchez Sorondo, un antisemita manifiesto que sería nombrado ministro de Interior, Juan Carulla, Carlos Ibarguren, Ernesto Palacio y los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta. Sin embargo, para el éxito del *putsch*, que en la práctica no fue más que un paseo de las tropas golpistas —entre las cuales el grupo más nutrido fue el de los jóvenes cadetes del Colegio Militar— por las avenidas de Buenos Aires, fue esencial el consentimiento que prestó el hombre fuerte de las fuerzas armadas, el general Agustín P. Justo, quien había sido ministro de Guerra durante la presidencia de Alvear y estaba muy cerca de los radicales antipersonalistas.

De todas maneras, es cierto que el golpe no provocó casi ninguna resistencia. El aislamiento del gobierno, y en particular del presidente, era prácticamente total. Quizá el ejemplo más evidente de esta situación fue la actitud de dos de los allegados más próximos a Yrigoyen, el vicepresidente Enrique Martínez y el ministro de Interior Elpidio González, quienes, como muchos otros, abandonaron al presidente en la errada creencia de que los militares iban a intervenir puntualmente y les servirían el gobierno en bandeja. Por supuesto, fueron decepcionados por los insurrectos que querían el poder solo para ellos. Excepto en un par de localidades, donde algunos militantes radicales ensayaron alguna resistencia que fue sofocada sin problemas, la sociedad argentina no se opuso al quiebre de la legalidad constitucional. Yrigoyen fue confinado a la solitaria isla de Martín García, situada en el medio del Río de la Plata, y su modesta casa en la ciudad de Buenos Aires fue incendiada por una turba.

LA IRRUPCIÓN DE LOS MILITARES EN LA POLÍTICA. "FRAUDE PATRIÓTICO" Y DIRIGISMO ESTATAL

El golpe de septiembre de 1930 fue tanto cívico como militar y fue celebrado por las viejas oligarquías y las clases de grandes propietarios como un venturoso retorno a la Argentina donde gobernaban "los mejores". A la casi totalidad de la prensa y las entidades que representaban a los distintos sectores de la burguesía, se sumaron la mayoría de los partidos no yrigoyenistas, cubriendo un arco que iba desde los conservadores de distintos linajes hasta los dos partidos socialistas, pasando por los sectores antipersonalistas del radicalismo, que habían sostenido la fórmula Melo-Gallo en las elecciones presidenciales de 1928. Desde la perspectiva de la opinión pública los conservadores y sus aliados habían obtenido una victoria plena; los argentinos parecieron contemplar el desfile de algunos cientos de militares

y cadetes, o la "revolución" como ostentosamente la llamaron sus autores, con aprobación e incluso con júbilo.

Ahora bien, una vez superada lo que resultó la sencilla e incruenta operación de derrocamiento y prisión del "Peludo" —apodo con el cual era conocido Yrigoyen— se agudizó inmediatamente el dilema que ya se había planteado durante los conciliábulos que precedieron al golpe. Había acuerdo en torno al principio de que los "mejores" eran los que debían gobernar, pero las discrepancias surgían y se multiplicaban cuando había que decidir qué mejores serían los que gobernarían y de qué manera serían seleccionados. ¿Sería un caudillo ungido por "la gracia de dios", al estilo de lo que Francisco Franco pergeñaría cruentamente en España unos años más tarde? ¿O, más bien, se articularía un legislativo de sesgo corporativo cuyos miembros serían propuestos, o incluso nominados, por las cámaras empresariales y los colegios profesionales, tal como se suponía, era la preferencia del general Uriburu? ¿O sería más aconsejable no arriesgarse con fórmulas insuficientemente ensayadas, y recurrir otra vez al confiable y extensamente probado método del fraude? ¿O, adoptando la perspectiva de los más optimistas, no sería aconsejable dejar a la ciudadanía argentina que se expresara libremente, confiando en que desecharía mayoritariamente cualquier retorno al vilipendiado populismo yrigoyenista, y sabiamente encumbraría en el poder a preclaros miembros de las élites desalojadas del gobierno en 1916?

Les llevó menos de un par de años a los sediciosos triunfantes concluir que tanto la implementación de las propuestas corporativistas del presidente Uriburu como la de llevar adelante elecciones exentas de fraude no eran buenas ideas. En cuanto a elecciones transparentes y honestas, el desengaño fue rápido, contundente e inesperado. En abril de 1931, apenas unos meses después del golpe, a las autoridades nacionales se les ocurrió convocar a elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires sin tomar las previsiones necesarias para que los votos

fueran contados "de la manera debida". En consecuencia, la UCR se impuso por más de 30 000 votos, en consonancia exacta con la predicción que, según varios de sus partidarios, había hecho el ex presidente confinado en Martín García. Como respuesta, el gobierno anuló las elecciones y Uriburu se vio obligado a despedir a Sánchez Sorondo, quien ya se había encargado de crear la Sección Especial de Represión del Comunismo, donde fueron recluidos y torturados anarquistas y comunistas, con fatales consecuencias para algunos de ellos. El ministro también se había preocupado por requisar numeroso "material subversivo", una amplia categoría en la cual, además de los periódicos de los partidos de izquierda, también caía cualquier publicación en *yiddish*, que Sánchez Sorondo procuraba empeñosamente hacer traducir antes de quemarla.

El episodio de las elecciones de abril también sirvió para desechar la opción corporativista, ya que le vino de maravillas al general Justo para forzar a Uriburu a acelerar su partida y convocar a elecciones presidenciales en 1932. Y en ese menester, Justo tenía muy clara cuál debía ser la receta: él sería el candidato de la Concordancia —tal como se conoció a la alianza que celebraron antipersonalistas y conservadores—; el candidato radical mejor posicionado, el ex presidente Alvear, sería proscrito con el pretexto de que constitucionalmente no habían transcurrido seis años desde el fin de su mandato en 1928, y *last but not least,* los encargados del escrutinio se asegurarían que ganaran los que debían ganar.

La prolija aplicación del "fraude patriótico" garantizó el triunfo de Justo, batiendo a la alianza entre socialistas y demócratas progresistas que llevó como candidato a presidente a Lisandro de la Torre. Cabe señalar que pocos meses antes, en un acto que, aparte de resaltar la rectitud política del político santafesino, mostraba la confusión del periodo que siguió al golpe, Uriburu le había ofrecido a De la Torre la dirección política de su gobierno. De todos modos, resultaba evidente que la visión que

tenía Justo de la política era diametralmente opuesta a la de Uriburu; para él de lo que se trataba era volver a los tiempos previos a la sanción de la ley Sáenz Peña, con la idea de ir manejando gradualmente una apertura que reincorporara al juego a los radicales de buen comportamiento encabezados por Alvear. En ese sentido, resultó todo un símbolo que su compañero de fórmula fuera Julio Argentino Roca (hijo). No le molestaba a Justo ser comparado con el padre de su vicepresidente, que había ejercido la presidencia durante dos periodos completos, con un paréntesis en el medio tal como lo prescribía la Constitución.

Los nacionalistas civiles fueron apartados de toda gestión gubernamental de importancia, pero no ocurrió lo mismo en el ejército donde un núcleo minoritario, pero muy activo, de oficiales de esa postura continuó disfrutando de cierto liderazgo. Estos oficiales, algunos de los cuales estaban vinculados a los círculos ultramontanos de la iglesia católica, no tenían un control operativo del arma, pero sí ejercían una fuerte influencia ideológica, especialmente en los institutos de formación militar, apelando al atractivo que tenían dentro de las fuerzas armadas las consignas nacionalistas, autoritarias y estatistas. La iglesia católica alimentó estas prédicas de profundo contenido antidemocrático con la invocación a la unión de la cruz y la espada. De esta manera, los curas y los oficiales nacionalistas contribuyeron a reforzar el estado deliberativo de los militares inaugurado durante la década anterior y que se prolongaría por más de 60 años. También durante la primera mitad de la década de los treinta se produjeron un par de rebeliones militares en Corrientes y Entre Ríos protagonizadas por oficiales leales a la UCR que fueron sofocadas fácilmente, dado el escasísimo eco que despertaron en otras unidades. Justo controlaría con cierto éxito la incipiente facciosidad de las fuerzas armadas hasta su muerte a principios de 1943. Como ya veremos, las deliberaciones y los enfrentamientos internos, que de todos modos no cesaron, estallaron inconteniblemente después de su desaparición.

El discurso estatista y nacionalista encontró un inesperado eco en la clase política, una vez que las medidas económicas de tipo ortodoxo ensayadas durante los primeros tres años de los gobiernos antidemocráticos —es decir, la defensa de la moneda y la contención del gasto público— mostraron su absoluta ineficacia para revertir la grave situación externa y fiscal. Fue un reducido grupo de intelectuales, abogados y contadores públicos, provenientes del socialismo independiente, quienes fueron llamados por Justo para hacerse cargo de la política económica. Entre ellos, las figuras más destacadas fueron Antonio de Tomaso y Federico Pinedo; ellos, al ser nombrados ministros de Agricultura y Hacienda respectivamente, instrumentaron por primera vez dependencias encargadas de la regulación de la producción, sobre todo de productos agropecuarios de exportación que, en varios casos, constituían parte de la canasta básica de consumo de los argentinos. También, inspirándose en las iniciativas emprendidas simultáneamente por los Estados Unidos del *New Deal* de Franklin D. Roosevelt y la Gran Bretaña keynesiana, Pinedo implementó un plan de obras públicas, a la par que se creaba el Banco Central, si bien en este último caso se adoptaron juiciosamente las recomendaciones que había efectuado la misión Kemmerer, que ya había transitado durante la década previa por la mayoría de los países del Pacífico sudamericano. Al frente de la gerencia general del nuevo banco se puso a Raúl Prebisch, un joven tucumano muy cercano a Pinedo. Prebisch, en una extraña vuelta de tuerca del destino, había convencido a Uriburu de implantar el impuesto a las ganancias en contra de la opinión de su ministro de Hacienda, poco antes de que el general dejara la presidencia y ya hubiera perdido de hecho el poder. En otra novedad, que también reflejaba el cambio de época, el grueso de la inversión pública se destinó a la construcción de carreteras, en total sintonía con la instalación de plantas armadoras de automóviles y de fabricación de neumáticos de las grandes empresas norteamericanas en Argentina, hecho que se

produjo también en la década de 1930. La llegada de Ford, General Motors y Firestone —además de otras firmas extranjeras en los sectores textil, alimentario y farmacéutico— a la par de sugerir el apoyo del capital extranjero al gobierno autoritario argentino, coincidía con la paralela desinversión que se producía en la red ferroviaria, fenómeno que, en realidad, ya venía perfilándose desde fines de la década de 1910. Díaz-Alejandro revela la magnitud de este último proceso al comparar las existencias de capital en 1929 y 1939. Mientras que en ferrocarriles el capital había disminuido 22% —durante los años de la guerra la caída sería aún más pronunciada con un 25%—, las existencias de capital en otros medios de transporte aumentaron 142%. Las inversiones crecieron también en otros sectores industriales, en los cuales la participación de empresas nacionales grandes y pequeñas resultó muy significativa. Como resultado de todo ello, en 1939 la industria prácticamente aumentó 50% en relación con los años de la crisis.

Los resultados de las políticas económicas implementadas durante la década de los treinta fueron espectaculares. Nuevamente, Díaz-Alejandro ofrece unas comparaciones demostrativas de los logros argentinos: "en 1939 el producto interno bruto real argentino estaba casi un 15% por encima del de 1929 y un 33% más alto que el de 1932, mientras que en Estados Unidos una comparación similar señala un aumento de solo el 4% entre 1929 y 1939. El desarrollo australiano entre 1929 y 1929 es similar en cifras absolutas al de la Argentina, aunque mejor en términos per cápita, al paso que el canadiense se asemeja al de Estados Unidos".

Pinedo se vio forzado a renunciar en 1935 cuando objetó las condiciones, que él estimó lesivas, para Argentina, del pacto Roca-Runciman firmado con Gran Bretaña con el objetivo de preservar las exportaciones argentinas de carne congelada. Dicho sea de paso, el pacto fue presentado por muchos que criticaron las orientaciones del gobierno justista como una demos-

tración de la sujeción del país a las políticas británicas y de la corrupción de los funcionarios argentinos. En realidad, como veremos, el gobierno de Agustín Justo fue el único del periodo conocido como la "Década Infame" que llegó a implementar políticas de manera consistente. Esto no fue ajeno al hecho de que solo él completó su mandato en los años 1930-1943, circunstancia que resalta que los conservadores no lograron resolver los vicios de inestabilidad y facciosidad que les achacaron a sus predecesores radicales. De todos modos, Pinedo retornó al cargo cuando asumió el sucesor de Justo, el político antipersonalista Roberto M. Ortiz. También en 1941, empero, volvió a renunciar cuando en el Parlamento los legisladores se negaron a aprobar un ambicioso plan industrial de su autoría, propuesta que coincidió, para disgusto de los círculos conservadores más tradicionales, con un intento de Pinedo de obtener el apoyo de Marcelo T. de Alvear a una salida pactada del régimen fraudulento.

Los éxitos económicos del periodo autoritario contrastaron con su fracaso total en estabilizar una fórmula política. Como ya se esbozó en los párrafos previos, el proyecto estaba repleto de anacronismos; era imposible retroceder en Argentina a una democracia restrictiva o dirigida, como la que pretendían Justo, Ortiz y sus amigos, sin recurrir a modelos abiertamente dictatoriales. Lo que se logró, en cambio, fue reintroducir con mayor vigor los viejos vicios de la etapa anterior a 1912 que, como se vio, no habían sido efectivamente erradicados durante los gobiernos de la UCR, y agregar algunos más. Lo más grave, fue, sin duda, el ingreso abierto y permanente de los militares a las arenas de la política. Que este fenómeno se constituyera en un pesado lastre, no solo se debió a la incapacidad que demostrarían sistemáticamente los militares en la gestión de gobierno, al permanente traslado de sus disputas internas a la arena pública y a la ausencia del más mínimo respeto por los derechos humanos y la vida. A estos lapidarios defectos, cuyas dramáticas consecuencias se fueron intensificando con el paso de las décadas, se agre-

gó que los militares nutrieron la propensión de la mayoría de los actores sociales a promover sus intereses y valores recurriendo a estrategias que mostraban un desapego total por los procedimientos democráticos. Por ello fue que las fuerzas armadas nunca carecieron de cómplices, promotores, letristas e ideólogos en sus aventuras autoritarias. La carta militar se sumó explícitamente a la baraja con la que jugaban prácticamente todos los actores de la vida política, especialmente los distintos sectores de la gran burguesía, incluida por supuesto la agropecuaria, casi todos los partidos políticos, excepto los de extrema izquierda, y también los sindicatos de trabajadores, especialmente a partir de la creación de la Confederación General del Trabajo en 1930.

¿Cuál fue la consecuencia del modelo de mlitarización de la política que se desplegó en Argentina a partir de 1930? Hasta 1912, el ejercicio del fraude era una práctica de naturaleza eminentemente territorial, que tenía que ver con el control que las oligarquías tenían sobre las policías y la justicia locales. A partir de 1930, sin que los mecanismos de control tradicional desaparecieran, las presiones de los militares, sus intermitentes amenazas de golpe y los levantamientos de las fuerzas armadas se convirtieron en un mecanismo decisivo para suspender, limitar o directamente anular el libre ejercicio del voto. En otras palabras, los cuarteles militares se agregaron a los comités partidarios y a los salones oligárquicos como los espacios donde las decisiones vitales de la política argentina eran tomadas, casi siempre con consecuencias desfavorables para la democracia.

Durante toda la Década Infame el personaje clave fue Agustín P. Justo. Él se convirtió en el único presidente fuerte de todo el periodo; su fortaleza descansaba en la capacidad para circular con eficacia por todas las arenas relevantes de la política nacional, es decir en los cenáculos de la oligarquía, los comités de los partidos y los cuarteles militares. En su espacio propio, esto es el de las fuerzas armadas, y quizá apoyándose en su fama de "inteligentón", o quizá incluso a pesar de esa fama, Justo disfru-

tó de un olfato que le permitía a menudo anticipar las conductas de sus colegas, especialmente de aquellos que estaban al mando directo de tropa. También poseía un refinamiento, probablemente heredado de su familia patricia originaria de la provincia de Corrientes, atributo que unido a sus méritos como coleccionista de libros e ingeniero civil recibido en la Universidad de Buenos Aires le otorgaban la posibilidad de codearse sin problemas con los miembros de la élite. Por último, su participación como ministro de Guerra durante toda la presidencia de Alvear, periodo en el cual también se desempeñó de manera interina en otro par de ministerios usualmente a cargo de civiles, le había permitido aceitar sus vínculos con la mayoría de los políticos argentinos.

Sin embargo, y a pesar de todos los "atributos" que acumulaba el general Justo, el personalismo funcionó tan mal durante el régimen autoritario como en la etapa anterior de carácter más democrático. Un problema que no pudo resolver adecuadamente nunca fue el manejo de la provincia de Buenos Aires, donde se sucedieron los desatinos institucionales. El más sonado fue el desplazamiento en 1935 de la gobernación del patriarca de una de las familias oligárquicas más connotadas, Federico Martínez de Hoz, un terrateniente y ex presidente de la Sociedad Rural —la más elitista de las asociaciones corporativas de los dueños de la tierra—, quien era un político novel que fue arrasado por las disputas entre las diferentes facciones del conservadorismo bonaerense, proceso cuyos meandros probablemente le resultaban ininteligibles a Martínez de Hoz. Estas disputas no eran novedosas; los que sí resultaron inusitados fueron los episodios suscitados en torno al sillón de la gubernatura que incluyeron un golpe encabezado por el subjefe de policía —"un mulato inmundo que recibiría su merecido" según Martínez de Hoz— y un juicio político en el Senado que terminó con la declaración de culpabilidad y la consiguiente destitución del gobernador. Todo esto con permanentes apelaciones, siempre fracasadas, del

gobierno nacional a que se calmaran los ánimos, y numerosas acciones de los grupos fascistoides afines a Sánchez Sorondo, que estaban circunstancialmente apoyando a Martínez de Hoz, para impedir que "la democracia igualitaria trastocase el predominio de los valores nacionales". El problema se repetiría, como veremos, un lustro más tarde cuando Ortiz, el sucesor de Justo, también intervino la provincia, aunque con intenciones diferentes a las del general.

Los problemas de la fórmula política de la Década Infame, como ya había venido sucediendo desde el siglo XIX, se manifestaron en gran medida al tratar de manejar la sucesión presidencial. A Justo se le planteó el dilema de asegurar un mecanismo que le facilitara retornar a la presidencia una vez transcurrido el periodo presidencial intermedio que exigía la Constitución —lo cual demandaba la selección de sucesores no demasiado prominentes y, por ende, presuntamente maleables a su influencia. Pero, a su vez, debía designar candidatos que no contradijeran de forma abierta la promesa implícita de que el régimen político se iría liberalizando gradualmente y que conformaran a los dos partidos integrantes de la Concordancia; la fórmula Roberto Ortiz y Ramón Castillo encumbrada por Justo pretendió llenar esos dos requisitos. Sin embargo, al haber triunfado en el marco de "las elecciones más fraudulentas de toda la historia", según declaró un conservador decepcionado, Justo dejó dos grupos de políticos disconformes: por un lado, la principal víctima del fraude, es decir la UCR que presentó una fórmula encabezada por la figura máxima del partido, que había heredado el aura yrigoyenista, Marcelo T. de Alvear; por el otro, los numerosos dirigentes conservadores que se sintieron postergados y temían que Ortiz, como finalmente ocurrió, se propusiera ir eliminando poco a poco las prácticas fraudulentas.

Y uno de los políticos que expresó más nítidamente los dilemas a los que se enfrentaban los conservadores durante la Década Infame fue uno de los más directamente alcanzados por los

afanes de limpieza electoral de Ortiz: el reemplazante de Martínez de Hoz en la gobernación de Buenos Aires, Manuel Fresco. Fresco, quien desarrolló casi toda su carrera política en la zona oeste del Gran Buenos Aires, no pudo evitar que Ortiz dispusiera una nueva intervención a la provincia, cuando hacia las postrimerías de su mandato propició la realización de elecciones fraudulentas. Estas elecciones se orquestaron para garantizar la victoria de un caudillo cercano a él proveniente de Avellaneda, un distrito industrial del sur del Gran Buenos Aires, Alberto Barceló, conocido por sus vínculos con elementos gangsteriles, con *hooligans* de un equipo de fútbol y con la trata de blancas. No resultaba sorprendente, en todo caso, que los dirigentes conservadores tuvieran afinidades con el delito; muchas veces habían recurrido, para sumarlos a la policía, a criminales para la implementación de fraudes, la explotación de negocios ilegales y la ejecución de atentados contra los opositores. Lo que sí era novedoso era que tanto Fresco como Barceló, quienes por añadidura no provenían, ni mucho menos, de familias de abolengo patricio, hubieran ascendido a los niveles más elevados de la jerarquía conservadora de la provincia de Buenos Aires.

En realidad, el ascenso de conservadores con un cierto tinte populista no era ajeno a la rápida transformación que estaba experimentando el área metropolitana del Gran Buenos Aires —que, en menor medida, se repetía en otras ciudades como Córdoba y Rosario— al ritmo de la expansión de la industria manufacturera. No fue entonces una mera casualidad que fuera en la provincia de Buenos Aires bajo los conservadores, como también ocurrió en la de Córdoba gobernada entre 1936 y 1943 por dos radicales, Amadeo Sabattini y Santiago del Castillo, y en la de Santa Fe donde se sucedieron los gobiernos de radicales antipersonalistas y demócratas progresistas, donde se sitúan los orígenes de la negociación colectiva entre trabajadores y patrones en Argentina, como lo comprobaron en una investigación pionera Ricardo Gaudio y Jorge Pilone. Desde la perspectiva de conser-

vadores como Fresco, era perfectamente compatible combinar la regulación estatal de las relaciones laborales —es decir un reconocimiento, si bien limitado, de la ciudadanía social de los trabajadores— con la negación de su ciudadanía política mediante el simulacro realizado con la adulteración de la voluntad de los votantes. Por cierto que no debemos suponer que la implementación de leyes que en cierto sentido protegían a los trabajadores de la discrecionalidad patronal por parte de gobiernos conservadores implicara, en modo alguno, que ellos renunciaran a la aplicación de políticas represivas en contra de los sindicalistas: especialmente en los casos en que las demandas provenían del cada vez más activo Partido Comunista. Tanto los militantes de este último como los otros dirigentes que promovieron la realización de huelgas continuaron siendo tratados "como correspondía", con periodos de especial dureza a principios y a fines de la década de los treinta.

La reducción de las prácticas electorales a un mero simulacro, empero, fue alimentando un fenómeno que ya venía desde atrás: el descrédito de la política. Como de manera pintoresca pero acertada apunta Tulio Halperín-Donghi en sus memorias, el fraude de los conservadores era mayoritariamente visto como una "deplorable calamidad argentina" cuya erradicación muy pocos se planteaban con seriedad; también es cierto que esa misma mirada, en el fondo, indiferente y solo comprometida con los negocios de corto plazo —o preocupada con la mera supervivencia— no garantizaba que ningún actor estuviera dispuesto a movilizarse seriamente en defensa del régimen político. En este escenario se fue generando un enorme vacío de opinión y de valores, el cual a partir de 1935 y 1936 fue llenado, en parte de manera artificial por el impacto de los procesos que se desencadenaban vertiginosamente en Europa: la modificación de las estrategias de la Internacional Comunista a partir de la adopción de la política de los frentes populares en el VII Congreso de 1935, el estallido de la guerra civil española, los episodios de la

ofensiva hitleriana que precedieron a la segunda guerra mundial —el *Anschluss*, la militarización de Renania, el acuerdo de Munich— y por último el comienzo de la guerra y su desarrollo.

El clima del "¿Qué me importa, si todo está podrido?", descrito magistralmente por Enrique Santos Discépolo en su tango *Cambalache*, fue acentuándose con el paso de los años. La apatía política se mantuvo a pesar de que la crisis tornó a superarse a partir de 1935; el fenómeno fue facilitado por la expansión de los espectáculos de entretenimiento de masas: la radio y el cine, a los que también podían acceder los trabajadores y no solo las clases medias, junto al fútbol, ya transformado en un espectáculo popular especialmente en el Gran Buenos Aires y en Rosario, y al tango bailado en los clubes sociales y en otros ámbitos menos respetables. El único episodio político del periodo, que en alguna medida rompió la sensación predominante del todo vale, fue protagonizado por los dos senadores por Santa Fe del Partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torre y Enzo Bordabehere. El segundo fue asesinado en el recinto del Senado cuando De la Torre estaba denunciando la participación de los frigoríficos británicos en los negociados de la carne y de la Corporación de Transportes de la ciudad de Buenos Aires. A raíz de ello, De la Torre, uno de los eternos perdedores de la política argentina desde fines del siglo XIX, cobró más notoriedad apareciendo como uno de los escasos políticos honestos de la Década Infame. Sin embargo, su triste historia tuvo un desenlace en el fondo coherente: se suicidó en 1939 abrumado por las deudas y la depresión. La otra novedad fue la creación de FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) un grupo de intelectuales, en su mayoría de origen radical, que cuestionó duramente al régimen político y social, e incluso a la propia UCR a partir del momento en que Alvear decidió abandonar la estrategia de abstención electoral, desde una perspectiva que autocalificaron de "nacional y popular". A pesar de que FORJA tuvo escaso impacto sobre los acontecimientos políticos concretos, sus postu-

ras contrarias a la política partidaria constituyeron un material que sería resignificado por el peronismo a partir de 1945.

La política argentina de principios de la década de los cuarenta giraba en torno a un trío de personajes que, si bien discrepaban en torno al *timing* específico de las reformas y el papel que cada uno de ellos representaría, coincidían en que se debía implementar una salida gradual de las prácticas fraudulentas; ellos eran el general Agustín P. Justo, el presidente Roberto M. Ortiz y el ex presidente Marcelo T. de Alvear. Detrás de ellos aparecía el segundo de Ortiz, Ramón Castillo, quien compartía varios rasgos con otros vicepresidentes argentinos del siglo XX, especialmente el haber llegado al cargo como resultado de circunstancias accidentales y el tener como un objetivo central de su acción política la erosión de la autoridad de su compañero de fórmula. En realidad, entre 1940 y 1943, el personaje secundario, es decir Castillo, fue ganando protagonismo y centralidad, en parte gracias a accidentes y, en parte, como resultado de su sorprendente astucia. De todos modos sus éxitos, como veremos en el próximo apartado, fueron más bien de carácter negativo: le permitieron ir anulando sucesivamente a sus adversarios, pero no impidieron su propia, y fácil, defenestración en el golpe del 4 de junio de 1943.

LA POLÍTICA DISLOCADA: DEL GOBIERNO DE CASTILLO AL ASCENSO DE PERÓN

El primer momento de suerte que benefició a Castillo fue la grave enfermedad que incapacitó al presidente Ortiz a partir de 1940, que le obligó a pedir licencia en julio de ese año, y frustró sus amagos de volver a ocupar la presidencia ante la ostensible reversión de los objetivos reformistas que se había planteado al asumir la presidencia en 1938. Castillo no solo convalidó los resultados de elecciones obviamente fraudulentas en las provin-

cias de Mendoza y Santa Fe en contra de la estrategia que se había fijado Ortiz, sino que además incorporó a su gabinete a varias figuras germanófilas a pesar de que tanto Ortiz como Justo preconizaban un acercamiento a las posiciones de las potencias aliadas en la guerra. Justo llegó incluso al punto de ir a ofrecerle sus servicios militares al presidente brasileño Getúlio Vargas, que había declarado la guerra a las potencias del Eje.

Durante 1941 y 1942, la reacia postura de Castillo a apoyar a los aliados no solo contó con la explícita simpatía de algunos políticos, sino también, y sobre todo, propició el apoyo de los sectores más nacionalistas, anticomunistas y autoritarios del ejército que claramente preferían que Alemania les ganara la guerra a las democracias occidentales y obviamente a la Unión Soviética. La renuncia e inmediato fallecimiento de Ortiz a mediados de 1942 y la casi simultánea muerte de Marcelo T. de Alvear también facilitaron la tarea a Castillo, quien veía un único obstáculo en su cada vez más explícita pretensión de la designación "a dedo" de su sucesor: el general Justo también aspiraba a sucederlo. Pero de nuevo una combinación de *virtù* y *fortuna* beneficiaron a quien se revelaba inesperadamente como un sagaz político; en primer lugar, durante los últimos meses de 1942 Castillo se las ingenió para desplazar a los oficiales más cercanos a Justo de los puestos de poder en el ejército, y, en segundo lugar, en enero de 1943 Justo murió fulminado por un ataque al corazón. En pocas palabras, en unos meses fallecieron de muerte natural los tres principales adversarios que había enfrentado el ahora ocupante pleno del poder ejecutivo nacional.

Sin embargo, los éxitos tácticos de Castillo no resultaron suficientes para modificar de manera sustancial su intrínseca debilidad política, que estaba estructuralmente asociada a la indiferencia que despertaba en la ciudadanía el elenco presidencial y sus interlocutores en las oposiciones, un conjunto de personajes anacrónicos e impopulares. Resultaba cada vez más claro que la suerte del presidente dependía de los militares quienes, a su vez, con-

tinuaban enfrascados en conciliábulos en torno a las posiciones asumidas en relación con las alternativas de la guerra y la formación de logias; la más notoria de estas últimas fue el GOU —Grupo de Oficiales Unificados— en la cual tuvo un rol preponderante el coronel Juan Domingo Perón. Muchos de los oficiales, asimismo, se fortalecieron en su convicción de que ellos eran los verdaderos salvadores de la patria, situados más allá de la "sucia politiquería de los partidos" y, en una cabriola mental que no dejaba de ser paradójica, despreciaban e incluso condenaban las prácticas fraudulentas de un régimen que ellos habían instalado arrasando las instituciones surgidas de la expresión libre del sufragio de 1928. Para complicar aún más todo a los oficiales germanófilos, entre los cuales se encontraba el coronel Perón, tuvieron que asimilar un suceso que preanunciaba la ya entonces inevitable caída del búnker de Berlín: entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 1943 las tropas soviéticas liquidaron las últimas resistencias alemanas y forzaron la rendición de las tropas del mariscal Paulus en la épica culminación del sitio de Stalingrado. En este maremágnum político cualquier cosa podía suceder y de esta posibilidad fue expresión el golpe militar del 4 de junio de 1943.

El historiador Potash describió con agudeza los eventos que desencadenaron el golpe solamente un día antes de que este se ejecutara, lo cual denota la absoluta falta de planificación que lo enmarcó: "El movimiento militar del 4 de junio no fue el resultado de un plan elaborado cuidadosamente por el GOU, o siquiera por cualquier otro grupo de oficiales. No fue tampoco un movimiento inspirado por Estados Unidos [...] ni un golpe anticipado y promovido por la embajada alemana en Buenos Aires. Más bien fue una rápida improvisación cuyos participantes casi no concertaron acuerdos en relación con objetivos específicos, más allá del derrocamiento del presidente Castillo [...] los catorce oficiales reunidos en la Escuela de Caballería (que decidieron promover el golpe el día siguiente) al ocuparse casi exclusivamente de los aspectos militares del plan exhibieron una actitud

de ingenuidad política que rayaba en la irresponsabilidad. No solo no concertaron un acuerdo claro acerca de la orientación principal a la cual debía ajustarse el futuro gobierno, sino que dejaron prácticamente en suspenso la determinación de la persona que habría de presidirlo".

El manifiesto de los golpistas, quienes, en contraste con el *putsch* de 1930, movilizaron un ejército de 10 000 hombres, fue probablemente redactado por Perón, no en Campo de Mayo donde estaban localizadas las principales unidades del ejército, sino en un departamento de la capital; a sus camaradas les resultó imposible localizarlo los días 3 y 4 de junio tanto en los cuarteles como en su domicilio. Las improvisaciones marcaron los primeros meses del gobierno militar; el primer presidente duró dos días y el segundo ocho meses, siendo ambos desplazados en contra de su voluntad. El clima político estuvo permanentemente impregnado de múltiples y cambiantes conspiraciones, en las cuales se entremezclaban varias fracturas de carácter heterogéneo: oficiales neutralistas pro-Eje/militares pro-Aliados que propiciaban la ruptura de relaciones con Alemania; ultranacionalistas/liberales; partidarios del pronto llamado a elecciones/defensores del establecimiento de una dictadura militar; oficiales militares profesionales con distintas motivaciones ideológicas. En ese clima, Perón navegó con una particular habilidad —es decir orilló todas esas controversias manejándose con ambigüedad y medias verdades— pero, al mismo tiempo, se fue moviendo con un objetivo absolutamente claro: el de lograr la presidencia. Para ello el primer escalón fue la que pareció su inocua designación como director nacional del Trabajo, una simple oficina del ministerio de Interior, en octubre de 1943; a las pocas semanas la dirección se transformó en la Secretaría de Trabajo y Previsión dependiendo directamente de la presidencia, con facultades para dictar disposiciones y decretos.

El tercer presidente del régimen militar, el general Farrell, encumbró aún más a Perón, quien fue nombrado ministro de Guerra

en febrero de 1944 y vicepresidente de la nación en julio. A solo un año del golpe, Perón controlaba tanto la posibilidad de implementar cambios en la legislación laboral y de nombrar a dirigentes sindicales en puestos públicos, como la facultad de decidir ascensos y destinos de los oficiales del ejército. La estrategia inicial de Perón fue lograr que la UCR lo designara candidato presidencial y para ello propició una apertura con los radicales proponiéndole al principal dirigente del partido, el cordobés Amadeo Sabattini, su designación como ministro de Interior. La rotunda negativa de Sabattini, que sugería también la escasa disposición de los radicales a integrar una fórmula presidencial con Perón en el escalón más alto, fue una demostración palmaria de que los partidos políticos no se resignaban a desempeñar un papel secundario en la eventual salida. Tampoco en el plano militar, las manipulaciones de Perón tuvieron solo resultados favorables; durante 1945, a medida que se hacía evidente que estaba trabajando activamente para su candidatura presidencial sin abandonar sus cargos oficiales, sectores significativos, quizá mayoritarios, de la oficialidad militar y naval, demandaron su renuncia.

Las resistencias que despertó Perón no se limitaron a los políticos, a sus camaradas de armas y a los estudiantes universitarios que estaban resentidos, entre otras razones, por el predominio de intelectuales del nacionalismo católico en los cargos superiores de las altas casas de estudio. Los burgueses pronto se percataron de que las promesas del militar de organizar disciplinadamente a los trabajadores implicaban costos que no estaban dispuestos a afrontar: las demandas de aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo comenzaron a ser laudadas favorablemente por la secretaría a cargo de Perón; la sindicalización obrera se expandió muy rápido bajo el auspicio de quien, a propuesta de los trabajadores ferroviarios, había sido nombrado como “primer trabajador”; la sanción del Estatuto del Peón otorgó por primera vez derechos efectivos a los trabajadores rurales. Las protestas en contra del vicepresidente se extendieron y el 9 de octubre el co-

mandante de Campo de Mayo, el general Eduardo Ávalos, quien en el pasado lo había apoyado, demandó la separación y posterior arresto del coronel Perón. Estas decisiones provocaron generaron la respuesta activa de los trabajadores del Gran Buenos Aires, en especial de su zona sur, quienes ocho días después marcharon masivamente a la Plaza de Mayo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y forzaron al presidente Farrell a revocar todas las medidas contra Perón.

El 17 de octubre de 1945 fue una bisagra fundamental de la historia argentina. El éxito de la movilización popular fue, en buena medida, una demostración de la capacidad de innovación y del genio político de Perón y de las acciones eficaces de sus colaboradores más cercanos: su reciente esposa, la actriz Eva Duarte, y un coronel cuyo padre tenía un pasado sindical, Domingo Mercante. En 1945 Perón tenía perdida la batalla política en los espacios tradicionales de la política argentina: los cuarteles militares, los cenáculos oligárquicos y burgueses y los comités partidarios. Apoyándose entre otras herramientas en el eficaz uso de la radio, en menos de un par de años, empero, el ignoto coronel de mayo de 1943 había creado una nueva arena, la del pueblo en la plaza. Esta presencia le permitió generar un recurso político que marcaría indeleblemente la política argentina de ahí en adelante: la relación entre el líder y las masas.

EL PERONISMO

Loris Zanatta

Los orígenes

El 4 de junio de 1943 una columna militar tomó la Casa Rosada. Nadie sabía con certeza qué se proponían esos oficiales que acababan de realizar la "Revolución de junio". Los primeros pronunciamientos invocaban a Dios, la patria y la argentinidad; prometían la instauración de la educación religiosa en las escuelas, y condenaban a los partidos políticos, al liberalismo y a las "ideologías foráneas". Los arquitectos de la nueva orientación política eran los jóvenes oficiales del Grupo de Oficiales Unidos (GOU), una logia secreta en la que convivían nacionalismos de varios tonos y en cuyas filas se destacaba ya el coronel Juan Domingo Perón. Tras la toma del poder, el programa de los militares era edificar un nuevo orden y unificar a la sociedad argentina infundiendo en ella una doctrina nacional. Estaba muy claro quiénes eran los enemigos: el comunismo, el liberalismo "laico y agnóstico", la masonería, el imperialismo anglosajón, los políticos y sus partidos. Quedaban por definir las características de la "Nueva Argentina". Perón era sin duda uno de los pocos que tenían ideas claras al respecto: de que al Estado correspondía la función de regir la política y orientar las relaciones sociales. Para lograrlo, nada sería mejor que inspirarse en las encíclicas sociales de los pontífices y avanzar hacia una organización de tipo corporativo.

Tanto la composición del gobierno como sus primeras medidas reflejaron fielmente ese clima político e ideal. Sus afinidades con los autoritarismos católicos de la península ibérica saltaban a la vista. Y la defensa a ultranza de la neutralidad en la guerra mundial, se encontraba entre los más sagrados dogmas nacionalistas. En sus primeros meses de vida el gobierno se dedicó a desmontar el andamiaje de la Argentina liberal. Así, se asistió al cierre del Congreso nacional y a la disolución de los partidos políticos; abolidas las libertades individuales, también la prensa fue sometida a censura, al tiempo que un sacro fuego moralizador se abatía sobre la cultura. El sector educativo fue el que más sufrió el hacha represiva, con radicales purgas y revisiones en sentido nacionalista de los programas de enseñanza. El punto culminante fue el decreto con el que el gobierno reintrodujo la enseñanza de la religión católica.

La opinión pública argentina aún no tenía idea de quién era Perón, pero era ya un oficial de 48 años, con muchas experiencias a cuestas. Fue profesor de historia militar en la Escuela Superior de Guerra, donde se entusiasmó con el concepto de la nación en armas. Destacado en Chile en 1936 como agregado militar cumplió actividades de espionaje. Al regresar al país, Perón vio trastornada su vida por la muerte de su mujer, antes de embarcarse para Italia en 1939. Vivió allí dos años: el único periodo en que Perón vio la guerra de cerca. Quedó entonces fascinado por la organización de las masas alcanzada por el fascismo, por su liturgia política y por el papel de los sindicatos en la estructura del Estado. Todo eso parecía reflejo de esa democracia "orgánica" que el nacionalismo argentino solía invocar.

Perón ingresó en el Ministerio de Guerra como brazo derecho del general Edelmiro Farrell: era el puesto ideal para promover los hombres y las ideas del GOU. El otro horizonte que tuvo en vista fue el gremial. Perón consideraba que el objetivo esencial de la revolución era atraer el movimiento gremial hacia la órbita del Estado, para prevenir la revolución social y dar al nuevo régi-

men la base social de masas. En su visión orgánica de la sociedad, la única forma de garantizar la unidad y la armonía de la nación era reequilibrar las relaciones entre las clases. Con esa óptica, Perón creó entonces la Secretaría de Trabajo y Previsión, para imprimir a la revolución un giro de carácter social. En síntesis, la cruz y la espada debían sumergirse en la fuente de la "justicia social", y el nacionalismo tenía que impregnarse de la necesaria dosis de socialismo. Lo que urgía hacer, decía Perón, era "atraer, unir, organizar, nacionalizar" el movimiento gremial.

La Secretaría de Trabajo empezó a introducir una nueva legislación social. Para "argentinizar" los obreros, era preciso que el fiel de la balanza de la justicia social recuperara el equilibrio, aligerando el platillo del capital al mismo tiempo que se abultaba el de los trabajadores. En la nueva legislación, no era difícil reconocer los ecos de la *Carta del lavoro* mussoliniana. Y es que, en efecto, además de liquidar la autonomía y el pluralismo gremiales, Perón se proponía elevar el Estado a árbitro absoluto de las relaciones entre las clases. Pero desde comienzos de 1944, el gobierno militar tuvo que adoptar una postura defensiva, ya fuera porque los norteamericanos iban alzando en torno al país un cordón sanitario o porque los éxitos de los Aliados estimulaban a la oposición a que reclamara la democracia.

Frente a tan enormes presiones, el gobierno militar tenía que ampliar su base de consenso. A eso se dedicó Perón al desencadenarse la crisis que llevó a la presidencia al general Farrell, quien se apresuró a nombrarlo ministro de Guerra. Al control que ya se había asegurado de los sindicatos, Perón pudo sumar entonces el de las fuerzas armadas. El lastre del que primero empezó a liberarse fue el de los más extremos de los nacionalistas. Justamente esa capacidad suya de olfatear qué era lo que a su alrededor estaba cambiando para poder adecuarse ha sido descrita con frecuencia como el proverbial pragmatismo de Perón. Pero en realidad Perón, como buen militar, ponía en práctica las retiradas tácticas que le permitieran alcanzar sus objetivos estra-

tégicos. En efecto, nunca hizo sacrificio de los fundamentos ideológicos de la revolución de junio: se proponía fundar un régimen basado en los conceptos de "Dios, patria y pueblo".

Si Washington y la oposición argentina describían al conflicto como un episodio de la universal pulseada entre la democracia y los fascismos, Perón y el gobierno lo caracterizaban como el choque entre justicia social y privilegios oligárquicos. En ese marco, Perón se abocó a entretejer alianzas en las que los compañeros de viaje ideales parecían ser los radicales fieles a la tradición yrigoyenista. Mientras tanto, hacía enormes progresos en su intento de conquistar a la clase obrera. Perón se dirigía a los trabajadores en términos agresivos y maniqueos, hablándoles "en comunista": una estratagema que en la mente de los miembros de las élites evocaría el espectro de la lucha de clases.

1945 fue el año que marcaría el destino del país. En su comienzo, el gobierno de la revolución de junio crujía de manera preocupante. Las presiones para que se restableciera el orden constitucional llegaron a ser incontenibles, pero Perón siguió con tenacidad su camino. Poco a poco los militares fueron cediendo a civiles los ministerios; también se normalizó la vida universitaria y se levantó el Estado de sitio, lo cual permitió a prensa y partidos expresarse libremente. Por fin, el gobierno anunció la convocatoria a elecciones.

Era evidente que la revolución se batía en retirada sin haber podido fundar el "nuevo orden". Mientras, en el horizonte internacional, se perfilaba el aislamiento de Argentina. Perón sabía que resultaba imprescindible romper el cerco y por eso en marzo decidió cumplir el tardío gesto de declarar guerra al Eje. Esos pasos fueron necesarios para inducir a Estados Unidos a descongelar sus relaciones con el gobierno argentino mediante el envío de un nuevo embajador, Spruille Braden, llegado a Buenos Aires con el espíritu de un cruzado decidido a derrotar el fascismo. Pero no hay que suponer que fuera Braden el gran titiritero quien manejaba los hilos de la oleada de protestas contra el gobierno,

impulsada por un frente de fuerzas heterogéneas, unidas por la voluntad de volver al imperio de la Constitución.

El círculo se estrechaba en torno de Perón. La hora del ajuste de cuentas pareció sonar el 19 de septiembre, cuando la inmensa Marcha de la Constitución y la Libertad recorrió las calles de la capital. Por su parte, Perón recurrió constantemente al repertorio maniqueo de las representaciones del bien contra el mal, del pueblo contra sus enemigos y de la patria contra quienes la amenazaban. Ese fue el momento en que en las cúpulas militares, temerosas de una auténtica derrota, se impuso la decisión de que era preciso sacrificar a Perón. De modo que el 9 de octubre, Perón dimitió de todos sus cargos y fue encarcelado. Mientras tanto, sin embargo, no arriaba sus banderas. Comenzaron entonces las maniobras para movilizar a los trabajadores en su defensa. En la mañana del 17 comenzaron a converger hacia la capital columnas de obreros con sus familias. Esa fue la histórica jornada del 17 de octubre de 1945, que se cerró con Perón liberado por la multitud y triunfador: la base social cultivada desde 1943 se había revelado un sujeto político destinado a revolucionar la historia argentina.

Comenzó entonces una tensa campaña electoral en vista de las elecciones del 24 de febrero de 1946. Perón pudo consagrarse a la campaña con la certeza de que el gobierno respondería a sus órdenes. El grueso de las fuerzas armadas descansó en aquel hombre que parecía poder evitar la derrota de la revolución. Fue entonces cuando Perón contrajo nupcias con Eva Duarte. Con sus 26, Eva, de humilde origen, era tan emotiva como determinada. El haber conocido a Perón le acarreó considerables ventajas, convirtiéndose en la mejor de propagandista de su flamante compañero.

Muy pocos hubieran apostado a la victoria de Perón en las elecciones. La oposición se apresuró a formar un frente que se llamó Unión Democrática (UD), cuya estructura era sostenida por la Unión Cívica Radical, y la apoyaban el socialismo, el co-

munismo y el Partido Demócrata Progresista. Su candidato a la presidencia, sin embargo, era un político sin atractivo. Pero los partidos cargaban el lastre del descrédito en que había caído la democracia representativa, y a ese humor antipolítico se sumaba el anticomunismo de muchos electores dispuestos a votar a Perón con tal de derrotar al Partido Comunista. El propio apoyo de la prensa liberal y de las organizaciones patronales eran armas de doble filo, que cubrían con un velo el programa de gobierno de la UD, para nada conservador. En cuanto al apoyo estadounidense, su condición invasiva fue un verdadero bumerán.

Perón había podido disponer de tiempo y recursos abundantes para administrar el poder del Estado, con el propósito de hacerse de seguidores. Y pudo en buena medida seguir haciendo uso de tal poder en esos meses decisivos, gracias al apoyo del gobierno, que de un día para otro, por ejemplo, concedió a los trabajadores el aguinaldo. Pero además Perón podía apoyarse ahora en el sólido pilar gremial, en el ejército y en la iglesia católica. Claro que para ganar las elecciones se necesitaban partidos: su candidatura fue levantada por dos agrupaciones: el Partido Laborista, fundado por dirigentes sindicales, y una fracción de la UCR, mucho más moderada, que tenía tupidas redes clientelares muy útiles en provincias del interior. Todas esas corrientes compartían la convicción de que Perón representaba la identidad y los intereses nacionales, frente a una coalición a la que suponían al servicio de ideologías e intereses extranjeros.

La campaña electoral estuvo marcada por concentraciones multitudinarias, incidentes, paros, ataques y atentados, y por largos recorridos en tren de los candidatos. El toque final lo puso, desde Washington, Spruille Braden. Decidido a librarse de Perón, el Departamento de Estado publicó el *Libro azul*, una colección de documentos orientados a demostrar que Perón tenía estrechos vínculos con las potencias del Eje. Sin embargo, tan pesada interferencia de Estados Unidos venía a corroborar la imagen, cara a Perón, de un enfrentamiento entre Argentina y

sus enemigos exteriores. Sus partidarios no vacilaron un momento en tapizar las paredes de las ciudades argentinas con unos afiches en los que solo se leía "Braden o Perón".

Por fin, el 24 de febrero de 1946 se hicieron las tan deseadas elecciones. Perón le ganó a José Tamborini: el candidato triunfante había sido votado por 55% de los argentinos varones mayores de edad, pero por efecto de la ley electoral vigente su coalición ocupaba más de 66% de las bancas de la Cámara de Diputados, y todas las del Senado, menos dos. El país seguía partido en dos, pero ahora las riendas descansaban firmes en manos de Perón.

LA EDAD DE ORO

El 4 de junio de 1946, Perón dio inicio a su primer mandato. Había sido elegido pero la suya, no dejó de repetir, seguía siendo una Revolución. En esos momentos comenzó la época más brillante de su gobierno, que duraría un trienio. Su programa perseguía la independencia económica, la soberanía política, la justicia social. Ambicionaba la regeneración de Argentina, seguro de que antes de su providencial advenimiento había vivido envuelta en las tinieblas. Para que tan grandes objetivos pudieran ser alcanzados se requería una base económica sólida.

Perón no le daba demasiada importancia a las leyes económicas. No fue casual que encomendara la dirección de la política económica a Miguel Miranda, un empresario conocido por su audacia, no por su dominio de la ciencia económica. Esto no significa que Perón no tuviera firmes convicciones: la economía debía estar al servicio de la revolución y el liberalismo económico era perjudicial. No es que se propusiera suprimir la economía de mercado, sino someter las energías económicas a la guía del Estado. Para lograr la grandeza nacional, era necesario nacionalizar sectores, asumir el control del comercio exterior, planificar la asignación de los recursos, manejar el crédito. Convicción de

Perón era también que se debía eliminar la dependencia de la exportación de materias primas agrícolas al mercado británico, y de la importación de maquinaria industrial de Estados Unidos. La clave sería la industrialización: la industria debía ser prenda de desarrollo, bienestar, soberanía y seguridad. Perón estimaba que una nueva guerra iba a estallar pronto y era preciso que Argentina contara con medios que le permitieran decidir si le convenía o no participar. Por eso el país tenía que apuntar a potenciar el mercado nacional. Para llevar a cabo todo eso se necesitaban ingentes recursos y la Argentina de 1946 los tenía en cantidad. Es cierto que la inconvertibilidad de la libra esterlina hacía imposible utilizarlas en la adquisición de productos industriales norteamericanos; sin embargo, más de la mitad de las reservas que custodiaba el Banco Central en 1946 estaba en dólares y oro, lo que permitió al gobierno mantener estable el valor de la moneda. Sobre todo, había una inmensa demanda para el trigo, auténtico maná en un mundo asediado por el hambre.

Entre 1945 y 1948 el número de créditos concedidos se multiplicó por cinco, pero los otorgados al sector público por 30. El beneficio fue para inversores y consumidores, y al compás del nacimiento de nuevas industrias Argentina vivía una etapa de plena ocupación. El más importante de los instrumentos de la política económica de Perón fue el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), cuya tarea clave fue pagar a los productores agrícolas, obligados a venderle su producción, alrededor de la mitad del precio de venta en el mercado internacional, donde el Estado la colocaba. De esa manera, transfirió de la economía rural a la urbana, las jugosas ganancias obtenidas. Esa estrategia quedó expresada en el Primer Plan Quinquenal. Los resultados fueron impresionantes en ese primer trienio. El producto bruto interno creció a un ritmo de 8%, y el consumo a un espectacular 14%. El peso del sector público en la economía pasó de 36 a 47%. Argentina había alcanzado su independencia económica, proclamó Perón. Pero muy pronto, varios

problemas dejaron al descubierto la cara menos rutilante de la moneda.

La presidencia de Perón llevó a cabo tal distribución de la riqueza que se creó un aura destinada a plasmar su identidad para siempre. Sería difícil decir en qué medida ese bienestar fue resultado de las especiales condiciones de la posguerra, y hasta qué punto se debió a Perón. Y si las restricciones que siguieron fueron el precio que Argentina pagó por haber derrochado los abundantes recursos disponibles entonces en lugar de guardarlos para épocas menos favorables. Lo indiscutible es que esas políticas aseguraron una popularidad a toda prueba. Por todo lo indicado, los primeros años del peronismo transcurrieron en un clima efervescente, de gran movilidad social. El régimen invirtió abultadas sumas en educación y los resultados no faltaron. Al mismo tiempo, Perón se apresuró a transformar la escuela en un instrumento para amoldar a las nuevas generaciones al nuevo curso político. En las universidades, esto implicó el despido de alrededor de 70% de los docentes. El Ministerio de Salud aumentó la cantidad de camas hospitalarias y llenó Argentina de salas de atención ambulatoria: la mortalidad infantil comenzó a disminuir. El sueño de un sistema que fusionara tratamiento de las enfermedades y asistencia social, sin embargo, fue sacrificado para dejar este último aspecto a Eva Perón. La construcción de viviendas populares fue estimulada por los generosos créditos, aunque la mayor parte de quienes los aprovecharon pertenecían al sector medio o a la "aristocracia" obrera, mientras que los trabajadores recién llegados a las ciudades se aglomeraban en asentamientos precarios. El peronismo completó también el sistema jubilatorio. Por hallarse en etapa embrionaria, este sistema al que muchos contribuían, pero del que todavía pocos beneficiaban, proporcionaba a las cuentas públicas enormes cantidades de capital. Al mismo tiempo, la resistencia de los sindicatos que contaban con mejores servicios, impuso la fragmentación corporativa.

Perón juró fidelidad a una Constitución que le obligaba a respetar la separación de poderes, los derechos individuales, el pluralismo político, la libertad de prensa, etc. Pero concebía su triunfo como una revolución y ello lo inducía a considerarse investido de una legitimidad superior. Al considerar la nación como una suerte de organismo, Perón intentó obligar a todos los sectores e instituciones a contribuir, cada uno en su función, a la edificación de la "nueva Argentina". Al hacerlo, tendió a concentrar el poder en sus manos. De ahí que poco a poco la estructura liberal comenzara a transformarse en un simulacro detrás del cual se alzaba el poder del Estado peronista. Por empezar, la separación de poderes quedó reducida a poco menos que una farsa quedando el bloque radical relegado a la función de impotente testigo de la revolución peronista. Análogo fue el destino del poder judicial: en abril de 1947 el Congreso destituyó a todos los miembros de la Corte, con excepción de uno, un jurista católico simpatizante de la "nueva Argentina". Abierto ya el camino, hubo en todo el país una purga a fondo de miembros del poder judicial. Otros principios protegidos por la Constitución fueron objeto de duros ataques. La radio cerró sus micrófonos a la oposición. Con los medios escritos, Perón actuó en dos planos: fueron clausuradas las publicaciones socialistas y radicales, mientras que los diarios liberales se veían constreñidos por intermitentes boicots administrativos; por otra parte, creó un poderoso grupo editorial vinculado al gobierno.

Para asegurarse el apoyo de las fuerzas armadas, Perón recurrió por un lado a la expulsión de los cuarteles de los elementos menos confiables, y por el otro a cuantiosas recompensas materiales. Con la iglesia católica, hasta 1949 las relaciones fueron casi idílicas. El gobierno dedicó ingentes recursos al financiamiento de la iglesia, pareciendo honrar su compromiso de cristianizar Argentina. Perón, en efecto, reivindicó con insistencia la inspiración católica de su gobierno. Como corolario, esperaba la colaboración de la iglesia en la edificación del orden peronista.

La más firme columna corporativa del peronismo fue el sindicalismo. Quedó allanado el camino al monopolio de la representación gremial por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) y a su transformación en una especie de aparato estatal. Sin embargo, aun después de perdida su autonomía, los sindicatos realizaron huelgas frecuentes, aprovechando la función clave que tenían en la legitimación del orden peronista. En síntesis, la CGT se convirtió por entonces en la flecha más potente del arco de Perón, pero con la capacidad de condicionar las decisiones del presidente, que no podía contrariar sus reivindicaciones sin encontrar fuertes resistencias.

Perón debió poner remedio al carácter centrífugo de la coalición que lo había llevado al poder. Para cerrar las profundas diferencias que separaban a los laboristas de los radicales, se erigió en árbitro de los conflictos que los oponían. Con ese propósito creó el Partido Único de la Revolución, que más tarde sería el Partido Peronista. En sus estatutos, la figura de Perón estaba por encima de los órganos de elección: logró así imponer su autoridad, y colocó en la cúpula del partido a una nueva camada de dirigentes devotos del líder.

En esos primeros años brilló la estrella de Eva Perón. Empezó a visitar fábricas y a recibir a trabajadores, mujeres abandonadas, desocupados y aprovechados. La prensa del gobierno comenzó a servirle de eco. La infatigable acción de Eva era un auténtico ejercicio del poder: no encuadrado en ninguna institución pero concreto y eficaz. Eva aprovechó su posición para apoyar las reivindicaciones obreras. Pronto se vieron, sin embargo, las resistencias que ese activismo provocaba en potentes esferas de la galaxia peronista, especialmente en las fuerzas armadas. Y no solo eso, la popularidad y el poder de Eva le permitieron más libertad de acción de la que Perón había pensado concederle. Un momento clave en ese aspecto fue su prolongado viaje por Europa, en 1947, donde se convirtió en embajadora de la "nueva Argentina" ante la opinión pública internacional. La Europa en

ruinas no pudo evitar recibir a la exuberante *first lady* de un país que con sus silos abarrotados de trigo requería trato especial; una huésped a la que nadie había invitado —excepción hecha del general Franco— y que llenaba las crónicas con dinero arrojado al aire para regocijo de las multitudes y por el ímpetu con que cantaba las loas de la Argentina peronista.

En 1948, su actividad de ayuda social confluyó en la Fundación Eva Perón que, creada con una dotación de 10 000 pesos, en pocos años acumularía un patrimonio valuado en 3 500 millones. Sus adversarios empezaron a derrumbarse como bolos de madera para dejar espacio a gente de su círculo. Su poder fue extendiéndose a ministros, Congreso, Partido Peronista, prensa, diplomacia, justicia y, sobre todo, a la potentísima CGT. A partir de ese momento se convirtió en Evita, la hada buena del pueblo peronista, que dispensaba hospitales, escuelas, centros deportivos, colonias de vacaciones, asilos para marginados, casas de atención para mujeres indigentes y juguetes para el día de Reyes.

El grueso de la financiación de todo esto provenía de los gremios y del Estado, pero nadie vio jamás un balance. Pronto se desdibujaron los límites entre la Fundación y el Estado. Todo ello evocaba los rasgos típicos de un Estado del que el peronismo disponía como de cosa propia. En síntesis, la obra de Eva se prefiguraba como un canal de integración social y ética de las masas populares, y al mismo tiempo como un portentoso instrumento de demolición de las instituciones republicanas y del espíritu democrático y pluralista. En esa sociedad, en la que el machismo era todavía inconmovible, Eva prestó especial atención al universo femenino. Pero no por eso hubo una ruptura con el pasado. La mujer bosquejada por Eva Perón era la esposa y madre que velaba por el pueblo argentino. La misma ley que introdujo el sufragio femenino fue la premisa para integrarla en la comunidad organizada conducida por Perón por medio del Partido Peronista Femenino, que ella fundó en 1949.

Al desprecio hacia ella por parte de los antiperonistas se sumaron pronto otras reacciones: la iglesia empezó a mirar con desconfianza el culto profano a su personalidad, y las fuerzas armadas trataron de limitar su radio de acción. Pero el escudo de Eva era el apoyo popular. En su lenguaje entretejido de contraposiciones maniqueas entre bien y mal, una multitud de argentinos pudo detectar la transposición al plano secular de un imaginario religioso antiguo, contra cuyo fondo ella se destacaba como mediadora entre el pueblo y su Dios, como una suerte de Virgen María.

Perón dedicó grandes energías a la política exterior: seguro de la validez universal de su evangelio revolucionario, encontró natural buscar seguidores más allá de las fronteras. Por un lado, intentó devolver lustre e influencia a Argentina, por otro, tuvo la ambición de fundar una hegemonía panlatina. La primera de esas tareas no fue fácil, porque el nacionalismo del que el peronismo se hallaba impregnado era refractario a aceptar la inserción en los organismos internacionales; de todos modos, de paria internacional que había sido, Argentina pasó a formar parte de ellos. Muchos más fueron los pasos que siguió Perón por el camino de la llamada "tercera posición", entendida como la proyección internacional de los fundamentos ideológicos de su régimen, igualmente hostil al comunismo y a las democracias liberales. Perón se sintió con bastante fuerza para proponer una "solución argentina" de la crisis internacional, y no ahorró medios con tal de ubicarse al frente de un bloque latino de naciones. Pero esa política no puede decirse que armonizara con la potencia efectiva del país. Al dividirse el mundo en dos bloques, su esperanza de atraer a los países latinos de Europa se reveló una fatua ilusión. La propia Santa Sede comenzó a considerar la "tercera posición" como una propuesta que debilitaría el cristianismo occidental, de por sí amenazado por el ateísmo soviético. Algo mejor le fue a Perón en América, frente a la supremacía estadounidense. Solo que los países vecinos interpretaron las

presiones de que eran objeto como interferencias en su vida interna de parte de una potencia con miras hegemónicas. En el plano económico, la política exterior peronista trató de sacar provecho de sus cereales manteniendo altos los precios. Pero hacia 1948 la producción mundial de trigo estaba recuperándose y Argentina iba perdiendo el poder de elegir clientes y fijar precios. Es más, vender a precios exorbitantes le había ganado la poco envidiable fama de lucrar con el hambre de los demás. A la luz de cuanto antecede, no sorprende que entre Washington y Buenos Aires nunca terminaran de hacerse las paces. Así, la denuncia del imperialismo norteamericano siguió teniendo un papel tan importante en la ideología peronista, que Perón se vio obligado a reiterarla al infinito.

LA COMUNIDAD ORGANIZADA

Ya organizado su pueblo en partido y sindicato, Perón pensó en dar lugar a la "nueva Argentina" en la Constitución. En vista de la importancia de poder invocar al viejo texto de 1853 como apoyo de sus credenciales democráticas, no quiso arrojarlo al cesto de los papeles sino reformarlo. Ningún obstáculo se alzaba en el camino de Perón tras las elecciones de 1948, en las que se aseguró una cómoda mayoría. Para Perón, era necesario insertar en el texto constitucional los principios sociales caros al movimiento peronista. La oposición, en cambio, estaba convencida de que su propósito era dar un paso decisivo para perpetuarse en el poder. No fue casual que la discusión se concentrara en el artículo 77, que prohibía la reelección del presidente. La oposición sufriría una enésima derrota: los incondicionales de Perón le allanaron el camino a la reelección. Las otras reformas reflejaban la nueva página que el peronismo había abierto en la historia argentina: es el caso de los derechos sociales y de los fundamentos del nacionalismo económico incorporados al

texto. Cambiar de manera radical fue, sobre todo, la orientación filosófica de la Constitución. En la actitud típica de un régimen que reivindicaba el monopolio de la identidad nacional, el nuevo texto constitucional equivalió a inocular una generosa dosis de peronismo en la vieja Constitución liberal. En fin, el peronismo se constitucionalizó. A partir de entonces, las diferencias entre el partido, la nación y las instituciones del Estado fueron todavía más tenues. En el nuevo texto se contenía entero el núcleo ideológico del peronismo, no solo por haber otorgado al presidente poderes todavía más amplios, sino sobre todo, por la idea de "democracia orgánica" que en él alentaba. Pero en otros aspectos, la reforma fue el momento a partir del cual comenzaron a oírse los primeros chirridos en el entramado corporativo que lo sustentaba.

Algunas nubes se adensaban sobre el gobierno en 1949: en primer lugar, la brusca desaceleración del crecimiento económico. Perón reaccionó apretando el paso hacia la unificación de toda la sociedad argentina. El objetivo era hacer de la "nueva Argentina" una comunidad organizada, en sintonía con la doctrina nacional conocida ya con el nombre de "justicialismo". Comenzaron entonces los esfuerzos por "peronizar" el Estado, las instituciones y hasta la cultura, el deporte, la religión misma. Este proceso dio ventajas a Perón, pronto rodeado de hombres obedientes, pero también fue costoso, por las reacciones de aquellos que no estaban dispuestos a seguirlo en su pretensión de abarcar todo.

Momento clave del paso a la "comunidad organizada" fue la reestructuración del Partido Peronista, que se transformó en un organismo subdividido en ramas: política, sindical, femenina. Se convirtió en una organización orgánica y disciplinada, dotada de una doctrina oficial y de una escuela para la formación de cuadros. Como guía de su funcionamiento, se impuso el principio del verticalismo, entendido como obediencia al jefe. Desde luego, el partido se volvió más maleable, aunque al precio de la

generalización del culto a la personalidad y el encumbramiento de cuadros sin prestigio. La nueva ley de partidos políticos vino a ser la tapa que cerraba la olla, introducendo normas que volvían imposible la formación de coaliciones de oposición y minando el terreno en torno de quienquiera pretendiese escindir el peronismo. Perón buscó entonces codificar la doctrina, reduciéndola a una serie de dogmas. Todo peronista debía "inculcarla". Un cambio importante fue que Perón comenzó a proponerse como el fundador de una nueva religión política, deudora solo del pueblo soberano, no ya de las corporaciones. Pero, para que todos los órganos del "cuerpo" social cumplieran su cometido, era necesario organizar y unificar la sociedad en su totalidad.

De modo que Perón se esforzó por "peronizar" cada ámbito. En las fuerzas armadas impuso la homogeneidad a fuerza de prebendas. Se empecinó en mantener bajo control a la iglesia católica y discriminó en favor del clero fiel a su régimen. En las universidades creó de la nada un organismo devoto del peronismo, la Confederación General Universitaria. En la prensa escrita, la guillotina cayó sobre las voces antiperonistas supérstites, entre ellas el ya muy tradicional matutino *La Prensa*. En medio de un panorama de agonía del pluralismo político, Perón se dispuso a obtener un enésimo triunfo electoral, al resultar reelegido en 1951 con 62.5% de los sufragios. La intentona insurreccional que había capitaneado el general Benjamín Menéndez no había hecho sino favorecerlo. También jugó en su favor la conmoción provocada por el empeoramiento de la salud de Evita. Pero lo cierto es que Perón se hallaba en el cénit de su gloria. Aceleró el ritmo de edificación de su régimen por mantener firme el control, en un momento en que el mecanismo de distribución de la riqueza empezaba a tener fallas. Se había llegado al final de una intensa etapa de *boom* económico, y había que pasar a otra menos color de rosa. La gallina de los huevos de oro seguía siendo la producción agropecuaria. Pero al recuperar otros productores de granos su antigua posición en el mercado mundial, los pre-

cios comenzaron a bajar. Tampoco había estallado la guerra dada por cierta por Perón, con lo que eso significaba para su estrategia de apostar al enorme valor estratégico de los cereales argentinos. Y la limitación de las ganancias de los empresarios quitó el incentivo para nuevas inversiones. Hubo finalmente dos años de terrible sequía y las exportaciones sufrieron un dramático traspié. La economía argentina entró en un sombrío periodo de estancamiento. Pero hubo también un segundo sintoma del peligro: la inflación, que hasta 1952 crecería a un promedio de 33% anual. Como es natural, de ello brotaron conflictos. Por primera vez desde el advenimiento del peronismo muchos argentinos llegaron a sentir que a las ganancias de unos se correspondían las pérdidas de otros. Fue así como el espejismo peronista de la armonía social empezó a desvanecerse: se necesitaban capitales frescos, había que recuperar el nivel de exportaciones y atraer inversiones El camino que era preciso recorrer exigía cortejar a a la vituperada "oligarquía" y a Estados Unidos.

Así es que hasta 1952 Perón transitó con prudencia dicho camino. La amarga píldora de los necesarios sacrificios económicos fue en un primer momento dorada al máximo de lo posible y, a principios de 1952, no puede decirse que estuvieran ya resueltas la grave crisis de las exportaciones ni la inflación. En esa situación fue cuando Perón anunció el Plan de Emergencia, cargado de una sola admonición: "producir, producir, producir". Fiel a su credo organicista, Perón pensó llegado el momento de contener a los trabajadores en nombre de la armonía social, así como antes había sido necesario favorecerlos por el mismo motivo. La única forma de reactivar la industria era atraer capitales externos. Por eso inició los acercamientos con las grandes compañías petrolíferas de Estados Unidos. Pero se vio obligado a tomar en cuenta el desajuste entre sus necesidades en materia económica, que lo inducían a radicales cambios, y sus intereses políticos, por los que estaba obligado a alimentar los mitos nacionalistas.

El impulso “peronizante” ejercido sobre los más variados ámbitos empujó a la oposición a tomar el camino conspirativo e indujo crecientes resistencias. Perón redobló los esfuerzos por encauzar a los militares dentro de su régimen, reduciendo su autonomía. La inoculación de masivas dosis de doctrina peronista en los cuarteles se concretó de diferentes modos. Pero varios oficiales no aceptaban la transformación de las fuerzas armadas en organismos subordinados ni su supeditación a los sindicatos; tampoco toleraban la sacralización de la figura de Perón, ni mucho menos la de su esposa. Los oficiales nacionalistas y conservadores tomaron las armas contra el gobierno en septiembre de 1951, aunque sin éxito. No menos importante fue el enfriamiento con la iglesia católica. La decisión de Perón de no eliminar el antiguo instituto del Patronato, introdujo un gran obstáculo en las relaciones con la Santa Sede. A Perón le parecía desagradecida esa iglesia que reclamaba autonomía, y por su parte la iglesia temía que Perón pretendiera reducirla a mero instrumento de gobierno. Había empezado a sonar la alarma: no se creó ninguna diócesis nueva, el presupuesto para el culto fue recortado, las tradicionales misas al aire libre, celebradas en los primeros tiempos en apoyo del régimen, debieron ceder terreno al culto de la “cristiandad peronista”. Muchos cuadros católicos comenzaron el éxodo de las filas peronistas.

Por fin, los problemas llegaron al mundo del trabajo. La lucha para repartirse los recursos, cada vez más escasos, se reavivó como nunca. La armonía entre capital y trabajo que tan cara le era a Perón debió enfrentar un duro desafío, y la CGT fue llamada a desempeñar el papel de guardiana del orden corporativo. Los dirigentes obreros tenían que avalar a menudo los actos de represión de las huelgas y, al hacerlo, corrían el riesgo de perder legitimidad a los ojos de sus bases. Los trabajadores, por su parte, se habían acostumbrado demasiado a apelar con éxito al apoyo de Perón como para resignarse a ceder el poderoso medio de presión que poseían.

En esos mismos años, el gobierno hizo grandes esfuerzos por ganar posiciones en el mundo empresarial. La Unión Industrial Argentina había tomado una orientación antiperonista y por eso fue decapitada. Pero en las filas industriales prevalecieron actitudes moderadas hacia un gobierno que había protegido el mercado interno. De ahí que no fuera tan raro encontrar entre los industriales quienes creyeran en el nacionalismo económico de Perón y pronto el gobierno hizo esfuerzos por atraer esos elementos a su órbita. Así fue que en agosto de 1952 se formaría la Confederación General Económica (CGE), dominada por los pequeños y medianos industriales favorables a la alianza con los obreros peronistas.

Evita era al mismo tiempo la cruz y el mayor recurso del régimen. Recurso porque encarnaba el alma revolucionaria del peronismo. Sus realizaciones en materia de ayuda social, sus modales, bruscos con los adversarios, solícitos con los peronistas, su lenguaje violento, eran ingredientes de su carisma. Su inmensa popularidad, hacía posible que Perón se valiera de ella para poner límites a las presiones de las corporaciones más conservadoras. De ese modo podía presentarse ante ellas como el punto de equilibrio entre fuerzas contrapuestas. Pero Evita era también su cruz. Su retórica maniquea, alzaba en torno del peronismo una empalizada hasta tal punto empinada que cada argentino se veía obligado a caber en el campo peronista o a permanecer en terreno enemigo. Con esa acción, Eva tendió a aislar al gobierno y a comprometer el delicado equilibrio entre las corporaciones. Las imágenes de Perón y Evita atiborraban ahora calles, escuelas y paseos. Los textos escolares no escaparon al bombardeo propagandístico. Eva llegó a ser objeto de un culto profano y grosero. Ella pasó a ser el punto de apoyo de las pulsiones totalitarias liberadas por el organicismo del régimen. No fue casual que Eva desarrollara un papel clave en la nueva simbología religiosa del régimen, y terminara por ser una espina clavada en la carne de la iglesia católica, a la que ya disputaba el monopolio de lo espiritual.

Dicho esto, la Eva Perón de los últimos años de su breve vida fue sobre todo una mujer de inmenso poder. Y, sin embargo, en agosto de aquel año 1951, ella probó por primera vez el amargo sabor de la derrota. Fue cuando un plan madurado por sus seguidores desembocó en una inmensa manifestación popular, que tenía el propósito de "convencer" a Evita de que aceptara acompañar a Perón como candidata a la vicepresidencia; ofrecimiento al que Eva tuvo que renunciar. Fue la oportunidad en que la "comunidad organizada" llegó a su punto crítico más delicado. En la plaza colmada de peronistas, el veto militar, la soberanía del pueblo y las bases corporativas del régimen estuvieron a punto de chocar. A Eva le fue en ese entonces diagnosticado un tumor. Una larga agonía, por meses y meses tuvo sin aliento a la Argentina entera. Durante ese lapso el país se vio inundado por la celebración de Eva y por su propia autocelebración. Su destino quedó cumplido el 26 de julio de 1952. Ya nada sería como antes.

APOTEOSIS Y DERRUMBE

El Plan de Emergencia tuvo resultados alentadores. Pero el problema de fondo seguía siendo poner los cimientos de un crecimiento económico sólido, que garantizara a la base popular del peronismo la conservación del estándar de vida alcanzado. El problema era que lo que se perfilaba como la vía económica más racional se contraponía con el imperativo político de respetar el tan evocado nacionalismo económico. En fin: se imponía tomar decisiones incómodas. En un primer momento, no pareció que a Perón le faltara valor para encarar esas decisiones, y así lo revelaron el Segundo Plan Quinquenal y el proyecto de ley de inversiones extranjeras. El Estado conservaba en esas iniciativas su papel dirigista. Sin embargo, ambas dejaban entender que el modelo económico del primer peronismo era ya cosa del pasado.

El Segundo Plan Quinquenal partía de una implícita crítica del que lo había precedido. Había quedado demostrado que el crecimiento de las industrias de bienes de consumo implicaba una explosión de importaciones de tecnología y maquinarias, sacando a la luz la dependencia argentina de las manufacturas y del aprovisionamiento energético extranjeros. Por otra parte, los jóvenes economistas en el gobierno habían aprendido la amarga lección de los años de alta inflación, y no estaban dispuestos a sacrificar la disciplina fiscal para alcanzar resultados efímeros. Sin una intensa inyección de capitales privados extranjeros, los objetivos del plan quinquenal de incrementar la industria pesada y la producción energética no podían ser sino quimeras. El desajuste entre las palabras y los hechos amenazaba con arrasar la credibilidad del gobierno.

La Ley de Inversiones Extranjeras equiparaba el capital extranjero con el nacional y le planteaba al gobierno un problema político: ¿sería posible que la base del partido tolerara un cambio de rumbo que afectaba las más sensibles cuerdas de la identidad peronista? Ante el desafío, Perón empezó a flaquear. De hecho, los efectos prácticos de la ley fueron escasos. Cuando el gobierno se arriesgó a firmar un contrato para la explotación petrolífera, las reacciones de la oposición y de su propio partido lo indujeron a retirar la mano que había arrojado la piedra. En 1954 Perón volvió a hallarse ante el espectro de una frenética reanudación de los conflictos sociales y de una nueva espiral inflacionaria, y perdió el ánimo. Para responder al desafío, apeló a su repertorio corporativo. Trató de implementar un pacto social CGT-CGE. El resultado fue una estéril parálisis que desagradó a todo el mundo. Pero 1955 no se caracterizó por ser un año de decadencia económica. La economía tuvo poco que ver con la crisis que acabaría con su gobierno, causada por la inevitabilidad que el peronismo, reivindicando para sí el monopolio de la identidad nacional, terminaría en la incapacidad para procesar las agudas contradicciones de un país cada vez más plural.

La segunda presidencia de Perón estuvo supeditada a una serie de dilemas. El masivo consenso alcanzado, confirmado por las elecciones legislativas de 1954, no pudo impedir que el clima del país oscilara entre violencia y conciliación. Perón se esforzó, con éxito cada vez menor, por contener dentro de las coordenadas del orden corporativo los impulsos contrapuestos. Y ello sucedía sin que pudiera contar con mecanismos representativos eficaces para mediar entre los diferentes actores de la comunidad organizada, especialmente entre militares y sindicatos, ya que en su ímpetu revolucionario había hecho de cada institución un instrumento más comprometido en adularlo que en estructurar consenso y disenso. Pero, sobre todo, el origen de su revolución concedía a los trabajadores un poder de veto que le ataba las manos.

Las oscilaciones fueron brutales en el curso de 1953, cuando el humor de los trabajadores, exasperados por el congelamiento de los salarios, se volcó sobre sus dirigentes sindicales. Perón trató de salvaguardar su aura de protector de los obreros descargando sobre sus funcionarios la responsabilidad. De igual forma procuró calmar el descontento por los rumores de corrupción en el gobierno sacrificando a su secretario personal, Juan Duarte, el poderoso hermano de Evita. Esto no paró la ya latente espiral de violencia. El estallido entre la multitud de algunas bombas colocadas por comandos de la oposición provocó víctimas y una reacción peronista contra las sedes de los partidos de la oposición que fueron incendiadas. Las cárceles, además, abrieron sus puertas para unos 4 000 opositores. A algunos de ellos no se les ahorraron graves torturas. Esa reacción profundizó el abismo que el régimen se había creado a su alrededor.

Vista con ese trasfondo, la tregua con que empezó 1954 no fue sino un breve paréntesis. Para muchos, era apenas la prenda que se pagaba a Estados Unidos para ganar su benevolencia y sus capitales, si no es que una mera maniobra orientada a dividir el frente opositor. Nada permitía pensar que el régimen se propusiera poner en marcha una auténtica liberalización. Por el con-

trario, había asumido la postura típica de un régimen autoritario ya maduro y consolidado.

Cuando 1954 llegó a su fin, el peronismo se iba pareciendo a una serpiente que se muerde la cola: la peronización del régimen había deteriorado las relaciones con la iglesia y las fuerzas armadas. El equilibrio corporativo se había quebrado en favor del movimiento obrero, cuya centralidad acentuó aún más el distanciamiento de las demás corporaciones, preocupadas por la metamorfosis del régimen. Cuanto más maduraba ese alejamiento, más prisionero se volvía Perón de su base sindical y más permeables se mostraban al canto de las sirenas conspirativas contra la dictadura el clero y los militares. A fuerza de peronizar el Estado y la sociedad, el régimen había creado las condiciones para que se formara un amplio y poderoso frente antiperonista.

También en la política exterior había crecido con el tiempo la influencia sindical, en tanto perdían peso los ambiciosos objetivos geopolíticos de los militares y la aspiración eclesiástica de hacer de Argentina el faro de la cristiandad iberoamericana. Para los militares, la consolidación de un mundo bipolar volvía temeraria una política exterior de desafío a Estados Unidos, y la iglesia abiertamente tomó distancia de la "tercera posición" en tanto amenaza de potenciar el comunismo. La "tercera posición" se estaba volviendo un pesado lastre. En su nombre, se llegó incluso a crear una central sindical latinoamericana de inspiración justicialista. Por un lado, todo impulsaba a dejarla caer y a cultivar la armonía en las relaciones con Estados Unidos: el ascenso a la presidencia de Dwight D. Eisenhower llenaba a Perón de ilusiones. Pero había también hechos que obligaban a Perón a no desprenderse de ella, por la importancia crucial que revestía en el universo de valores de su movimiento. Así, por ejemplo, la llegada al poder de Getúlio Vargas en Brasil, y luego las de Carlos Ibáñez en Chile, Víctor Paz Estenssoro en Bolivia y José María Velasco Ibarra en Ecuador. ¿Había llegado por fin la hora de la "tercera posición"? Pero los éxitos no tardaron en revelarse va-

nos. La tensión entre el intento de cultivar la amistad de los países vecinos y la actitud de promover en ellos la causa justicialista, pesó como piedra de molino en el ocaso de la "tercera posición". En todo esto, Perón terminó por ser prisionero de su doble discurso, quedando inmóvil en mitad del río.

Los partidos políticos tradicionales no fueron los que pusieron a Perón al borde del abismo en el que se precipitaría. Si ello llegó a suceder fue porque las pulsiones totalitarias del régimen habían llevado a Perón a una encrucijada de la que partían dos caminos sin salida: uno llevaba a la parálisis y el otro a la implosión de su movimiento. El régimen empezaba a parecerse cada vez menos a aquel joven retoño revolucionario de los comienzos y cada vez más a un anciano bien nutrido, regodeándose ante la adulación de sus hijos. Esa fue la época del más desenfrenado culto a la personalidad, del pan y circo de los grandes campeones deportivos que se volvían propagandistas del régimen. Por lo demás, fue también la época en que se intensificó el control policiaco y los actos de represión, que en todo caso siempre fueron de limitada amplitud en ese régimen que gozaba de un amplio consenso. Frente a una apoteosis tal, los partidos tradicionales eran apenas débiles vocecitas.

A fines de 1954 el régimen comenzaba a mostrar la paradójica imagen de un gobierno que, siendo todavía muy popular, se encontraba aislado; de un régimen tan encerrado en su triunfalismo que impulsaba a todos los fragmentos heterogéneos que formaban la oposición a unirse en su contra. El conflicto que se anunciaba se manifestó en las palabras con las que Perón, en noviembre de 1954, denunció a parte del clero con el tono jactancioso de quien cree estar bien afirmado en el sillón del poder, por más que sus palabras fueran la primera palada para cavarse la fosa. Dijo que los "malos católicos" estaban haciéndose culpables de "hacer política"; en resumidas cuentas, de atentar contra la armonía de la comunidad organizada. Su fastidio era exacerbado por la circunstancia de que un grupo de católicos acababa

de fundar el Partido Demócrata Cristiano. De ese modo fue Perón mismo quien creó las condiciones para que se iniciara una reacción en cadena, que solo terminaría con su caída. No solo se ganó la animosidad de la iglesia, sino que también produjo un desgarramiento en las fuerzas armadas, desde hacía mucho tiempo baluarte de la "Argentina católica". El incipiente conflicto con la iglesia lo volvió también a situar entre los parias internacionales. Perón se volvió por primera vez contra una fuente clave de su doctrina y del consenso de que gozaba. No hay duda de que esa actitud sembró el desánimo en las conciencias de muchos peronistas, y los impulsó al desaliento frente a la evolución de un conflicto que no comprendían, seguros como estaban de la natural sintonía entre su identidad política y su fe. En esas grietas, pudieron ir colándose los partidos de oposición.

El ataque de Perón a la iglesia católica fue la agresiva reacción de un hombre que percibía su comunidad organizada desafiada. Mirado así, el conflicto con la iglesia no fue un relámpago en un cielo sin nubes. El gobierno aspiraba a ejercer el monopolio del poder y el de la "argentinidad"; la iglesia y el ejército pretendían conservar en sus manos la tutela de la nacionalidad, por encima de la fractura entre peronistas y antiperonistas. En lugar de unir Argentina, observaban, Perón la había desunido más. En pocos días se acabó con los privilegios de que había gozado la enseñanza católica, y la prensa se vio inundada de ataques a la "infiltración clerical". La escalada del conflicto fue inmediata. Bastaron un par de días para que el Congreso aprobara una ley de divorcio. Con esto, el enfrentamiento con la iglesia tuvo un nuevo salto adelante.

Mientras tanto, se intensificaban los contactos entre los partidos políticos y altos oficiales del ejército y la marina. También iban apareciendo los sabotajes y las bombas, atentados que impulsaron el furibundo ataque al clero del secretario general de la CGT. A esas alturas ya la crisis había pasado a las calles. El gobierno, ante la envergadura de los actos de resistencia, se de-

cidió a reformar la Constitución, con el objeto de sancionar la separación entre la iglesia y el Estado. La chispa que precipitó la crisis fue la celebración del Corpus Christi, que se transformó en una masiva manifestación contra el régimen. Perón habló al país echando más gasolina al fuego, y se decretó la expulsión del país de dos obispos. Pero todavía faltaba lo peor. El 16 de junio, la marina bombardeó la Casa Rosada y la plaza que la circunda; acción fracasada, cuyos inútiles impactos provocaron la muerte de decenas de víctimas inocentes. Las turbas peronistas consumaron su venganza incendiando algunos antiguos templos.

El ejército había salvado a Perón en la tremenda crisis que acababa de concluir, y exigió un cambio de rumbo. Perón anunció entonces que la revolución había terminado y realizó profundos cambios en su gobierno. Sin embargo, recurrió una vez más al viejo método plebiscitario para recuperar el terreno perdido. Así fue que presentó su renuncia. Lo que obtuvo con ello, tal como esperaba, fue la organización de una multitudinaria concentración en Plaza de Mayo, donde la muchedumbre "le impuso" permanecer en el poder. La crisis entró entonces en su último acto. Perón pronunció el más violento de sus discursos y la CGT ofreció la creación de milicias obreras. Por fin, el 16 de septiembre, desde la católica Córdoba, llegó la noticia de que el ejército se había sublevado, codo a codo con la marina. Al frente de la revuelta se hallaba un general de orientación nacionalista y profunda devoción católica, Eduardo Lonardi. Los choques de los días sucesivos entre los insurgentes y las fuerzas leales concluyeron con la dimisión de Perón.

EPÍLOGO

Ni Perón ni el peronismo hallaron su fin en las dramáticas jornadas de septiembre de 1955. Al contrario, uno y otro conservaron inmensa popularidad y vitalidad. Los primeros en percatarse

de ello fueron quienes, habiendo logrado deponerlo, debieron experimentar por sí mismos el hecho de que la sombra peronista seguiría persiguiéndolos, y de que era ilusorio en Argentina pensar en sentar las bases de un orden político estable sin su concurso. Ello fue especialmente válido para los partidos tradicionales, ilusionados con la esperanza de que la revolución libertadora de 1955 era una sublevación democrática. Era una idea sin fundamento, no solamente porque Perón conservaba sus fuerzas sino, sobre todo, porque el elemento que había decidido su caída no era la fuerza moral de una sociedad civil democrática, sino la rebelión de las más potentes corporaciones. A tal punto que justamente las fuerzas armadas y la iglesia pasaron a ser, a partir de entonces, los atentos guardianes del destino nacional.

Lo que quedaba del peronismo era en primer lugar su sólido anclaje en la clase obrera, que le confería un carácter popular muy especial. Pero también quedaba su intrínseca pulsión totalitaria, es decir su vocación de saturar de sí a la sociedad en cada uno de sus ámbitos, y a construir con ella una comunidad homogénea, unida en su "argentinidad", que el peronismo pretendía conservar como su monopolio. De esa premisa derivaban su nacionalismo extremo y su reverso, la contraposición a influencias externas de todo tipo, que el peronismo suponía atentaban contra la integridad histórica y social de la nación; así como su instintiva aversión por el pluralismo, en el que el peronismo vio siempre emboscada la artificial división del cuerpo orgánico de la nación, la enfermedad que atentaba contra la salud y la armonía del organismo social. Parte de esa concepción era también su irrefrenable tendencia a suprimir, en nombre de la unidad de la nación y del pueblo, las divisiones entre los poderes del Estado, fundamento del constitucionalismo liberal, así como su innata ambición de ponerse al frente de un proceso regenerador revolucionario, el baño catártico del cual surgirían la "nueva Argentina" y su ciudadano, el "nuevo argentino".

Si el movimiento peronista siguió siendo más popular que ningún otro en Argentina, no se debió por cierto a la coacción que ejerció sobre todas las formas de disenso. La coacción existió, pero no fue nunca especialmente brutal y masiva, lo que viene a confirmar el amplio consenso con que siempre contó. Además, el largo periodo de persecuciones y proscripción que comenzó a sufrir desde el mismo día en que cayó Perón revitalizó sus fibras y renovó sus filas, y acabó por transformar en víctima a quien antes había sido victimario. Pero su persistente y genuina popularidad reconocía también otros orígenes. Cabe imaginar que la primera de esas fuentes haya sido la familiaridad de gran parte de los argentinos de la época con el organicismo social católico, del que el peronismo se erigió en intérprete. Ello pesó especialmente sobre los argentinos de extracción popular, que eran también los menos expuestos a las ideas, las modas y los estilos de vida típicos de la era liberal-burguesa, tan difundidos en cambio entre las élites cultas y cosmopolitas de las principales ciudades. La segunda de dichas fuentes era la tan difundida como insatisfecha ansia de integración, que dominaba la sociedad argentina desde la época de la inmigración masiva, y que se acentuó todavía más como consecuencia de los bruscos cambios sociales que se verificaron en los años de la gran depresión. La apelación peronista a extirpar el virus liberal y así volver a fundar la comunidad organizada de los argentinos era mucho más que una nostálgica llamada a recuperar el paraíso perdido: era un acto muy concreto, una manera efectiva de avanzar por el camino de la integración social. Por último, una fundamental e inagotable fuente del consenso peronista fue el carácter periférico de la industrialización argentina. La modernización argentina fue periférica en el sentido de que gran parte de la población la percibió como un proceso de disgregación de la comunidad nacional, inducido desde fuera. En ese proceso participaban el capital británico que explotaba al país, el materialismo y el individualismo de origen anglosajón, la ética y las "sectas" protestan-

tes, la democracia liberal, caballo de Troya del socialismo y el comunismo, ideologías todas que atentaban contra la pureza de la "argentinidad". Ante todo esto, Perón y el peronismo ofrecían bienes tan valiosos como escasos: protección, sentido de pertenencia, chivos expiatorios.

El peronismo, en síntesis, estaba dotado de un núcleo ideológico y antropológico "populista", cuyo centro estaba ocupado por la reivindicación de la soberanía del pueblo entendido como comunidad orgánica, esto es, en oposición a la concepción liberal de matriz iluminista. Para el peronismo, ese pueblo ejercía la democracia en el plano social, no en el de los derechos civiles y políticos. Ese pueblo, en virtud de su histórica homogeneidad, no se expresaba por medio de la representación política liberal, en la que creía ver la trampa que lo privaba de la soberanía, sino por medio de una democracia plebiscitaria, con la afinidad encarnada en su líder, término natural de su conformación homogénea. Era una concepción muy favorable a la nacionalización de las masas excluidas, pero también muy refractaria al pluralismo político e ideológico; una concepción que, además, era intrínsecamente patrimonialista, es decir, proclive a no ver en el Estado una entidad política y jurídica pública y permanente, sino un instrumento ético: el lugar en el que vive y se reproduce la eterna identidad nacional, y del cual, por lógica consecuencia, el movimiento que monopoliza esa identidad tiene absoluto derecho de posesionarse, como de una cosa propia. Fue esa visión del hombre y de la sociedad, tan antigua como arraigada y popular, la que indujo a los peronistas a considerarse sinceramente como una auténtica democracia, y a sus opositores, con igual grado de razón, a ver en él una dictadura totalitaria.

De ahí el dilema sin solución en que se debatiría todo orden posperonista, ya fuera civil o militar: por un lado sería muy complejo, por no decir imposible, darle estabilidad y legitimidad a un sistema político fundado en la exclusión del partido mayoritario. Por otra parte, cómo erigir un orden democrático admi-

tiendo un partido que representó el canal de integración de las masas a la vida política, pero que actuaba como la esencia misma de la nación, calificando de "antinacionales" a todos sus opositores. Un partido que al ejercer el poder violentó la esencia misma de la democracia, o sea el respeto al pluralismo y a los derechos de las minorías.

DICTADURAS Y DEMOCRACIAS

Marcos Novaro

Desde la caída del régimen peronista en 1955 hasta la primera década del siglo XXI la historia argentina estuvo signada por la inestabilidad. El periodo se inició con una sucesión de ensayos semidemocráticos o directamente autoritarios, en la que estos terminaron por imponerse volviéndose cada vez más prolongados y violentos, aunque no menos fallidos. Ese recurrente fracaso dio paso a principios de los ochenta a la transición democrática, que si bien significó un punto de quiebre, no puso fin a la inestabilidad, apenas le dio un marco de contención institucional en el que los aspectos económicos del problema incluso se agravaron: la hiperinflación de 1989-1990 y el colapso de la convertibilidad en 2001 así lo prueban. El resultado de todo ello es un país que parece no tener rumbo fijo en sus alianzas de gobierno, sus políticas públicas ni su relación con el mundo. Y que pasó en estos 60 años de un cuadro en el que la relativa igualdad e integración sociales convivían con una aguda crisis de legitimidad política, a otro en el que se resolvió medianamente la disputa por la legitimidad, pero la sociedad se volvió desigual y excluyente.

No es casual que, en 2010, al celebrarse el bicentenario y recordarse el primer centenario, cuando Argentina parecía destinada a cumplir los más ambiciosos sueños de sus padres fundadores, se disparara un debate entre dos visiones opuestas sobre la historia reciente del país: la de quienes, inspirados en

1910, piensan el siglo posterior como “los cien años perdidos”, consecuencia de la irrupción del populismo y del abandono de la economía de mercado, y la de los populistas que ven en 1910 el clímax de “un país para pocos” y sostienen que los problemas desde entonces obedecieron a la “reacción conservadora y oligárquica” ante el afán de los sectores populares de compartir los frutos del desarrollo y ampliar sus derechos políticos y sociales. En las páginas que siguen se intentará trascender esta oposición, para penetrar en las causas profundas de los problemas y reconstruir críticamente el hilo de los acontecimientos.

LA REVOLUCIÓN LIBERTADORA Y LOS GOBIERNOS DE FRONDIZI E ILLIA

El golpe militar que desplazó a Perón del poder el 16 de septiembre de 1955 se concretó gracias al fugaz entendimiento entre tres sectores militares y civiles bien diferenciados: el de los conservadores que buscaban erradicar el peronismo y restablecer el jerárquico orden social que lo precediera; el de quienes rechazaban a Perón por las libertades que conculcara y deseaban restablecerlas preservando a la vez los derechos sociales, y el de nacionalistas y peronistas decepcionados con el líder que querían salvar lo que se pudiera del régimen por él creado prescindiendo de lo que estimaban era “su errática conducción”. Tras un breve predominio de estos últimos, se impuso un precario acuerdo entre los dos primeros grupos, encarnado por el general Pedro Aramburu y una junta de líderes partidarios, en la que destacaban los de la Unión Cívica Radical (UCR). Aramburu proscribió a Perón, y a quienes siguieran siéndole leales, para “desperonizar” el país. Las tensiones, con todo, siguieron presentes, impidiéndole a la llamada “Revolución Libertadora” sacar provecho del consenso inicial de que disfrutó, y facilitando a Perón la tarea de recuperar la iniciativa desde el exilio.

En ello influyeron también dos factores estructurales: la complejidad del orden estatal y los grandes cambios sociales que el régimen depuesto dejó como legado y que aportaron al peronismo profundas raíces y medios para resistir los intentos de reabsorberlo o extirparlo. Debido a lo cual dos rasgos característicos del país previo al golpe perdurarían después de él: la igualdad imperante en una sociedad movilizada sectorial y políticamente, y una crónica disputa sobre la vía para crear gobiernos legítimos. Esos rasgos se potenciaron además entre sí, condicionando los intentos de crear un orden alternativo al peronista: los actores que él fortaleciera, en particular los sindicatos, lograrían forzar a los sucesivos gobiernos a atender sus intereses, o correr el riesgo de la ingobernabilidad.

La crisis de legitimidad había signado ya los últimos años de Perón en el poder: el híbrido de democracia de masas, corporativismo y autoritarismo que él creó dependía de un frágil equilibrio entre el ejército, el sindicalismo y el aparato electoral de provincias, que solo el líder pudo garantizar, y por breve lapso. De ahí que cuando se acrecentaron las tensiones con los actores ajenos al régimen (los empresarios, la iglesia católica, la clase media), este se derrumbó casi sin resistencia y con la colaboración de no pocos de sus adherentes. Sus adversarios vieron en eso la prueba de que el liderazgo de Perón no tardaría en extinguirse. Pero los vencedores de 1955 estaban aún más divididos que los peronistas respecto a la cuestión de la legitimidad y subestimar a Perón empeoró todavía más las cosas.

En cuanto a la igualdad reinante en la Argentina de mediados de siglo, obedecía a factores de larga data (escaso peso de la población indígena y campesina, asimilación de la inmigración europea, rápida urbanización, etc.), que las reformas peronistas fortalecieron: la maduración de la clase obrera y la clase media asalariada se potenció con la extensión y legitimidad que adquirió la organización sindical (hacia 1954 la tasa de sindicalización se calculaba en 48%), con un Estado que producía todo tipo de

bienes y servicios y con una industria protegida de la competencia externa. A la fortaleza de los gremios contribuían además los servicios de salud de mutualidades administradas por ellos (obras sociales); la fijación de salarios por medio de contratos colectivos con las patronales (paritarias); la existencia por ley de un único sindicato nacional por rama de actividad, los sindicatos agrupados en una también única entidad nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT), y, por último, el establecimiento de contribuciones cuasi obligatorias de los asalariados para financiarlos. Asimismo, la homogeneidad social era promovida tanto por el cine, la radio y la literatura popular de la época, como por la educación de masas, cuyo imaginario igualador heredado de la Argentina liberal el peronismo amplió, celebrando el ascenso de las clases subalternas y cuestionando las jerarquías.

En algunas explicaciones sobre la inestabilidad argentina se destacan las reacciones opuestas que ese igualitarismo generó en las clases altas y bajas: aquellas pensaban que "demasiada igualdad" amenazaba su estatus y el orden social, mientras estas consideraban "intolerablemente injusto" cualquier cambio que afectara siquiera un poco sus intereses. No obstante, también es cierto que muchos en las clases altas pensaban, antes y después de 1955, que el peronismo era una eficaz barrera contra el comunismo. Así que la "reacción conservadora" no explica, por sí sola, la intensidad que adquirieron estos conflictos. Una tesis alternativa apunta que el aparato productivo no soportaba la presión distributiva a la que lo sometían tan poderosos sindicatos. Ello explica la intensidad de la puja en torno a salarios, impuestos a las exportaciones agropecuarias, subsidios a la industria y precios de los alimentos, antes y después de 1955. Y nos permite considerar una tercera explicación: si los sindicatos eran "demasiado poderosos" se debía a una desproporción con otros actores, en particular por las dificultades de los empresarios para organizarse. Estos tendían a buscar soluciones por medio de vínculos especiales con los funcionarios, perjudicando sus posibilidades de

influir sobre las decisiones de gobierno como grupo de interés, como hacían los asalariados. Por otro lado, estos no solo se involucraban en la lucha política con una identidad partidaria común, sino que privilegiaban los objetivos coyunturales sobre la cooperación. En verdad, el propio Perón había impuesto barreras a esa cooperación temiendo que los gremios sumaran a su poder sectorial un papel activo en la gestión económica. Paradójicamente, ese temor tendría mayor justificación tras su caída, que permitió a aquellos sumar a la representación sectorial de los trabajadores su expresión política, algo que los sucesores de Perón, y él mismo, intentarían contrarrestar por todos los medios a su alcance.

De lo dicho cabe concluir que los dilemas que enfrentó Argentina a partir de 1955 no pueden entenderse como fruto de la simple puja entre dos campos, uno democrático, otro autoritario, uno defensor de la igualdad, el otro su enemigo. En ambos bandos hubo actores ambivalentes y predominó el ansia de instaurar alguna forma de democracia, sin acuerdo sobre los instrumentos ni el cariz que ella debía tener. Algo que se reflejó en la inversión de roles que se produciría en distintos terrenos tras el golpe: los antiperonistas que habían usado consignas antifascistas para combatir a Perón no podían comprender cómo esas consignas eran reinterpretadas por los peronistas al bautizar como "Resistencia" su lucha contra la proscripción.

Para peor, la Revolución Libertadora marcó el inicio de un largo ciclo de deterioro de la autoridad del Estado. El peronismo había buscado fusionarse con él, y tras su derrocamiento no lo reemplazó nada equivalente, así que la obediencia a facciones con asiento en grupos de interés y en ideologías enfrentadas se impuso frente a las reglas y las lealtades emanadas del orden estatal. Ello ayuda a entender la sobrevivencia de esa fuerza y que ella pudiera, sin grandes traumas ni divisiones, pasar de ser un actor organizado desde el vértice del aparato público, a un movimiento de masas subversivo del orden, un "partido del pueblo" capaz de perdurar casi sin presencia en el sistema institucional.

El contexto internacional aportó lo suyo al cambiante escenario en el que la Libertadora y el peronismo se disputaron las banderas de la democracia, la libertad y la justicia. La Argentina peronista se había sustraído en gran medida a los influjos externos, así que su caída implicó una abrupta irrupción de ideas y perspectivas nuevas. La más influyente de ellas fue el desarrollismo, que proponía un "salto hacia delante" para sacar a los países periféricos del atraso, y en el caso argentino pareció adecuado por las fuertes tensiones políticas que generaban las demandas distributivas. Quien primero recogió el programa desarrollista fue uno de los líderes de la UCR, Arturo Frondizi: en su nombre intentaría resolver el dilema que se enfrentaba sellando una alianza entre el antiperonismo moderado y los peronistas desencantados con su líder, en particular los sindicalistas, a los que por impulso de la UCR y otros partidos Aramburu devolvió paulatinamente sus organizaciones, y los peronistas de provincias, a quienes se prometió no aplicarles la proscripción.

Estos acercamientos se realizaban sobre los disensos del campo peronista, que no eran pocos. Al comienzo de su exilio Perón apostó a un contragolpe militar, pero los intentos fracasaron y sus promotores terminaron presos o ajusticiados. Buscó entonces promover el activismo sindical, aprovechando que el peronismo logró relegitimarse en las elecciones gremiales de 1957 frente a socialistas y comunistas, consagrándose liderazgos renovadores como el del metalúrgico Augusto Vandor. Pero aunque las bases sindicales nutrieron la Resistencia y multiplicaron los actos de sabotaje y los "bombazos", los jefes gremiales prefirieron preservar la precaria legalidad que habían conseguido y desoyeron los llamados de Perón a una huelga revolucionaria. Ante ello, el ex presidente moderaría sus planteamientos y daría apoyo a los partidos neoperonistas que buscaban sortear la proscripción. Aunque sus líderes, igual que los gremiales, tenían interés en un "peronismo sin Perón", por lo que su relación con él sería complicada. Por ejemplo, cuando Aramburu convocó a ele-

gir una convención constituyente para reemplazar la Constitución de 1949, Perón desautorizó las listas neoperonistas y llamó a votar en blanco, temiendo que aquellas alejaran a los electores de su conducción. El voto en blanco sumaría 24% contra 8% de los neoperonistas.

Perón seguiría con este juego, alternando avales a las distintas facciones de su movimiento para contener las pretensiones de las demás, al tiempo que acorralaba y dividía a sus adversarios combinando amenazas y ofertas de colaboración. Buscó así convencer a las élites antiperonistas de que desde el exilio podría promover una revolución que estando en el país evitaría. Claro que, a la vez, sus amenazas elevaban, a ojos de esas élites, los costos de ceder. En este juego unos y otros irían aprendiendo los límites que existían para lograr sus objetivos y la inevitabilidad de un acuerdo. Pero el aprendizaje llevó casi dos décadas de conflictos y el acuerdo llegaría demasiado tarde.

La Convención Constituyente mencionada se realizó en 1957 en un clima convulsionado por esta pugna. Debido a lo cual su objetivo de restablecer la legitimidad de las reglas del juego se frustró. Los partidos legalizados (UCR, socialistas, conservadores y democristianos) apoyaron la derogación de la Constitución peronista. Pero muchos en ellos se negaron a limitar los derechos sociales y sindicales, porque eso afectaría a quienes deseaban representar. Y mientras algunos rechazaban la participación de los neoperonistas otros la promovían, para alejarlos de Perón o para aliarse con ellos. Los radicales se dividieron entre estas posiciones. Quienes seguían a Frondizi, llamados "intransigentes" y agrupados en torno a la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), para congraciarse con los peronistas prometieron la continuidad del modelo sindical heredado. El resto, organizados en Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) y liderados por Ricardo Balbín, vieron en eso una traición. La fractura del único partido con peso electoral significativo terminó de debilitar el intento de la Libertadora por cerrar el ciclo peronista y

determinó que el llamado a elegir nuevas autoridades tampoco resolvería el conflicto sobre la legitimidad: Frondizi sellaría un acuerdo secreto con Perón para que lo apoyara, traicionando el pacto proscriptivo, confiado en que el peronismo se dispersaría o sería fácil dominarlo desde el poder. Para Perón, en tanto, ese acuerdo era preferible a dejar crecer el neoperonismo y le brindó reconocimiento si no como dueño de una mayoría propia, sí como sostén de una posible mayoría.

En las elecciones de 1958 la UCRI reuniría 45% de los votos, llevando a Frondizi a la Presidencia en medio de un gran entusiasmo de la ciudadanía. Aunque la sobrevaloración de sus posibilidades se revelaría pronto como un arma de doble filo. En el trienio anterior los peronistas habían bloqueado los intentos de gobernar *sin* ellos o *contra* ellos. Así que Frondizi intentaría hacerlo *con* ellos, hasta que el desarrollo económico diera frutos y le permitiera librarse de Perón e integrar a sus seguidores. Según él, la dicotomía peronismo-antiperonismo estaba "mal planteada" y había que superarla uniendo al empresariado, los sectores medios que nutrían a la UCR y los votos populares. Pero al intentarlo chocaría con el bloqueo mutuo entre los bandos enfrentados, que no podían imponerse definitivamente uno al otro, pero sí detener cualquier iniciativa que pretendiera arrebatarles sus recursos de poder. Conocedores de esa situación, los militares no tardaron en presionar al gobierno, aunque Aramburu, ahora retirado del ejército, los contuvo. Así que los mayores dolores de cabeza para Frondizi provinieron, en principio, del otro "factor de poder" que lo forzaba a mantener un delicado equilibrio: el sindical.

Al comienzo, Frondizi trató de cumplir los compromisos asumidos: concedió un generoso aumento de salarios, sancionó una amplia amnistía y dio continuidad al modelo de un solo gremio por actividad y una sola central. Pero eso bastó para que Balbín denunciara "la entrega del país al totalitarismo" y no alcanzó para satisfacer a los sindicalistas, que realizaron huelgas

contra la medida más importante del gobierno: la apertura del sector petrolero y otras actividades a las inversiones extranjeras. Y aunque esas inversiones elevaron rápidamente la producción de combustibles, acompañando el crecimiento de la industria y la multiplicación de obras de infraestructura, las huelgas no se detuvieron. Lo hicieron solo cuando, para contrarrestar de paso el intento de la UCRP de convencer a los uniformados de poner fin a las "traiciones de Frondizi", este le encargó a los militares la represión del sindicalismo, el que, orientado por Vandor, decidió preservar una vez más su frágil legalidad, aunque no volvió por ello a acercarse al gobierno.

También en el terreno universitario Frondizi sufrió la pérdida de apoyos vitales cuando los estudiantes se movilizaron contra la ley que permitió la creación de universidades privadas. Todas estas resistencias reforzaron en el presidente la idea de que era preciso ejercer la autoridad "desde arriba" para imponer los cambios necesarios. Y es que, aunque sus políticas económicas daban resultados, seguía afectado por la falta de legitimidad, tanto frente a los peronistas como a los antiperonistas. Además, el crecimiento de la economía y el aumento de los salarios provocaron un salto en la inflación (fue de 130% en 1959, todo un récord), a lo que se sumó el déficit comercial: las industrias en expansión necesitaban más importaciones, pero ni ellas ni el agro aumentaban sus exportaciones a la misma velocidad. Acceder a créditos externos parecía la única solución. Así que a mediados de 1959 el gobierno lanzó un plan antiinflacionario ajustando gastos e ingresos y pidió un crédito al Fondo Monetario Internacional para cubrir el déficit externo y aumentar las reservas. En respuesta, Perón reveló el pacto firmado en 1958 y volvieron los llamados a los militares para que derrocaran al gobierno. En respuesta, el gobierno extendió las funciones represivas de los militares, abriendo la posibilidad de comenzar a articular concepciones que terminarían por unir el desarrollo económico y la estabilidad política con la seguridad nacional.

Frondizi siguió tratando de seducir a los neoperonistas, aunque sin éxito: en las elecciones legislativas de 1960 chocaría otra vez con el llamado de Perón al voto en blanco, que se impuso con 25%. Este persistente bloqueo electoral favorecía a los gremios, aunque también alimentó en ellos la tensión entre privilegiar el interés sectorial —para lo que hacía falta tanto presionar como acordar con el gobierno o los militares, posición liderada por Vandor— o subordinar lo sectorial a la reinstauración del orden peronista como planteaban los llamados "combativos", más cercanos a la intransigencia de la ya muy activa Resistencia peronista. La renacida conflictividad gremial agregó desasosiego a una sociedad ya afectada por la mutación acelerada de las expectativas, la diferenciación social y, a raíz de ello, la incertidumbre. Clima alimentado también por la Revolución cubana, que despertó esperanza en las fuerzas de izquierda y temor en los militares y los políticos de derecha: Cuba apareció como paradigma de los peligros que corría la región si se permitía que un caudillo de masas confluyera con las ideas y el programa de la revolución social.

Finalmente, cuando en las elecciones de 1962 triunfaron en ocho provincias candidatos de Vandor y, peor aún, algunos combativos fieles a Perón, los militares, con el apoyo de los demás partidos, en particular la UCRP, hicieron renunciar a Frondizi, reemplazándolo por José María Guido, presidente provisional del Senado. Su salida de escena, sin embargo, no calmó las aguas, porque los uniformados también estaban divididos respecto a qué hacer, y las pugnas entre ellos pasaron rápidamente de las conspiraciones de palacio y los recambios de ministros a los choques armados, con su secuela de varias decenas de muertos. Aunque los antiperonistas duros, llamados "colorados", controlaban la armada y ganaron prestigio al frustrarse los intentos integradores de Frondizi, los "azules", favorables a la vía electoral y a un entendimiento con sindicatos y políticos, retuvieron la conducción del ejército y se impusieron en los enfrentamientos,

orientando al gobierno de Guido por una vía intermedia, cuyo principal cometido era evitar la radicalización del peronismo.

Debido al temor de que esta vez los militares excluyeran a todos los políticos sin distinción, en esos meses se produjo un inédito acercamiento entre peronistas moderados y otros partidos en la llamada "Asamblea de la Civilidad"; con ello, las demás fuerzas implícitamente aceptaban que el peronismo era imposible de erradicar y si no se lo legalizaba la crisis política se agravaría. Otra novedad de ese momento, pero de signo opuesto, fue el surgimiento en el peronismo de una militancia juvenil radicalizada que confluyó con el sindicalismo combativo. Perón siguió dando su aval a unos y a otros.

En julio de 1963 hubo de nuevo elecciones y los azules lograron que se permitiera la participación del "justicialismo", como empezó a denominarse al peronismo moderado. Pero los colorados mantuvieron la proscripción de los "adictos a Perón". Los candidatos de Vandor fueron así autorizados, aunque Perón frustró su alianza con la UCRI y logró por cuarta vez imponer el voto en blanco, que sumó 19% de los sufragios. A raíz de ello, Arturo Illia, candidato de la UCRP, se quedó con la presidencia con 26%. Con esta acotada legitimación apenas pudo encarnar el deseo de que se prolongara la tregua de momento establecida entre las facciones en pugna, para lo cual contaría con cierta disposición inicial de las dos más influyentes: los azules del ejército y los vandoristas en los gremios. Pero en su afán de romper el corsé que le imponía esa situación, Illia buscaría otros aliados. Dejó al frente del ejército al general Juan Carlos Onganía, jefe azul, pero desafió su autoridad promoviendo a puestos de mando a oficiales colorados. En el campo gremial hizo lo mismo con los combativos, que tenían ahora el abierto apoyo de Perón, lanzado a debilitar a Vandor desde que este se hiciera del control del Partido Justicialista y, por su intermedio, de las bancadas legislativas y de las tres gobernaciones ganadas en las elecciones. Illia propuso democratizar los gremios, autorizar más de una

organización por rama de industria y dar representación a las minorías en las direcciones, objetivos que compartían la izquierda y los combativos. Ante lo cual Vandor, pese a ser el peronista que más interés tenía en que siguiera abierto el juego electoral, lejos de colaborar con el gobierno pasó a enfrentarlo.

Illia continuó la política económica previa, con algunos matices: fortaleció el pleno empleo, el intervencionismo estatal, los mercados protegidos y la industrialización por sustitución de importaciones. Tras la recesión sufrida en 1962 (fruto, una vez más, de la falta de divisas para pagar las importaciones) la economía se reactivó, aprovechando las inversiones atraídas por Frondizi. Pero eso no bastó para resolver las dificultades estructurales del comercio exterior ni del financiamiento de las inversiones. Medidas nacionalistas que incluso redujeron las inversiones externas en petróleo, y la política distributiva que pretendía seducir a los trabajadores no conmovió a la dirigencia gremial, que lanzó un amplio plan de lucha entre mayo y junio de 1964. El ejecutivo se negó a reprimir y pidió a la justicia, sin éxito, que impidiera las ocupaciones de fábricas. También los sectores medios se alejaron entonces del gobierno, tentados por las acusaciones que lanzaban los desarrollistas, la prensa empresaria y los voceros militares por ser lento e ineficaz, y por las promesas de un orden más riguroso que frenara la inflación y las protestas según la fórmula de “desarrollo y seguridad” que comenzó a enarbolarse.

Mientras tanto, fiel reflejo de lo que ocurría en el mundo, Argentina estaba viviendo una verdadera revolución de las costumbres y de las expectativas, en la que la juventud era el actor decisivo. En ese marco, el “giro a la izquierda” de las clases medias ilustradas, tras la desilusión con Frondizi, coincidió con el que experimentó una porción del peronismo político y sindical. La diferencia entre esta coincidencia y otra casi opuesta que tuvo lugar entonces en Brasil es notable: no solo el desarrollismo de Juscelino Kubitschek había sido más satisfactorio para las clases medias brasileñas que el frondizista para las argentinas, también

lo estaba siendo el impulsado allá por los militares tras el golpe de 1964, que escogió como aliados a profesionales y universitarios, quienes respondieron desoyendo los cantos de sirena de la revolución. En Argentina, donde la posición social y política de esos sectores había sido tradicionalmente más sólida, la situación ahora parecía serles menos favorable y eso provocó resentimiento y radicalización. Esta actitud difería también de la de una década atrás, cuando una renacida fe republicana y liberal propició el final del régimen peronista. Pero tras años de proscripción, ese reverdecer solo podía explicarse como un crédito injustificado a una "superestructura formal" ineficaz o, peor, legitimadora de la dominación social. La similar tensión entre forma democrática y negación de derechos a las mayorías vivida en los años treinta y desde 1955 fomentó un renacimiento de los temas dominantes en la "década infame", el nacionalismo y el antiimperialismo, y a su vez se alimentó de él.

La lucha ideológica entre revolución y orden también se hacía presente en el seno de la iglesia católica. Influida por los vientos de cambio del Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín y, en el ámbito local, por la crisis del Estado que había incrementado la influencia de la curia en la educación, en la política social e incluso en la lucha política, como se vio en el golpe de 1955, la iglesia fue perdiendo unidad y capacidad moderadora: se volvió un campo de batalla entre ortodoxos que se sentían cada vez más amenazados y se volvían más conservadores, y reformistas que ante los obstáculos que aquellos les imponían iban radicalizándose y politizándose. En este contexto, los jóvenes católicos confluyeron con su pares de izquierda marxista y peronista e hicieron coincidir cristianismo con revolución.

Es comprensible que, en este marco, Illia no pudiera poner coto al poder del general Onganía, aun cuando lo pasó a retiro. La aparición de los primeros focos guerrilleros dio paso a la doctrina de la seguridad nacional y reforzó la idea de que se requería una autoridad que los políticos no podían tener para desarrollar

el país y frenar el desorden. Además, al acercarse las elecciones legislativas de 1965, el duelo ya abierto entre Perón y Vandor se agudizó. El jefe sindical obtuvo buenos resultados en algunas provincias e Illia temió que le pasara lo mismo que a Frondizi, así que para dividir el caudal peronista permitió que candidatos fieles a Perón compitieran contra los justicialistas. El resultado fue la derrota de estos. La reacción militar fue inmediata, y opuesta a lo que Illia esperaba: el peronismo fiel a Perón no solo giraba a la izquierda sino que seguía siendo imbatible en las urnas, así que los planes golpistas se aceleraron. Parte del sindicalismo los respaldó: la vía electoral había demostrado no servir para preservar sus intereses, así que un entendimiento con el ejército parecía la mejor opción. Finalmente, el 28 de junio de 1966 Illia fue expulsado de la Casa Rosada y una junta de comandantes designó a Onganía en su lugar.

UNA ESPIRAL DE AUTORITARISMO Y VIOLENCIA

El golpe dio inicio a la "Revolución Argentina" que, a diferencia de la Libertadora, buscaría resolver las "cuestiones estructurales" que estaban detrás de los problemas políticos, dando prioridad al cambio económico y exigiendo que en el ínterin la sociedad obedeciera sin chistar. Para ello los militares asumieron plenos poderes revolucionarios y los delegaron en Onganía. Él ejercería el poder ejecutivo por tiempo indeterminado, con total libertad para decidir funcionarios y políticas, también el legislativo y los poderes provinciales y tendría amplias atribuciones sobre las propias fuerzas armadas. Buena parte de la sociedad acató este orden de cosas, valorando la autonomía militar como último recurso para terminar con los conflictos. Aunque pronto se vería que los militares no estaban para nada a salvo de las luchas facciosas, y, además, chocaban con un desafiante movimiento de masas que daba rienda suelta a las expectativas más

diversas con un objetivo alternativo: el de otra revolución, además de nacional, popular.

En sus dos primeros años, la idea de Onganía de privilegiar el crecimiento económico y el orden pareció eficaz: las huelgas disminuyeron, los partidos fueron disueltos casi sin resistencia, la política económica combinó privilegios a la inversión extranjera, apertura comercial y suspensión de "paritarias", con créditos subsidiados para la industria y un gran número de obras públicas. Pero la tensión fue en aumento, en parte promovida por las propias autoridades que, aliadas a algunos neoperonistas y sindicalistas, ansiaban crear un orden corporativo de inspiración franquista, proyecto que halló fuertes resistencias en los demás políticos e incluso en los cuarteles. Cuando la represión se intensificó y puso la mira en las universidades, donde se practicaron violentas purgas, la resistencia creció, y el gobierno logró lo opuesto de lo que buscaba: la convergencia de sectores muy diversos en protestas cada vez más intensas en su contra.

Ese no fue el único obstáculo. Onganía quería fortalecer la representación empresarial para contrapesar el poder sindical, pero sectores crecientes del capital preferían acordar con los gremios, viendo en el corporativismo una apuesta peligrosa e inviable. Además crecieron las tensiones entre empresas extranjeras y nacionales: en la producción de bienes durables y combustibles estas habían sido favorecidas por Frondizi e Illia por medio de mercados protegidos, y ahora perdían posiciones por no tener la tecnología ni el financiamiento de que disponían aquellas; así que rechazaron la política antiinflacionaria y de atracción de inversiones externas. Algunas incluso denunciaron un "plan imperialista", a tono con las proclamas de la CGT y con lo que pensaban oficiales nacionalistas del ejército. Las medidas orientadas a racionalizar las empresas del Estado también encontraron oposición en ese sector militar, que las consideró un ataque a la soberanía. La reforma de ferrocarriles y puertos, por ejemplo, se trabó, por lo que el déficit de esas empresas continuó creciendo.

Mientras tanto se había formado una mayoría combativa en la conducción de la CGT, que rompió con el vandorismo. El gobierno no tuvo mejor idea que responder a esta novedad con la receta aplicada en las universidades, alentando la confluencia de los "combativos" del campo sindical y del estudiantado universitario. En este contexto, en mayo de 1969 estalló en la ciudad de Córdoba una insurrección popular que desbordó a la policía, y donde a los estudiantes y a los sindicatos combativos y de izquierda (que habían alcanzado su mayor desarrollo en las grandes empresas automotrices de la zona) se sumó la población en general, incluidos sectores empresariales y partidos moderados, que les hizo posible adueñarse de la ciudad. El "Cordobazo", a duras penas controlado por el ejército, mostró el aislamiento en que estaba cayendo el régimen. Onganía intentó entonces congraciarse con los gremios, con aumentos salariales y la devolución de las "obras sociales", a las que fortaleció con aportes obligatorios de trabajadores y empleadores. Pero en mayo de 1970, Montoneros, grupo guerrillero creado poco antes, secuestró y asesinó al ex presidente Aramburu, uno de los cabecillas de la Revolución Libertadora y figura emblemática de las políticas de proscripción del peronismo El hecho puso en evidencia la ineficacia de la represión. Para peor, amplios sectores justificaron la acción porque la violencia militar había sido "anterior y antipopular" tal como probaba el propio historial de Aramburu. Aunque, paradójicamente, en el momento de su secuestro el militar promovía un intento entre sectores civiles y militares de iniciar una apertura política que de este modo se frustró.

El país se internó así en un clima dominado por la violencia. Y por una muy particular: ya no la dispersa y acotada de la Resistencia, ni tampoco la espontánea del Cordobazo, sino una planificada, dirigida contra la vida de los enemigos: el de Aramburu no fue un caso aislado; poco antes Vandor había muerto baleado. Ambos crímenes abonaron la idea de la eficacia de la lucha armada. Ya operaban entonces el Ejército Revolucionario

del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), pero la organización más exitosa sería Montoneros, que pronto absorbió a las FAR.

En junio de 1970 los militares obligaron a Onganía a renunciar y lo reemplazaron por otro general retirado, Roberto Levingston, un nacionalista decidido a "recrear el Movimiento Nacional" que había reunido a "pueblo y ejército" bajo el primer peronismo. Pero nada alcanzaba ya para romper el aislamiento militar: el presidente no obtuvo mucho consenso social, pese a su política laboral más generosa, y perdió con ella el de los círculos financieros y las grandes empresas. La inflación volvió a subir y llegó a 35% en 1971. Las protestas crecieron y los políticos pidieron una salida electoral. La sensación de fracaso agobió a los uniformados, que, al igual que los partidos, eran impotentes para crear un orden estable. Argentina parecía cada vez más ingobernable y la crisis de autoridad del Estado volvió al centro de la escena, porque intervenía en una infinidad de asuntos pero, en vez de regularlos, los convertía en fuentes de demandas insatisfechas que lo deslegitimaban. Su debilidad alimentaba desequilibrios estructurales, como la inflación: Argentina era ya un caso único tanto por la dimensión del fenómeno como por su prolongación en el tiempo.

Viendo que no podía acordar con los militares, la UCRP buscó hacerlo con Perón. Así nació la "Hora del Pueblo", una versión ampliada de la Asamblea de la Civilidad, en la que esos y otros partidos menores aunaron esfuerzos para que se llamara a elecciones. Aunque más que a ese acuerdo Perón apostaba ahora a la protesta, incluida la violenta. De allí su abierto respaldo a Montoneros que enarbolaban la bandera "Perón o muerte", a diferencia de los políticos y sindicalistas peronistas, que seguían haciendo un juego ambiguo. Finalmente, tras una nueva ola de movilizaciones en las que tuvo una presencia importante la guerrilla, en marzo de 1971 la Junta Militar reemplazó a Levingston por el general Alejandro Lanusse, comandante del ejército que

siguió siéndolo, en el entendido de que el poder militar debía alinearse si aspiraba a salvar algo de la tormenta. Un realineamiento similar detrás de Perón se dio en el peronismo: los gremios pidieron en masa el regreso de su líder y el neoperonismo se extinguió.

El nuevo presidente anunció un pronto llamado a elecciones. Desde entonces, la amenaza de un golpe derechista lo asedió tanto como la de la revolución social. La indisciplina y un llamativo asambleísmo se habían instalado en los cuarteles y perdurarían por años. Para evitar que esos problemas consumieran a las fuerzas armadas, y para aislar a la guerrilla, Lanusse buscó un pacto con los partidos, a la vez que reinstaló las negociaciones "paritarias" y dictó la Ley de Represión del Terrorismo. Su plan de "apertura más represión legal", sin embargo, llegaba demasiado tarde. La guerrilla intensificó su actividad pese al aumento de las detenciones, con lo cual creció en los cuarteles la idea de que se estaba perdiendo la guerra, y de que Lanusse era demasiado liberal y hacía falta "mano dura". Opinión que permitió al aparato de inteligencia ser cada vez más autónomo. El debilitamiento del Estado resultante de la alta inflación encontró así un correlato en el fin del control legal de la violencia estatal. La masacre de guerrilleros presos en la base militar de Trelew en agosto de 1972 sería la evidencia más trágica de ello. Ese hecho, además, acabó con el intento de Lanusse de someter la Hora del Pueblo a lo que él llamaba el Gran Acuerdo Nacional: que los políticos, incluido Perón, aceptaran condiciones para las elecciones, entre las que destacaba el repudio a la guerrilla. Perón se negó a hacerlo, convencido de que le sería fácil controlar después la situación y de que lo que pretendía Lanusse era dividir a sus seguidores. Así que Montoneros siguió ganando protagonismo.

De las condiciones que Lanusse quiso imponerle, Perón solo aceptó la exclusión de su candidatura a la presidencia. Aunque puso en su lugar a alguien afín a los sectores revolucionarios: Héctor J. Cámpora. Con todo, Perón lo rodearía en el gabinete

de representantes de la derecha más dura, como José López Rega, ex policía convertido en su secretario particular y guía espiritual de su esposa, María Estela Martínez, alias Isabel. El aval a las dos alas extremas del movimiento apuntaba tanto a establecer un equilibrio entre ellas como a poner coto a la que le parecía la mayor amenaza, un poder excesivo de los gremios.

Así fue que Cámpora resultó elegido en marzo de 1973 con casi 50% de los votos. Para muchos, ello permitiría retomar la "revolución inconclusa" del primer peronismo; para otros, dar inicio a una mucho más amplia; para otros más, frenar el fervor revolucionario de estos y aquellos. No hubo acuerdo posible entre esas posiciones y no solo porque Perón ya había entrado en la fase final de su vida sino porque tampoco tenía una cabal idea de las fuerzas que desatara desde el exilio. Eso permite comprender que el retiro de los militares del poder, que entonces pareció la clave para resolver todos los problemas del país y superar las confusiones, se trocara en su opuesto: hecho a un lado ese enemigo definido y aislado, lo que había parecido claro se volvió oscuro y se complicó enormemente. La victoria peronista fue tan demoledora que impuso una nueva ley de hierro a los conflictos: a partir de ese momento se resolverían en el seno del movimiento, lo que a falta de reglas y consensos significaba en la pugna abierta entre sus facciones.

Cámpora fue rebasado por esta pugna desde su asunción: miles de simpatizantes de Montoneros forzaron la liberación de los guerrilleros presos y ocuparon una gran cantidad de instalaciones públicas exigiendo el reconocimiento de los funcionarios que "la juventud" promovía y respaldaban las armas. Perón buscó en principio, por medio de Cámpora, moderar los conflictos con un pacto social y uno político. Este, sellado en un abrazo histórico con Balbín, supuso un compromiso de defensa de las instituciones con dos destinatarios, los militares y las guerrillas, similar al que había querido hacerle firmar Lanusse. El social, firmado con la CGT y los empresarios, congeló las "paritarias" por

dos años, dando prioridad a la lucha contra la inflación (que llegó a 59% en 1972). Los sindicatos aceptaron a regañadientes.

Nada de eso evitó que los conflictos en el peronismo se manifestaran dramáticamente en otro hecho del que se había esperado la más plena comunión: el regreso definitivo de Perón al país. Montoneros y bandas de ultraderecha se disputaron a tiros el control del acto convocado el 20 de junio de 1973 para recibirlo. La movilización social, que desde el Cordobazo viviera un largo ciclo de expansión, empezó a declinar por el temor y la desconfianza crecientes hacia los proyectos de cambio. El otro efecto de la balacera fue que Cámpora renunció y se convocó a nuevas elecciones. Se inició entonces una dura pugna respecto a quién acompañaría a Perón en la fórmula, reveladora de los temores sobre su salud. Montoneros propuso a Cámpora, los sindicatos al jefe de la CGT, José Rucci, y unos pocos, más prudentes, a Balbín, con vistas a dar solidez al acuerdo interpartidario. Sin embargo, Perón, como quería López Rega, escogió a Isabel. La fórmula sería refrendada por 62% de los votos. Así, el líder logró finalmente su cometido: volver a la presidencia respaldado por una amplia mayoría. Pero descubriría que también él, igual que los militares acuerdistas, había consumido demasiado tiempo en lograr su meta: cerrado el ciclo marcado por la limitación de la soberanía popular, no sucedería nada parecido a la recomposición de la legitimidad del orden político.

Mientras tanto, Perón había cambiado de aliados: buscaba ahora que los gremios, junto a López Rega, lo ayudaran a controlar a Montoneros. En respuesta, dos días después de la votación, estos asesinaron a Rucci. A su vez, Perón permitió que los recursos estatales, las fuerzas de seguridad y el ejército nutrieran las bandas paramilitares. La más poderosa de ellas, la Alianza Anticomunista Argentina ("Triple A"), asesinaría entre fines de 1973 y 1976 a un millar de militantes y dirigentes de izquierda. Los Montoneros y el ERP, en represalia, intensificaron sus operaciones armadas. La ruptura era inevitable y se produjo el prime-

ro de mayo de 1974: en la concentración realizada en Plaza de Mayo por el día del trabajo, Montoneros le reclamó a Perón por el curso de su gobierno y este los expulsó del acto y del movimiento. Buscó entonces contrapesar la capacidad de movilización de la juventud con la de la CGT, pero el apoyo de esta se complicó porque justo entonces estaba naufragando el pacto social: desde que los precios comenzaron a descontrolarse (la inflación pasaría de 4% en la segunda mitad de 1973 a 24% en 1974), la presión de las bases desbordó a los gremialistas. La muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, por tanto, se produjo en las peores circunstancias: agravó el vacío de poder, el descontrol de la economía y el choque de las fuerzas en pugna.

Isabel carecía de capacidad para lidiar con ello. Y las soluciones que intentó fueron las de López Rega: emprendió un duro ajuste para congraciarse con los empresarios, mientras las listas de condenados a muerte de la Triple A circulaban abiertamente. El sindicalismo tradicional colaboró en combatir a la izquierda en sus organizaciones, pero rechazó el ajuste y reclamó la reapertura de las "paritarias", lo que llevó a que se acelerara la inflación. Cuando Isabel quiso insistir, la CGT paralizó el país, así que debió desprenderse de López Rega y someterse a los gremios.

Corría el mes de julio de 1975. Algunos peronistas buscaron reemplazar a Isabel por el titular del Senado, Ítalo Lúder, o acordar con los militares una salida, pero esas opciones no lograron consenso en el partido o la CGT, ni los militares colaboraron: preferían esperar que el clamor social por su intervención se masificara e hiciera olvidar sus previos fracasos. En los 12 meses previos a marzo de 1976 la inflación fue de 566%. Era inminente un estallido hiperinflacionario. En diciembre de 1975 hubo 62 asesinatos políticos, en enero de 1976, 89 y 105 en febrero, la mayoría de las personas aparecían acribilladas en la periferia de las ciudades. En ese clima, los militares conseguirían lo que buscaban: una cesión total de soberanía de parte de la sociedad y un grado extremo de autonomía.

Claro que este consenso no tuvo la misma intensidad en todas las capas sociales. La gran burguesía, que desde 1973 había estado a la defensiva, se tomó la revancha para imponer sus objetivos económicos y políticos: terminar con el populismo, al que achacaba todos los males. Incluso sindicalistas y políticos peronistas aceptaron que el golpe era preferible a que Isabel siguiera administrando una muerte lenta. Por su parte, la guerrilla estimó que con más represión abierta y presencia militar en el gobierno se facilitaría la contraposición de los dos bandos inconciliables, pueblo y antipueblo, y las masas la apoyarían. Sin embargo, la intensificación de sus acciones serviría para justificar la represión a los ojos de la sociedad.

Este clima permitió además que maduraran planes refundacionales y represivos muy ambiciosos en la élite militar. Su intervención no se limitaría a "poner orden" ni a excluir a un sector civil "desviado", apuntaría a curar una nación enferma de pies a cabeza, inyectándole por la fuerza los remedios necesarios. Esa fue la postura que adoptó el ejército bajo el mando de Jorge Rafael Videla, y en la que coincidirían marinos y aviadores conducidos por Eduardo Massera y Ramón Agosti. Tal vez la novedad más significativa de este consenso militar era la desconfianza frente al industrialismo y el estatismo, hasta entonces muy valorados; en desmedro de la tesis que asociaba desarrollo y seguridad ganó crédito la idea, que aplicaba Augusto Pinochet en Chile, de que el progreso y el orden se lograrían eliminando las regulaciones económicas y limitando las responsabilidades del Estado. Con todo, este credo neoliberal convivía con remanentes del desarrollismo que quería emular a Brasil, al liberalismo conservador y al corporativismo integrista. Esto se complicó al militarizarse la administración pública, porque se trasladaron los disensos internos a todas las áreas y niveles de la gestión: otra conclusión que los militares de 1976 extrajeron de los fracasos previos fue que no debía delegarse el gobierno a un jefe retirado, menos a políticos o técnicos civiles, sino que debían ejercerlo ellos a través de su cadena de mandos.

Lo cierto es que, salvo en el plan antisubversivo puesto en marcha antes del golpe con aval de Isabel, el programa de la dictadura que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y se inauguró el 24 de marzo de 1976, fue tan radical como confuso. Hecho que no se resolvió sino que se agravó con el tiempo. Las diferencias en este sentido con las dictaduras iniciadas en 1964 en Brasil y en 1973 en Chile saltan a la vista: en Argentina no hubo cohesión programática, disciplina ni liderazgo militar para procesar los desacuerdos. Para colmo, el consenso antisubversivo no fue asiento sino obstáculo para fortalecer la autoridad estatal: la imposición de la disciplina por el terror hizo caso omiso de las leyes, incluso de las represivas. Se concretaría en el secuestro, tortura y asesinato de más de 10 000 personas en los tres años siguientes, de acuerdo con el "informe final" presentado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. La mayor parte de los "desaparecidos" fueron dirigentes y miembros de las organizaciones revolucionarias, armadas y no armadas. La capacidad de resistencia de la guerrilla y de las bases combativas de los sindicatos se agotó rápidamente. Aquella buscó mantenerse activa mediante atentados cada vez más indiscriminados, a la espera de la anticipada nueva ola de movilización social, pero esta no llegó, y la renuencia a replegarse de los guerrilleros los dejó expuestos a los secuestros y siguió alimentando el clima de guerra que justificaba la represión. El "método" también había sido concebido para facilitar este objetivo. Al ocultar los cruentos crímenes que se cometían o atribuirlos a bandas fuera del control del gobierno, esperaba evitar críticas internacionales por la violación a los derechos humanos como las sufridas por Pinochet tras ejecutar abiertamente a cientos de "subversivos". Y, por lo mismo, alentaba la colaboración de la prensa, la dirigencia civil y demás actores locales.

Los militares argentinos, en verdad, no se tomaron en serio el interés de los países centrales por los derechos humanos en el Tercer Mundo. Primero, porque habían aprendido de instructores

de esos países las técnicas represivas. Segundo, porque lo consideraban "pruritos liberales" que tornaban débiles a esas "plutocracias" frente al enemigo, que se acallarían al probar la eficacia del método. No advertían que reflejaba un giro en el modo en que Estados Unidos, en particular durante la presidencia de James Carter, y las potencias occidentales en general encaraban su disputa con el bloque soviético tras los fracasos de Vietnam y Argelia. Las críticas externas, para colmo, generaron nuevas disidencias entre los mandos. Videla y su segundo en el ejército, Roberto Viola, buscaban obtener de Washington apoyo político y financiero para reinsertar el capitalismo argentino en los mercados mundiales y el país como potencia regional, por lo que se esmeraron en preservar la aparente moderación del plan represivo y realizar gestos humanitarios, como permitir la salida del país de los presos políticos o evitar ataques contra personas muy conocidas. Para Videla, el apoyo norteamericano era además esencial para neutralizar los planes que urdían Massera y algunos generales para reemplazarlo. Estos, por su parte, alimentaban los argumentos nacionalistas contra la "injerencia externa" y Massera llegó a hacer secuestrar a funcionarios de Videla o a personas prominentes cada vez que este viajaba al exterior, para debilitarlo.

En ocasiones, este enfrentamiento de las facciones permitió frenar iniciativas destructivas. Fue lo que sucedió con la disputa por el canal de Beagle, que hizo eclosión en diciembre de 1978: los generales y Massera lograron imponer el ataque a Chile, que ya estaba en marcha cuando Videla apeló a la presión estadounidense para reabrir las negociaciones con la mediación del papa. En otros casos el resultado fue el desgaste del régimen, como sucedió con la larga tratativa para aceptar una inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país, discusión que se prolongó desde 1977 hasta 1979.

Cuando se realizó esa visita y las denuncias contra la represión fueron documentadas, dándole respaldo internacional a las organizaciones de solidaridad que habían creado los familiares

de las víctimas, como las Madres de Plaza de Mayo, de todos modos el régimen pudo mostrar que contaba con consenso social y que la mayoría prefería dejar atrás la "guerra". La debilidad y la docilidad ante la dictadura de una sociedad hasta poco antes efervescente e ingobernable puede atribuirse al frenesí de violencia e inflación previo, que alentó una prolongada renuncia a juzgar lo que los militares consideraran necesario para "corregirla". También, al entusiasmo nacionalista creado por el Mundial de Fútbol de 1978 y al bienestar que generó la política del ministro José Martínez de Hoz, financiada con cuantiosos créditos externos y basada en un tipo de cambio subvaluado para frenar la inflación, que facilitó la adquisición de bienes importados. Esta política había apuntado a disciplinar a los sindicatos y terminar con las "costumbres populistas", pero también había contenido rasgos menos drásticos. Se liberaron los precios al tiempo que se congelaron los salarios (lo que significó una caída de 40% en su poder de compra), se redujeron las barreras comerciales que por décadas habían protegido a la industria y se aplicó un drástico recorte de gastos en educación, salud, previsión y asistencia social (en conjunto disminuyeron de 23% del PIB en 1974-1975 a 15% en 1976-1979). Todo facilitado por la masiva presencia del terror. Pero Martínez de Hoz no logró convencer a los militares de desmontar el modelo sindical, dado que algunos de ellos, en particular Massera y Viola, pensaban usarlo en su provecho en el futuro. Tampoco hubo privatizaciones ni reducción de la plantilla del Estado. Los gastos en obra pública y en armamento aumentaron por lo que el déficit público y el pleno empleo siguieron imperando. A consecuencia de todo ello, la política antiinflacionaria con ancla cambiaria fue cada vez más inconsistente: su efecto más notable fue el dólar barato y no el freno al alza de precios, mientras el déficit comercial y los compromisos financieros crecían exponencialmente.

Esta "plata dulce" concluyó cuando Estados Unidos elevó las tasas de interés, en 1979. Los capitales huyeron del país y los

bancos empezaron a cerrar sus puertas, sumándose a muchas industrias que no habían podido competir con la ola de importaciones. Algunos grandes grupos económicos, los que eran contratistas del Estado, tenían un componente financiero, producían bienes intermedios o alimentos para exportar, soportaron el vendaval, pero el resto se derrumbó. Mientras Videla terminaba su mandato y era sucedido por Viola, en marzo de 1981, según el mecanismo electoral creado por el régimen, la economía entró en bancarrota. El empleo en la industria cayó 36% entre 1979 y 1981 y su PIB 23%, mientras el PIB global lo hacía 12%. El PIB per cápita sería en 1982 un 15% menor que en 1975.

Viola intentó compensar la situación con sucesivas devaluaciones, que tuvieron por principal efecto acelerar la inflación y deteriorar aún más los ingresos y las cuentas públicas (porque además se practicó una masiva estatización de deudas empresariales). En este marco, el aperturismo del nuevo presidente no halló eco en los políticos y terminó por enemistarlo con los uniformados. Viendo que por primera vez en años los grupos de interés, incluidos los empresarios, protestaban, los políticos creyeron poder recuperar su prestigio social y su autonomía. Ello condujo, en julio de 1981, a que la UCR, el Partido Justicialista (PJ) y fuerzas menores formaran la Multipartidaria y reclamaran un cronograma electoral. Pero en vez de ceder, en diciembre los comandantes reemplazaron a Viola por Leopoldo Galtieri, jefe del ejército y representante del sector duro, quien asumió la presidencia prometiendo que el régimen retomaría su ímpetu y sus proyectos iniciales.

Mientras tanto, la crisis desatada descomponía un mundo económico y social que había perdurado durante tres décadas de conflictos. Más que un nuevo orden la dictadura gestaba una versión más aguda y excluyente de la crónica inestabilidad argentina. Martínez de Hoz no había logrado entregarles a sus mandantes el capitalismo estable, abierto y competitivo que prometiera. Les brindó en cambio uno más integrado a los circuitos financie-

ros externos y concentrados en grandes actores, pero también afectado por una muy alta inflación, con muchos sectores quebrados, igual que el Estado, que no podría sostener el gasto de sus empresas, sus fuerzas armadas, ni siquiera pagar los sueldos de sus empleados, obligado a cubrir los intereses de una deuda externa cada vez mayor, con más altos intereses y más concentrada en sus manos. Un sistema económico hasta entonces organizado en torno a sus actores más modernos y dinámicos se estaba convirtiendo en una economía dual, bastante parecida a las más atrasadas de la región. Por un lado, se consolidó un sector de grandes empresas nacionales o multinacionales, integradas a la economía mundial, que podían tolerar salarios relativamente altos y tenían un amplio menú de recursos de extorsión para imponer sus preferencias al Estado (cambiar su cartera de inversiones; disparar un alza del valor del dólar, suspender o despedir empleados y generar conflictos sociales; demorar el pago de impuestos y desfinanciar al fisco, y sobre todo fugar capitales). Por otro lado, había un espacio económico de unidades chicas, atrasadas y en gran medida informales, que pagaban salarios muy inferiores, no ofrecían estabilidad ni otros derechos laborales y producían para un mercado empobrecido que no interesaba al gran capital. Este sector informal dio lugar a un mundo de pobreza distinto al que habían conocido los sectores populares desde los años cuarenta. Y en este marco, el empleo público, en provincias, municipios o empresas, se volvió para la mayoría la única fuente de trabajo estable: su crecimiento actuaría como un colchón de los déficits laborales, y desequilibró aún más las cuentas públicas.

Así, la participación de los salarios en el PIB cayó de 45% en 1974 a 34% en 1983, la pobreza llegó ese año a 26% y los asentamientos urbanos precarios dejaron de ser lugar de tránsito para convertirse en sitios de residencia permanente. En medio de esta debacle social, los reclamos por los detenidos-desaparecidos se volvieron frecuentes, aunque no masivos. También los sindicalistas se movilizaron detrás de un líder en ascenso, Saúl

Ubaldini, para reclamar "paz, pan y trabajo", aunque se cuidaron de no politizar sus reclamos.

Nada de esto amenazaba la estabilidad del régimen. Pero Galtieri estimó que si no encontraba un modo de escapar de la encerrona, se vería forzado tarde o temprano a ceder frente a los civiles. Así que optó por una medida desesperada, que podría permitirle "recuperar el ímpetu refundacional". El nuevo presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, había recibido con los brazos abiertos su designación, y él creyó que se disiparían los recelos que había habido con Carter y que tendría las espaldas cubiertas para lanzar un plan que le permitiría reconquistar el alma de la sociedad: la recuperación de las islas Malvinas.

El operativo empezó el 2 de abril de 1982, poco antes de lo previsto debido a una marcha encabezada por Ubaldini que fue duramente reprimida. En principio pareció un éxito rotundo: la ocupación de las islas fue rápida e incruenta, y el apoyo de la sociedad y la dirigencia civil fue tan amplio que Galtieri pudo asomarse al balcón de la Casa Rosada ante una Plaza de Mayo colmada. Pero el escenario externo y la actitud británica acabaron con la fiesta. El Consejo de Seguridad de la ONU emitió una resolución ordenando a Argentina retirarse, votada incluso por países favorables a la descolonización. Así que Gran Bretaña tomó una decisión que la Junta había estimado muy improbable: lanzó una costosa operación militar para recuperar las islas por la fuerza. Galtieri sostenía que el entusiasmo del pueblo era tal que no podía ceder en nada. Así que rechazó una propuesta de Reagan de establecer una administración compartida. En esa fatal decisión pesó la expectativa de que las fuerzas británicas se detendrían. Lo que no sucedió. El 14 de junio, tras duros combates en los que murieron 650 argentinos y 300 británicos, los ocupantes se rindieron. Horas después los generales obligaron a Galtieri a renunciar y lo reemplazaron por su par retirado Reynaldo Bignone, quien anunció el inicio de la transición a la democracia.

Malvinas pulverizó el poder militar. El ejército había concebido el régimen nacido del golpe de 1976 como broche de oro del papel que venía cumpliendo desde 1930 y ocasión para refundar un orden que lo confirmaría como guardián del bien común. Pero dejaba el gobierno en condiciones aún peores a las de 1973. No pudo más que permitir que los partidos se reorganizaran, lo que hicieron con frutos dispares. El peronismo debió lidiar con la ausencia de su líder y fuertes disensos internos. Gracias a que el general Bignone les devolvió sus organizaciones y "obras sociales", los gremialistas prevalecieron e impusieron el grueso de los candidatos, no sin generar duros conflictos; el peor, el que enfrentó al sector moderado que lideraba Antonio Cafiero con el ala derecha y terminó en la marginación de aquel en medio de un escándalo de fraude y ataques gangsteriles. Eso, más la designación del ya desprestigiado Lúder como candidato presidencial, afectó sus oportunidades electorales. La UCR en cambio vivió una profunda renovación, gracias tanto al esfuerzo de Balbín por mantenerla activa y unida durante la dictadura, como a su muerte en 1981, que facilitó el surgimiento de un nuevo líder, Raúl Alfonsín.

Alfonsín había denunciado las violaciones a los derechos humanos y se había opuesto a la invasión de Malvinas. Así que su candidatura fue ideal para prometer una vuelta de página en la historia y "terminar con la decadencia", en una versión opuesta pero que a la vez repetía el sueño de los militares de 1976. Ello permitiría a la UCR derrotar por primera vez al peronismo, en octubre de 1983, con 52% de los votos. Pero también la cargó de expectativas excesivas: su promesa de que con la sola instauración de la democracia se recuperaría la igualdad social perdida pronto revelaría ser una quimera. Si la historia previa había sido escenario de la difícil convivencia entre el igualitarismo, la movilización y regímenes políticos azotados por la ilegitimidad, la que desde

entonces se empezó a tejer invirtió los términos y obligó a una democracia débil, aunque tendencialmente estable, a lidiar con la exclusión social. Lo que se complicaría porque, de momento, la gravedad de esos problemas era difícil de percibir y la adhesión a la democracia nacía en gran medida de esa ignorancia.

Alfonsín se planteó tres prioridades: juzgar el terrorismo de Estado, democratizar las instituciones, en particular las sindicales, y reactivar la economía para recuperar empleos y salarios. En donde más pudo avanzar fue en lo primero, aunque también allí el excesivo optimismo causó problemas. El presidente ordenó el juicio a los principales responsables de la represión ilegal y a las cúpulas guerrilleras, con la idea de que ambas violencias eran equiparables y por tanto había que equilibrar los castigos entre "los dos responsables de la violencia", al mismo tiempo que se exculpaba a aquellos militares que habían "obedecido órdenes". Esperaba atender la demanda de justicia de los familiares de las víctimas, así como la expectativa más difusa de sectores sociales que demandaban castigo de los responsables y, de paso, lograr la subordinación de los oficiales en actividad, que en su mayoría serían eximidos de culpa. El juicio a las juntas militares, que concluiría con duras condenas en diciembre de 1985, fue concebido como conclusión de esa política. Se abrieron procesos contra un número mucho mayor de militares, algo a lo que Alfonsín se amoldó en un principio, pensando que podría sacar provecho y que los militares no podrían frenarlo, ya que intentarlo violaría la división de poderes, esencial para la democratización. Para peor, les fue quitando mientras tanto a los uniformados buena parte de su presupuesto, así como sus "hipótesis de conflicto" mediante la integración económica con Brasil en el Mercosur (mercado común regional que entraría en vigencia años después), a lo que se sumó la solución del conflicto por el canal del Beagle con Chile.

En los asuntos económicos y sindicales los obstáculos tardaron menos en revelarse, dejando ver que el "orden corporativo",

que Alfonsín creía tener el mandato de liquidar, estaba más vivo de lo que la elección le hiciera creer. Y a la vez, que sus desequilibrios inherentes, en particular la inflación, no solo persistían sino que se agravaban. En el campo sindical se reveló también lo problemático de la posición del presidente ante el peronismo. Él asumió que, dado que el PJ estaba dividido y deslegitimado, había llegado la hora de democratizar el modelo sindical. Pero la ley que concibió con ese fin, similar a la de Illia, fue rechazada en el Senado, donde los peronistas contaban con la primera minoría y se unieron en su contra. Tras ello la CGT y Ubaldini se volvieron el eje de la oposición e iniciaron una larga serie de huelgas exigiendo una inmediata reactivación económica.

Aunque el gobierno había intentado alentar el consumo y la actividad industrial, para mediados de 1984 fue ya evidente que lo que conseguía era solo más inflación, debido a la falta de inversiones y el fuerte déficit público. A mediados de 1985 debió lanzar un plan de ajuste antiinflacionario, el Austral, que contó con el respaldo de Estados Unidos (lo que permitió tener acceso a créditos para reforzar las reservas y cubrir retrasos de la deuda). Por unos meses la situación mejoró, gracias a lo cual la UCR volvió a vencer en las elecciones legislativas de fines de 1985. Pero no aumentaron lo suficiente las inversiones ni las exportaciones: la provisión de divisas siguió dependiendo de un sector agrícola que enfrentó inundaciones, sequías y bajos precios internacionales. El déficit público volvió a subir y las empresas estatales, su principal origen, prestaban servicios cada vez peores. La inflación mensual, que había rondado 30% hasta el inicio del Austral y cayera a 2% en su mejor momento, volvió a estar en torno a 20% en 1987. Las tasas internacionales seguían por encima de 10%, así que pronto el país recayó en incumplimientos de la deuda.

A las huelgas con que insistía la CGT se sumó por entonces una amenaza mayor: un sector rebelde del ejército, los "carapintadas". Lo integraban oficiales jóvenes opuestos tanto a sus man-

dos como a la política de juicios de Alfonsín, quien prometiera exculpar a los subalternos pero no tenía apuro en hacerlo, dado que los juicios era una de las pocas cartas que le quedaban en la competencia electoral: la ley que impulsó a fines de 1986 para ponerles un límite (el "Punto Final") incrementó en vez de disminuir el número de oficiales activos procesados; prometió otra, pero sin dar precisiones, así que estalló la rebelión. El 14 de abril de 1987 cientos de oficiales tomaron unidades de la base militar de Campo de Mayo, cerca de Buenos Aires. La sociedad se movilizó contra el motín y miles de manifestantes rodearon los cuarteles, pero Alfonsín prefirió buscar una rendición pacificadora y no correr el riesgo de choques armados. Creyó que ahora sí podría imponer su vía intermedia, acotando los juicios a cambio de la obediencia castrense. Sin embargo, aunque hizo aprobar la Ley de Obediencia Debida, que exculpó a todos, salvo a los jefes más encumbrados, los motines siguieron: se produciría otro a fin de año y uno más a fines de 1988. Con todo ello pareció que la solución no dejó conforme a nadie ni a quienes exigían profundizar la búsqueda de justicia, ni a los que deseaban ante todo el orden y achacaban su falta a los juicios realizados o aún en curso.

En este marco se llegó a septiembre de 1987 y se eligieron gobernadores y diputados. Para los cada vez más numerosos votantes empobrecidos no era tan convincente ya que el peronismo, aunque fuera un resabio del pasado violento y autoritario, como decía el presidente; aparecía más y más como el recuerdo de una época en la que habían vivido mejor y el camino para volver a ella. Los peronistas además habían logrado en el ínterin la renovación frustrada en 1983, encabezados por Cafiero y Carlos Menem, gobernador de La Rioja. Sumando al voto popular el de sectores medios decepcionados de Alfonsín, se quedaron con casi todas sus gobernaciones y con la mayoría de diputados. Esto daría lugar a un hecho único en el periodo: el intento de los dos grandes partidos por acordar reformas en el

Parlamento y evitar que la competencia alimentara la inestabilidad. Pero cuando Cafiero, elegido gobernador bonaerense, impulsó el acuerdo, Menem lo acusó de traicionar al peronismo y con ello, más su carisma, logró derrotarlo en la elección interna del PJ de 1988.

Alfonsín todavía haría un último intento para frenar la inflación, pero con reservas limitadas, un candidato opositor que prometía aumentos salariales y una generosa moratoria impositiva, más nuevas rebeliones militares, que alentaron incluso a un grupo remanente del ERP a lanzar un delirante ataque guerrillero contra un cuartel militar, se configuró un escenario de completo descontrol. La hiperinflación, que por poco se evitara en 1976 y de nuevo en 1985, estalló en 1989 sin freno a la vista.

La caída de los salarios, en particular en el Estado, fue abrupta. Pero aunque los empleados públicos se consideraron por ello víctimas de la crisis, cada vez más sectores los ubicaron en el tope de la lista de sus causantes. La opinión antiestatista se masificó, sobre todo en las clases medias y altas resentidas con los deteriorados servicios de transporte, telefonía, educación y salud. Solo las elecciones del 14 de mayo de 1989 impidieron que las cosas siguieran empeorando: en ellas Menem resultó elegido por 47%. Alfonsín intentó un acuerdo de transición para detener la hiperinflación, pero no logró convencer a los peronistas, así que cuando estallaron saqueos en varias ciudades renunció a la presidencia. Cumplió el sueño de que un gobierno elegido le entregara el poder a otro, lo que no sucedía desde 1928, y entre distintos partidos desde 1916. Pero lo logró en condiciones que impedían cualquier festejo.

La situación que Menem heredó era dramática, pero también contenía una oportunidad, pues el caos económico destrabó los vetos y bloqueos que grupos de interés y el propio peronismo venían ejerciendo contra reformas del Estado y las reglas económicas. Los sucesivos picos hiperinflacionarios (los precios subieron 3080% en 1989 y 2314% en 1990) lanzaron a la so-

ciedad en brazos de un gobierno que tuvo una inédita carta blanca para vender empresas, eliminar regulaciones, barreras comerciales, limitar derechos laborales, etc. Estas políticas fueron legitimadas además por el escenario internacional: la crisis del bloque soviético permitía augurar un triunfo universal del capitalismo, y el neoliberalismo contaba a su favor ahora con los ejemplos de Chile y el sudeste asiático. La drástica reducción de las tasas de interés también alentaba a creer que se accedería fácilmente a créditos e inversiones una vez aplicado el Consenso de Washington. Mientras tanto, con la hiperinflación los cambios sociales disparados por el derrumbe de 1981 terminaron de cuajar, desbordando las frágiles barreras que la democracia tratara de oponerles. La pobreza, que había retrocedido a 16% en 1986, llegaría a 47% en octubre de 1989, antes de que se estabilizara un nuevo orden, marcado por desigualdades ya "dadas", aunque capaz al menos de contener el terror económico.

Uno de los problemas más urgentes a resolver era la deuda pública, que representaba 70% de un PIB que en la última década había caído a 2% anual. Sin contabilizar lo que se le debía a millones de jubilados, a contratistas y proveedores, etc. Para encararlo Menem buscó aliarse con los grandes empresarios, en la convicción de que solo si ellos repatriaban sus capitales y aumentaban las inversiones el país volvería a crecer y el Estado podría salir de la bancarrota. El otorgamiento a esos grupos de un poder descollante en la nueva coalición de gobierno fue acompañado por una resignificación de la historia del peronismo: Menem reinterpretó los motivos del golpe de 1955 y los conflictos posteriores, asignando la responsabilidad a los peronistas que no entendieron el esfuerzo de Perón por atraer capitales y reconciliarse con los empresarios, y durante la proscripción contribuyeron a hacer ingobernable el país. Muchos gobernadores y sindicalistas peronistas se resistieron a abrazar esta idea, aunque se amoldarían a ella mientras sirviera para proveerles los recursos que necesitaban para reproducir su poder. Con lo cual el peronismo,

aun más flexible de lo que siempre había sido, volvió a ser un dócil partido de gobierno como en tiempos del general. Ello permitió aplicar las reformas con poca coerción: a diferencia del Chile de Augusto Pinochet, incluso del Perú de Alberto Fujimori, en Argentina ellas tendrían tantos rasgos impuestos como consensuados y negociados.

Igualmente, la hiperinflación regresó a principios y una vez más a fines de 1990. En ambos casos Menem aceleró su plan de privatizaciones, que llegaría así a ser único en el mundo tanto en velocidad como en extensión. Pudo hacerlo porque, pese a todo, conservó el apoyo del grueso del PJ: firmó acuerdos fiscales con sus gobernadores, sus legisladores aprobaron las leyes que les propuso y mantuvo bajo control las protestas gremiales. Otro tanto hizo con las militares, con la represión de los carapintadas y un indulto general a los condenados y los todavía encausados por crímenes de la dictadura.

La inflación sería controlada apenas a mediados de 1991, gracias a la "Convertibilidad" diseñada por el ministro de Economía Domingo Cavallo. Ella consistía en una caja de conversión que, partiendo de la dolarización reinante, apuntaba a restablecer la confianza en el peso renunciando a devaluarlo en el futuro. El instrumento fue problemático desde el principio porque la promesa sería creíble si no tenía plazos de vencimiento, pero solo alcanzaría el éxito cuando se pudiera romper sin generar desconfianza en la moneda, ni inflación. Para salvar esa tensión haría falta construir mientras tanto instituciones monetarias, fiscales y financieras que aseguraran el equilibrio en las cuentas, la capacidad de pago de la deuda y la competitividad de los mercados. Y de ello se haría bastante poco pues la Convertibilidad volvió esos cambios más difíciles y en apariencia innecesarios.

Y es que su lanzamiento resultó un éxito incuestionable: la inflación desde fines de 1991 estaría debajo de 1%, la más baja desde 1973, sin necesidad de congelamientos ni controles. Al reducirse la inflación y las tasas de interés, se reactivó el consu-

mo y con él la industria. Los exportadores se vieron perjudicados por el retraso cambiario, pero se los compensó eliminando impuestos y los precios externos siguieron garantizando esta vez cierta rentabilidad. Poco después Argentina lograría un acuerdo a 30 años por la deuda, con quitas de 35% y tasas de entre 4 y 6%, con lo que el acceso a nuevos créditos se facilitó. Las cuentas se ordenaron: 1992 sería el primer año con superávit fiscal en décadas y el primero en medio siglo en que se aprobó a tiempo el presupuesto.

El PIB creció cerca de 9% en 1991 y 1992 y 6% en 1993. La inversión pasó de 14% en 1990 a 23% en 1994. El desempleo primero bajó y luego subió (a 10% en mayo de 1993), pero eso fue de momento compensado por la caída de la pobreza, que volvió a rondar 16% en mayo de 1994. Todo ello le permitió al presidente afirmar que se abría un futuro de progreso, que beneficiaría incluso a los inicialmente perjudicados por los cambios, pues conseguirían mejores empleos de los que habían tenido en el Estado. En este clima la oposición tuvo dificultades para plantear una crítica global, más allá de objeciones por corrupción y abuso de poder. Es comprensible además que cada vez más gremios colaboraran con el gobierno a cambio de compensaciones, actitud que este no defraudó: elevó los subsidios para los cesantes y los planes de propiedad participada que asignaban acciones en las empresas privatizadas a los sindicatos. Mientras no se afectara el modelo sindical los gremialistas se inclinarían por amoldarse al nuevo orden. Con lo que siguió creciendo la distancia entre dos mercados de trabajo: uno regulado y rígido que aseguraba la continuidad del poder gremial, otro informal y flexible.

Aunque también había problemas: para 1993 la sobrevaluación del peso se calculaba en 46%. Las exportaciones, que habían crecido mucho entre 1987 y 1990, cayeron en picada. La deuda volvía a crecer, pese a la entrega de empresas a cambio de bonos, y el país quedaba expuesto a cualquier cambio de humor

de los mercados mundiales. La masiva entrada de capitales especulativos, de todos modos, disipó por de pronto esos temores.

Las elecciones de 1991 y 1993 ratificaron el apoyo social al plan: el gobierno se impuso, y los disidentes peronistas obtuvieron muy pocos votos, mientras que la UCR apenas retuvo un módico segundo puesto. El PJ se alineó entonces detrás de la reforma constitucional, con la que Menem buscó habilitar su reelección. Alfonsín y la UCR primero se opusieron, pero ante la posibilidad de que Menem la consiguiera sin ceder nada a cambio se avinieron a firmar el Pacto de Olivos por el que se aceptó una reelección consecutiva, a la vez que se acotaba el poder presidencial con un jefe de Gabinete, un Consejo de la Magistratura para controlar la elección de jueces y límites a los decretos. El Pacto dio paso a la elección de una convención constituyente en abril de 1994, donde se vio el costo que los radicales pagarían por ceder: al renunciar a una oposición dura en el terreno institucional, en el que la opinión pública tenía mucho que reprochar al gobierno, endurecieron sus críticas a la economía, con poco eco en los votantes; así que muchos de ellos migraron hacia el Frente Grande (FG), formado por el disidente peronista Carlos Álvarez y grupos de centroizquierda, que hicieron lo opuesto, dejaron de criticar las reformas de mercado para poner énfasis en los déficits institucionales y la corrupción.

La nueva Constitución fue jurada por todos los partidos, a diferencia de lo sucedido en 1949 y en 1957. En ese sentido la reforma reforzó la legitimidad de las reglas del juego. Aunque también es cierto que ellas se habían alterado para satisfacer intereses del gobierno de turno. Además, muchos de los avances en los mecanismos de control tardarían en funcionar o lo harían muy parcialmente.

Para lograr su reelección, Menem todavía debió lidiar con una sucesión de malas noticias. Al alza de la desocupación (llegaría a 18% en 1995) y del déficit comercial se sumó en julio de 1994 una poderosa bomba que destruyó la mutual judía (AMIA)

causando 80 muertes. Los escándalos de corrupción se multiplicaron. La información sobre el tráfico ilegal de armas, más las confesiones de algunos ex militares sobre los "vuelos de la muerte" y otros crímenes de la dictadura debilitaron "la política de reconciliación" y olvido. La paradoja fue que otra mala noticia lo favorecería: la crisis que estalló en México en diciembre de 1994 hizo temer una repercusión en Argentina y puso de nuevo al tope de las preocupaciones por la estabilidad. Fue así que en los comicios de 1995 la UCR quedó relegada a un lejano tercer puesto detrás del Frente País Solidario (Frepaso), convergencia del FG y otras fuerzas) y Menem fue reelegido con 49% de los votos.

Tras ello prometió consolidar el "modelo". Pero mientras eso significaba para los sectores neoliberales demoler lo que aún quedaba del antiguo orden (el poder sindical, los aparatos públicos provinciales, etc.) y dificultaba equilibrar las cuentas públicas, para los dirigentes y votantes tradicionales del peronismo implicaba lo contrario, recuperar las banderas sociales y combatir la desocupación.

La crisis del "efecto tequila" fue aguda pero breve. La fuga de capitales se revirtió, aunque al precio de tasas de interés muy altas, que dificultarían a las empresas el acceso al crédito, el cual además, fue absorbido casi en su totalidad por el sector público, necesitado de fondos para sostener el nivel de gasto, pese a que seguía liquidando empresas. Para peor, el equipo económico debió sacrificar lo que quedaba de su aspiración inicial de restablecer la confianza en el peso: permitió que hubiera cuentas corrientes y reservas bancarias en dólares. Ante cada señal de desconfianza, las autoridades dejaban ver que preferían dolarizar del todo a devaluar. Así, el círculo vicioso que encadenaba deuda y dolarización convertía el cambio fijo en una carga cada vez más pesada. Y a medida que más contratos, créditos y depósitos se establecían en dólares, más costosa se volvía una salida.

Mientras tanto, la disminución de la pobreza lograda hasta 1994 se revirtió, la protesta social se consolidó y extendió, y ya

no pudo ser descalificada como expresión de intereses particulares reñidos con el bien común y el progreso, ni contenida con pagos por cesantías y empleo provincial. La protesta la impulsó la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), ligada al Frepaso, que reunió a gremios estatales alejados de la CGT y organizaciones de desocupados que se multiplicaban en todo el país. Luego se les sumó el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), integrado por gremios que respaldaban la candidatura de Eduardo Duhalde, gobernador peronista de Buenos Aires, cada vez más enfrentado al menemismo. El cambio de humor social se debió también a la creciente insatisfacción por los resultados de las privatizaciones: la mejora en los servicios había sido importante en los primeros años en telefonía, electricidad, etc, pero no fue ni generalizada ni sostenida. Esto no afectó, empero, a la Convertibilidad: mientras el descontento con las políticas de gobierno crecía, también aumentaba la creencia de que eran independientes del tipo de cambio fijo. La competencia electoral contribuyó a ello: para duhaldistas y frepasistas presentarse como garantes sustitutos del dólar fijo aparecía como la vía más fácil de ganar apoyos.

Como la popularidad presidencial se derrumbó apenas pasada la elección, las disidencias en el gobierno aumentaron: Duhalde apostó a representar a los peronistas decepcionados; mientras que se alinearon detrás de Cavallo quienes querían completar lo que Menem había empezado. Para no quedar acorralado entre ellos, el presidente dio pasos que complicarían aún más la economía: aumentó las transferencias de recursos fiscales a los gobernadores y retrocedió en reformas laborales y gremiales para disuadir a quienes el gobernador Duhalde buscaba atraer hacia su candidatura presidencial; por otro lado reemplazó a Cavallo, y en la gestión de la política económica apostó a que el mercado hiciera el ajuste de precios necesario para recuperar competitividad. Además, Menem intentó obtener un fallo de la mayoría de la Corte Suprema para que lo autorizara a una nueva reelección.

Pero las cosas no se acomodaron a sus planes. Cavallo creó su propio partido, restándole apoyos empresarios y de clase media. El Frepaso tomó nuevo ímpetu y su líder, Carlos Álvarez, convenció a la UCR de formar la "Alianza", coalición que se impondría en las legislativas de 1997, interrumpiendo 10 años de victorias del PJ. Así se hizo posible la alternancia en el poder. El logro aliancista tuvo sin embargo sus complicaciones: se basó más que nada en la creencia de que con menos corrupción la Convertibilidad podría funcionar mejor, y que el peronismo después de Menem se volvería un conservadurismo cada vez más minoritario, en una reedición de la fe antes abrazada por Alfonsín y, antes que él, por Frondizi.

La estrategia económica eludió hacer frente a los serios desequilibrios. En 1997 volvieron los déficits comercial y fiscal. Las altas tasas de interés internacionales implicaron mayores servicios de la deuda y más retraso cambiario. Se les sumó la caída en los precios de las exportaciones para reducir la disponibilidad de divisas. El frente empresarial entró en crisis: los industriales exigieron un plan de ayuda similar al recibido por el sistema financiero durante el efecto tequila, y algunos, una devaluación. Duhalde, buscando atraerlos, proclamó que "el modelo estaba agotado". Pero viendo la desconfianza que con ello despertó en el resto del empresariado y la opinión pública aclaró enseguida que su consigna era "Convertibilidad o muerte". Así, el año 1999 iniciaría con una caída de 20% en las exportaciones. La deuda total sumaba ya 150 000 millones de dólares cuando se desató la recesión: durante 1999 el PIB caería 3% y se fugarían 15 000 millones de dólares.

Tras el triunfo de sus candidatos, el radical Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez, en las presidenciales de ese año, la Alianza intentó aumentar los ingresos para reducir el déficit y llevar tranquilidad a los mercados. Pero como las provincias peronistas obligaron al gobierno a renegociar sus deudas y elevar las transferencias, el desequilibrio continuó. De la Rúa probó entonces

reducir gastos con un recorte de salarios y jubilaciones. Las protestas se multiplicaron. Un ánimo revisionista ganó terreno incluso en votantes de la Alianza, que ahora reclamaban volver al antiguo orden, a la distancia visto como "no tan malo". Inversamente, en los sectores medios y altos partidarios del mercado creció el apoyo a la dolarización y el ajuste, para terminar de ordenar el gasto público y discilpinar a los sindicatos. Lo que unía esos dos mundos era la adhesión a la Convertibilidad, que también creció con la crisis: de 55% de apoyo en 1999 pasaría a 85% en abril de 2000. Así que mientras el gobierno pudiera presentar sus medidas como necesarias para sostener el cambio fijo, podría legitimarlas y sobrellevar las protestas.

La economía no repuntaba, pero fue la política la que terminó de complicar las cosas. De la Rúa buscaba la cooperación de los gobernadores y senadores peronistas para lidiar con la crisis. Tras la derrota de 1999 estos se dividieron en facciones aún más enfrentadas entre sí (a duhaldistas y menemistas se agregaron la "liga federal", que reunía a gobernadores de provincias periféricas, y varios grupos menores que respondían a otros jefes territoriales o sindicales). Así que conseguir el apoyo de unas contra las otras no era imposible. El vicepresidente Álvarez buscaba, en cambio, aprovechar el momento para arrebatarle la mayoría al PJ en las provincias y el Senado. El choque entre ambas posturas se produjo a raíz de un escándalo por "mordidas" pagadas para hacer aprobar una nueva ley de flexibilización laboral. Álvarez reclamó suspender la actividad del Senado y adelantar las elecciones previstas por la reforma de 1994 para renovar toda la cámara por voto directo. Pero el presidente desestimó las denuncias e hizo cambios en el gabinete que marginaban a Álvarez. En respuesta, este renunció a su cargo.

La popularidad del presidente se derrumbó, así quedó a merced de quienes pudieran sostenerlo: en el Congreso ese rol lo asumiría el peronismo del interior, aunque solo en lo que sirviera para concretar el ajuste en todo el país y no obligara a

sus distritos a compartir el esfuerzo. La diputación frepasista se disgregó y la radical ya no ocultaba su desconfianza hacia el presidente. Alfonsín, todavía jefe de la UCR, comenzó a buscar un entendimiento con Duhalde, que encabezaba la porción más numerosa de legisladores del PJ. En marzo de 2001 De la Rúa, para escapar de la presión que ambos empezaron a hacer para que devaluara, le devolvería la cartera económica a Cavallo.

Este ensayaría todo lo imaginable para hallar una salida: primero dio alicientes impositivos a las inversiones, el empleo y las exportaciones. Cuando el agujero fiscal creció, la fuga de capitales se aceleró y las tasas siguieron subiendo, probó renegociar la deuda para postergar lo más posible los pagos de intereses y de capital (que se acumularon entre 2001 y 2003); pero si bien logró algo de esto fue a un costo muy alto. Los acreedores y organismos internacionales le exigieron que contuviera el déficit, cosa que intentaría con la "ley de déficit cero": votada en julio por el PJ permitió nuevos recortes de sueldos y el pago en bonos de deuda y contratos. La economía ingresó en su tercer año de recesión, la desocupación llegaría en octubre a un nuevo récord de 19% y la pobreza a 35%. Que el gobierno siguiera adelante con sus políticas se explica en gran medida por la lógica de la Convertibilidad: a medida que se debilitaban los recursos del gobierno, los efectos negativos de devaluar la moneda crecían geométricamente. Antes del fin, Cavallo todavía intentaría una nueva renegociación de la deuda. Pero, tras los atentados terroristas en Nueva York de septiembre de 2001 ya no encontraría eco en Estados Unidos, y luego de los comicios legislativos de octubre en que el PJ reconquistó la mayoría en Diputados y se extendió el "voto bronca", ya no podría estirar las cosas. La incógnita ya no era si habría o no crisis política, sino en manos de quién estallaría. Cuando a comienzos de diciembre, para frenar la fuga de capitales, se dispuso un "corralito" que limitaba el retiro de dinero de los bancos, el clima de rebeldía propagado en los sectores populares ganó a las clases medias y a fracciones

empresariales. Volvió a haber saqueos de comercios, tolerados o fomentados por sectores del peronismo. "Piqueteros" (plantones) de desocupados y ahorristas "caceroleros" confluyeron en una movilización espontánea en la Plaza de Mayo, que el gobierno reprimió causando unos 15 muertos (otros tantos se contaron a raíz de los saqueos). El 20 de diciembre de 2001, mientras continuaban las manifestaciones, De la Rúa presentó su renuncia al Congreso.

El fenomenal desbarajuste con que se cerró el ciclo de la Convertibilidad —un Congreso dividido por las luchas internas entre peronistas nombraría cuatro presidentes sucesivos en las semanas siguientes— hizo pensar que esta vez la crisis económica y social sería más profunda y prolongada que en 1981 y 1989. El desánimo que ganó a la sociedad se expresó en el nuevo auge de la emigración y en la consigna del momento: "que se vayan todos", que coreaban las multitudes. En ese clima no se advirtió que muchas de las dificultades sufridas en los años anteriores se originaban en factores externos: la fortaleza del dólar, las altas tasas de interés y los bajos precios internacionales de los alimentos. Y que, justo cuando la economía argentina se precipitaba al abismo, esas tendencias se revertían, permitiendo al país no solo salir de la crisis más rápido de lo previsto, sino por primera vez en casi un siglo crecer de forma sostenida y acelerada. Los precios de los alimentos desde 2002 sobrepasaron sus mejores marcas desde la segunda posguerra. Las tasas de interés bajaron hasta niveles desconocidos desde hacía décadas. Y el gobierno norteamericano promovió un nuevo enfoque para resolver las crisis de deuda con quitas que castigaran a los especuladores. Para que el país sacara provecho de ello varios factores internos madurados en los años previos hicieron su aporte. Las exportaciones se expandieron gracias a las inversiones en alimentos, autos, minerales y combustibles, y a acuerdos comerciales como el Mercosur. También contribuyó el hecho de que el Estado ya no administraba las empresas de servicios: eso le permitió con-

gelar sus tarifas al mismo tiempo que devaluaba la moneda para que el ajuste de precios devolviera rentabilidad a la industria, sin que ello afectara las cuentas públicas, lo que fue, además, muy útil para controlar la inflación. Pero el factor que más ayudó en ese sentido no cabía festejarlo: la inédita masa de desocupados desalentó a los gremios de presionar por salarios, en mayor medida que durante la hiperinflación o el efecto tequila. De allí que el ajuste que siguió al colapso fuera de una dimensión mucho mayor a los intentados para evitarlo, y sin embargo recibiera menos críticas. En los primeros seis meses de 2002 las jubilaciones y los salarios públicos perdieron 40% de su poder de compra de 2001, en tanto los sueldos privados caían 20%. La pobreza saltó a más de 50% y siguió allí por al menos dos años. La tolerancia social a semejante ajuste se debió también a factores políticos: como en 1989, la renuncia del presidente radical permitió endilgarle los costos de la crisis y de las soluciones que sus sucesores se veían "obligados" a aplicar.

Eduardo Duhalde, designado presidente provisional por la mayoría de los legisladores peronistas, radicales y del Frepaso, fue quien logró controlar la situación. Amplió el "corralito" y convirtió a pesos los créditos y depósitos en dólares, con grandes costos para los ahorradores y el fisco, que debió compensar a los bancos para salvar lo que quedaba del sistema financiero. El dólar tras trepar 200% se detuvo y la inflación, disparada en los primeros meses de 2002, a mitad de año se movió en torno a 1% mensual. La actividad económica, que había caído más de 10%, repuntó y las protestas de piqueteros y caceroleros tendieron a moderarse. Ello permitió un acuerdo con los gobernadores, que aceptaron cambios importantes en la distribución de recursos entre nación y provincias: aquella no compartiría con estas las retenciones a las exportaciones que la devaluación permitió reinstaurar y los pisos mínimos de transferencias no se actualizarían pese a la inflación. De este modo, con las jubilaciones y los salarios públicos todavía congelados, el Tesoro empezó a absorber la

masa de bonos emitidos durante lo peor de la crisis y recuperó el superávit fiscal, que se mantendría en los años siguientes, a diferencia de lo sucedido tras 1992. Así, por primera vez desde antes de la crisis de 1930, el dólar cotizaría tan alto como industriales y exportadores podían desear, sin provocar presiones salariales que desequilibraran las cuentas públicas o los precios internos.

El gobierno de Duhalde significó una solución institucional, basada en el acuerdo entre los principales partidos del Parlamento, a una inédita crisis política, social y económica. Su éxito mostró la solidez alcanzada por la democracia argentina, pese a todas las carencias que arrastraba desde 1983, y a las que desde antes la política argentina venía padeciendo en términos de falta de mecanismos de cooperación, inestabilidad de las coaliciones de gobierno y las reglas del juego. El periodo inaugurado con el colapso de la Convertibilidad fue, al mismo tiempo, el de mayor profundidad de la exclusión social y la inestabilidad económica que se venían viviendo al menos desde los años setenta: nunca antes la democracia y la desigualdad convivieron en forma tan manifiesta y extrema como entonces. En lo que siguió, sin embargo, gracias a una tan rápida como inesperada recuperación del crecimiento, esa desigualdad iría moderándose. Aunque aún habría que ver si ello implicaría un cambio sostenible en el largo plazo y una plena consolidación democrática o, por el contrario, justificaría un regreso a formas de concentración y abuso de poder propias de la más antigua tradición populista, aquella que desde 1983 se venía intentando superar.

CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN EL CICLO KIRCHNERISTA

Pese a la estabilización económica, el poder político seguía siendo muy frágil. Esto quedó en evidencia cuando murieron dos manifestantes a manos de la policía, en junio de 2002, y Duhalde se vio obligado a adelantar las elecciones para abril de

2003. A ellas se presentaron tres candidatos peronistas, revelando la persistencia de los problemas internos y la debilidad organizativa del PJ. Aunque dado que en el resto de los partidos los problemas eran aún más serios, el grueso de la sociedad preferiría escoger aquella que le pareciera la más potable de las opciones peronistas, y su fractura tuvo el paradójico efecto de que el peronismo en conjunto ampliara su representatividad electoral. Con ello terminó de desequilibrarse el sistema de partidos en favor de una fuerza predominante, que no era estrictamente un partido, pero era lo bastante flexible para dividirse o unificarse en torno a nuevos liderazgos y propuestas políticas según las necesidades de cada momento.

En los comicios Menem se impuso con 25% de los votos, seguido por Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz, con 22%. Pero como se anticipó que la segunda vuelta arrojaría un resultado desfavorable para Menem, este se retiró de la contienda y Kirchner fue elegido presidente. Asumiría el cargo con un respaldo aún menor que el de Illia en 1962, así que muchos consideraban que el suyo sería un gobierno de transición. Sin embargo, Kirchner fue también el primer presidente en décadas en recibir de su antecesor cuentas superavitarias, inflación controlada y en baja, un PIB en acelerada expansión e ingentes recursos para asignar a discreción desde el poder ejecutivo. Con esos medios lograría rápidamente adquirir la legitimidad que le faltaba.

Durante su presidencia, el crecimiento y la concentración de poder se conjugaron todavía con mayor fuerza que en los años noventa: así lo prueban la reforma del Consejo de la Magistratura, dirigida a fortalecer el control oficialista en la designación y remoción de los jueces; la reglamentación del uso de los decretos presidenciales (cuyo número sería similar que en tiempos de Menem), imponiendo límites a la capacidad del Congreso para derogarlos; así como la ampliación de los poderes delegados con que el ejecutivo reasignaría a discreción durante la década siguiente cuantiosas partidas del presupuesto.

Kirchner reconstruyó de este modo la autoridad presidencial, destinando abundantes recursos a resolver conflictos sociales como los que protagonizaban las organizaciones de desocupados, muchas de las cuales fueron incorporadas a la nueva coalición gobernante. Lanzó también otras iniciativas reparadoras de derechos, como la reapertura de juicios por los crímenes de la dictadura y la renovación de la Corte Suprema, reemplazando a los desprestigiados jueces menemistas por otros de reconocido prestigio e independencia. En cuanto al *default*, usó un discurso duro con los tenedores de bonos y el FMI para prolongar la renegociación, que se concretaría solo parcialmente y con una quita de 65% en 2005. Similar trato aplicó a las empresas de servicios privatizadas: mantuvo en suspenso sus contratos para volverlas dependientes de decisiones gubernamentales sobre tarifas, subsidios e inversiones. Así se revirtieron algunos de los efectos de las reformas privatizadoras de los años noventa. El intervencionismo, de nuevo en auge, no significó regulaciones más eficaces y transparentes, tampoco exigencias a los empresarios para que fueran más competitivos y eficientes, ni siquiera para que aumentaran sus inversiones, sino solo mayor discrecionalidad en la asignación de premios y castigos y en la fijación de precios desde el gobierno nacional.

Algo similar sucedió en la relación con los gobernadores, al reemplazarse las transferencias automáticas que habían imperado en los años noventa por la asignación discrecional de fondos según la lealtad por cada uno demostrada hacia la presidencia. Con ello Kirchner pudo desplazar a Duhalde y Menem del control del PJ y desactivarlo como arena de negociación. Desde entonces el presidente amplió su coalición y la disciplinó, dándole una orientación más de izquierda: aprovechando la crisis de los partidos, incorporó dirigentes del Frepaso, la UCR, el socialismo y otros grupos. El aspecto decisivo de su estrategia, con todo, era el que involucraba al PJ, y al respecto los resultados no fueron tan favorables, no porque sus dirigentes se resistieran a participar

del nuevo orden, sino porque, como había pasado con Menem, estaban dispuestos a hacerlo siempre y cuando se les dieran los medios para reproducir su poder y no les exigiera mermar su autonomía.

Kirchner se impondría en los comicios legislativos de 2005 y lograría hacerse suceder por su mujer Cristina Fernández en 2007. El crecimiento económico, de 8% en promedio en esos años, fue clave para su éxito, tanto como la actualización de jubilaciones y salarios públicos aplicada a partir de 2004, acompañando la recuperación que desde tiempo antes habían experimentado los privados. Esto, sumado a la reducción del desempleo, permitió llevar las tasas de pobreza por debajo de 40% desde mediados de la década. El apoyo de los sindicatos se consolidaría con la derogación de la reforma laboral de 2000 y generosos aportes a las "obras sociales". La CGT, que también se había dividido durante la crisis, se reunificó otorgando su apoyo al "nuevo modelo productivo".

Pero mientras el kirchnerismo creía estar dando pasos en dirección a asegurar un horizonte más sólido y prolongado para su gobierno, se aproximaba una nueva crisis política, que habría de poner nuevamente a prueba las instituciones del país. Los Kirchner intentaron marcar a fuego la oposición entre su "gobierno nacional y popular" y la "derecha", en la que pretendían convergieran todos sus adversarios, acercándose así a los gobiernos de izquierda en boga en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Esto se profundizó cuando surgieron obstáculos al aumento de la recaudación tributaria y el crecimiento ya no pudo sostenerse en el uso de la capacidad ociosa de las empresas. El estímulo al consumo empezó a generar inflación, que en principio fue contenida por acuerdos con las cámaras empresariales a cambio de subsidios públicos. Pero pronto se pasó a la imposición de precios máximos, limitaciones a la exportación y sanciones. Todo lo cual desalentó la inversión. Cuando los índices de precios superaron el 15% anual, a comienzos de 2007, el gobierno intervino también

el organismo oficial de generación de información estadística (Indec) y comenzó a manipular los datos.

Estas tensiones se agravaron cuando, poco después de la asunción de Cristina Fernández, se desató un fuerte conflicto por el aumento de los impuestos a las exportaciones agrícolas. Las entidades del agro, aunque muchos de sus representados habían votado al gobierno, lograron coordinar movilizaciones y protestas en todo el país en rechazo a la medida. La revuelta fue masiva en las ciudades y pueblos de la región pampeana. Y el intento oficial de polarizar el campo político sobre la base de este conflicto naufragó, cuando sus bancadas legislativas se fracturaron y anularon el aumento. El gobierno se enfrentó entonces a una opinión mayoritaria que daría nueva vida a un arco opositor hasta entonces muy débil y motivó el alejamiento del gobierno de sectores peronistas, que presentarían listas alternativas a las oficiales en las parlamentarias de 2009 y que resultarían victoriosas en algunos distritos, en particular en la decisiva provincia de Buenos Aires.

Pero la crónica inestabilidad argentina aún daría cabida, poco después, a otra sorpresa. El kirchnerismo, que tan rápido había pasado de la gloria a la declinación, gracias a los todavía cuantiosos recursos en manos del Estado, la rápida recuperación de la economía entre 2009 (en que cayó 3%) y 2010 (cuando volvió a crecer a 8%), la consecuente y marcada reducción de la pobreza y el desempleo (que tocarían mínimos de 22 y 6% respectivamente en 2011), más la sorpresiva muerte de Néstor Kirchner que reconcilió a la opinión pública con su viuda, resurgió de las cenizas y triunfó ampliamente en las presidenciales de 2011, sobre una oposición que se mostró aún más dispersa y carente de líderes que en años anteriores. Cristina Kirchner, con 54% de los votos, obtuvo así una segunda oportunidad, con el respaldo de una autoridad estatal inéditamente fortalecida, para encarar la difícil tarea de gobernar Argentina.

Pareció consolidarse de este modo un panorama que tenía evidentes similitudes con el que había regido antes del inicio de

esta historia, bajo el primer peronismo: de un lado, un gobierno que lograba una enorme concentración de poder y dejaba fuera del juego a los medios de comunicación independientes y a una oposición desarticulada y con muy escasa gravitación sobre los grupos de interés y las instituciones del Estado; del otro, una economía basada en el aliciente al consumo que permitía satisfacer las necesidades de amplios sectores hasta poco tiempo antes excluidos del disfrute de sus más elementales derechos sociales, corrigiendo en alguna medida la desigualdad instaurada en décadas anteriores, pese a sus evidentes inconsistencias, que se reflejaban en una persistente inflación, en el resurgimiento del déficit público y en problemas serios de pérdida de competitividad y fuga de capitales.

La principal diferencia entre ambos momentos era que, aunque persistía la tentación hegemónica del peronismo, estaban ahora ausentes tanto una movilización polarizada de la sociedad como una amenaza desestabilizadora de origen militar o sectorial contra la legitimidad democrática. Y si bien confusamente, el pluralismo interno que protagonizaban facciones y líderes en competencia en el peronismo, mucho más abierto e institucionalizado que en los años cincuenta o setenta, proveía la energía suficiente para que las instituciones de la república sobrevivieran, incluso a los vicios de quienes eran sus casi monopólicos representantes y por tanto los encargados de hacerlas funcionar.

INTELECTUALES Y DEBATE CÍVICO EN EL SIGLO XX

Carlos Altamirano

EL FIN DE LA *BELLE ÉPOQUE*

Hasta la primera guerra mundial, la vida argentina parecía seguir su curso: una marcha ascendente que se remontaba al último tercio del siglo anterior y que a ritmo vertiginoso dejaba atrás la modesta y despoblada nación criolla que había surgido de la independencia. Oleadas de inmigrantes europeos habían multiplicado en pocas décadas el número de habitantes del país y estaban cambiando su fisonomía: la nación se "blanqueaba", como lo mostraban los censos de población. Los ferrocarriles atravesaban el territorio nacional y las mercancías que simbolizaban la riqueza argentina —la carne y los cereales— salían de los puertos hacia Europa. La certidumbre general era que el país se hallaba en la ruta del progreso y la civilización. Conducía la república una clase dirigente que hundía sus raíces en la historia nacional anterior a la inmigración y que estaba segura de representar no solo la excelencia social, sino también el *savoir-faire* político, la distinción y la garantía del gobierno inteligente. Buenos Aires, con sus tiendas y sus edificios modernos, era la capital de esta versión rioplatense de la *belle époque*.

El lenguaje ideológico dominante en las élites políticas e intelectuales era el del liberalismo —un liberalismo para el cual la civilización había ingresado en la edad de la razón científica y las sociedades civilizadas (entiéndase: Europa y Estados Unidos) en

la época de las multitudes—. Los círculos ilustrados de la clase dirigente, que aprobaban la marcha del progreso, rumiaban con preocupación sobre algunas de sus consecuencias y querían pensar el mundo con los resguardos de un saber positivo. En una época en que las masas y los conflictos sociales, como lo mostraban las sociedades civilizadas, tenían cada vez mayor gravitación, ¿no debían estar al alcance de gobernantes y dirigentes los recursos de la ciencia social? Desde 1905 se enseñaba sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y pronto las universidades de Córdoba y de La Plata seguirían el ejemplo. Varios libros publicados en la primera década del siglo y concebidos para hacer el diagnóstico de los males del país, sea del presente o del pasado, como *Nuestra América. Ensayo de psicología social* (1903), de Carlos O. Bunge, *La anarquía y el caudillismo en la Argentina* (1904), de Lucas Ayarragaray, o *Rosas y su tiempo* (1907), de José María Ramos Mejía, están animados por el espíritu del cientificismo.

Por cierto, el aval de la ciencia no era reivindicado únicamente por los liberales. También lo hacían los teóricos y dirigentes del socialismo —el ejemplo más obvio es el de Juan B. Justo y su *Teoría y práctica de la historia* (1909)— y publicistas filosocialistas como José Ingenieros, cuya *Sociología argentina* conocerá muchas ediciones. Por su parte, no procedían de otra forma los grupos anarquistas, rivales del socialismo en el movimiento obrero: la literatura de doctrina que se difundía en los medios libertarios reclamaba igualmente para sus postulados la autoridad del conocimiento científico. En otras palabras, las fronteras de la cultura cientificista no se confundían con las que separaban las ideologías y los alineamientos políticos.

A medida que se avanzaba en el proceso de transformación demográfica, económica y social en que se hallaba embarcado el país, los indicios de diferenciación entre esfera política y esfera cultural se hacían cada vez más perceptibles. Más aún, el universo mismo de las élites intelectuales se volverá crecientemente

diferenciado. En las primeras dos décadas del siglo, en efecto, se asiste a una progresiva especialización de las prácticas culturales, proceso que proseguirá en las décadas siguientes y reforzará las identificaciones vocacionales —ser escritor, filósofo, historiador…—, aunque los medios de vida de quienes ejercían tales ocupaciones intelectuales provinieran de cargos en el Estado, la enseñanza, el periodismo o del ingreso de profesiones liberales como la abogacía y la medicina.

Una preocupación mayor de estas élites intelectuales era la asimilación de la caudalosa inmigración extranjera y su fusión en un tipo nacional o, como se decía también, en una "raza argentina". Objeto de enfoques y argumentos diferentes, la cuestión fue un tópico del discurso público a lo largo de las primeras dos décadas del siglo XX. Se lo puede encontrar en diversos autores, desde José María Ramos Mejía hasta Ricardo Rojas, de Ernesto Quesada a José Ingenieros, de Rodolfo Rivarola a Manuel Gálvez. Entre 1898 y 1916, las tesis de doctorado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que estaban dedicadas a algún aspecto relativo a la inmigración superaron en número a las consagradas a otros temas. El punto de vista de los intelectuales argentinos solo era coincidente en juzgar negativamente la gravitación psicológica y moral de los componentes no blancos de la Argentina "criolla" (recuérdese que no solo ocupar el desierto, sino alejarse del indio y del negro, asentando en el territorio nacional una población apta para el trabajo y la vida cívica, había sido uno de los objetivos de la política inmigratoria). Para Rodolfo Rivarola o José Ingenieros, la "raza argentina" era un hecho del futuro que tenía su clave en la inmigración; para otros, como Ramos Mejía, el tipo nacional en ciernes tenía su "plasma germinativo" en el núcleo hispánico transmitido a lo largo de la historia.

La acepción cultural antes que biológica de la nueva "raza" era predominante en aquellos para quienes la amenaza que encerraba el presente radicaba en la falta de consistencia de una sociedad que se formaba aluvionalmente, sin lazos con la tradi-

ción. El compendio de ese conglomerado cosmopolita era Buenos Aires, permeable a todas las lenguas y a todas las costumbres. También a todas las ideologías, entre ellas el anarquismo y el socialismo, cuya agitación se señalaba como contraria a la unidad del cuerpo nacional. Para el escritor Manuel Gálvez, el mérito de su generación consistía en haber cobrado conciencia de que el porvenir de la patria no podía ser puramente material, que el progreso debía cobrar alma nacional y, a sus ojos, el fundamento de esa espiritualización se hallaba en Castilla, matriz del pueblo argentino (*El solar de la raza*, 1913). También para Ricardo Rojas la nacionalización cultural era la tarea de la hora. Él había comenzado esa labor ideológica con *La restauración nacionalista*, de 1909, y la coronaría con su *Historia de la literatura argentina*, cuyos volúmenes se publicaron entre 1917 y 1922. Aunque desde puntos de vista divergentes, tanto Rojas como Ingenieros buscaron rescatar lo que juzgaban valioso del acervo intelectual argentino a través de dos colecciones: *La Biblioteca Argentina*, que dirigía el primero, y *La Cultura Argentina*, organizada por el segundo.

No estaba disociada del tema de la nacionalización de los inmigrantes la otra preocupación, la "cuestión social", que desde los años noventa del siglo XIX estaba en la agenda de los problemas. ¿Qué hizo cristalizar la percepción de que el país había ingresado en la era de los antagonismos propios de las sociedades capitalistas? No un hecho, seguramente, sino varios y de diferente naturaleza, de la crisis económica y política de 1890 a la afloración del discurso y la acción anarquistas, el surgimiento de la prensa socialista y la creación del partido de ese nombre (1896), la encíclica *Rerum Novarum*, la actividad social de la iglesia católica y la lucha de los trabajadores. El sector de los "liberales reformistas", como los llamó el historiador Eduardo Zimmermann, entre los que sobresalían Joaquín V. González y José Nicolás Matienzo, se empeñaría en que la respuesta del Estado a la agitación obrera no fuera únicamente represiva —como las leyes de Resi-

dencia y de Defensa Social—, sino que fuera también preventiva, que adaptara a las condiciones del país la legislación social que se había desarrollado en las naciones más avanzadas.

LA CIUDAD LIBERAL TRASTORNADA

La primera guerra mundial conmovió a la opinión pública argentina y, como en otras partes del mundo, puso en crisis certidumbres arraigadas. El triunfo del radicalismo en las elecciones de 1916, que desplazará del gobierno a la oligarquía liberal, se agregó al estremecimiento de la guerra para consumar el cambio de clima político y cultural en el país.

La contienda bélica mostraba a las naciones europeas, vistas hasta entonces como los territorios de la civilización política, del progreso científico y técnico, de las artes y la literatura —es decir, los territorios del espíritu por excelencia—, entregadas a la aniquilación mutua, a matanzas en escala sin precedentes. Tal como se podía leer apenas comenzada la guerra en el consternado editorial de *Nosotros*, la revista literaria que dirigían Roberto Giusti y Alfredo Bianchi: “Se exterminan los hombres sobre todos los mares y en todas las tierras; millones de soldados solo están en pie para matar y para morir, llueve fuego y acero, se hunden los acorazados enormes, arden las ciudades, son arrasados los campos; por doquier está la matanza, el incendio, la rapiña, la violación; única ley es destruir y asesinar; el hombre ha dado paso al gorila lúbrico y feroz…”.

¿Cómo saldría la civilización de esa terrible prueba? El término barbarie cobró rápida circulación para juzgar y condenar tanto los comportamientos que la guerra había hecho surgir en los campos de batalla, como la estrategia de los jefes militares y la visión de los líderes políticos (“El suicidio de los bárbaros” fue el título que José Ingenieros dio a un artículo sobre la guerra apenas desencadenada), aunque se trataba de una barbarie que

no había brotado fuera de la civilización, sino de su propio seno. Rápidamente también se hizo general el diagnóstico de que esa vasta contienda significaba el final trágico de un ciclo histórico e inauguraba otro, de signos inciertos. Tras el sobresalto y la tribulación del comienzo, la opinión ilustrada se dividió y comenzó a tomar partido, sea a favor de una de las dos coaliciones beligerantes, sea a favor de la neutralidad de Argentina frente a la guerra que estaba destrozando Europa. Los diarios de mayor predicamento, como *La Nación y La Prensa*, asumieron posición a favor de los aliados y en el mismo sentido se alineó gran parte de los intelectuales. Más reducido era el sector de los germanófilos, que contaban con las páginas del diario *La Unión* y en cuyas filas sobresalían los nombres del político y publicista Estanislao Zevallos y del historiador Ernesto Quesada. Entre las pocas voces neutralistas del mundo intelectual, se hallaba la de Manuel Ugarte.

Ningún otro escritor argentino disfrutaba por entonces de más prestigio que Leopoldo Lugones, quien puso su pluma al servicio de la causa aliada. Muy lejos ya del fervor socialista de juventud, el gran poeta había hecho suyo un liberalismo de sesgo aristocratizante, desdeñoso tanto de la opinión plebeya como de los políticos profesionales. A sus ojos la guerra en curso constituía una catástrofe para la humanidad, pero no abrigaba ni admitía dudas respecto del papel relativo de las coaliciones contendientes: esa calamidad la había desencadenado el imperio alemán, expresión de un militarismo que había hecho trizas tratados y normas de la política internacional. Del lado "teutón", que había iniciado la agresión, se hallaba la barbarie; la parte de la justicia y la civilización, en cambio, estaba representada por los "aliados". De estas naciones (Lugones pensaba obviamente en Inglaterra y sobre todo en Francia) procedían las tradiciones espirituales y políticas de Argentina, tradiciones de libertad que el autoritarismo germano amenazaba. En suma: la neutralidad argentina era insostenible, más todavía después de que dos buques argentinos fueran hundidos por las fuerzas alemanas. La postura del presi-

dente Hipólito Yrigoyen, que se negaba a romper la política de neutralidad e intervenir en la contienda, era para Lugones una prueba de pusilanimidad y de que el gobernante no estaba a la altura de su investidura (*Mi beligerancia*, 1917).

Si en las filas de la *inteliguentsia* habían predominado las dudas y el escepticismo sobre la conveniencia de la reforma electoral introducida por Roque Sáenz Peña, el hecho de que la primera prueba del voto honrado llevara a Hipólito Yrigoyen a la primera magistratura no haría más que confirmarles esa prevención respecto de la madurez cívica del pueblo. "¿Garantiza el sufragio universal, honestamente practicado, el triunfo de los mejores?", se preguntaba Alberto Gerchunoff en su ensayo *El nuevo régimen* (1918), y respondía: "La presencia de los radicales en el gobierno demuestra cabalmente lo contrario. Siempre ocurre y ocurrirá así". Aun antes de llegar a la presidencia la figura de Hipólito Yrigoyen intrigaba. ¿Quién era ese jefe político adorado por las masas, pero que evitaba las apariciones públicas, no profería alocuciones y que cuando ocasionalmente escribía lo hacía en un lenguaje sibilino y extravagante que se prestaba fácilmente a la burla de los adversarios? "Vale la pena acercarse a esta figura para fijarse en sus rasgos. Es por primera vez que se suscita tal fenómeno en la existencia política nacional. Los correligionarios lo deifican hasta el punto de parecerles blasfemia cuando uno se atreve a preguntarles en la intimidad si es realmente un hombre preparado para la posición que ocupa", comenta Gerchunoff. Para Alfonso de Laferrere, esa figura deificada era la de "un anormal que parece juzgarse elegido por Dios para la felicidad de la República" (*Literatura y política*, 1928).

Entre los miembros de la élite política e intelectual tradicional se volvieron moneda corriente dos ideas-imágenes: la de que el gobierno radical implicaba una ruptura con la gran tradición argentina —la tradición de los gobiernos ilustrados— y la convicción de que los viejos males de Argentina habían retornado con Yrigoyen, que representaba la reaparición del caudillismo.

Toda la tipología sociopsicológica forjada desde fines del siglo XIX para caracterizar a la gente peligrosa de extramuros o a las personas faltas de distinción ("orilleros", "compadritos", "guarangos"), además de estigmatizaciones más viejas, como "chusma" o "mulataje", fue empleada para transmitir la certeza de que un mundo social y culturalmente bajo había ocupado las funciones públicas de la mano de un jefe mesiánico y demagógico. La comparación con Rosas y su régimen autoritario se volvió un tópico.

El fin de la gran guerra dejó ver en el campo de las ideas la formación de un nuevo paisaje. Si bien la reacción idealista contra el cientificismo positivista había surgido mucho antes de la guerra en el pensamiento europeo, en Argentina ese humor antipositivista solo entró de lleno con el estallido de la tormenta y la reflexión que siguió, ya en la posguerra, sobre las causas y las consecuencias de la crisis de la civilización que la contienda había desnudado. Los nombres que ahora contaban eran los de Benedetto Croce, Henri Bergson, José Ortega y Gasset. El filósofo español había visitado el país en 1916 y sus conferencias constituyeron un suceso intelectual. No habló solo para sus colegas, en disertaciones académicas, sino también para el gran público en varias ciudades del país. Ortega transmitió el mensaje de que un nuevo espíritu filosófico estaba en curso y que la idea de una filosofía fundada en la ciencia pertenecía al siglo XIX. Alejandro Korn, que desempeñaría un papel sobresaliente en la etapa pospositivista de la filosofía universitaria en Argentina, recordaría varios años después la gravitación que tuvo la visita de Ortega y Gasset en esa renovación: "La presencia de Ortega y Gasset en el año 1916 fue para nuestra cultura filosófica un acontecimiento. Autodidactos y *dilettantes* tuvimos ocasión de escuchar la palabra de un maestro; algunos despertaron de su letargo dogmático y muchos advirtieron por primera vez la existencia de una filosofía menos pedestre".

Los jóvenes universitarios formaron la audiencia más receptiva a las incitaciones intelectuales de Ortega y nociones proce-

dentes de su visión del presente —como "nueva sensibilidad" y "nueva generación"— se incorporaron como consignas de identidad al lenguaje ideológico juvenil.

No fue únicamente este fermento idealista y antipositivista lo que hizo variar el clima ideológico en el país. Como en el resto de Hispanoamérica, la opinión de que un nuevo mundo político y social estaba surgiendo sobre las ruinas de la guerra se extendió por las filas de los intelectuales a partir de 1918. ¿Cuáles eran los signos de ese porvenir en gestación? Los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson para asegurar la paz mundial y la Revolución rusa, vistos en un comienzo como partes de una misma constelación moral. El ejemplo de José Ingenieros da ilustración a la curva que conoce el progresismo en el campo de la *inteliguentsia*. En efecto, en las conferencias y artículos que reunió en su libro *Los tiempos nuevos* (1921) puede verse el itinerario que siguió su autor en relación con los grandes sucesos de la política internacional, de la condena de la guerra al wilsonismo y de este al apoyo a la revolución social que encabezaban los bolcheviques en Rusia. El movimiento que derrocó al zarismo había sido saludado por la mayor parte de la opinión ilustrada, pero cuando la revolución pasó a manos de Lenin y su partido, resueltos a apresurar la marcha e implantar el socialismo —el programa "máximo"— esa opinión se dividió entre los que aprobaban el nuevo curso y los que lo condenaban. De todos modos, el aura de la Revolución soviética se mantuvo durante mucho tiempo aun entre quienes no apoyaban todas las medidas de la dirección bolchevique —es decir, se mantendría la idea de que en Rusia, incluso con errores, se estaba experimentando la gestación de una nueva humanidad, libre de los males que había acarreado la guerra—. Por cierto, el eco de la Revolución rusa engendró también, como en todo el mundo, defensores y propagandistas más entusiastas e incondicionales, los militantes socialistas disidentes que se agruparían en el Partido Socialista Internacional, base del futuro Partido Comunista (1920), afiliado a la III Internacional.

EL MOVIMIENTO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA Y LOS AVATARES DEL PROGRESISMO

Varios de los elementos ideológicos señalados aparecerán en el discurso de la Reforma Universitaria, un movimiento que tendrá su base en las clases medias, en constante crecimiento desde comienzo de siglo y cuyos hijos comenzaban a acceder a la enseñanza superior. Aunque había antecedentes de protestas y movilizaciones estudiantiles para exigir cambios de índole educativa o administrativa, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, el movimiento universitario como actor de la vida pública nace de la revuelta estudiantil en la Universidad de Córdoba, en 1918. En su origen, el episodio que a fines de 1917 va desencadenar la activación del estudiantado de esa casa de estudios puede compararse con tantos otros de queja ante ordenanzas de las autoridades universitarias. Pero a los ojos de las autoridades de la conservadora Universidad de Córdoba, de su cuerpo de profesores y de la élite católica que gravitaba en su vida intelectual, la protesta estudiantil en demanda de reformas importaba un desafío inadmisible. La resolución del Consejo Superior de la Universidad de no tomar en consideración ninguna solicitud de los estudiantes desató la reacción de estos, que fueron a la huelga. Un Comité pro Reforma comenzaría a elaborar las demandas de los jóvenes. A partir de la huelga el conflicto se agudizó, los estudiantes le dieron alcance nacional al solicitar la intervención del gobierno de Yrigoyen, los alumnos de otras universidades públicas se solidarizaron con los cordobeses y crearon en abril de 1918 la Federación Universitaria Argentina. Para entonces ya se había generalizado entre los jóvenes la convicción de que no luchaban contra determinadas disposiciones administrativas, sino contra un régimen universitario. La causa de los estudiantes recibirá el apoyo de personalidades públicas, como Alfredo Palacios, José Ingenieros, Juan B. Justo, Alejandro Korn, entre otras.

El primer manifiesto del movimiento reformista de Córdoba —21 de junio de 1918— bosquejó la identidad inicial de la causa estudiantil. Redactado por el joven intelectual cordobés Deodoro Roca, el documento estaba dirigido "A los hombres libres de Sud América" e inscribía la revuelta estudiantil en el marco de una serie de antinomias que se evidenciaban en la vida universitaria —la de la libertad contra la tiranía, del espíritu de rebeldía frente a la mediocridad y la ignorancia, de lo nuevo contra lo anacrónico, del estudiante contra el poder despótico de los profesores insolventes, de la verdad científica contra el dogma—. El manifiesto exigía un gobierno democrático para la universidad, concebida como república, y proclamaba que la soberanía en la república universitaria "radica principalmente en los estudiantes". El eco del *Ariel*, de José E. Rodó, y de los textos juveniles de Ingenieros podía reconocerse en pasajes del documento: "La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido tiempo aún de contaminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus maestros". Era la autoridad de maestros que fueran "verdaderos constructores de almas, creadores de verdad, de belleza y de bien", lo que los jóvenes esperaban y necesitaban.

El programa de renovación del sistema de enseñanza superior que hará suyo el conjunto del movimiento estudiantil, constituido ya a escala nacional, reivindicaba la participación de los estudiantes en el gobierno de las universidades, la renovación de las cátedras por medio de concursos periódicos, la implantación de la docencia libre. Desde el comienzo el reformismo albergó visiones diferentes respecto de la significación del movimiento y muy pronto se afirmará la interpretación de que el sentido de la revuelta de 1918 no se agotaba en los cambios relativos al gobierno y la enseñanza universitarios. Más aun: que el combate por la reforma de la universidad era solidario con el combate por la reforma social. Este enfoque, que era el de la izquierda del reformismo universitario y que terminará por ser predominante, fue

desarrollado por intelectuales de la joven promoción como el citado Deodoro Roca, Julio V. González y Carlos Sánchez Viamonte (estos últimos se afiliarán más tarde al Partido Socialista). Ellos insertaban el significado del movimiento en el cuadro de la crisis general provocada por la guerra, el final del régimen oligárquico que representaba el triunfo del radicalismo y las esperanzas de redención social antiburguesa que sobrevinieron al fin de la contienda y que la Revolución rusa alimentaba. La Reforma Universitaria daba expresión a una "nueva generación", como dirían con lenguaje orteguiano, generación investida de la misión de traer y llevar adelante el mensaje redentor que correspondía a los tiempos nuevos. A los ojos de los jóvenes ideólogos, la cuestión universitaria se insertaba en la cuestión social. Aunque el gobierno de Yrigoyen había obrado como un aliado en los comienzos del reformismo universitario, el radicalismo "personalista", como se llamaba al de Yrigoyen, no tendrá las simpatías de los pensadores de la "nueva generación" reformista. Puede considerarse representativo, en este sentido, *El último caudillo* (1930), de Carlos Sánchez Viamonte, cuyo retrato del jefe radical y del movimiento redentorista que tenía en él a su hombre providencial será elogiado por Deodoro Roca y Aníbal Ponce. Yrigoyen, según la tesis de Sánchez Viamonte, era el caudillo de un medio social y político que cobró fisonomía propia en las últimas décadas del siglo XIX: el suburbio cosmopolita, zona de mezcla étnica de criollos y recién llegados, poco diferenciada en términos de clase. La "causa" radical formaba parte del mismo ciclo histórico del "régimen" al que combatía y el final político de Yrigoyen que se avecinaba iba a marcar el ingreso del país en la era de su adultez.

El antiimperialismo se introdujo tempranamente en el ideario del reformismo universitario y, conectada con el antiimperialismo, la afirmación de los lazos que integraban Argentina en la comunidad de los pueblos latinoamericanos. Hasta fines de la segunda década del siglo XX, antiimperialismo y latinoamericanismo habían sido tema de la prédica casi solitaria del escritor

socialista Manuel Ugarte, que tenía poco eco en la *inteliguentsia* argentina.

A mediados de los años veinte la matrícula de estudiantes seguía en ascenso y el reformismo contaba con varios focos activos —en las universidades de Córdoba, Buenos Aires, La Plata, del Litoral—. El relato reformista había cristalizado en sus rasgos fundamentales y su difusión no hallaba eco únicamente en el medio estudiantil, sino en una parte del cuerpo de profesores, que se había renovado precisamente por obra del movimiento de la Reforma. De acuerdo con ese relato, la revuelta de la juventud universitaria de Córdoba se inscribía en una saga histórica nacional cuyas líneas maestras había fijado Ingenieros en el prefacio a *La evolución de las ideas argentinas*. Para este la clave del proceso ideológico argentino se resumía en la lucha entre dos partidos, "el uno propicio al Absolutismo, al Privilegio y al Error, amigo el otro de la Libertad, la Justicia y la Verdad" (1918). La universidad no podía hallarse al margen de este combate. Más aun, debía ser baluarte, si no vanguardia, de las causas progresistas, fueran sociales o políticas. En la década siguiente, convertido ya en uno de los cauces del progresismo argentino, el movimiento de la Reforma Universitaria ampliará su agenda de temas y de acción, incorporando en ella la lucha contra el fascismo internacional y sus expresiones locales. No solo los socialistas y los comunistas, sino también gran parte de los radicales daban apoyo a esta idea militante de la universidad. Cuando en 1945 los estudiantes enfrenten a Juan Domingo Perón, el coronel nacionalista que reclutaba adherentes entre los obreros, lo harán en nombre de esta tradición intelectual.

FORMACIONES ANTILIBERALES

Yrigoyen concluyó su primer mandato presidencial en 1922. La mezcla de irritación y alarma que su administración había pro-

vocado en las élites del "viejo régimen" hizo crecer en ellas la opinión de que la reforma electoral había sido prematura, cuando no simplemente un error, aunque de inspiración generosa. Se culpaba al gobierno de Yrigoyen de personalista y autocrático, de haber asaltado la administración pública para repartir puestos entre sus adeptos, de gestión improvisada, sin programa, de abusar de la intervención federal para colocar bajo su órbita el poder en las provincias, de desprecio a los otros poderes de la república, el del Congreso, en primer lugar. Más aún: a juicio de varios de sus críticos, el paternalismo obrerista del jefe radical había sido cómplice de la agitación social extremista que tras el fin de la gran guerra había hecho su ingreso en el país.

En las filas de la alta *inteliguentsia* el cuestionamiento a la tiranía del número y el electoralismo ya no se detuvo. Será Lugones quien radicalice la crítica de la "paparrucha democrática", como la llamará en una de las conferencias que dictó en el Teatro Coliseo (*Acción*, 1923). Afirmó en esas conferencias la necesidad de que los patriotas se agruparan ante la doble amenaza que se cernía sobre el país: la amenaza exterior, representada por la política de "paz armada" en que se hallaban embarcados Brasil y Chile, y la interior, que provenía de "una masa extranjera disconforme y hostil", incitada a la discordia de la lucha de clases por agentes confesos o encubiertos del "maximalismo ruso", lo cual obligaba alistarse y luchar por imponer la "disciplina nacional". Al año siguiente, el mensaje de Lugones fue más rotundo. En Hispanoamérica había sonado "la hora de la espada", proclamó en el discurso de celebración de la batalla de Ayacucho: con la espada se había conquistado la independencia y con ella se lograría restablecer el orden y la jerarquía arruinados por la democracia, que llevaba a la demagogia o al socialismo. Comenzó así a cobrar forma la elaboración lugoniana de la doctrina del ejército como "clase salvadora", de la revolución nacional que imponían las circunstancias y del gobierno fuerte, a su juicio el más representativo de la tradición hispanoamericana. *La grande*

Argentina, el libro donde expondrá en 1930 el programa de la revolución que anhelaba, será una de las obras rectoras del pensamiento nacionalista argentino.

En torno de la crítica al sufragio universal y a la democracia irá tomando cuerpo una derecha antiliberal. Su primer órgano de expresión fue *La Nueva República*, que comenzó a publicarse a fines de 1927. Base del futuro nacionalismo, esta nueva derecha, pequeña numéricamente pero activa, militante, hallaba alimento espiritual en la furiosa polémica antidemocrática de la Action Française —Charles Maurras era un maestro de pensamiento para la naciente familia de los nacionalistas argentinos— y alimento político en los sucesos y en los personajes públicos de la vida nacional. Integraban la redacción de *La Nueva República* escritores jóvenes, como los hermanos Rodolfo y Julio Irazusta y Ernesto Palacio, ligado a la vanguardia literaria de la revista *Martín Fierro*. El propósito de la publicación era combatir la politiquería y el estado de desorientación espiritual en que se hallaba sumido el país, según destacaba el periódico en la presentación de su programa. Aunque algunos de los temas ideológicos de *La Nueva República* coincidían con los de la prédica de Lugones, este no comulgaba con el maurrasianismo y era férreamente crítico del catolicismo. Los jóvenes neorrepublicanos, en cambio, se proponían luchar por devolver a la iglesia y la religión católicas su papel de sustento de la unidad nacional y defender a la familia de los ataques de que era objeto por obra del anticlericalismo. Para estos, como se podía leer en el artículo "Organicemos la contrarrevolución", de Ernesto Palacio, también publicado en el primer número, el combate contra el "dogma" de la soberanía del pueblo, error funesto que procedía del siglo XIX, era inseparable de la lucha contra la negación de la jerarquía sobrenatural de la iglesia de Cristo y de la jerarquía natural del Estado.

Juan Carullas, uno de los redactores de *La Nueva República*, consigna en sus memorias que si bien el periódico nunca alcanzó gran tirada, era leído en los círculos cultos, en el medio cató-

lico y en el ejército (*Al filo del medio siglo*, 1951). Dentro de este selecto cuerpo de lectores se hallaba el próximo jefe del golpe de Estado que derrocará a Yrigoyen, el general José F. Uriburu, quien acompañó a los jóvenes en la cena en que celebraron el primer aniversario del periódico.

Otro foco de la prédica contra el mal democrático y el liberalismo apareció en 1928, la revista *Criterio*. La creación de esta revista fue iniciativa de un grupo de intelectuales católicos y tuvo el patrocinio de las autoridades eclesiásticas, que veían con beneplácito la idea de que los católicos contaran con un órgano propio en el terreno de la cultura. Desde el comienzo hubo contactos y entendimientos entre el grupo de *La Nueva República* y el que dirigía el semanario católico (personalidades católicas escribieron en la hoja política y redactores de esta lo hicieron en el segundo). Las dos publicaciones, en resumen, fueron órganos clave de una nueva cultura de derecha en Argentina. Tenían los mismos enemigos —el comunismo, el socialismo, la modernidad liberal— y compartían la misma convicción de que la unidad de la nación no podía tener otro cimiento espiritual que la fe católica.

Criterio no puede disociarse del pensamiento y las preocupaciones de los Cursos de Cultura Católica, un centro de altos estudios creado en 1922 y destinado a la formación doctrinaria de los católicos con vocación intelectual. Los Cursos habían nacido para corregir la situación de desventaja en que se hallaban los católicos en el debate de ideas, situación en que estos veían un fruto de la larga hegemonía liberal, a la que se debía la disociación entre saber y fe religiosa. Las universidades eran vistas como bastiones de la cultura adversaria, laica y positivista, y los Cursos fueron pensados para contrarrestar las consecuencias de ese hecho. Muchos miembros de la élite del nacionalismo católico que cobrarían reputación en los años treinta y cuarenta pasaron por la enseñanza de los Cursos: de Mario Amadeo a Marcelo Sánchez Sorondo, además de Julio Meinvielle, Leonardo Castellani, Nimio de Anquín, Ignacio Anzoátegui y Máximo Etchecopar.

Los maurrasianos argentinos vieron en el general Uriburu al jefe de la revolución nacional y pusieron su pluma al servicio de la demolición del segundo gobierno de Yrigoyen. Confiaban en que el derrocamiento del radicalismo abriría paso a reformas políticas y sociales de tipo corporativo que dejarían atrás la república liberal, el desorden y, junto con el sufragio universal, los vicios de la politiquería. Fue también la apuesta de Lugones. Los hechos, sin embargo, decepcionarán las expectativas de los nacionalistas. Por un lado, el general Uriburu no fue el jefe revolucionario enérgico que esperaban y, por el otro, el levantamiento militar que lo llevó al poder en septiembre de 1930 contenía desde su origen tendencias en pugna. Después de mostrar que oscilaba entre diferentes cursos de acción, Uriburu terminará por devolver su papel rector a la Constitución de 1853 y llamar a elecciones con la proscripción del radicalismo. Heredero del interregno uriburista fue su rival en el ejército, el general Agustín P. Justo, quien alcanzó la primera magistratura en 1932, apoyado en una coalición de partidos. Justo dio inicio entonces a un experimento conservador basado en el fraude electoral sistemático.

UNA GALAXIA EN EXPANSIÓN

El traspié político no detuvo el movimiento intelectual nacionalista. Por el contrario, entre 1930 y 1943 fue una galaxia en expansión, que se diseminaba en grupos y círculos, aunque no lograba unirse en una sola fuerza política. A comienzos de los años cuarenta el nacionalismo seguía siendo una minoría, pero ya no era el exiguo contingente que había hecho sus primeras armas políticas en 1930. Los años no habían pasado en vano: los grupos identificados con el nacionalismo habían proliferado, al igual que sus hojas políticas, sus revistas y sus editoriales. El conjunto englobaba una amplia gama de posiciones, de aquellas tradicionalistas y contrarrevolucionarias a las directamente fascistas, y

constituían un activo sector del medio ideológico argentino. A partir de la segunda mitad de los años treinta una nueva generación de intelectuales y militantes, formados en los Cursos de Cultura Católica, le dio supremacía al ala católica del conglomerado, que contaba con aliados y directores espirituales en el clero y simpatizantes en la oficialidad del ejército. En los días en que la guerra civil española movilice en favor de la república a los partidos de la izquierda y a las expresiones de la cultura antifascista, los nacionalistas tomarán partido por la España eterna, defendida por el general Franco, a quien se juzgaba un cruzado católico.

En 1934 los hermanos Rodolfo y Julio Irazusta publicaron un ensayo llamado a convertirse en un clásico del pensamiento político e histórico nacionalista, *La Argentina y el imperialismo británico*. El ensayo tenía un objetivo político inmediato: criticar el tratado firmado por el gobierno argentino con Gran Bretaña en 1933 y, por medio de la crítica del llamado Pacto Roca-Runciman, censurar al régimen que presidía el general Justo. Los finos caballeros que representaron a Argentina en la negociación del tratado, advertían los Irazusta, habían actuado con arreglo a una mentalidad difundida en el país que llevaba a subordinar la política del Estado a la economía. ¿De dónde provenía esa concepción que terminaba por producir resultados adversos a los intereses nacionales? Al analizar este acuerdo que reforzaba con nuevos lazos la dependencia económica de Argentina respecto del imperio británico, los autores encontraban que el suceso no podía aclararse sino con la historia. Los autores consagrarán la tercera parte del ensayo a esbozar una semblanza histórica de la oligarquía. Antes que una clase social o una minoría política, la oligarquía había sido una élite cultural que se erigió en clase dirigente. Los héroes de la tradición liberal, como Rivadavia o Sarmiento, eran, a juicio de los Irazusta, eminencias de la mentalidad oligárquica. En dos palabras se resumía esa mentalidad: comercialismo y progresismo. Ellos no querían una gran nación sino un país civilizado y próspero, un programa que apartó al país de su verdadera tradición.

El pueblo, que era criollo, católico y tradicionalista había resistido siempre el dominio de esa élite ilustrada.

En esas pocas páginas asomaba el punto de partida del revisionismo histórico nacionalista, cuyo desarrollo posterior completaría el proceso entablado a la Argentina liberal. Afloraba allí también otra tesis que hará fortuna en debates venideros: la del divorcio entre intelectuales y pueblo en la historia nacional. El complemento de la crítica a esa desunión que se remontaba al siglo XIX serían las fórmulas ideológicas y políticas para superar el hiato.

"Somos una Argentina colonial. Queremos ser una Argentina libre". Esta consigna encabezaba el manifiesto con el que se haría conocer en 1935 un agrupamiento político-ideológico, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), destinado a tener resonancia posterior antes que inmediata. La posición de los jóvenes de FORJA era también antiliberal, pero no antidemocrática. Por el contrario, la lucha por la soberanía nacional de un país al que juzgaban sometido a los intereses del imperialismo británico, resultaba para ellos indisociable de la soberanía del pueblo. No era este, sin embargo, el único rasgo que separaba este grupo nacionalista de los otros. Los forjistas procedían del radicalismo y se proponían librar batalla dentro de ese partido para devolverlo a su cauce de fuerza popular reivindicando el nombre y el legado de Yrigoyen, el jefe político en contra de cuyo gobierno había militado el resto de los círculos nacionalistas. En el antiimperialismo del forjismo obraban la lectura de los análisis del peruano Víctor Raúl Haya de la Torre sobre América Latina y las conversaciones con dirigentes del APRA (la Alianza Popular Revolucionaria Americana). La prédica de estos jóvenes, que en verdad reinventaban el yrigoyenismo al conferirle una coherencia ideológica que en vida del caudillo nunca tuvo, no contenía ninguna afinidad con la defensa del catolicismo y el tradicionalismo. Por otra parte, el populismo de los forjistas, que no se alineaban en la derecha, los colocaba en las antípodas del nacionalismo de Lugones.

De los animadores de FORJA, solo Raúl Scalabrini Ortiz, que no pertenecía a las filas del radicalismo, contaba con cierta notoriedad intelectual, debida, sobre todo, a su ensayo *El hombre que está solo y espera* (1931). Pero no sería en el terreno de la creación literaria donde se cimentará la fama de Scalabrini Ortiz, sino en los trabajos que consagrará a la gravitación de Gran Bretaña en la economía argentina. El primero de los *Cuadernos* de FORJA llevará un trabajo de su firma: *Política británica en el Río de la Plata* (1936). La otra figura del forjismo, Arturo Jauretche, subordinó en esa etapa juvenil la labor de escribir a la acción política. Sólo después de 1955 cobrará celebridad por artículos y ensayos que harán de él la mejor pluma del nacionalismo populista. Nadie llevaría más lejos que Jauretche la crítica a lo que llamaba la "colonización pedagógica" de los intelectuales y a su divorcio del pueblo, fueran de izquierda o de derecha.

En fin, aunque los separaban muchos motivos tanto políticos como ideológicos, habría contactos y préstamos entre forjistas y otras familias del nacionalismo argentino, pues coincidían en la denuncia del imperialismo británico y en la reprobación del papel político del liberalismo.

LOS INTELECTUALES Y LA REVOLUCIÓN DE LOS DESCAMISADOS

El surgimiento del peronismo a mediados de la década de 1940 cambió definitivamente el juego político conocido hasta ese momento, cuando los candidatos a gobernar eran los radicales, que contaban con la mayoría de los votantes, o los conservadores, mediante alguna coalición y la práctica del fraude electoral. A partir de 1946, cuando el general Perón llegó a la presidencia por medio del sufragio, ya no sería así. Pero la mutación que el líder de los descamisados y su primer gobierno produjeron no fue únicamente política, sino también cultural y social. Aunque los opositores al peronismo lo descubrirían solo poco a poco, el país ya no sería el

mismo después del decenio justicialista. *¿Qué es esto?* fue el título que el escritor Ezequiel Martínez Estrada dio a su ensayo sobre el peronismo, publicado en 1956. Podría decirse que este interrogante comenzó a abrirse paso en los medios antiperonistas tiempo antes, cuando los esquemas de referencia con que se había clasificado al líder surgido de la revolución militar nacionalista del 4 de junio de 1943, a su movimiento y a su gobierno, comenzaron a revelarse como insuficientes o inadecuados.

En efecto, en el comienzo la identidad del peronismo no fue un problema para sus adversarios, que interpretaron los sucesos del país de acuerdo con las claves que proporcionaba la segunda guerra mundial, que estaba llegando a su fin. Ocurría, según esta clave, que el enfrentamiento que se había dirimido en los campos de batalla entre libertad y totalitarismo, democracia y fascismo, proseguía en Argentina, donde un régimen autoritario, implantado en 1943 y espoleado por una fracción de coroneles nacionalistas y anticomunistas, había disuelto a los partidos políticos, implantado la enseñanza religiosa en las escuelas y mantenía al país en la neutralidad frente a la guerra. Para el *establishment* liberal, que tenía de su lado a los diarios más prestigiosos —*La Nación* y *La Prensa*—, como para la dirección del radicalismo y los partidos Socialista y Comunista, el designio de Perón, surgido de esa élite de coroneles, era instalar en Argentina una versión del fascismo. La izquierda, que fue muy activa en la construcción de la dicotomía fascismo/antifascismo como disyuntiva de la vida nacional, vio en cada hecho los signos que confirmaban su diagnóstico. Así con la política a favor de los asalariados que el militar llevaba a cabo desde que asumió la Secretaría de Trabajo en 1943, en la que se identificaba la demagogia que también había caracterizado en sus comienzos a Mussolini y al nacionalsocialismo, o en ocasión del 17 de octubre de 1945, cuando una vasta movilización popular vuelque a favor de Perón la lucha que se verificaba en el seno del régimen militar, un episodio en que se vería la manipulación de un séquito políticamente atrasado.

El grueso de la *inteliguentsia* argentina formó fila con el antiperonismo y en el año 1945, cuando el país se polarizó en dos frentes, la juventud universitaria fue el gran actor en las movilizaciones contra el régimen militar y el candidato a heredarlo, el general Perón. En nombre de lo que se autodenominaba "Resistencia" se activó la idea de la universidad militante, inscrita en la tradición del reformismo universitario, aunque otra aspiración reformista, la de la unidad obrero-estudiantil, acaso nunca estuvo más lejos de realizarse que entonces. Los trabajadores no se movían en dirección a los partidos de izquierda, sino que eran atraídos por el jefe militar antiliberal y antisocialista que los apoyaba en sus reivindicaciones y los incitaba a luchar por ellas. La política de Perón alarmaba, en cambio, a los patrones.

El 1 de febrero de 1946 apareció en la prensa una declaración que daba apoyo a la Unión Democrática, la coalición antiperonista, y que suscribían casi todos los escritores y escritoras que contaban en la literatura argentina. "En las próximas elecciones —decía el manifiesto— habrá que optar entre una tendencia que proscribe y escarnece la libertad de expresión y de pensamiento y otra que la hace posible. Nada menos que eso es lo que va a decidirse en esta hora terrible de nuestra historia".

No solo en los sectores del universo progresista se interpretó lo que estaba en juego con criterios asociados con el conflicto internacional. También para los nacionalistas era importante la posición de neutralidad en que el régimen militar mantuvo al país hasta marzo de 1945, cuando el curso que había tomado la guerra llevó al grupo gobernante a romper las relaciones diplomáticas con el Eje. Muchos políticos e ideólogos del nacionalismo habían participado del experimento autoritario puesto en marcha en 1943 y, por supuesto, vieron con beneplácito la implantación de la enseñanza religiosa en las escuelas, la disolución de los partidos y la persecución de la izquierda. Sin embargo, aunque de esa familia ideológica provino el principal apoyo intelectual que obtuvo Perón —como lo atestiguan el respaldo a su candidatura

de nombres como el de Manuel Gálvez, Ernesto Palacio, Leopoldo Marechal, entre otros—, una parte de los nacionalistas se alejó del militar después de la ruptura de la neutralidad argentina y juzgó negativamente la política obrera y el trato con políticos tradicionales que emprendió cuando el régimen militar buscó el camino de las elecciones. "En lugar de la revolución que queríamos nacional, sobrevino la revolución social", dirá años después Rodolfo Irazusta, disgustado con la orientación del César tan esperado. Solo el núcleo de FORJA se adherirá sin retaceos al movimiento que se unificaba en torno de la figura de Perón. En diciembre de 1945 anunciará su disolución, proclamando la identificación de la mayoría de sus miembros con "el pensamiento y la acción popular en marcha", al que se incorporaban.

En los 10 años de gobierno peronista, los intelectuales que se habían alineado en contra de Perón estuvieron excluidos de la universidad y de los cargos públicos (Jorge Luis Borges, que fue destituido de su puesto en la Biblioteca Municipal y designado inspector de mercado, fue el más celebre de los excluidos). Esa *inteliguentsia* se retrajo en la actividad editorial, en foros como el Colegio Libre de Estudios Superiores y en las revistas culturales —*Realidad*, *Expresión*, *Liberalis*, *Imago Mundi*, además, por supuesto, de *Sur*—. Paralelamente al país peronista y sus instituciones, se articuló así una Argentina intelectual cuyos integrantes se comunicaban en espacios como los nombrados, en la redacción del suplemento cultural de *La Nación* y en la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). Ese mundo prolongó entre 1946 y 1955 la idea de "Resistencia", esforzándose por evitar el trato con la Argentina peronista, cuyo curso se volvía cada vez más autoritario.

Es verdad que el peronismo contó también con el apoyo de escritores e ideólogos, la mayoría de los cuales, aunque no todos, procedían del nacionalismo católico. Los intelectuales del peronismo buscarán crear en esos años instituciones propias, como la Asociación de Escritores Argentinos (ADEA). Pero esta y otras iniciativas, que a veces contaron con el estímulo de Perón, no

lograron modificar el dato de que las figuras de mayor prestigio intelectual estaban en el otro polo, el de los antiperonistas.

LA CUESTIÓN PERONISTA

En 1955 una coalición de liberales, socialistas y nacionalistas católicos se unió a una fracción de las fuerzas armadas para derrocar a Perón. La mayoría de la "clase cultural" celebró la caída del líder, que se produjo en septiembre de ese año tras varios días de combate, como resultado del levantamiento militar-civil que se dio el nombre de Revolución Libertadora. Los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, que habían sido una activa base de agitación contra el gobierno peronista, ocuparon las dependencias de esa casa de estudios y presionaron para ser escuchados en la designación de las nuevas autoridades universitarias. La presión dio resultado: fue designado rector un destacado intelectual identificado con el socialismo liberal, el historiador José Luis Romero, cuya gestión fue decisiva para que la reestructuración de la enseñanza superior no solo adoptara los principios del reformismo universitario, sino que hiciera de la investigación una tarea indisociable de la vida académica. La universidad argentina del decenio 1956-1966 quedará en la memoria como la universidad reformista por excelencia. La editorial Eudeba fue uno de sus símbolos públicos.

En las filas de los triunfadores el consenso de los primeros días no duró mucho. Estaba en debate el rumbo político, económico e institucional de la Argentina posperonista, un debate sobre el porvenir que no podía eludir, entre otras cosas, la cuestión de cómo asimilar al nuevo cuadro de la vida nacional a esas masas sindicalmente organizadas que habían ingresado en la escena de la mano de Perón. Ahora bien, ¿cómo liquidar esa etapa y cómo recomendar un curso de acción sin dar paso a una discusión sobre qué había sido el peronismo? Las disidencias se dejarían ver muy pron-

to, tanto en lo relativo a cómo debía procederse frente a esas masas, como en lo referente a la explicación del hecho peronista. Las divergencias entre las fuerzas del conglomerado antiperonista se reflejaron también en las filas de la *inteliguentsia*. La breve pero agria polémica que sostuvieron en 1956 Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato en las páginas de las revistas *Sur* y *Ficción* da ilustración del agrietamiento que experimentaba el frente unido de un año atrás.

A juicio de Borges, que expresaba el punto de vista del antiperonismo más recalcitrante, en toda la literatura reciente de los que llama "comentadores del peronismo" se hablaba de abstracciones deterministas —como "necesidades históricas", "males necesarios" y "procesos irreversibles"— que servían para no hablar del "evidente Perón" y su abominable régimen. Frente a estos "manipuladores de abstracciones" prefería el lenguaje elemental del hombre de la calle, que llamaba a las cosas por su nombre y reconocía la realidad de la culpa y el libre albedrío. Sábato, que poco antes había escrito *El otro rostro del peronismo*, un ensayo en que intentaba un ejercicio de comprensión del fenómeno peronista, sin circunscribirlo a la figura de su líder, tomó la palabra. En un pasado más fácil y feliz de Argentina, dirá en su réplica, Borges podía entregarse a juegos literarios refinados en que Judas podía reflejarse en Jesús. Pero, tras más de una década de violencias y humillaciones que habían sacudido el espíritu, "todos hemos descubierto nuestro ser político; también Borges, a su manera". El refinado escritor de ayer dejaba ahora de lado sus filosofemas sobre la identidad de los contrarios para hacer suyo el dualismo más vulgar: de un lado, el Bien; del otro, el Mal. Del lado del Mal, proseguía Sábato, estaba "la masa obrera, la chusma, la roña, las alpargatas"; del lado del Bien, "los antiperonistas, Borges, Adolfito Bioy". El corolario político de esta visión maniquea era evidente: nada de explicaciones y justificaciones, reprimir debía ser la respuesta. Sin embargo, había un aspecto de verdad en el peronismo, la verdad de una larga exclusión social y política de la que todos eran culpables. Ella

emergió a la vida pública a través de Perón, pero no se confundía con este. Respondió Borges y después nuevamente Sábato, pero solo desarrollarían variantes de los argumentos ya expuestos.

La división que introdujo la cuestión peronista se hará más visible en la fractura entre jóvenes y adultos del mundo intelectual, entre los establecidos y los recién llegados a ese mundo. *Contorno*, la revista de los "parricidas", como los llamó el crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal, encabezó el desafío generacional que no tardará en propagarse. El grupo de *Contorno*, en el que sobresaldrían David Viñas, Noé Jitrik, Adolfo Prieto, León Rozitchner y Juan José Sebreli, representaría en la ficción, el ensayo y la crítica los "años Sartre" en la vida de la izquierda intelectual argentina. Desde su aparición en 1953, la revista había ido trazando número tras número y de manera polémica la frontera entre "ellos" y "nosotros", entre quienes debieron haber sido los "maestros", pero no lo fueron, y los jóvenes que deseaban más verdad en la literatura, que esta asumiera el "contorno", por desagradable que fuera. Eduardo Mallea, Jorge Luis Borges, Manuel Mujica Láinez, Adolfo Bioy Casares, simbolizaban la literatura que no se quería practicar. Cuando en 1956 el grupo redactor consagró un número a la interpretación del peronismo se verá que no era únicamente magisterio literario el que esperaban de sus mayores. De estos reclamaban también mayor lucidez crítica respecto de la vida pública nacional. Para *Contorno*, al igual que para Sábato, el peronismo había sido un proceso contradictorio y querían hacer distinciones o, como dirá el texto editorial, se habían "propuesto enfrentar el riesgo de decir esto del peronismo sí; esto del peronismo, no".

Hacer distinciones, no confundir a las masas con sus dirigentes, diferenciar el fascismo de las metrópolis del nacionalismo de los países dependientes: la revisión del pasado inmediato, en suma, ya no se detuvo. Esta revisión alimentó, sobre todo en las filas de los jóvenes de la izquierda, que eran predominantemente universitarios, el sentimiento de una culpa por haber en-

frentado al peronismo, sin haberlo comprendido. ¿Cómo mantener la conciencia tranquila cuando se había jugado a favor de los enemigos del pueblo? Atraídos por el presidente Arturo Frondizi muchos de ellos, en quien veían la posibilidad de reunir a clases medias ilustradas con la clase obrera peronista, se desilusionarán de su gobierno y durante los años siguientes, desde fines de los cincuenta hasta la primera mitad de los sesenta, integrarán el universo flotante de la "nueva izquierda" argentina. Esta nueva izquierda, reunida en pequeños grupos políticos y en revistas efímeras, no se quería meramente progresista: era crítica de la tradición antiliberal y más radical que la reformista izquierda socialista y comunista. Fue en este medio social e ideológico donde hallaron su público los expositores del nacionalismo marxista, algunas de cuyas obras —por ejemplo, *Historia crítica de los partidos políticos argentinos*, de Rodolfo Puiggrós, y *Revolución y contrarrevolución en la Argentina*, de Jorge Abelardo Ramos— conocerán más de una edición. Algunas luchas anticoloniales y, sobre todo, el ejemplo de la Cuba de Fidel y del Che, que había pasado a ser desde 1960 la piedra de toque del compromiso revolucionario, daban aliento a la idea de que el combate por el cambio social debía ligar socialismo y nacionalismo.

La interrogación sociológica también puso la atención en el peronismo. Como recordará años después Juan Carlos Torre, los estudios sociales, "hicieron su ingreso en los medios universitarios a partir de una reflexión sobre este hecho capital de nuestra experiencia contemporánea". En efecto, Gino Germani, que creó la carrera de sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, fue también quien inició la interpretación del peronismo en el marco de los temas y las preocupaciones de una sociología de la modernización. En un artículo de 1956, "La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo", Germani había rebatido, comparando la experiencia argentina con la europea, la clasificación del peronismo en la familia de los fascismos. La clave explicativa del peronismo se

hallaba a su juicio en el proceso acelerado de industrialización y la urbanización masiva que había conocido el país entre los años treinta y cuarenta; como consecuencia de la rapidez de la transformación, la clase obrera era de formación reciente, procedía del mundo rural y carecía de experiencia sindical. Esta nueva clase obrera en constante aumento había sido integrada a la vida política por el peronismo. En trabajos posteriores Germani siguió refinando sus análisis y forjó el concepto de movimiento nacional-popular para dar cuenta del peronismo y otras formaciones semejantes en América Latina.

En la vía abierta por Germani debe situarse el estudio que Torcuato Di Tella publicó en 1965, "Populismo y reforma en América Latina". El propósito del trabajo de Di Tella, que provenía del socialismo, era establecer cómo se hacía posible la formación de partidos o movimientos aptos para las reformas sociales en países que no se modernizaban de acuerdo con el modelo europeo, como era el caso de los latinoamericanos. La respuesta a la cuestión se hallaba para el autor en el populismo, nombre singular para una pluralidad de casos que clasificaba en diferentes subtipos. El peronismo había sido un caso de coalición populista en el gobierno que tenía en su haber importantes reformas sociales. Desalojado del poder, sin embargo, había perdido una parte de sus componentes originarios (militares nacionalistas, clero, fracciones burguesas) y se sostenía casi exclusivamente en los sindicatos de trabajadores. Según Di Tella, allí se encontraba la base obrera para una nueva coalición populista, en cuya composición debían tomar parte los intelectuales y las clases medias, dos sectores que en el pasado se habían alineado con el antiperonismo.

Poco a poco la cuestión peronista se volvió un objeto magnético para los intelectuales de izquierda y en la investigación social la cultura universitaria se imbricó con los nuevos marxismos y con la intención política. A comienzos de los setenta, dos sociólogos de esa filiación, Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, expusieron en *Estudios sobre el peronismo* (1971) un análisis

de los orígenes de ese movimiento que ponía en cuestión la explicación germaniana, que giraba en torno del papel de la nueva clase obrera, sin cultura gremial, en esa génesis. Marxismo gramsciano e investigación empírica se unían en el trabajo de Murmis y Portantiero, que mostraba el papel de la vieja élite sindical en la alianza con Perón.

EL RETORNO DE LA IDEA DEMOCRÁTICA

La radicalización de los sectores medios ilustrados, que se verificó en el país entre fines de los sesenta y la primera mitad de la década siguiente, combinó los elementos que rápidamente hemos consignado de formas que sería imposible resumir en pocas líneas. Digamos únicamente que dos nuevos ingredientes se añadieron a ese curso de efervescencia ideológica: en segmentos de la izquierda se pasará de las armas de la crítica a la crítica de las armas y algunos partidos armados actuarán en nombre del pueblo proscrito, el pueblo peronista. Aunque el peronismo volvió al gobierno en 1973, en las primeras elecciones sin proscripciones después de 18 años, la marcha ya no se detuvo. Lo que había animado la imaginación y el voluntarismo de los jóvenes, en particular del sector que tomó el camino de las armas, no era la meta de la democratización política. Tampoco el retorno de Perón, aunque su vuelta fuera vista como etapa de una lucha destinada a llevar al peronismo más allá de sí mismo. Lo que movilizaba era la idea de un poder de nuevo tipo, popular, que surgiría de los fusiles y que permitiría edificar la sociedad del hombre nuevo.

Todo terminó catastróficamente cuando las fuerzas armadas volvieron al poder en 1976 e implantaron en nombre de la guerra contra la subversión el terrorismo de Estado. La larga inestabilidad política que caracterizaba la historia argentina del siglo XX, con antagonismos que pusieron al país al borde la guerra civil más de una vez, culminó así con una dictadura que le costaría la

vida a varios miles de personas de todas las edades. Cuando seis años después, el fracaso de una aventura militar, la guerra de las Malvinas, derrumbó al régimen y reabrió nuevamente la posibilidad de una vuelta al Estado de derecho, la idea democrática se había instalado en una amplia franja de las élites intelectuales.

El nombre de Raúl Alfonsín, dirigente del ala progresista del radicalismo, se halla indisolublemente ligado a la transición política que llevó del colapso de la dictadura a los años que presidió el país como jefe del primer gobierno democrático. En la acelerada marcha que llevó a las elecciones del 30 de octubre de 1983, Alfonsín se adelantó a sus rivales dentro del partido en la carrera por la candidatura a presidente de la nación y el dilema que propuso a los votantes —democracia o autoritarismo— captó mejor el estado de la mayoría de la opinión pública que la disyuntiva entre liberación o dependencia, que levantó su principal oponente, el candidato peronista.

En los cuatro primeros años del gobierno alfonsinista el foco del debate y de la reflexión intelectual estuvo en la política, las reglas del juego democrático y el sistema de partidos. También sobre la sociabilidad política argentina, en busca de una matriz en la cultura cívica que explicara la inestabilidad crónica y la ferocidad de la última dictadura. El ensayo de Guillermo O'Donnell, *¿Y a mí qué me importa?* (1984), fue lo mejor que se escribió en esa vena interpretativa. La primera edición de *Autoritarismo y democracia (1955-1983)*, de Marcelo Cavarozzi, fue uno de los títulos iniciales de la colección más expresiva del espíritu de aquel tiempo, la Biblioteca Política, que publicaba el Centro Editor de América Latina bajo la dirección del socialista Oscar Troncoso.

En el exilio, franjas de la izquierda intelectual habían repensado las condiciones de una política socialista a la luz del fracaso del izquierdismo de los primeros setenta. Los nombres más notorios por su prestigio como pensadores de izquierda son los de José Aricó, Juan Carlos Portantiero, Emilio de Ípola y Oscar Terán, que habían pasado su exilio en México. A su vuelta, todos

ellos confluyeron en la creación del Club de Cultura Socialista, que funcionaría en Buenos Aires durante más de dos décadas, y en las revistas *Punto de Vista*, que dirigía Beatriz Sarlo, y *La Ciudad Futura*, fundada por Jorge Tula con Aricó y Portantiero. Emilio de Ípola y Portantiero integraron también uno de los grupos de asesores con que contó Alfonsín durante su gobierno y colaboraron en la redacción del célebre "Discurso de Parque Norte".

Los intelectuales de la izquierda peronista no se mantuvieron inactivos. Sus mejores espadas se reunieron en la revista *Unidos*, que dirigía Carlos Álvarez, para librar combate contra el predominio cultural y político del progresismo alfonsinista. En efecto, *Unidos* logró atraer la colaboración de Horacio González, José Pablo Feinmann, Alcira Argumedo y Oscar Landi, entre otras plumas identificadas con la tradición nacional-popular. Ellos se aplicarían a denunciar los límites liberales del democratismo alfonsinista y a mostrar que en el acervo peronista había más energía y resolución que en el radicalismo para dar carnadura social a la democracia.

Los amotinamientos de los oficiales "carapintadas" en abril de 1987, alzados ante la amenaza de los juicios por violación de los derechos humanos, marcaron el comienzo del fin del ciclo alfonsinista. Por temor al golpe de Estado, Alfonsín cedió al apremio militar y dañó irreversiblemente a su gobierno. La hiperinflación de 1989 completó la demolición. Por otro lado, el triunfo de Carlos Menem como candidato del peronismo fue igualmente fatal para las esperanzas del reformismo nacional-popular de la revista *Unidos*.

EPÍLOGO

No quisiéramos concluir este recorrido por algunos de los tramos del debate intelectual argentino en el siglo XX sin hacer referencia, aunque sea sumaria, a la polarización que han producido

los gobiernos de Néstor y, sobre todo, de Cristina F. de Kirchner en el campo de la *inteliguentsia*. El término usual para designar el ciclo que comenzó en 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner es, precisamente, el de "kirchnerismo", que evoca tanto una coalición gobernante como un estilo de gestión, un movimiento político y la jefatura de ese movimiento. El ascenso del kirchnerismo al poder es indisociable de la gran crisis que conoció Argentina en 2001, crisis que puso fin a una década de hegemonía del "partido del mercado" y que arrastró también al sistema de partidos existentes. Néstor Kirchner arribó al gobierno cuando el país iniciaba un nuevo e inesperado ciclo de crecimiento, pero aún permanecían los enormes daños sociales que habían producido las políticas neoliberales y la quiebra de 2001. Ambos, Néstor y Cristina, que hasta la muerte del ex presidente constituyeron el núcleo de la coalición gobernante, provenían de las filas del peronismo de izquierda. Aunque no habían hecho oposición al gobierno de Carlos Menem, identificado con las políticas neoliberales, desde su llegada al gobierno los Kirchner hicieron del pasado juvenil un signo de identidad del kirchnerismo. La política kirchnerista en el terreno de los derechos humanos y el impulso que dio a los juicios a militares le ganarían amplio apoyo en la opinión progresista. Reforzaron ese respaldo los enfrentamientos con el *establishment* empresarial y las disputas con la jerarquía eclesiástica. El estímulo al mercado interno redujo fuertemente el desempleo y los salarios mejoraron en el marco de una administración que le devolvió al Estado un papel activo en la economía, junto con una política social reparadora de los daños producidos en los años noventa, dominados por el neoliberalismo.

El kirchnerismo atrajo la colaboración de muchos intelectuales de izquierda, algunos de los cuales se incorporarían al elenco de funcionarios —Torcuato Di Tella, José Nun, Horacio González—. Otros asumirían la defensa pública de la empresa kirchnerista en libros y columnas periodísticas, sin ocupar car-

gos en el Estado, como José Pablo Feinmann. En 2008, el conflicto entre el gobierno y el conjunto de las organizaciones rurales precipitó la cristalización de un vasto cuerpo de intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Sus miembros creyeron percibir en el conflicto una maniobra desestabilizadora. Se movilizaron y se constituyeron en un movimiento, "Carta Abierta", que dará respaldo al gobierno de Cristina F. de Kirchner, titular del ejecutivo para entonces. En el primero de sus documentos, o "cartas", denunciarán que el gobierno democrático se veía jaqueado por una confluencia de intereses que reunía a las clases dominantes con el poder mediático.

El debate sobre el kirchnerismo en el medio intelectual, que ya estaba entablado, se volvió más enconado. Los críticos pondrán el acento en el autoritarismo del gobierno y en su aversión al pluralismo, en la manipulación clientelista de sus políticas sociales, en la falsificación de la información estadística, en su desprecio por la deliberación democrática, en el carácter arcaico de su nacionalismo.

La discordia recuerda líneas de fractura ya existentes, pero no es solo una prolongación del pasado. Su desenlace está abierto.

BIBLIOGRAFÍA

Academia Nacional de la Historia, *Nueva historia de la nación argentina. La configuración de la república independiente (1810-1910),* vols. IV, V, VI, Buenos Aires, Planeta, 2000.

Altamirano, Carlos, y Beatriz Sarlo, "La Argentina del centenario: campo intelectual, vida literaria y temas ideológicos", en *Ensayos argentinos: de Sarmiento a la vanguardia*, Buenos Aires, Ariel, 1997.

Altamirano, Carlos, "¿Qué hacer con las masas?", en *Peronismo y cultura de izquierda*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.

———, *Bajo el signo de las masas (1943-1975)*, Buenos Aires, Ariel, 2001.

Amaral, Samuel, y Mariano Ben Plotkin, *Perón, del exilio al poder*, Buenos Aires, Cántaro, 1993.

Assadourian, Carlos Sempat, *El sistema de la economía colonial. Mercado interior, regiones y espacio económico,* Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1982.

Barberián, Eduardo E., y Axel E. Nielsen (directores), *Historia argentina prehispánica,* Córdoba, Brujas, 2001.

Barsky, Osvaldo, y Jorge Gelman, *Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta fines del siglo XIX*, Buenos Aires, Grijalbo-Mondadori, 2001.

Berrotarán, Patricia, *Del plan a la planificación: el Estado durante la época peronista*, Buenos Aires, Imago Mundi, 2003.

Borrero, Luis Alberto, *El poblamiento de la Patagonia. Toldos, milodones y volcanes*, Buenos Aires, Emecé, 2001.

Botana, Natalio, *El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916*, Buenos Aires, Sudamericana, 1977.

Buchbinder, Pablo, *Historia de las universidades de argentina*, Buenos Aires, Sudamericana, 2005.

Caimari, Lilia, *Perón y la iglesia católica: religión, Estado y sociedad en la Argentina, 1943-1955*, Buenos Aires, Ariel, 1995.

Cantón, Darío, *El parlamento argentino en épocas de cambio: 1890, 1916 y 1946*, Buenos Aires, Editorial del Instituto Torcuato Di Tella, 1966.

Cavarozzi, Marcelo, "El movimiento obrero en Argentina. 1943-1981", en Pablo González Casanova (coord.), *Historia del movimiento obrero en América Latina. Brasil, Chile, Argentina y Uruguay*, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM-Siglo XXI, 1984.

______, *Autoritarismo y democracia, 1955-2006*, Buenos Aires, Ariel, 2004.

Chiaramonte, José Carlos, *Ciudades, provincias, estados: Orígenes de la nación argentina (1800-1846),* Buenos Aires, Ariel, 1997.

______, *Nacionalismo y liberalismo económico en Argentina*, Buenos Aires, Solar Hachette, 1971.

Chiroleu, Adriana R., "La reforma universitaria", en Ricardo Falcón (director), *Nueva historia argentina*, vol. 6*: Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-1930)*, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

Comadrán Ruiz, Jorge, *Evolución demográfica argentina durante el periodo hispano (1535-1810)*, Buenos Aires, Eudeba, 1969.

Cortés Conde, Roberto, *La economía política de la Argentina en el siglo XX*, Buenos Aires, Edhasa, 2005.

______, *El progreso argentino*, *1880-1914,* Editorial del Instituto Torcuato Di Tella-Sudamericana, Buenos Aires, 1979.

D'Altroy, Terence N., *The Incas*, Oxford, Blackwell, 2002.

De Riz, Liliana, *Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista*, Buenos Aires, Hyspamerica, 1987.

Devoto, Fernando, *Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna. Una historia*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.

______, *Historia de la inmigración en Argentina*, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

Di Stefano, Roberto, y Loris Zanatta, *Historia de la iglesia argentina. Desde la conquista hasta fines del siglo XX*, Buenos Aires, Grijalbo-Mondadori, 2000.

Díaz Alejandro, Carlos Federico, *Ensayos sobre la historia económica argentina*, Buenos Aires, Amorrortu, 1970.

Dillehay, Tom D., y Cecilia Mañosa, *Monte Verde. Un asentamiento humano del Pleistoceno tardío en el sur de Chile*, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2004.

Dorfman, Adolfo, *Historia de la industria argentina*, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1970.

Doyon, Louise M., *Perón y los trabajadores: los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.

Falcón, Ricardo, "Militantes, intelectuales e ideas políticas", en Ricardo Falcón (director), *Nueva historia argentina*, vol. 6: *Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-1930),* Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

Farberman, Judit, y Raquel Gil Montero (comps.), *Los pueblos de indios del Tucumán colonial: pervivencia y desestructuración*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2002.

Ferrari, Marcela, *Los políticos en la república radical. Prácticas políticas y construcción de poder*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.

Flegenheimer, Nora, Cristina Bayón y Alejandra Pupio, *Llegar a un nuevo mundo. Arqueología de los primeros pobladores del actual territorio argentino*, Buenos Aires, Antropofagia, 2007.

Fradkin, Raúl, y Juan Carlos Garavaglia, *La Argentina colonial*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.

Fuente, Ariel de la, *Children of Facundo. Caudillo and Guacho Insurgency During the Argentine State-Formation Process (La Rioja, 1853-1870),* Durham, Duke University Press, 2000.

Gambier, Mariano, *Prehistoria de San Juan*, San Juan, Ansilta, 2000.

Gambini, Hugo, *Historia del peronismo*, vol. 2, Buenos Aires, Planeta, 1999-2001.

Garavaglia, Juan Carlos, *Economía, sociedad y regiones*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1987.

______, *Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-1830,* Buenos Aires, IEHS-Ediciones de la Flor-Universidad Pablo Olavide, 1999.

García, Prudencio, *El drama de la autonomía militar*, Madrid, Alianza, 1995.

Gaudio, Ricardo, y Jorge Pilone, "Estado y relaciones laborales en el periodo previo al surgimiento del peronismo, 1935-1943", *Desarrollo Económico*, Buenos Aires, vol. 24, núm. 94, 1984, pp. 235-272.

Gelman, Jorge, *De mercachifle a gran comerciante. Los caminos del ascenso en el Río de la Plata colonial*, Huelva, Universidad Internacional de Andalucía, 1996.

Gerchunoff, Pablo, y Lucas Llach, *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas*, Buenos Aires, Emecé, 2010.

Gerchunoff, Pablo, Fernando Rocchi y Gastón Rossi, *Desorden y progreso. Las crisis económicas argentinas 1870-1905*, Buenos Aires, Edhasa, 2008.

Giacobone, Carlos, y Edit Rosalía Gallo, *Radicalismo bonaerense: la ingeniería política de Hipólito Yrigoyen, 1891-1931*, Buenos Aires, Corregidor, 1999.

Gillespie, Richard, *Soldados de Perón. Los Montoneros,* Buenos Aires, Grijalbo, 1997.

González Bernaldo de Quirós, Pilar, *Civilidad y política en los orígenes de la nación argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.

González, Alberto R., *Cultura la Aguada. Arqueología y diseños*, Buenos Aires, Filmediciones Valero, 1998.

González, Luis R., *Bronces sin nombre. La metalurgia prehispánica en el noroeste argentino*, Buenos Aires, Fundación Ceppa, 2004.

González, María Isabel, *Arqueología de alfareros, cazadores y pescadores pampeanos*, Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología, 2005.

Graciano, Osvaldo, *Entre la torre de marfil y el compromiso político. Intelectuales de izquierda en la Argentina, 1918-1955*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2008.

Halperín-Donghi, Tulio., "Estudio preliminar" a *La República imposible (1930-1945)*, Buenos Aires, Ariel, 2004.

______, "Estudio preliminar" a *Vida y muerte de la República verdadera (1910-1930)*, Buenos Aires, Ariel, 2000.

______, *La democracia de masas*, Buenos Aires, Paidós, 1991.

______, *Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino (1791-1850),* Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982.

______, *La larga agonía de la Argentina peronista*, Buenos Aires, Ariel, 1994.

______, *Son memorias*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.

______, *Una nación para el desierto argentino*, Buenos Aires, Prometeo, 2006.

______, *Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972.

Hora, Roy, *Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política. 1860-1945*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

Irigoin, María Alejandra, y Roberto Schmit (eds.), *La desintegración de la economía colonial. Comercio y moneda en el interior del espacio colonial (1800-1860),* Buenos Aires, Biblos, 2003.

James, Daniel, *Resistencia e integración,* Buenos Aires, Sudamericana, 1990.

Johnson, Lyman, *Workshop of Revolution. Plebeian Buenos Aires and the Atlantic World, 1776-1810*, Durham, Duke University Press, 2011.

Kozel, Andrés, *La Argentina como desilusión*, México, Nostromo Ediciones, 2008.

Levi Yeyati, Eduardo, y Diego Valenzuela, *La resurrección. Historia de la postcrisis Argentin*a, Buenos Aires, Sudamericana, 2007.

Levitsky, Steven, *La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista, 1983-1989*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.

Lorandi, Ana María, "El servicio personal como agente de desestructuración en el Tucumán colonial", *Revista Andina*, vol. 6, núm. 1, Cuzco, Centro Bartolomé de las Casas, 1988, pp. 135-173.

Luna, Félix, *Perón y su tiempo*, vol. 3, Buenos Aires, Sudamericana, 1984-1986.

Mackinnon, Moira, *Los años formativos del partido peronista: 1946-1950*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

Maeder, Ernesto J.A., *Evolución demográfica argentina, de 1810 a 1869*, Buenos Aires, Eudeba, 1969.

Mandrini, Raúl, *La Argentina aborigen. De los primeros pobladores a 1910*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.

Mandrini, Raúl (ed.), *Los indígenas de la Argentina. La visión del "otro". Selección de documentos del periodo colonial*, Buenos Aires, Eudeba, 2004.

Mata, Sara, *Tierra y poder en Salta. El noroeste argentino en vísperas de la independenci*a, Sevilla, Diputación Provincial, 2000.

Matsushita, Hiroshi, *El movimiento obrero argentino: 1930-1943*, Buenos Aires, Hyspamerica, 1983.

McGee Deutsch, Sandra, *Las derechas. La extrema derecha en la Argentina, el Brasil y Chile, 1890-1939*, Buenos Aires, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2005.

Melià, Bartolomeu, "Sociedades fluviales y selvícolas del Este: Paraguay y Paraná", en Teresa Rojas Rabiela y John V. Murra (eds.), *Historia general de América Latina. Las sociedades originarias,* vol. I. París, Unesco-Trotta, 1999.

Murmis, Miguel, y Juan Carlos Portantiero, *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

Navarro Gerasi, Marysa, *Los nacionalistas*, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1969.

Neiburg, Federico, "Élites sociales y élites intelectuales: el Colegio Libre de Estudios Superiores", en *Los intelectuales y la invención del peronismo*, Buenos Aires, Alianza, 1998.

Nielsen, Axel E., y Lucio Boschi, *Arqueología del espacio público en Los Amarillos, Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina*, Argentina, Mallku, 2007.

Novaro, Marcos, y Vicente Palermo, *La dictadura militar (1976-1983)*, Buenos Aires, Paidós, 2003.

Núñez A., Lauraro, *Cultura y conflicto en los oasis de San Pedro de Atacama*, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1992.

O'Donnell, Guillermo, *El Estado burocrático autoritario. Triunfos, derrotas y crisis*, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1996.

Oszlak, Oscar, *La formación del Estado argentino*, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1985.

Padoan, Marcelo, *Jesús, el templo y los viles mercaderes. Un examen de la discursividad yrigoyenista*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2002.

Page, John, *Perón. Una biografía*, Buenos Aires, Grijalbo, 1999.

Palermo, Vicente, "El siglo peronista", *Punto de Vista*, núm. 89, Buenos Aires, 2007, pp. 4-12.

Palomeque, Silvia, "El mundo indígena. Siglos XVI-XVIII", en Enrique Tandeter (director), *Nueva historia argentina*, vol. 2: *La sociedad colonial*, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

Palti, Elías, *El momento romántico. Nación, historia y lenguajes políticos en la Argentina del siglo XIX*, Buenos Aires, Eudeba, 2009.

Pasolini, Ricardo, "El nacimiento de una sensibilidad política. Cultura antifascista, comunismo y nación en la Argentina: entre la AIPE y el Congreso Argentino de la Cultura, 1935-1955", *Desarrollo Económico*, vol. 45, núm. 179, octubre-diciembre de 2005, pp. 403-433.

Persello, Ana Virginia. *Historia del radicalismo. Gobierno y oposición, 1916-1943*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.

Piñeiro, Elena, *La tradición nacionalista ante el peronismo. Itinerario de una esperanza a una desilusión*, Buenos Aires, AZ Editora, 1997.

Potash, Robert, *El ejército y la política en la Argentina. 1928-1945. De Yrigoyen a Perón*, Buenos Aires, Sudamericana, 1971.

Prieto, María del Rosario, "Formación y consolidación de una sociedad en un área marginal del reino de Chile: la provincia de Cuyo en el siglo XVII", número especial de *Anales de Arqueología y Etnología*, núm. 52-53, Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, 1997-1998, pp.17-366.

Puiggrós, Rodolfo, *La democracia fraudulenta*, Buenos Aires, Editorial Jorge Álvarez, 1968.

Punta, Ana Inés, *Córdoba borbónica. Persistencias coloniales en tiempos de reformas (1750-1800)*, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1997.

Rivolta, María Clara, *Cambio social en la quebrada de Humahuaca (1100-1400 d.C.)*, Jujuy, Instituto Interdisciplinario Tilcara, 2005.

Rocchi, Fernando, "El péndulo de la riqueza: la economía argentina en el periodo 1880-1916", en Mirta Zaida Lobato (directora), *Nueva historia argentina*, vol. 5: *El progreso, la modernización y sus límites, 1880-1916*, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

Rock, David, *La Argentina autocrática. Los nacionalistas, su historia y su influencia en la vida pública*, Buenos Aires, Ariel, 1993.

Romero, José Luis, *Las ideas políticas en Argentina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1946.

Rosenblat, Ángel, *Argentina. Historia de un nombre*, Buenos Aires, Ed. Nova, 1949.

Rouquié, Alain, *Poder militar y sociedad política en la Argentina. II, 1943-1973*, Buenos Aires, Emecé, 1982.

Rubio Durán, Francisco, *Tierra y ocupación en el área surandina. Las zonas de altura del Tucumán colonial. Siglo XVII*, Sevilla, Aconcagua Libros, 1997.

Sarlo, Beatriz, *La batalla de las ideas (1943-1975)*, Buenos Aires, Ariel, 2001.

Sarreal, Julia, "Disorder, wild cattle, and a new role for the Missions: the Banda Oriental, 1776-1786", *The Americas*, vol. 67, núm. 4, 2011, pp. 517-545.

Sigal, Silvia, y Eliseo Verón, *Perón o muerte: los fundamentos discursivos del fenómeno peronista*, Buenos Aires, Legasa, 1986.

Sigal, Silvia, *Intelectuales y poder en la década del sesenta*, Buenos Aires, Puntosur, 1991.

______, *La Plaza de Mayo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.

Socolow, Susan, *The Bureaucrats of Buenos Aires, 1769-1810*, Durham, Duke University Press, 1987.

Svampa, Maristella, *El dilema argentino: civilización o barbarie. De Sarmiento al revisionismo peronista*, Buenos Aires, El cielo por asalto, 1994.

Szusterman, Celia, *Frondizi, la política del desconcierto*, Buenos Aires, Emecé, 1998.

Tandeter, Enrique, *Coacción y mercado. La minería de la plata en el Potosí colonial. 1692-1826*, Buenos Aires, Sudamericana, 1992.

Tarragó, Miriam, y Luis R. González (eds.), *Estudios arqueológicos en Yocavil*, Buenos Aires, Asociación Amigos del Museo Etnográfico, 2008.

Tarragó, Miriam (directora), *Nueva historia argentina*, vol. 1: *Los pueblos originarios y la conquista*, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

______, "Las sociedades del sudeste andino", en Teresa Rojas Rabiela y John V. Murra (eds.), *Historia general de América Latina. Las sociedades originarias,* vol. I. París, Unesco-Trotta, 1999.

Tato, María Inés, *Viento de fronda. Liberalismo, conservadorismo y democracia en la Argentina, 1911-1932*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.

Tcach, César, y Rodríguez Celso, *Arturo Illia: Un sueño breve. El rol del peronismo y de los Estados Unidos en el golpe militar de 1966,* Buenos Aires, Edhasa, 2006.

Tedesco, Juan Carlos, *Educación y sociedad en la Argentina (1880-1945)*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.

Terán, Oscar, "Ideas e intelectuales en la Argentina, 1880-1980", en *Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.

Terán, Oscar, *Vida intelectual en el Buenos Aires fin-de-siglo (1880-1910). Derivas de la cultura científica*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.

Torrado, Susana, *Estructura social de la Argentina (1945-1983)*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1994.

Torre, Juan Carlos (director), *Nueva historia argentina*, vol. 8: *Los años peronistas (1943-1955)*, Sudamericana, Buenos Aires, 2002.

______, *La vieja guardia sindical y Perón: sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.

______, *Los sindicatos en el gobierno 1973-1976,* Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1989.

Vázquez Presedo, Vicente, *Crisis y retraso. Argentina y la economía internacional entre las dos guerras*, Buenos Aires, Eudeba, 1978.

Waldman, Peter, *El peronismo*, Buenos Aires, Sudamericana, 1981.

Walter, Richard J., *La provincia de Buenos Aires en la política argentina, 1912-1943*, Buenos Aires, Emecé, 1987.

Zanatta, Loris, *Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y ejército en los orígenes del peronismo, 1930-1943*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1997.

______, *Breve historia del peronismo clásico*, Buenos Aires, Sudamericana 2009.

______, *Eva Perón. Una biografía política*, Buenos Aires, Sudamericana, 2011.

LOS AUTORES

Carlos Altamirano: licenciado en letras por la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina; investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y profesor emérito de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.

Marcelo Cavarozzi: doctor en ciencia política por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos; investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y profesor de la Universidad Nacional General San Martín, Argentina.

Jorge Gelman: doctor en historia por la École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia; investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Pilar González Bernaldo de Quirós: doctora en historia por la Universidad de París I-Panthéon-Sorbonne; profesora de la Universidad de París Diderot-Paris 7, Sorbonne Paris Cité, Francia.

Raúl Mandrini: profesor en historia por la Universidad de Buenos Aires; investigador del Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Marcos Novaro: doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires; investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.

Pablo Yankelevich: doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México; profesor-investigador del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México.

Loris Zanatta: doctor en historia de América por la Universidad de Génova; profesor de historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, Italia.

Historia mínima de Argentina
se terminó de imprimir en enero de 2014
en los talleres de Offset Rebosán, S.A. de C.V.,
Acueducto 115, Col. Huipulco,
14370 México, D.F.
Portada de Pablo Reyna.
Composición tipográfica y formación:
Patricia Zepeda, en Redacta, S.A. de C.V.
Cuidó la edición Eugenia Huerta.